

ÉLITES SIN DESTINO

UN ESPECIAL PERIODÍSTICO SOBRE LAS ÉLITES LATINOAMERICANAS

EDITOR

Pere Ortín

PERIODISTAS

Daniela Rea

Octavio Enríquez

Paula Bistagnino

Víctor Mojica

Álvaro Murillo

Yasna Mussa

Mathías da Silva

Riamny Méndez

Nohora Celedón

Oswaldo Hernández

Jennifer Ávila

Vero Calvopiña

Floriantonia Singer

Fernando Molina

Mathias Alencastro

Joseph Zárate

Nelson Rauda

FRIEDRICH
EBERT
STIFTUNG

FES COMUNICACION

ÉLITES SIN DESTINO

UN ESPECIAL PERIODÍSTICO SOBRE LAS ÉLITES LATINOAMERICANAS

EDITOR
PERE ORTÍN

PERIODISTAS

DANIELA REA, OCTAVIO ENRÍQUEZ, PAULA
BISTAGNINO, VÍCTOR MOJICA, ÁLVARO
MURILLO, YASNA MUSSA, MATHÍAS
DA SILVA, RIAMNY MÉNDEZ, NOHORA
CELEDÓN, OSWALDO HERNÁNDEZ,
JENNIFER ÁVILA, VERO CALVOPIÑA,
FLORIANTONIA SINGER, FERNANDO
MOLINA, MATHIAS ALENCASTRO,
JOSEPH ZÁRATE, NELSON RAUDA

FRIEDRICH
EBERT
STIFTUNG

FES  COMUNICACIÓN

EDITOR: Pere Ortín

PERIODISTAS PARTICIPANTES:

Daniela Rea | Octavio Enríquez | Paula Bistagnino
Víctor Mojica | Álvaro Murillo | Yasna Mussa
Mathías Da Silva | Riamny Méndez | Nohora Celedón
Oswaldo Hernández | Jennifer Ávila | Vero Calvopiña
Floriantonia Singer | Fernando Molina | Mathias Alencastro
Joseph Zárate | Nelson Rauda

Programada de medios y comunicación de la
Friedrich Ebert Stiftung para América Latina y El Caribe

<https://fescomunica.fes.de/>

PRODUCCIÓN: Daniela Bohórquez

DIAGRAMACIÓN: Daniel Lara y Daniel Villamizar

ILUSTRACIONES: Mario Trigo

IMPRESIÓN: Linotipia Martínez

ISBN 978-958-8677-56-9

© 2022 Friedrich–Ebert–Stiftung FES (Fundación Friedrich Ebert) La Fundación Friedrich Ebert no comparte necesariamente las opiniones vertidas por los autores y las autoras. Este texto puede ser reproducido con previa autorización de la Fundación Friedrich Ebert (FES) si es con un objetivo educativo y sin ánimo de lucro.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

ÉLITES EN MODO ECPATÍA | Omar Rincón 9

MÉXICO

TÚ PUEDES SER COMO NOSOTROS | Daniela Rea 21

NICARAGUA

EL ROMPECABEZAS DEL COMANDANTE | Octavio Enríquez 43

ARGENTINA

¿QUÉ ES LO QUE QUIEREN? | Paula Bistagnino 59

PANAMÁ

EL PAÍS ATAJO | V.A Mojica 79

COSTA RICA

LAS ÉLITES ALTERADAS | Álvaro Murillo 95

CHILE

UN RETRATO FAMILIAR | Yasna Mussa 111

URUGUAY

EL SELLO URUGUAYO: TRADICIÓN Y LENTITUD
| Mathías Da Silva 131

REPÚBLICA DOMINICANA

BLANCOS, SUBVENCIONADOS Y HEROICOS | Riamny Méndez 147

COLOMBIA

LAS NUEVAS BATALLAS POLÍTICAS DE LA ÉLITE EMPRESARIAL

| Nohora Celedón 169

GUATEMALA

ATENTAMENTE, LA GERENCIA | Oswaldo Hernández 185

HONDURAS

LAS ÉLITES ECONÓMICAS DEL NARCOESTADO | Jennifer Ávila 205

ECUADOR

LOS ELEGIDOS DE DIOS | Vero Calvopiña 223

VENEZUELA

LAS ÉLITES FUGITIVAS DE UN PAÍS EN ESCOMBROS

| Floriantonia Singer 241

BOLIVIA

LA REBELIÓN DE LA ÉLITE | Fernando Molina 257

BRASIL

LAS AMBICIONES NACIONALES DEL AGRONEGOCIO

| Mathias Alencastro 275

PERÚ

LA ULTRADERECHA CONTRA «LA MAFIA

CAVIAR» | Joseph Zárate 281

EL SALVADOR

LOS APÓSTELES DEL BITCOIN | Nelson Rauda 301

EPÍLOGO

ALGO DE LO QUE (CASI) NUNCA HABLAMOS | Pere Ortín 317

ÉLITES EN MODO ECPATÍA

No son los pueblos los que hacen las revoluciones, son las élites. Así mismo, no se puede explicar América Latina sin conocer los pensares, sentires y prácticas de sus élites.

OMAR RINCÓN

En América Latina tenemos unas élites muy conservadoras, cínicas e indolentes. Y lo pueden hacer todo porque piensan, actúan y usufructúan «el privilegio». Por eso, usan este «privilegio» para apropiarse de todo, sobre todo de los llamados humanos. Tenemos unas élites que chantajejan al Estado en su favor, unas que se esconden en sus países para lucirse en Miami y Madrid, unas que no han comprendido que una mayor inclusión social, mejores salarios, respeto por las mujeres y diversidades sexuales sería su mejor negocio. Su “privilegio” es defender el statu-quo; vivir y gozar la desigualdad y su amiguismo con los gobiernos; celebrar el racismo, clasismo, machismo, homofobia y xenofobia, habitar la *ecpatía*.

Este especial periodístico <Élites sin destino> trata de acercarse a **esas ideas y prácticas que desarrollan las élites en cada uno de los países que conforman eso que se enuncia como América Latina**. Un intento por comprender sus culturas, modos de pensar y hacer sus países y la región.

PRESENTACIÓN

Algunas preguntas que nos guiaron son:

- ¿Cómo sigue siendo posible que en el siglo XXI las élites sigan empecinadas en no darse cuenta de que la desigualdad —un problema social, económico y cultural que mata— también les afecta gravemente a ellas y a sus posibilidades de seguir acumulando más riqueza?
- ¿Cómo no pueden darse cuenta que mantener a grandes capas sociales en situaciones de extrema pobreza no les ayuda en nada y tampoco es bueno para sus negocios?
- ¿Cómo perciben los ciudadanos a las élites a sus países? (virtudes, defectos, culturas, potenciales)
- ¿Cómo se relacionan las élites con la pobreza y la desigualdad?

Y con este marco, pasamos a hacer textos periodísticos diversos y en tonos y estilos de cada país. Los textos que está a punto de leer no son ensayos analíticos o conceptuales, son historias periodísticas que intentan contarnos lo singular de las élites en cada país de nuestra región. Relatos más que ensayos analíticos y conceptuales. **Escrituras periodísticas que juegan entre la crónica, el ensayo, el reportaje y el perfil.** Buscamos producir otras narrativas periodísticas, unas más inteligentes que conversen con la ciudadanía y propongan nuevos asuntos de debate. Creemos que a partir de saber cómo son las élites, se podrían ensayar nuevos significados y valores con los cuales podamos crear otros mapas que definan distintos espacios de lo imaginable. Esperamos haber cumplido y que su lectura no nos confine en el olvido.

Los textos periodísticos que aquí aparecen fueron publicados entre Septiembre del 2021 y Febrero del 2022 en www.elitesindestino.com y en medios independientes de toda América Latina como ***El Faro (El Salvador)***, ***Pie de Página (México)***, ***Anfibia (Argentina)***, ***No ficción***

(Guatemala), *Revista Late* (Chile), *Wambra* (Ecuador), *Frontera D* (España), *Contra Corriente* (Honduras), *entre otros*. Ahora, aquí, se publica en formato libro y siguiendo el orden en que fueron apareciendo en nuestro sitio digital elites sin destino.

Y LO QUE HAY PARA LEER

Y cada uno investigó el asunto que mejor le parecía para contar “las elites” de su país y cada uno escribió y narró como le gustó o pudo o quiso. Y en orden de aparición esto es lo que podrá leer o no.

DANIELA REA (MÉXICO) nos contó sobre los modos cómo se construye una nueva élite farándulera que juega en la cancha digital y se hace en modo influencer y para tomarse la política como el premio mayo porque “tú puedes ser como nosotros”.

OCTAVIO ENRÍQUEZ (NICARAGUA) intenta contarnos como un revolucionario y su pareja santera y mística han secuestrado a su país para construirse como la única élite posible.

PAULA BISTAGNINO (ARGENTINA) busca adentrarse en eso que quieren las élites, eso que va desde reconocimiento y prestigio hasta llegar a hacer lo que se les venga en gana pero sobre todo dinero-y-más-dinero.

VÍCTOR MOJICA (PANAMÁ) nos narra como ser élite es tener billete a las que sea y como sea y no tener tiempo y, que tal vez por eso, leer un libro que no sea de auto-ayuda sería una revolución.

ÁLVARO MURILLO (COSTA RICA) se pregunta cómo fue que pasó que el parque de la democracia en Centro América se entregó a amores corruptos, religiosos y peligrosos.

PRESENTACIÓN

YASNA MUSSA (CHILE) busca contarnos como todo pasaba en Santiago, todo era muy de derecha e indolente, hasta que llegaron los jóvenes, las mujeres, los pobres, los pueblos indígenas y decidieron experimentar otra cosa, otros modos de ser élite política desde los territorios.

MATHÍAS DA SILVA (URUGUAY) hace sentido de la paciencia de la clase media de su país y sus modos de no hacerse los más vistos, pero para contar como todo está mutando hacia unas élites que juegan a mostrar lo mismo de todas partes: autos, joyas y fiestas.

RIAMNY MÉNDEZ (REPÚBLICA DOMINICANA) hace un retrato espectacular sobre como las elites son malas capitalistas ya que viven de sobornar y tomarse al Estado para preservar sus privilegios de clase, raza y machismo.

NOHORA CELEDÓN (COLOMBIA) a partir del estallido social del 2021 documenta como las elites empresariales están preocupadas de perder sus privilegios e intentan acercarse y comprender la bronca de los pobres, los jóvenes, las mujeres, los afros e indígenas, mientras los políticos no se dan por enterados.

OSWALDO HERNÁNDEZ (GUATEMALA) se adentra en el espectáculo de la decadencia de las viejas élites que siguen intentando estar en el poder político, aunque están viendo como lo pierden ante los corruptos y narcos.

JENNIFER ÁVILA (HONDURAS) nos trae un relato de pesadilla sobre las nuevas elites *made in* en el narco que se tomaron la sociedad a través de prácticas mafiosas en lo político y extractivistas en lo ambiental.

VERO CALVOPIÑA (ECUADOR) nos cuenta que la nueva élite es conservadora, evangélica y católica en una cruzada sin pausa para defender a la familia, a la patria y a dios.

PRESENTACIÓN

FLORANTONIA SINGER (VENEZUELA) se adentra en los modos como los militares y los bolichavistas han desarrollado un nuevo modelo de ser elite, uno bárbaro a nombre del pueblo donde ser rico es todo el objetivo.

FERNANDO MOLINA (BOLIVIA) documenta como la elite boliviana blanca, machista y racista se vengó en el 2019 de esos indios que han llegado para quedarse en lo económico y político.

MATHIAS ALENCASTRO (BRASIL) nos muestra como con Bolsonaro ha llegado una nueva élite del agro que vino para quedarse en nombre de dios y los negocios.

JOSEPH ZÁRATE (PERÚ) narra como la élite ultraderecha religiosa, clasista, racista y homofóbica ha emprendido una cruzada contra los mundos rurales por pobres, feos e indios y contra “esas ideas comunistas y terroristas” de los derechos, las mujeres y el medio ambiente. Una lucha por defender el legado fujimorista y luchar contra «la mafia caviar» de izquierda.

NELSON RAUDA (EL SALVADOR) cuenta como toda la élite en su país es el presidente que ha creado una nueva religión en su nombre, que lo celebra como un superhéroe y tiene como comunión al bitcóin.

PERE ORTÍN (EL EDITOR) al final presenta, a manera de epílogo, sus reflexiones sobre el periodismo que hemos hecho (ese de sentirnos élités, blancas, masculinas, occidentales y religiosas), analiza lo que le sugiere este especial de *Elites sin destino* sobre el periodismo y plantea algunas intuiciones sobre los periodismos que deberíamos hacer.

Siga y lea; goce y critique; indígnese y relájese. Y leálo en el orden que le guste. Y obvio recuerde que también está en digital bajo ***elitesindestino.com*** para que lo baje y distribuya.

Y DESPUÉS DE LEER...

haciendo reciclaje de lo que aparece en *Elites sin destino*, he aquí un *mas-hup* sobre las élites Latam. *Mashup* viene de la música y significa la creación de algo nuevo a partir de la mezcla o pedazos de otras referencias.

¿Qué son las élites? Pueden ser tradicionalistas que quieren conservar sus privilegios o aspiracionales que quieren llegar a eso que se llama el capital. También se les llama «oligarquías» o «burguesías». En todo caso son un acto de confirmar su superioridad sobre los demás miembros de una sociedad.

Las elites se mantienen vía las relaciones familiares y amistosas para lograr el control institucional y así ganar poder. *¿En qué colegio estudiaste? ¿tu apellido Rincón es de cuáles rincón?* Colegio privado crea elite, tener apellidos de origen europeo funciona, las elites son un club. Su déficit está en que no tienen conexión con la sociedad y les falta enraizamiento con los pobres.

(Aunque una vez un político latino contó que el problema del socialismo o progresismo era crear clase media porque después van a querer más y se vuelven los nuevos conservadores, que era mejor mantenerlos pobres para en cada elección prometerles algo y darles poco).

Su poder está sustentado en las herencias, factor que frena la movilidad social, y en ser muy machos que hacen de la presencia femenina un asunto testimonial. Sus actividades de exhibición están en la práctica de golf, tener medios de comunicación, autos de lujo, yates de verano, los viajes y tener el dinero en Estados Unidos y Suiza.

PRESENTACIÓN

Para estar en el club de las élites, en América Latina ayuda mucho creer en dios, ser amigo de los ejércitos y ejercer su clase y blanquitud. Y es que tener capital y mostrarlo en el consumo cumple el mantra racista de blanquearnos, así nuestra piel no sea blanca intentamos blanquearnos con nuestra forma de consumir, con nuestras aspiraciones, con lo que vemos, con lo que seguimos, con lo que calificamos con un *like*. La blanquitud es una actitud, es el deseo de las élites.

Las elites son una práctica de exhibicionismo del clasismo. Y la clase ya no pasa por la cultura moderna ilustrada, esa de la civilización escritural, el humanismo y las artes, pasa por el capital que se exhibe en el consumo. Y ese ideal de tener capital para consumir lo suntuario (autos, joyas, edificios, islas, personas, hijos, fiestas...) se ha convertido en la gran propuesta de felicidad capitalista: una en la que quieren pertenecer los políticos, los corruptos, los narcos, los deportistas, los regatonearos, los tecnológicos... Todo aquello, que nos permite a los latinos vivir en Miami, ya que creemos que para ser élite debemos vivir como los millonarios famosos de USA.

La nueva élite también es tecnológica y está llena de unicornios (según Aileen Lee de Cowboy Ventures, *Unicornio* hace referencia a una empresa tecnológica que llega a alcanzar un valor de 1.000 millones de dólares en sus inicios). Y América Latina quiere llegar allá, pero no sabe muy bien cómo, ni para qué ya que se tiene la herencia familiar que lo asegura todo. O tal vez sí, los emprendedores son de las elites porque tienen estudios en universidades top, experiencia en banca y nivel socioeconómico medio-medio alto.

Pero los que juegan mejor a ser elite o usar a las elites son los políticos. La derecha ya lo sabía, pero la izquierda apenas toca dinero se convierte en parte de la élite que criticaban. Aunque como dice un argentino en este libro "el problema es que los políticos se sienten inferiores a los ricos". Esto parece que eso era antes, ahora los políticos ponen a los ricos de rodillas como lo han hecho Trump, Bukele, Bolsonaro, Uribe,

PRESENTACIÓN

Amlo... Por eso, nuestros políticos en la región más que llevar a la distribución de la riqueza, lo que hacen es destruir la riqueza y la sociedad.

Las elites políticas de América Latina son malos capitalistas.

Y son malos capitalistas porque no compiten porque papá Estado los protege y salva. Invocan el capitalismo y el mercado, pero no lo usan para ellos, se toman el Estado. Y para completar el menú son cercanas y fascinadas con los militares, las iglesias católicas y evangélicas, gustan de los autoritarismos y, además, venden un relato idealizado de sí mismos, ya que se "llaman" el motor que empuja el desarrollo del país. Poco tienen de autocrítica, ya que básicamente se ven a sí mismos como los salvadores sociales que generan empleos, bienes y servicios. Y son creyentes del mercado, ya que este es sabio y lo resuelve todo. Solo que ellos lo resuelven todo de la han mano del Estado.

El espejo de las elites es la desigualdad de sus sociedades. El resultado más potente de la acción de las elites es las desigualdades existentes en nuestros países y sus modos de naturalizarlas a través de la integración sin alterar las relaciones de poder. La desigualdad se justifica desde "la meritocracia" y "el emprendedurismo" que solo pueden ejercer ellos mismos porque las masas son pobres, no educadas y perezosas. Solo que no dicen que su gran negocio es la toma de los Estados, la práctica del atajo financiero, la opacidad tributaria, la construcción, la minería, los bancos y las acciones. Su gran negocio es el extractivismo. Y para todo esto no se necesita a la gente. Por eso, concentran el poder para destruir la obra institucional, la democracia y el sistema político. Y tienen como mantra al Fondo Monetario Internacional y como táctica la corrupción y el no pagar impuestos.

Las viejas élites están en pánico porque ahora llegó el narcotráfico con sus modos de capturar el estado y matar el disenso. Y el narco se ha convertido en la palabra mágica para explicar todos los males sociales. Ahora, tenemos narco-élites, narcorrupción, narcopolítica, marcomedia.

PRESENTACIÓN

Para las elites, más peligroso que el narco es ese “comunismo” de las mujeres, las diversidades sexuales, los pueblos ancestrales indígenas y afro, los defensores del medio ambiente, los derechos. Ya no les importa el narco, el pecao es este *nuevo comunismo*. Y lo llaman comunismo porque desordena y caotiza el modelo de *statuo-quo* de familia, dios, patria y tradición. La lucha es contra de la ideología de género, a favor del matrimonio heterosexual o del derecho a educar a los hijos. Todo por la familia, la patria, dios y el capitalismo. Su lucha está en las redes digitales, en las calles, en tomarse los gobiernos y capturar el Estado. La batalla cultural es contra todo lo que se perciba como «rojo», «caviar», «izquierda» o «comunista». Por eso crean mantras seductores como el «feminazismo» y la ideología de género. Y se ponen la camiseta de la selección de fútbol para jugar el partido de la familia, la patria, dios y el capitalismo. Son extremistas, tienen inspiración fascista, exaltan un pasado mítico, desprecian la evidencia científica, tienen teorías conspirativas para todo y odian al extranjero. Y llaman terroristas y comunistas a los creyentes en estas nuevas éticas políticas. Viene de la religión de mantener el *statuo-quo* (machista, patriarcal, blanquiado, religioso), para crear otra religión que sigue a superhéroes como Bukele, Bolsonaro, Amlo, Uribe, Castillo: las nuevas elites.

El pasado es una imagen estática y ese es el castillo de las elites y de allí no quieren moverse. Todas las élites: las corruptas, los farándulas (músicos y deportistas), los narcos están teniendo miedo del presente que es movimiento, estallido, mujeres y jóvenes. A las viejas y las nuevas élites, este estallido de nuevos actores, estéticas y agendas sociales les mete miedo porque trae la eferescencia de la calle, la bronca, la rabia de mujeres y jóvenes contra el modelo y sus abusos.

Una sensación de decepción e impotencia con las promesas incumplidas del capitalismo está llevando a la región a una lucha contra las élites y los ricos, a volver los cuerpos a la lucha de clases que denuncia y quiere cambios en la desigualdad, el racismo estructural, el

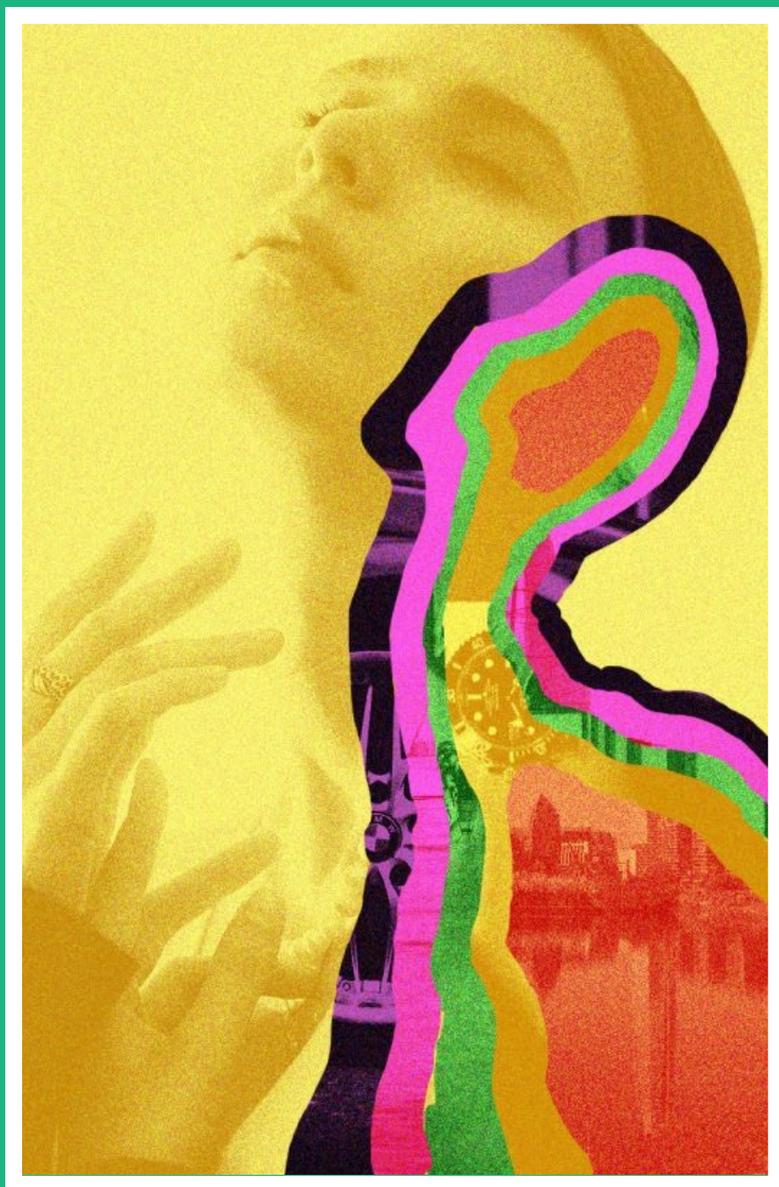
PRESENTACIÓN

privilegio, la hipocresía, la religión, el genocidio, la economía de monopolios...Y ojalá que el sistema pidiese una disculpa.

La disputa es por el *statu quo*, aunque es una rebelión que solo pide lo más obvio: estado de bienestar, salud pública, educación pública, parar la matanza de mujeres y líderes sociales, preservar el medio ambiente, reconocer las diversidades que nos habitan. Por eso, más que capital o consumo, se quiere el *buen vivir* en armonía entre todos y con la naturaleza y los espíritus, el *vivir sabroso* que se hace desde lo común y colectivo. Reivindicar la ternura, el cuidado, la amistad, lo común, lo gozoso, lo sabroso.

Nos debemos como sociedad la discusión de qué pone cada elite, no solo la política o la económica, sino también la cultural, académica, indígena, afro, mediática, narco... Uno quisiera que las elites se hicieran cargo de esta catástrofe que han hecho de América Latina, es solo un deseo. Ellos no se harán cargo.

ÉLITES SIN DESTINO LATAM



MÉXICO

Tú puedes ser como nosotros

DANIELA REA

(Irapuato, Guanajuato, 1982)

Es reportera independiente e inició su labor periodística en Veracruz y trabajó en el periódico Reforma. Sus crónicas y reportajes se incluyen en los libros País de muertos. Crónicas contra la impunidad (Debate, 2011), Generación Bang (Temas de Hoy México, 2012), Nuestra aparente rendición (Grijalbo, 2012), Entre las cenizas. Historias de vida en tiempos de muerte (Creative Commons, 2012) y 72 migrantes (Almadía, 2011). Su más reciente libro, La Tropa, escrito a cuatro manos con Pablo Ferri, fue publicado por Aguilar en el 2019 y resultó ganador del Premio de Periodismo Javier Valdéz Cárdenas.

Para definir qué es una élite, me dice la socióloga Alice Krozer, es necesario saber qué tipo de poder estás analizando. Así encontramos que hay élites políticas, élites económicas, élites culturales. Eso no sucedería con cualquier tipo de colectivo humano que quisiéramos analizar-comentar-entender. Decía el escritor y poeta Jean Cocteau que «el que generaliza miente», y añadía «pero no podemos escribir sin generalizar».

Una élite es la minoría selecta o rectora. Élite viene del francés *élite* que se refiere a «lo elegido». «Por definición las élites son aspiracionales», me explica Krozer, «son un ejemplo, un horizonte, para bien o para mal, que te hace pensar que algún día serás parte de ello».

Me invitaron a escribir sobre las élites. Y elegí escribir sobre una pareja, Samuel García y Mariana Rodríguez, que si bien no pertenecen a ninguna élite —no son las familias más ricas de México, ni siquiera de Nuevo León, su estado natal; la familia de él no pertenece a ninguna casta política, ni ella es la *influencer* con más seguidores— sí representan esa aspiración a serlo.

«Quisiera ser como ellos», dijo Samuel al periodista Fernando del Collado en el año 2019 cuando en una entrevista le preguntó si quería ser millonario e importante como los empresarios de Nuevo León. «Quisiera ser como ellos, pero somos más medianones».

Samuel es un abogado de 33 años que en una acelerada carrera política se convirtió en gobernador de uno de los estados más ricos de México; Mariana, de 25 años, es una psicóloga organizacional egresada de una de las universidades más caras del país, que se convirtió en modelo y empresaria.

Su nombre, «Mariana Rodríguez», es una marca registrada (ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, con el número 20415289): cada imagen, cada palabra, cada respiro que ella registra en sus redes le reditúa económicamente. Según un tabulador publicado por el periódico *Excélsior*, cuando Mariana tenía 1,2 millones de seguidores en Instagram (en octubre de 2021 llegaba a 2,1) una historia individual se cuantificaba en 400 dólares, un *post* en el *feed* en 1.200 dólares y 2.500 dólares por un *giveaway*.

Samuel es hijo de una pareja formada por un abogado fiscal y una comerciante de clase media. El padre de Samuel, Samuel Orlando García, creció en un rancho y en su adolescencia se fue a Monterrey a estudiar la preparatoria, después la carrera de derecho fiscal. Su madre, Bertha Silvia Sepúlveda Andrade, nació en una familia de comerciantes, cuyos negocios de refacciones de electrodomésticos ella administraría al terminar la universidad.

A diferencia de sus padres que formaron su patrimonio «desde abajo», Samuel nació en una familia con solvencia económica y siempre acudió a escuelas privadas. Y siempre, también, le gustaron los reflectores: a sus 8 años formó parte de un noticiero infantil al que entró porque al dueño del canal le pareció buena estrategia comercial poner a un niño «güerito» ante la cámara. Samuel duró tres años en ese programa que despedía con lecturas religiosas de los libros de su mamá.

Mariana —en una historia que cuenta de sí misma ante estudiantes del TEC de Monterrey como parte de los programas de vinculación entre egresados y la comunidad educativa para compartir sus historias del éxito prometido por esa casa de estudios—, dice que desde los 8 años ha trabajado para obtener lo que quiere: de niña vendió golosinas afuera de su casa para comprarse la película de *El Grinch*; organizó cursos de verano a sus primos pequeños para comprarse unos tenis, dio clases de baile y modeló. Mariana se cuenta a sí misma como el ejemplo de que quien quiere, puede; de la meritocracia, del *echaleganismo*. Si ella pudo, cualquiera puede. Y claro, cualquiera quiere.

Samuel llegó a la política en el año 2015 cuando Movimiento Ciudadano se abrió a candidaturas externas y le dio una cuota a Rescatemos Nuevo León, una organización política fundada por un empresario con la aspiración de llegar a la gubernatura de la mano «ciudadana». Su forma de hacer política es ruidosa y mediática: Samuel llevaba féretros de cartón a las oficinas del PRI para decir que ese partido estaba por morir; o microondas a sus compañeros del Congreso para exigir que «descongelen» iniciativas de ley. Samuel es lo que en el norte se conoce como un «hombre entrón», es decir, macho, bravucón, un hombre que no se deja, que no se raja. Porque en México, los hombres no se rajan. Y en el norte, además, se echan para adelante.

Samuel pasó de los reflectores locales de Nuevo León a la política nacional cuando comenzó a publicar fotos de viajes y excesos. Una es aquella en la que se le ve arriba de un camello usando una *kufiyya* blanca y lentes oscuros en un viaje de trabajo, o la *selfie* junto a las ruinas romanas, también en un viaje de trabajo. Otra vistiendo una playera de Joe Montana en el Superbowl a inicios de la pandemia o posando junto a un elefante durante su viaje de safari a África.

O cuando se hizo una *selfie* con el reloj Rolex que usó en su boda, valuado en 12.000 dólares, o cuando comentó en una entrevista que él conocía a gente que vive con «suelditos» de 2.000, 2.500 dólares mensuales y son felices pues con eso les alcanza para la familia y las colegiaturas de escuelas privadas. «Suelditos» que son 10 veces más el ingreso promedio de los mexicanos. Desde que era diputado, senador y ahora gobernador Samuel presume en redes sociales y en entrevistas de no necesitar dinero y regalar su sueldo de 5.000 dólares a organizaciones ciudadanas. Ya antes había donado su auto deportivo BMW i8 —con un valor aproximado de 125.000 dólares— a una asociación civil, luego de confundir que ésta ayudaba a perros en lugar de niños con cáncer.

Dice la lingüista y escritora Deborah Tannen que poder y solidaridad están en una relación paradójica y aunque parecen ser opuestos, en realidad están implicados: cualquier gesto de solidaridad implica el ejercicio y la confirmación de superioridad. El impulso “generoso” como una constante demostración de poder. En estos casos Samuel ¿está siendo generoso al compartir su riqueza, o está tratando de ostentar su dinero y recordarnos que él puede, que él tiene?

Samuel vendría siendo algo que en México conocemos como «los nuevos ricos», que surgieron a partir de la llegada del neoliberalismo a México. El sociólogo Hugo Cerón dijo, durante la presentación de su libro *Privilege at Play: Class, Race, Gender, and Golf in Mexico* —el resultado de una investigación etnográfica con las élites que acuden a los campos de golf privados en la Ciudad de México—, que los nuevos ricos, las nuevas élites, necesitan constantemente mostrar quién son y suelen ser más clasistas. «La élite nueva requiere el clasismo para cimentar una posición casi de farsa, como siente que no es porque no nació en ese espacio», a diferencia de las élites de tradición que no ven la amenaza de dejar de pertenecer.

«Se les tiene que notar que son ricos, se les tiene que notar que sus posibilidades son infinitas», me dice por su parte el periodista Alberto Tavira cuando le pido que analicemos sus publicaciones de Samuel y Mariana en redes. Tavira, un periodista estudioso de las historias de fama, corazón y política. «Las mejores bolsas, los mejores zapatos, las mejores casas, los mejores coches, los mejores relojes.»

«Como no les alcanzan luego los apellidos, tienen que mostrarlo al mundo, que se me note que pertenezco», continúa Alberto. Yo suelto una carcajada y en ella el fastidio de pasar horas y horas mirando las publicaciones de ambos en sus redes, su frivolidad, su privilegio que les es invisible, su mundo de filtros.

Samuel es un *millennial* que estudió en el Tec de Monterrey, «el clásico chavo de familia acomodada», dice el periodista Ernesto Núñez. Cuando cumplió 15 años, México vivía la alternancia política con Vicente Fox, el gerente de la Coca-Cola que se convirtió en el primer presidente de oposición en el país; un tipo irreverente que gobernaba con polémicas frases como aquella en la que se evidenció su racismo «los migrantes mexicanos hacen trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer» o su machismo «el 75% de los hogares de México tienen una lavadora, y no de dos patas o de dos piernas, una lavadora metálica».

Samuel entendió la política como un *show* mediático y lo ejerció a través de sus redes sociales. «En ese sentido fue rompedor, le valió gorro la incompreensión chilanga, él representaba el aspiracionista *de a de veras*, con sus lentes en Qatar», sigue Ernesto Núñez. Justo ese gesto, que fue repudiado por cierto grupo intelectual en el centro del país, en el norte lo catapultó. «Quizá también sea un cambio de época en que las masas electorales ya no quieren purezas ideológicas, sino pragmatismo», calcula Ernesto.

Esa forma de hacer política poco empataba con la unidad y lealtad de las élites políticas tradicionales de las que escribió Rogelio Hernández. «La unidad de una élite política, su renovación sin conflictos y sobre todo una clara continuidad en proyectos e incluso en estilos de comportamiento (...) dieron lugar a la versión de la «familia revolucionaria» integrada por los políticos más destacados y que decidía quien ejercía el poder»¹. Aunque este entendimiento fue el eje del ejercicio del poder desde el México post-revolucionario, particularmente

¹ Hernández, Rogelio, «Amistades, compromisos y lealtades: líderes y grupos políticos en el Estado de México, 1943-1993», Colegio de México, 1998

al interior del PRI, que gobernó durante 70 años ininterrumpidos este país, las escisiones del partido en otros de centro, centro izquierda, como el PRD o Morena, también responden a esas lealtades aún vigentes en una parte de la élite política.

Otra parte es en la que caben políticos como Samuel García. La alternancia rompió estos patrones y reglas: el que se mueve no sale en la foto —regla de oro para frenar a los ansiosos por despegar en la carrera presidencial—, o el dedazo —otra regla de oro con la cual el presidente en turno designaba a su sucesor—, rituales que le permitieron al sistema sobrevivir hasta inicios del siglo XXI, cuando entró en crisis. Y la alternancia trajo también la llegada al poder de personas que no tuvieron formación política, sino empresarial, técnica, o simplemente fama. Quizá el ejemplo más contundente de esto fue que un gerente de Coca-Cola, Vicente Fox, se convirtiera en el primer presidente de la alternancia.

«Una característica de estos nuevos grupos en el poder político», me dice Rogelio Hernández en una conversación, «es su gran inexperiencia y carencia de trayectorias políticas y que se relacionan en una especie de mutualismo: el partido que les lleva al poder se beneficia de ellos y ellos del partido». Con algunas excepciones, siempre las hay, de políticos de oposición que se formaron en la administración pública y en puestos legislativos. En los años recientes las boletas electorales se han llenado de actrices, actores, deportistas, luchadores (esos hombres enmascarados que «pelean» en un ring) que, por su fama entre el público, o estridencia mediática, prometen ganar votos, aunque no tengan una formación política, como Samuel.

Y el mismo Samuel presume de no pertenecer a la élite política, un discurso que ya hemos escuchado antes en Trump, Bolsonaro o Bukele, políticos hechos a punta de *likes*. «Una degradación de la política para convertirse en otra cosa, que es el espectáculo», opina la politóloga Denisse Dresser en una mesa de debate sobre el triunfo del neoleonés.

En la entrevista que Samuel tuvo con el periodista Fernando del Collado, en el año 2019, rechaza a esa «vieja política» que califica como un sinónimo de mentiras y envidias. «Voy aprendiendo qué es ser político, pero no quiero ser este político, trato de ser disruptivo y revolucionario, no quiero ser el típico político que se hace de favores, de poder para llevar carne al asador», dijo, «quedarse con todo», símbolo de la corrupción política.

Ya Morelos, un estado en el sur del país, fue gobernado por el futbolista Cuauhtémoc Blanco, y varios diputados y diputadas vienen del mundo del espectáculo, específicamente del mundo de Televisa, la responsable, a través de sus ficciones, dramas y telenovelas, de la formación emocional de varias generaciones en este país, incluso de América Latina.

No hay partido que sea la excepción en reclutar este tipo de entes, lo hacen los de la derecha, los de la izquierda y los que se autonoman «ciudadanos». Aunque destacan los partidos Movimiento Ciudadano y Partido Verde Ecologista de México que, a diferencia de otros de más tradición como el PRI y el PAN, no tienen una ideología definida, tienen poca militancia y están a la caza constante de quien pueda darles votos. En otras palabras: son partidos comodines que igual irán a la derecha o a la izquierda según sus necesidades de electores.

Así que en este mundo de rarezas la llegada de Samuel no sorprendería tanto, si no fuera por la rapidez con que llegó a la gubernatura de uno de los estados económicamente más importantes del país, por la pronta edad a la que llegó a ese cargo —33 años cumplidos, ubicándolo como uno de los dos gobernadores más jóvenes—, por haberlo hecho de la mano de su esposa Mariana Rodríguez, una influencer; y por la constante exhibición de sus viajes y lujos en redes sociales, en un país donde la mitad de su población apenas alcanza para comer.

En el año 2015, cuando Samuel García era candidato a la diputación local, declaró en una entrevista: «En México en el norte trabajamos, en el centro administran y en el sur descansan».

Si vemos un mapa de México, trazado por los niveles de pobreza, hay una clara división entre el norte y el sur. El sur, el sureste del país, concentra los mayores niveles de pobreza y también de población indígena. En el sur están los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, estados de gran tradición de lucha social, sindical, magisterial y territorial. El norte es una región con tradición industrial orgullosa de haberse construido de la nada: los norteros domaron la hostilidad del desierto y construyeron un imperio.

La frase de Samuel García —sobre el norte trabajador y el sur mantenido— representa una forma de pensamiento en la que se culpa al pobre de ser pobre: son pobres porque quieren, son pobres porque no trabajan. Una idea decimonónica de lo racial que considera a las personas indígenas flojas porque asumen que en el sur exuberante sólo con estirar la mano pueden tener los alimentos de los árboles, un mango, un coco, un banano; una idea que visualiza a las personas del norte como esforzadas y trabajadoras, frente a las del sur, a las indígenas, a las morenas, como atenuadas y flojas. «Se están actualizando los discursos raciales en México, poner de nuevo en el discurso la diferencia racial, no sólo en el color de piel, sino en el estilo de vida», me dice Itza Varela, socióloga del Colegio de México, enfocada en los estudios de género y racismo, «es una especie de adecuación de lo que Trump dice de los mexicanos, pero al interior de México, esa idea de que en el norte son mejores, son menos indios que en el sur».

Una forma de pensamiento que encarna el racismo y el clasismo que se entrecruzan en este país y que han sido estudiados por los sociólogos Alice Krozer y Hugo Cerón. «El racismo no se puede separar

del clasismo ni de la exclusión económica porque todas las anteriores operan como un conjunto, escondiéndose una detrás de las otras», escribió Hugo Cerón en el verano del año 2020. A este efecto le llamó «la racialización de la clase».

«¿Cómo se puede reconocer a simple vista si una persona es rica o pobre?», preguntó Alice Krozer en una investigación sobre el privilegio. La respuesta: por el color de su piel. El oscuro, tendrá cuatro veces más posibilidades de vivir en la pobreza y seis veces menos de acceder a la universidad que un blanco. El quintil más rico del país está compuesto en su mayoría por personas de piel clara. «La realidad es que la pobreza tiene rostro moreno, mientras que la élite sigue viéndose blanca».

En la zona metropolitana de Monterrey el antropólogo Juan Antonio Doncel realizó un estudio en escuelas preparatorias y encontró que los estudiantes relacionaban el ser indígena a estereotipos como «incapaces de progresar», «conservadores en sus tradiciones», «higiénicos a veces». Docel les preguntó qué pasaría si tuvieran un maestro indígena y respondieron con burlas y risas².

En este contexto, en este país, Mariana publicó en su IG un video sobre un curso que había tomado para aprender a ser *ama de casa*: «Te enseñan de todo», contaba a sus seguidores, «cómo tender una cama súper bien, cómo lavar un baño, lavar, planchar... ahí pueden mandar a sus empleadas de su casa, si tienen, y las capacitan porque a lo mejor no tenemos *el tiempo* de andar capacitando y les dan el curso de 4 sesiones, les enseñan desde todo, desde arreglos florales, envolver el regalo, el jardín, baños, camas, etcétera». En México las trabajadoras del hogar son, casi en su totalidad, mujeres de piel oscura y sólo 1 de cada 10 tiene seguridad social, pero de eso no era el taller, menos hablaba el video.

² «Alertan en NL por racismo», Periódico El Norte, 11 de junio del 2020.

Hugo Cerón, en su investigación etnográfica con las élites —todas ellas altas, blancas y rubias— buscaba entender cómo se articula el privilegio en México y cómo los privilegiados entienden las inequidades. Cerón quiso saber por qué las élites creen que los pobres son pobres y les formuló la pregunta: ¿Por qué los *caddies* —asistentes de los golfistas— son pobres, teniendo un nivel de juego semejante a alguien profesional? Para las élites la decisión de un *caddy* que elige la seguridad económica de los torneos nacionales en lugar de arriesgarse en los torneos americanos, era un ejemplo de la mediocridad que tiene a los pobres sumidos en la pobreza. Lo que no veían las élites es que ese *caddy* tendría que invertir todo su capital de 3 o 4 años de trabajo, para saltar a la liga norteamericana de golf, un riesgo demasiado alto para tomar. «Desde la riqueza, las barreras cotidianas que la pobreza genera son invisibles y les parecen ilógicas», dijo Cerón durante la presentación virtual del libro. Desde las élites eso era una muestra de mediocridad.

Además, encontró que el poder se entrelaza con nociones de género y, en ese sentido, la masculinidad es clave. Desde afuera, un hombre y una mujer se ven iguales, igual de ricos, pero las dinámicas de género juegan un papel fundamental en la reproducción del privilegio. Las mujeres son, pues, privilegiadas subordinadas. Con todo el dinero y poder, las mujeres no pueden asistir a jugar golf a ciertos horarios. De hecho, esta relación entre géneros se replica a lo largo de los estratos socioeconómicos de la población mexicana: hay machos con dinero, hay machos sin dinero. ¿Por qué habríamos de pensar o esperar que las élites no encarnan las violencias de género? ¿Es ese un gesto de nuestro racismo?

Eso pensamos quienes vimos el video de IG que transmitieron en vivo Samuel y Mariana a mediados del año 2020 cuando ella se contagió de COVID-19 y compartieron una cena «virtual» en habitaciones separadas

dentro de su casa. Comiendo costillas con las manos, él le ordenó a su esposa ante la audiencia: «Sube la cámara, estás enseñando mucha pierna». Mariana, consternada, le pidió perdón porque ella no alcanzaba a ver lo que mostraba su pantalla. «Me casé contigo pues pa' mí, no pa' que andes enseñando», le respondió Samuel.

Los comentarios no se hicieron esperar. En redes sociales, en el Congreso (Samuel era senador en ese entonces) se dijo lo obvio y esperado: que era un macho y ella considerada un objeto. Políticos y usuarios de redes sociales creyeron que su aspiración a ser gobernador estaría en quiebra a partir de esta escena. Pero no fue así. Tres meses después la intención de voto para Samuel pasó del 8 al 32 por ciento. Y una de las explicaciones que hacen a la distancia analistas políticos es la capacidad de Mariana de venderlo como un producto. Fue ella y no él quien ganó la elección. El Instituto Nacional Electoral revisó los gastos de campaña para gobernador de Samuel y calculó que Mariana hizo mil 345 publicaciones en sus redes sociales de apoyo al candidato, es decir su esposo, y señaló que esos posts en sus redes equivalían a 1.300.000 dólares, por lo que impuso una multa al candidato ganador por violar la ley, una multa que finalmente el Tribunal Electoral Federal revocó.

Y de nuevo la polémica. La pareja argumentó que apelaría la multa y Mariana, una Mariana *feminista* e indignada, puso una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de los funcionarios del órgano electoral por haberla cosificado y considerado un objeto de su marido, una mujer sin voz ni opinión propia.

«Seamos honestos, muchos pensamos en Mariana como una mujer hueca, pero yo ahora me trago cada una de mis palabras», dijo la periodista Carolina Hernández en su video-columna <!Yo qué voy a saber>. En ella, Carolina explicaba cómo subestimó la personalidad de Mariana después de la escena de las piernas y las costillas, hasta que entendió su madera empresarial. Samuel y sus frases, sus derroches, su machismo, su arrogancia, su exhibicionismo se había convertido en un meme, pero

Mariana lo capitalizó convirtiendo a Samuel en un producto. «Entendió perfecto cómo aprovechar la cultura aspiracional que se vive en Nuevo León. Mariana definitivamente sabe vender cosas que nadie necesita y los regios saben comprarlas», dijo Carolina Hernández en su columna.

¿Por qué Mariana permitió que su esposo le hablara así y meses después reclamó a los funcionarios electorales que la consideraran un objeto? Quienes vimos ese vídeo entendimos que quien la trató como un objeto fue su esposo y ella no sólo lo permitió, sino que incluso le pidió perdón por enseñar su pierna en público. ¿Es esto una falsa moralidad de este tipo de élites? ¿Es la personificación de una buena esposa, una buena mujer que no es rijosa, no muestra su cuerpo en público y, sobre todo, se asume que se debe al hombre frente a ella? ¿Es esto una falsa moralidad de este tipo de élites?

Cada vez que contamos nuestra vida estamos construyendo una ficción, dice la escritora Sylvia Aguilar Zéleni. En sus talleres de autoficción, Sylvia nos dice a quienes queremos aprender a escribir historias personales, que nos inventamos constantemente, desde la forma en que narramos cómo fue elegido nuestro nombre, hasta la manera de contar cómo llegamos a donde llegamos. En cada palabra, en cada imagen, elegimos la forma en que queremos ser mirados y conocidos.

Y nosotros conocemos a Samuel García y Mariana Rodríguez a partir de lo que nos han mostrado en las redes sociales, a partir de la ficción que construyen de sí mismos. Samuel y Mariana de piel blanca y cabello rubio, de cuerpo atlético, saludables, afortunados, amados. Samuel y Mariana ejercitándose, maquillándose, vistiéndose, rescatando mascotas, promoviendo las empresas de sus seguidores, repartiendo despensas, muy cerca de sus seguidores con quienes comparten sus alegrías, como su noviazgo, su compromiso, su boda, hasta sus problemas

y dificultades: como cuando Mariana contó en un video de IG «todos los obstáculos que me han tocado vivir» como perder las chanclas en la playa, o que se le cayera su iPhone en la marina; o Samuel que contó en una entrevista con un influencer su difícil juventud cuando su papá lo llevaba a trabajar a la oficina «pero era bien duro porque me decía si quieres que te pague la semana te tienes que ir conmigo al golf el sábado y al terminar los 18 hoyos te pago la semana». El papá insistía que en el golf era el lugar en el que podría relacionarse y encontrar clientes importantes. ¿Quiénes tienen acceso a jugar golf en este país? La gran mayoría de los habitantes del país son el caddie con la bolsa y palos a cuestas, o son quienes se quedan sin agua en sus casas para que los jardines del campo estén siempre regados.

Una autoficción. Incluso lo que parece ser un día cualquiera de su vida cotidiana, como las fotos de Mariana recién levantada y desmaquillada, en esta lógica de construirse y contarse, sería una creación con un objetivo claro: mostrarse, exhibirse, ser deseados.

«No soy esa figura que tachan de frívola de puro Ferragamo de lujos. Quizá mis redes dan la impresión de otra cosa, de materialidad, pero no hay nada de eso, soy un regiomontano común y corriente», dijo Samuel García al analista político Hernán Gómez en una entrevista en que lo puso de frente con sus fotos de viajes, lujos y despilfarros.

¿Qué les permite a Samuel y a Mariana hacer un vídeo y exhibir sus riquezas y problemas como perder una chancla o madrugar para jugar golf? En un país de 10 mujeres asesinadas al día, de 90 mil desaparecidos, de casi 60 millones en pobreza ¿Qué lo permite?, le pregunto a la socióloga Itza Varela. «Lo permite que se creó una burbuja alrededor de las redes sociales. Esas tesis de que las redes sociales democratizaban las voces es bastante chafa porque en realidad no democratizó nada. Sólo hizo una nueva burbuja de toma de decisiones donde la voz se mide a partir de cuántos seguidores tienes. Hablar de una chancla, hablar del golf es una distracción profunda y por lo mismo

es profundamente político. Estamos viviendo la idea de la caja idiota de la televisión, remasterizada».

En la historia contemporánea de México abundan los políticos que se casaron con mujeres famosas antes de llegar al poder o ya en él. Estas historias las conoce bien Alberto Tavira, que nos ha traído a la vida nacional la historia rosa de los hombres poderosos, primero con sus columnas, después con sus libros y recientemente con su serie de podcast llamada «Dinastías del poder» que cuenta los lazos de sangre y amor en la política mexicana.

Justo en esta serie de podcast Tavira narra las historias de amor entre políticos y mujeres famosas, como la del ex presidente Enrique Peña Nieto con la actriz Angélica Rivera, entonces en la cúspide de la carrera por haber personificado a la Gaviota en la telenovela *Destilando amor*. O el romance entre Emiliano Salinas, hijo del ex presidente más polémico del país, Carlos Salinas de Gortari, con la actriz polaca Ludwidka Paleta. Hace ya un par de décadas Ludwidka protagonizó la telenovela infantil *Carrusel* en donde personificaba a María Joaquina, una niña rubia y millonaria que acude a una escuela en donde un niño moreno y pobre se enamora de ella. Yo vi esa telenovela y aprendí, en sus 358 capítulos, que los rubios y blancos son más felices, más exitosos, más amados. Yo quise ser rubia y ser amada. Recuerdo a otra compañera del salón que también veía la telenovela y también quería ser rubia y amada. Llevó sus deseos al grado de vestirse, peinarse y actuar como María Joaquina. Una tarde que hacíamos en casa la tarea escolar, su papá la recogió en un auto destartalado. Mi compañera negó que ese hombre moreno fuera su papá, en su ficción nos dijo que se trataba del chófer.

«Lo que hoy es el discurso y la estética del IG, del TikTok, para las generaciones anteriores fue la telenovela», dice Itza Varela, «en términos mediáticos, pero también, desde mi perspectiva, con una noción muy particular de lo racial, sin que se enuncie como lo racial». No sólo es el color de piel (blancos, rubios) de Mariana y Samuel, sino la vida

que representan: ser atléticos, tener dinero, tener voz, poder decidir y no tener discapacidades o neurodivergencias.

Le pregunto a Alberto Tavira qué diferencia encuentra entre la pareja de Samuel y Mariana —si bien ella no es actriz, es modelo e *influencer*— y las otras parejas entre famosas y políticos.

«Esta pareja es la culminación de una crónica de redes sociales anunciada», me dice Alberto. Se refiere a que desde el año 2012 los analistas políticos calculaban hasta qué punto las redes sociales serían una influencia determinante en la intención del voto. En ese entonces la apuesta seguía siendo la televisión, como lo evidenció la unión entre la actriz del horario estelar, Angélica Rivera, y el heredero de la élite política, Peña Nieto. Pero en el 2021, dice Alberto, «me parece que se actualiza el canal, aunque en el fondo estamos viendo este fenómeno de usar distintos reflectores».

El humor de Alberto en medio de las lecturas y la redacción de este texto es un respiro. Samuel y Mariana no me simpatizan. De alguna forma lo que ellos muestran de sí mismos en las redes sociales, la forma en que accedo a ellos, representa mucho de lo que rechazo en las personas. De él su machismo, su arrogancia —incluso cuando «pide perdón»—, su prepotencia. De ella su frivolidad, su protagonismo, el cálculo constante y permanente de su (falsa) empatía. Desde que empecé a reportear y escribir este texto me he enfadado conmigo misma por dedicar horas y horas a revisar su carrera política, sus redes sociales, ver sus videos, sus derroches; por tratar de articular algo que tenga un poco de sentido y no sólo mi tripa y mis prejuicios vertidos en la página. Le cuento esto a Alberto y con una frescura envidiable me dice: «Pero si son fantásticos (los ricos), de verdad. Yo los observo y los analizo y me entretienen tanto».

Alberto disfruta de analizar a los protagonistas del poder político desde la sociología y la crónica rosa. Y nos lo hace digerible, nos permite reírnos de ellos.

Ya antes había conversado con la socióloga Alice Krozer sobre mi antipatía a los ricos que no tienen empacho en ostentar su privilegio, su supuesta superioridad a base del dinero. Parto de mi prejuicio, de una generalización hacia ellos (y los errores que esto implica) y de mis sesgos como reportera que durante 20 años de trabajo he investigado y escrito sobre pobreza, sobre violencias de estado y criminales, sobre violencias de género, sobre comunidades desplazadas y despojadas por la migración. Mi antipatía surge de mi incompreensión sobre la disociación entre su vida (o lo que muestran de ella) y la vida de la mayor parte de personas de este país; sobre esa estupidez que les impide ver el mundo más allá de su privilegio que les es invisible, más invisible conforme más viven en él.

Alice realizó una investigación en la que se entrevistó con personas ricas, privilegiadas y blancas para tratar de entender la experiencia subjetiva del privilegio, su comprensión de la desigualdad y la movilidad social. En su investigación Krozer encontró que los ricos se explicaban la desigualdad en el hecho de que las personas son diferentes. Desde su concepción es *naturaleza humana* que haya desigualdad, porque hay personas diferentes, unas más inteligentes que otras o más suertudas que otras o más trabajadoras que otras. «Y está bien que exista, lo que tú quieres es que el que sea muy pobre pues no se esté muriendo de hambre», le respondió uno de sus entrevistados.

«El mito de la meritocracia no sólo es falso, sino también injusto», escribió Alice Krozer, «pues acepta una diferencia de ingresos sistemática ignorando que el privilegio, en vez de distribuirse de forma aleatoria a través de una población, es acumulativo: la suerte es atraída por los suertudos (...) Y así la meritocracia, el *echaleganismo* terminan siendo el mecanismo para la transmisión

dinástica de la riqueza y del privilegio de una generación a la siguiente. Lo insidioso del discurso es que, conforme más refleje la riqueza la distribución del talento natural y los ricos se casen entre sí, más la sociedad se termina ordenando en dos clases principales, ambas aceptando que tienen (más o menos) lo que se merecen». En una conversación con Alice le pregunté qué requería de ella el hacer trabajo académico con las personas blancas, ricas, privilegiadas; muchas de ellas clasistas y racistas. Alice me dijo que contaba con dos condiciones: una, la curiosidad auténtica de acercarse a preguntar para entender; otra, la empatía.

Mientras escuchaba a Alice recordé que cuando Pablo Ferri, Mónica González y yo trabajamos una investigación sobre soldados que matan, ambas condiciones que plantea operaron en las entrevistas con los soldados: la curiosidad y la empatía. Pero también, mientras la escuchaba, pensaba que quizá yo podría tener una curiosidad genuina para entender a las personas blancas, ricas, privilegiadas, pero no me sentía capaz de llegar a la empatía que, de alguna forma, sí operó con los soldados. Me siento capaz de tener empatía con los soldados, pero no con una pareja que se regodea de su privilegio en uno de los países más desiguales del mundo. ¿Por qué puedo tener empatía con soldados acusados de matar, torturar y desaparecer personas y no con una pareja de nuevos ricos que cada día ostentan ante el mundo su privilegio?

Los soldados sobre quienes investigamos fueron personas construidas para ser violentas, como dice la teórica Pilar Calveiro, llevadas a los límites de su propia vida para salir dispuestas a matar o a morir; los soldados fueron entrenados en el ser violentos y forzados a responder a mandatos de masculinidad, como dice la *feminista* Rita Segado. Por otro lado, (de nuevo advierto sobre mi prejuicio y el riesgo que conlleva la generalización) las personas blancas, ricas, privilegiadas, o al menos lo que representan Mariana y Samuel en sus redes sociales, tienen la posibilidad de actuar desde la voluntad propia, al menos en teoría y según lo confirman en sus redes. Toman decisiones activas, libres, marcadas por

su estructura. Y esa actuación y el contexto general del país en el que se enuncia, es tan abismal que llega a ser obsceno. Mientras los soldados enfrentan un exceso de realidad que supera su propia voluntad, los ricos, blancos, privilegiados simplemente no la ven. Y no la ven porque pueden decidir no verla.

En los últimos años se ha puesto sobre la mesa la discusión de cómo el mestizaje funcionó como una forma de blanqueamiento de muchas poblaciones indígenas y afrodescendientes. Esta idea de que en México no existe la raza, pues todos venimos del mestizaje, con la intención de una supuesta unidad nacional. Cuando nuestra piel no es blanca, intentamos blanquearnos con nuestra forma de consumir, con nuestras aspiraciones, con lo que vemos, con lo que seguimos, con lo que calificamos con un *like*. Lo decía Hugo Cerón, el sociólogo que hizo etnografía de las élites en los campos de golf. Una de sus metodologías de trabajo, por decirlo de alguna manera, era «blanquearse» para acceder a los poderosos, él, para ser escuchado, considerado. Él, un hombre moreno, les hablaba en el perfecto inglés que aprendió durante sus estudios de postgrado en Oxford, les comentaba sobre los bares europeos en donde tomó alguna cerveza. Blanquearse, copiar patrones, parecerse a lo que es el éxito, según uno mismo o, en este caso, los demás.

Una de las cosas que llamó la atención de Krozer durante su investigación sobre el privilegio fue la relación entre la riqueza y la apariencia por el fenotipo. Quinientos años después de la llegada de los españoles a América la élite en México sigue siendo blanca, comparada con el resto de la población. «Hay criterios de exclusión que les permite mantenerse igual, pero al mismo tiempo tiene que haber mecanismos desde afuera que avalan eso y ahí hay una cuestión específica de la sociedad mexicana, hay una aspiración, hay un valor atribuido a esa apariencia física y cultural porque la blanquitud es una

actitud y eso es valorado porque está asociado a la riqueza, al éxito», me dijo en la conversación que tuvimos.

Rogelio Hernández, del Colegio de México, considera que un triunfo de alguien como Samuel (y Mariana) refleja que el racismo está latente y que no hay una formación política en la sociedad. Para la periodista Carolina Hernández «no hay culpa de los regios al elegirlo, es que no hay opciones» y en esas pocas opciones Mariana y Samuel resultaron accesibles, cercanos y simpáticos al electorado. Para Tavira ese triunfo representa que somos una sociedad con sobredosis de entretenimiento e ignorancia. O, en palabras de Zygmunt Bauman, «la sociedad de consumo proclama abiertamente la imposibilidad de la satisfacción» que nos hace demandar cada vez más y más inmediatos satisfactores, al tiempo que hacemos de nosotros humanos más dependientes e incapaces de razonar, dudar, resolver, por nosotros mismos, ideas y problemas y formas de relacionarse con esos problemas, como lo propone el ensayista Antoni Brey.

«La sociedad quiere que le cuenten cuentos de hadas», me dice Alberto Tavira. «Cuentos de mujeres bonitas, felices, de príncipe azul, de casas bonitas». Eso lo entendió muy bien la revista *Hola*, fundada en 1944 a finales de la Segunda Guerra Mundial: la gente ya no quería ver muertos, ni pobreza, ni destrucción, quería ver gente bonita, feliz y rica y a partir de ahí el mundo tuvo un cuento de hadas semanal. «Mariana es ese cuento de hadas. Y sí, claro que la gente queremos ser felices y si no somos felices, queremos ver a otros ser felices y vivir esa vida que no vamos a poder. Ese anhelo, esa aspiración está depositada ahí.»

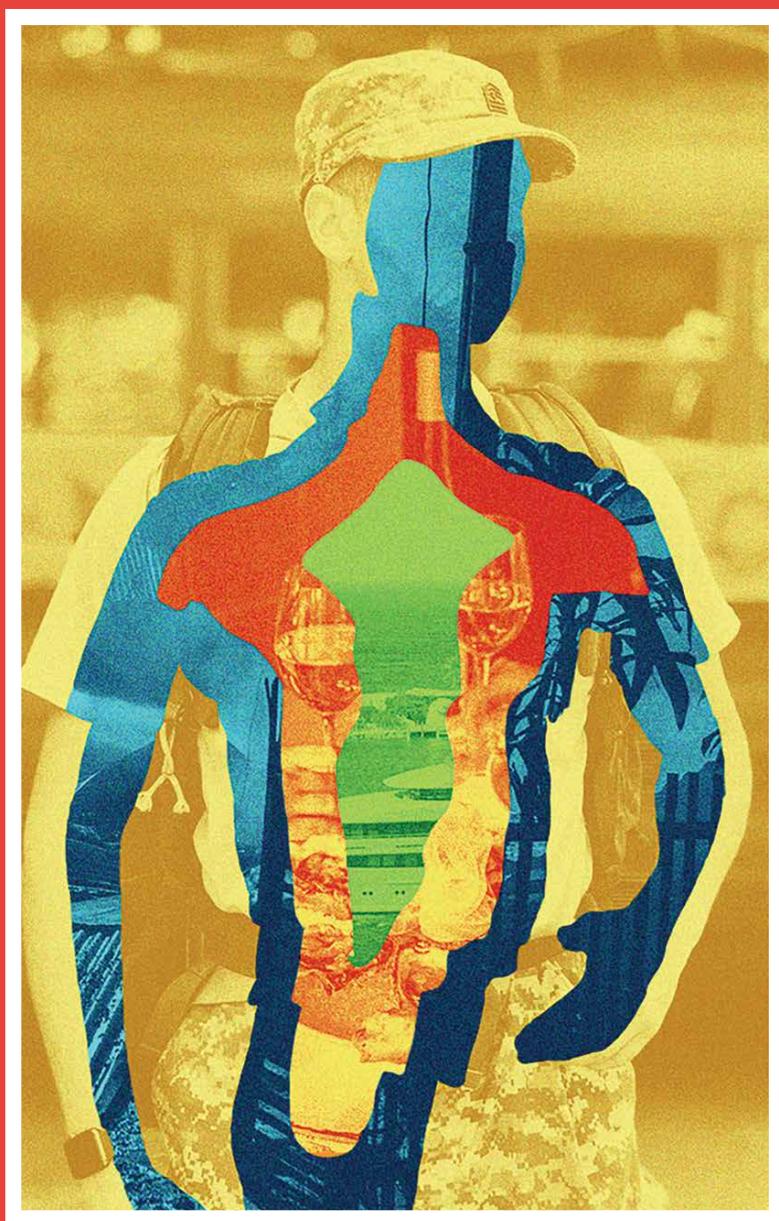
«Una persona mestiza puede buscar blanquearse con lógicas de consumo que permiten pertenecer a ciertos espacios que, por su condición de clase y corporalidad, no podría», dice Itza Varela.

«En sus publicaciones, en sus redes, lo que Mariana y Samuel nos dicen es que ser rico está bien, tener está bien. Y lo que sus seguidores ven es esa posibilidad de serlo, esa aspiración», me dice Carolina.

«Queremos eso, en el fondo todos queremos irnos a Aspen a esquiar, en el fondo tenemos miedo a ser «*prietos*».

Damos *likes* a una pareja de ricos, blancos, exitosos; damos *like* a esa aspiración de pertenecer a la élite, a lo exclusivo; damos *like* en esa ilusión de cercanía que nos dan a través de las redes sociales, en cada post que nos dice «tú puedes ser como nosotros», aunque sepamos que es una mentira.

ÉLITES SIN DESTINO LATAM



NICARAGUA

El rompecabezas del comandante

OCTAVIO ENRÍQUEZ

(Nicaragua, 1980). Periodista desde hace veinte años, sus investigaciones se han centrado en el círculo cercano al presidente Daniel Ortega. Su trabajo se ha publicado en su país natal, Venezuela, México, El Salvador y Colombia.

En los últimos 40 años, Daniel Ortega se ha convertido en el político con más poder en el país centroamericano. Con su esposa Rosario Murillo, la actual vicepresidente y su sucesora constitucional, formó una élite que se sostiene por la fuerza, aunque los expertos advierten que tiene ahora un futuro dudoso después de las protestas de 2018.

*El caudillo es silencioso
(dibujo su rostro silencioso.)*

*El caudillo es poderoso
(dibujo su mano fuerte.)*

*El caudillo es el jefe de los hombres armados
(dibujo las calaveras de los hombres muertos.)*

PABLO ANTONIO CUADRA, URNA CON PERFIL POLÍTICO

El domingo 13 de junio de 2021, un grupo de 16 oficiales de las tropas de operaciones especiales de la Policía arrestó en su residencia en Managua al general en retiro Hugo Torres Jiménez sin saber quién era aquel hombre. Su hijo Hugo Marcel, de 37 años, un ingeniero industrial que trabaja para una empresa de telefonía local, dice que algunos de los captores se sorprendieron cuando vieron los uniformes militares colgados en los armarios.

Mientras el general fue llevado a un sitio desconocido, su hijo fue obligado a tirarse al suelo. Mientras tenía las manos en la cabeza, el jefe del operativo le ordenó ponerse boca arriba y le tomó fotografías, mientras apuntaban a la víctima con un arma y le preguntaban sobre

el momento en que su padre se volteó contra el comandante Daniel Ortega, es decir, cuando empezó a adversar al presidente, quien es el jefe supremo de la Policía Nacional.

El allanamiento duró 6 horas y 40 minutos hasta las ocho de la noche en una jornada de capturas arbitrarias que puso a Nicaragua nuevamente en las noticias internacionales; por la violencia ejercida desde el gobierno que instauró un estado policial *de facto* que impide manifestaciones y críticas desde 2018, cuando respondieron a las masivas protestas de opositores con balas y persecución, dejando un saldo de 328 asesinados, 2.000 heridos y 100.000 nicaragüenses en el exilio según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esa represión se judicializó después, gracias a la subordinación de los jueces con Ortega, y en Nicaragua se empezaron a llenar las cárceles de presos políticos hasta sumar más de un centenar en septiembre de 2021. En la última redada, iniciada a finales de mayo pasado, donde detuvieron al general Torres, se capturaron a 39 líderes políticos y sociales, entre ellos siete precandidatos presidenciales, con los cuales el régimen cerró la oportunidad de un cambio de gobierno e impuso la reelección presidencial.

Por aquellas vueltas de la historia, cuando el general Torres fue guerrillero en 1974, participó en un comando sandinista que se tomó la casa de un ministro somocista, José María Castillo, y por la presión ejercida contra el gobierno de Somoza fueron liberados varios presos políticos, entre ellos Ortega, quien estuvo en la cárcel durante siete años que marcaron su vida, su relación con los demás y su visión del poder según el periodista Fabián Medina, quien escribió un perfil que tituló «el preso 198» por el número de registro en el presidio³.

³ Romero, Dora Luz. «Ortega nunca dejó de ser el preso 198»: cómo la cárcel marcó al presidente de Nicaragua. BBC Mundo, 18 de septiembre de 2018.

Que Ortega sea ahora el verdugo de su antiguo compañero de armas revela *per se* la falta de escrúpulos al gobernar. «La detención de mi padre es ilegal. El trasfondo no es jurídico, sino que responde a la voluntad del régimen y de Ortega; corresponde a los intereses de seguir perpetuando ese poder», afirma el hijo de Torres, quien califica la detención como un acto cínico y canalla, con el que se busca poner un ejemplo para reafirmar la postura oficial de que no se acepta pensamiento diferente ni gente a quienes ellos consideran «traidores».

Un día después de la captura de Torres, las fuerzas especiales hicieron lo mismo con la excomandante Dora María Téllez, otra heroína de la lucha contra Somoza. Entre los cargos que enfrentan los 39 presos políticos se encuentra el de supuesta traición a la patria unos, y otros por lavado de dinero, los cuales son posibles porque uno de los soportes del poder de la pareja presidencial es el control de la justicia, las instituciones, *grosso modo*, un partido omnipresente y la adhesión al proyecto político tanto del Ejército como la Policía.

Ese engranaje institucional, más votaciones denunciadas como fraudulentas en el período 2008-2016, han allanado el avance del poder del FSLN en todo el territorio nacional hasta alcanzar casi el noventa por ciento en las municipalidades, sumado a una mayoría en la Asamblea Nacional que le permite llevar una agenda sin contratiempos y a favor de los intereses de la pareja presidencial.

Una mirada al pasado reciente de Nicaragua permite reconstruir cómo el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) —cuyo secretario general es Ortega— logró conquistar todos los espacios de poder y cómo construyó de manera paralela su propio grupo político-económico con el que entró en competencia con las otras élites de la sociedad nicaragüense, a partir del ascenso del caudillo al ejecutivo en 2007 y la consolidación de sus pretensiones dinásticas con el nombramiento como vicepresidente de su esposa Rosario Murillo en 2017.

Este análisis toma como concepto de élite el desarrollado por C. Wright Mills, en el cual observa en la sociedad estadounidense a grupos que intentan superarse a sí mismos, mantienen relaciones familiares y amistosas hasta irse fusionando, pero para lograr imponerse se requiere el control institucional que pueda tener la persona de donde emana el poder. «Nadie puede ser verdaderamente poderoso si no tiene acceso al mando de las grandes instituciones, porque sobre esos medios institucionales de poder es como los verdaderamente poderosos son, desde luego, poderosos», explicó el sociólogo estadounidense⁴.

Para Elvira Cuadra, socióloga nicaragüense y una estudiosa del tema de élites, ese concepto es aplicable a la realidad de Nicaragua desde la ruptura que representó la instauración de la dinastía de Somoza García, visto como un advenedizo en las altas clases sociales y que, sin embargo, expandió su poder, creó un grupo económico y político que duró hasta su muerte en 1956 cuando fue asesinado y siguió posteriormente con sus hijos hasta que estalló la revolución sandinista de 1979. La clave fue el control de la Guardia Nacional, el ejército de entonces.

«En el 79 se abre la gran oportunidad. ¿Quiénes son los que van a sustituir a Somoza como grupo hegemónico? Y comienza la pelea. Se impone el proyecto de la revolución entonces, pero, luego en 1990, cuando se abre de nuevo la transición, es decir la posibilidad de la democracia —tras la salida de Ortega de su primer gobierno (1985-1990) por los votos— comienzan a saltar los diferentes grupos», añade Cuadra.

Según la especialista, en aquellos años de transición podían identificarse varios grupos que competían por convertirse en el que mandaba: había unos cercanos al exministro Antonio Lacayo, yerno de la presidenta Violeta Chamorro (1990-1997); estaba el de Bayardo Arce, ex

⁴ Wrigths Mills, C. Las Élites del Poder. Fondo de Cultura Económica, 1957.

comandante de la revolución y el símbolo de la apropiación de bienes conocida como la piñata, que significó el robo de propiedades de los dirigentes usando a terceras personas antes de la entrega del poder; el general Humberto Ortega, hermano de Daniel y ex jefe del Ejército, y el caudillo liberal que se convirtió en presidente en 1996, Arnoldo Alemán, y que resultó clave para el retorno del actual mandatario al ejecutivo.

Con Ortega, igual que Somoza en sus acuerdos con la oposición en el pasado, Alemán se repartió las instituciones entre incondicionales suyos y de Ortega. Lo hizo bajo el supuesto que así habría gobernabilidad; sin embargo, redujo el porcentaje para ser elegido presidente al 35 por ciento, un favor que no se esperaban los mismos negociadores del FSLN y que resultó clave, dado que el caudillo sandinista alcanzó el 38 por ciento en las votaciones de 2006 con las que coronó el ejecutivo.

De estos grupos, el que pudo posicionarse con mayor ventaja en su momento fue el de Alemán, según Cuadra, pero corrió muy poco. En 2007, con el ingreso de la cooperación venezolana, cogió fuerza el grupo de Daniel Ortega, administrador local de cerca de 5 mil millones de dólares de la factura petrolera hasta 2016, la cual fue aprobada por el presidente Hugo Chávez hasta su muerte, y luego por su sucesor Nicolás Maduro.

Ese millonario flujo permitió a Ortega posicionarse como interlocutor con los viejos grupos oligárquicos, vinculados al sector financiero, entre ellos Ramiro Ortiz Gurdíán, propietario del grupo PROMERICA, y Carlos Pellas, otro de los grandes empresarios regionales de origen nicaragüense y adversario de los sandinistas en los ochenta⁵.

⁵ El acuerdo de los grandes empresarios con Ortega fue bautizado como modelo de diálogo y consenso, y ambas partes lo consideraron exportable a la región. El mejor reportaje sobre el tema fue publicado por CONNECTAS y plantea las exoneraciones fiscales que recibió el grupo Pellas, el más grande del país. Ver: El idilio de Daniel Ortega con el gran capital.

Los hijos del presidente Ortega se convirtieron en pocos años en empresarios de televisión, radio y empresas de publicidad que mantienen relaciones contractuales con el Estado sin importar el conflicto de interés y la corrupción que eso significa. Mientras tanto, el secretario general del FSLN consolidó su poder en las instituciones y las viejas fichas de Alemán se pasaron a su lado y la influencia institucional se volvió total.

Antes de examinar cómo Ortega fue construyéndose como líder supremo, vale la pena entender el concepto que maneja del poder.

Según el sociólogo Oscar René Vargas, un antiguo asesor de la Dirección del partido del FSLN que es opositor en la actualidad, el caudillo entiende la política real como la que se esconde detrás de las negociaciones debajo de la mesa. En ese entendido, su poder descansa en estos ejes que comparten como código unas 200 personas de su círculo: «a) alianza con el gran capital; b) control de las fuerzas de seguridad; c) censura y dominación de los medios de comunicación; d) cooptación de los sindicatos; e) subordinación de los otros poderes del Estado; f) represión a través de la Policía, los paramilitares y fuerzas de choque»⁶.

Si las prácticas desarrolladas bajo secretismo hacen parte del estilo de Ortega, ¿qué ha dicho y qué ha hecho en realidad? En sus discursos públicos, desde 1985, habló de que su presidencia era del pueblo, sin embargo, en la práctica se ha dado una concentración de poder, primero en los años ochenta desde una dirección colectiva del partido integrada por nueve comandantes, incluyéndolo a él, y a partir de 2007 con el ejercicio de *one-two* con Rosario Murillo. Se trata de la búsqueda de su propia sucesión dinástica.

⁶ Vargas, Oscar René. ¿Cuáles son los poderes fácticos en Nicaragua? Nodal. 12 de marzo de 2021.

Desde 2016, el poder es la vicepresidenta es Murillo, ya que es vocera, supervisora de las actividades de los ministros y jefa de las estructuras en los barrios de control ciudadano, conocidos como los Consejos del Poder Ciudadano. Este es un caso único en la región, que una pareja esté al mando de un país y actúe como dictadura.

¿Qué ha dicho y qué ha hecho Ortega? En discurso sigue manteniendo el discurso antiimperialista de los años ochenta, cuando Reagan lo consideró un rebelde y financió una guerra para derribarlo dada la cercanía sandinista con la Unión Soviética. Sin embargo, en la práctica, al menos en la década de 2007 a 2017, vendió a la administración estadounidense la efectividad de su lucha contra el crimen organizado y el control de migrantes. Mientras avanzó su proyecto político-familiar, mientras tejió alianzas con los grupos fácticos locales, entre ellos los empresarios.

En su calidad de jefa de la propaganda, Murillo incorporó el concepto religioso desde el primer día de gobierno. Aseguró el 16 de septiembre pasado que «quienes le cumplen al pueblo le cumplen a Dios»⁷, una declaración que no sorprende para un gobierno que se define como «socialista, cristiano y solidario». Sin embargo, la corrupción, el abuso de poder y las violaciones de derechos humanos han puesto en el centro de la agenda mundial a los Ortega con la pregunta consecuente de cómo es posible que pasen estas cosas impunemente en este siglo.

Esta construcción de la visión del poder nace, según un crítico de Ortega que conoció su gobierno en los años ochenta, de la soledad que experimentó cuando perdió en 1990, se quedó sin apoyo parlamentario y la figura que lo acompañó entonces fue Murillo, quien defendió también al caudillo sandinista cuando fue acusado de violación por su hijastra Zoilamérica en 1998 para reafirmar sus lazos de lealtad.

⁷ Marengo, Dionisio. «Conozco bien la historia del Frente Sandinista, pero tal como están las cosas no logro imaginar el futuro». Revista Envío, septiembre de 2008

«Ella se convierte en su sustento político, moral. Rosario Murillo lo saca de las llamas. Si ella se hubiera puesto del lado de la Zoilamérica, cómo cambia la historia. Ahí termina todo para él. Ortega le debe la vida (política) a ella. Hay entonces una mezcla de agradecimiento, lealtad, un vínculo profundo que los va a llevar juntos hasta el final», explica la fuente.

La visión de compartir el poder, que Ortega entregó en el 50 por ciento a ella según sus discursos públicos, hace recordar a la pareja de Nicolas y Elena Ceausescu, que gobernaron Rumanía hasta 1989 con una repartición de tareas similar: él como prócer de la patria y ella la maestra de la difusión oficialista.

Esa lealtad de Ortega a Murillo y viceversa es extensiva a las estructuras del partido, donde cualquier crítico se convierte en traidor inmediatamente, tal como ocurrió con el general Torres para los policías, con Dora María Téllez o el exalcalde Dionisio Marengo. Con este último, un amigo del presidente y asesor, el gobernante se distanció cuando subió al poder en 2007. El FSLN respondió siendo leal al caudillo, dado que la estructura partidaria se comporta como los militares.

«Nos teníamos que poner de pie cuando entraban (los miembros de la Dirección Nacional del FSLN). Eso era automático. Como en un ejército. Eso crea una cultura organizacional especial, muy distinta a la de un club de jóvenes ambientalistas o a la de un club de músicos o filósofos. Además, durante el gobierno revolucionario el Frente se nutrió de 200 mil personas que combatieron, que pasaron por las armas, que adquirieron costumbres militares que trasladaron después a la estructura partidaria», explicó el propio Marengo en un artículo en la revista Envío, publicado en noviembre de 2008 en la Universidad Centroamericana de los jesuitas.

Con la rebelión de 2018, diez años después del artículo de Marengo, cuando miles de ciudadanos salieron a las calles a protestar para pedir su renuncia por la aprobación de una reforma a la seguridad social, los simpatizantes sandinistas exacerbaron su lealtad para

proteger a Ortega, pero en realidad lo hacían con un sistema donde a todos los niveles tienen intereses.

Murillo, sancionada por la comunidad internacional por las violaciones a los derechos humanos, fue señalada por dar la orden de «vamos con todo» para aplacar cualquier tipo de disidencia. El régimen no estaba dispuesto a ceder el control en las calles ni que se pusiera en duda quién tenía el poder que Ortega, desde muy joven, asoció con antiimperialismo y antisomocismo, aunque él trabajó con *el tiempo* para formar el orteguismo y en ese camino buscó alianzas con Rusia y Venezuela, un intervencionismo bueno para sus intereses personales.

En una entrevista con la revista *Playboy* en 1987, Ortega recordó que creció en una colonia en Managua, donde sus padres se asentaron provenientes de la región central, en la que el nombre de Somoza era el que llevaba el estadio, el parque y donde había una estatua donde aparecía montado a caballo, la que el caudillo sandinista consideraba odiosa. «Yo me miraba a mí mismo como un joven nacionalista, antimperialista, antiyanqui. Mis amigos en mi vecindario sentían lo mismo que yo. Éramos anti-Coca-Cola, antilibros de tiras cómicas», dijo entonces⁸.

Con más de cuarenta años en la política, no es fácil desentrañar cómo Ortega percibe la competencia con los otros grupos de poder, excepto con los conservadores, a quienes suele atacar llamándolos aliados de los estadounidenses.

En el libro *Patas Arriba*, de Eduardo Galeano, sin embargo, se cita una entrevista del cineasta Félix Zurita con el general Humberto Ortega —hermano de Daniel— en 1996 que puede interpretarse como lo más

⁸ Dreyfus, Claudia. «Una cándida conversación con el presidente de Nicaragua sobre los contras, la revolución, el béisbol, la poesía y el motivo por el cual Reagan quiere destruirlo». *Revista Playboy*, octubre-noviembre 1987.

cercano a cómo se entiende el poder en la antigua dirigencia sandinista: la sociedad es vista como un estadio de béisbol.

«Hay una jerarquía pues. Al estadio entran 100.000, pero en el palco caben 500. Por mucho que usted quiera al pueblo, no puede a todos meterles en el palco», dijo el general Ortega⁹, que ha cuestionado varias veces a su hermano públicamente y ha demandado la libertad de los presos políticos. En agosto de 2021, sin mencionarlo por su nombre, el presidente llamó «traidor y vendepatria» al general Ortega y recordó los años ochenta cuando el entonces jefe del Ejército dijo que harían falta postes para colgar a los burgueses que apoyaran «la invasión imperialista».

La mención del pasado de Humberto Ortega no es casual, sino que busca instalar en la mente de quienes critican el pasado de autoritarismo de los ochenta que el actual presidente no era el más radical entre los nueve comandantes que compartieron el poder, aunque él se desempeñaba como el presidente.

Ese discurso de culpar a los otros y no a Ortega fue aceptado en parte por el gran capital nicaragüense, que solía acusar a los miembros de UNAMOS —el antiguo Movimiento Renovador Sandinista, al que pertenece el general Hugo Torres y Dora María Téllez— como los más radicales en su relación con el sector privado. En 2016, el entonces presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerrí, hoy uno de los presos políticos del régimen, defendió públicamente a Ortega y acusó al MRS de ser los responsables de haber dejado al país como «tierra arrasada» en los años ochenta.

Antes de 2018, cuando se dieron las protestas, Ortega cogobernó con el sector empresarial. Esa era la razón de la defensa de Aguerrí en

⁹ Galeano, Eduardo. *Patas Arriba: la escuela del mundo al revés*. Siglo XXI Editores, 1998.

2016 y de que magnates como Pellas dieran un importante respaldo a Ortega en sus discursos públicos. Sin embargo, tras la represión, hubo un distanciamiento entre ambos grupos de poder. Aunque el régimen intenta volver a *aquel tiempo* cuando decidían leyes en conjunto con los empresarios y aprobaban un pequeño porcentaje de aumento de los salarios mínimos cada año, el sector privado tiene a cuatro presos políticos entre los 39 detenidos desde mayo pasado: a Aguerri, como se dijo, y al actual presidente del grupo PROMERICA del magnate Ramiro Ortiz, Luis Rivas, y encarceló también el 21 de octubre del 2022 al presidente y vicepresidente del Cosep, Michael Healy y Álvaro Vargas.

La vicepresidenta Murillo ha arremetido, en sentido contrario a la búsqueda de un acercamiento político, sus ataques públicos previo a las elecciones: ha llamado «curas» del demonio a la Iglesia Católica por denunciar los abusos de derechos humanos y también ha tenido adjetivos contra los grupos empresariales. En febrero pasado, los llamó «saqueadores del pueblo» y recordó que esos capitales «surgieron del robo a los nicaragüenses» en una de sus intervenciones que son transmitidas cada medio día por los medios de comunicación bajo control de sus hijos¹⁰.

La estructuración del poder económico de la familia es otra historia que corre paralela a su influencia estatal. Partió de una decisión tomada por Ortega. El caudillo sandinista se metió a áreas de la economía que consideró estratégicas, como el petróleo, con la distribución de combustibles, energía, construcción, y evitó meterse a áreas de influencias de los grandes capitales, a diferencia de Anastasio Somoza Debayle, el dictador derrocado en 1979, quien a raíz del terremoto que destruyó Managua en 1972 hizo negocios que molestaron al sector privado y marcaron su definitivo distanciamiento.

¹⁰ Los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo controlan tres canales de televisión y cuatro empresas de publicidad. Ver: Ortega Murillo, S.A. en Connectas.

Si Ortega logró consolidar su dictadura, se debió, es cierto, al control judicial, a la falta de escrúpulos para corromper, a las diferencias internas de la oposición, pero también a la ambición de los grupos empresariales que fueron beneficiados fiscalmente y vieron aumentadas sus utilidades en el sector financiero desde 2007, los mismos a los cuales la crisis de 2018 les estalló en la cara.

«Los empresarios se engolosinaron por las ventajas. Con la sorpresa de 2018, el rechazo de los empresarios es notable. El mensaje de ellos es «no me confundan con ese asesino». Porque creen que no se va a sostener. Por eso apoyan las huelgas, cierran los bancos, cuando la realidad les dice que no se está yendo, eso cambia: pasan al temor y luego a tomar distancia», añade un analista consultado bajo condición de anonimato.

A medida que se acercaban las votaciones de noviembre del 2022, la presión internacional creció: 50 naciones —entre ellos Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Brasil y Costa Rica— demandaron el 14 de septiembre que se liberara a todos los presos políticos, y observaron la falta de condiciones para la realización de unos comicios libres. Falta aún verse la reacción interna del sector empresarial que afronta el escenario de la ruptura total o un «repacto» con Ortega, mientras la inconformidad social crece de boca en boca, resultado de los años de desgaste en el poder y el estado represivo.

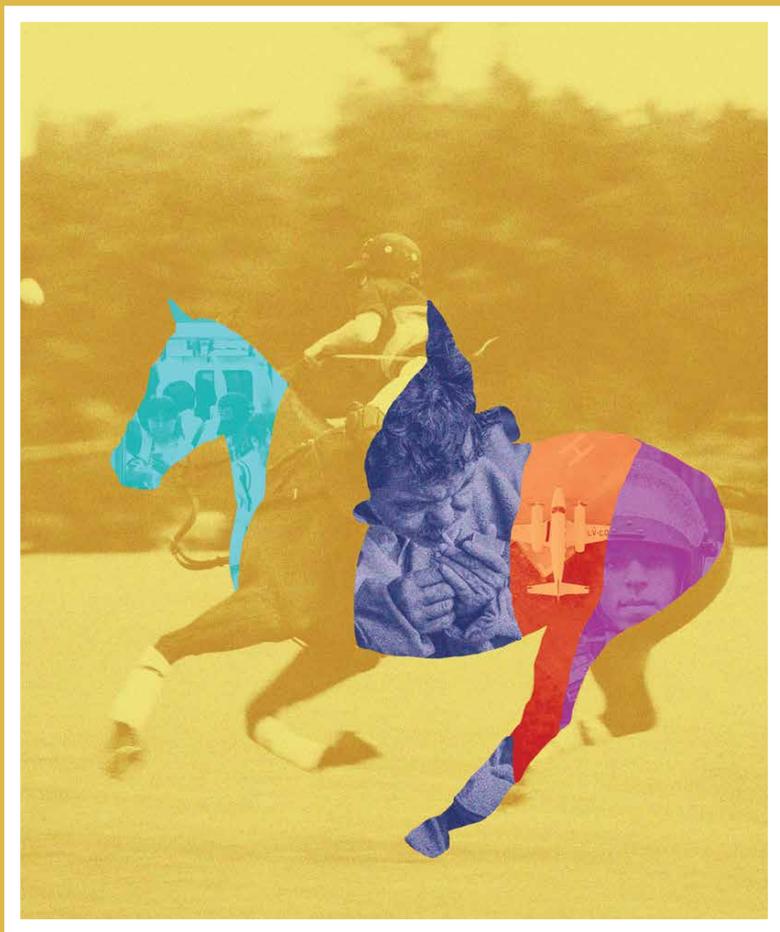
La socióloga Elvira Cuadra considera que con la represión Ortega mató su propio proyecto. En su plan de expansión, el caudillo había hecho negocios con el Ejército y el gran capital en base al Estado y el enorme flujo de la cooperación venezolana para alcanzar una mejor posición que favoreciera sus intereses. Todo cambió a partir de las manifestaciones opositoras de 2018.

«¿Quién quiere juntarse con los Ortega? Iban muy bien. Efectivamente iban escalando, le habían ganado la disputa política y económica a los demás grupos y la forma en que manejaron la crisis de

2018 terminó de enterrar ese proyecto político y económico alrededor de ellos. No exclusivamente a la familia, me refiero a Pancho López (tesorero de Ortega), Fidel Moreno (otro de sus principales operadores políticos), a todos esos, que han tenido cercanía con ellos», explicó Cuadra.

La socióloga considera que, aunque se dé una transición, la disputa por el poder de los grupos hegemónicos se mantendrá durante años. Es un tema no resuelto. La lógica que percibe de estas agrupaciones es una batalla por lograr el espacio reservado en el estadio, como dijo el general Ortega, «para quién mande más». Alejados de la legitimidad, la familia presidencial se sostiene con las armas, es decir ejerce el mando, pero ya no hay gobierno, mientras poco a poco la historia desarma el rompecabezas armado con esmero por el comandante. .

ÉLITES SIN DESTINO LATAM



ARGENTINA

¿Qué es lo que quieren?

PAULA BISTAGNINO

Es periodista desde 2000. En la actualidad trabaja freelance con base en Buenos Aires y publica sus artículos en medios de la Argentina y el exterior. Ganó la Beca de Periodismo Cultural Gabriel García Márquez de la FNPI, la Beca Creación del Fondo Nacional de las Artes y es miembro de CONNECTAS Hub.

ARGENTINA

En el cono sur, en lo más remoto de América Latina, hay un país extenso que tiene a un tercio de sus 45 millones de habitantes en el 1 por ciento de su territorio. Una buena parte del resto de su geografía es de naturaleza diversa y bella, y otro tanto es de campos fértiles y productivos en los que se cultivan granos y se crían carnes de exportación. Como casi todos sus vecinos, se independizó hace casi dos siglos de España. Es una república y tiene un sistema democrático fuerte, aunque joven en su fortaleza si se considera que hace menos de medio siglo tuvo la dictadura militar más sangrienta de su historia. El relato constitutivo de la identidad nacional se construyó sobre la negación de los pueblos originarios, diezmados y oprimidos por la colonia y después. Un mito fundacional que perdura y que junto a los amplios sectores medios alimentan una creencia instalada: es distinto a su región. Quizá por eso hoy cuesta asumir un índice de pobreza de más del 40 por ciento que atropella cualquier idea de justicia social. Vaya esta foto algo arbitraria de la Argentina antes de hacerse algunas preguntas. ¿Quiénes mandan en este país y qué es lo que quieren de él? ¿Son las de hoy las mismas minorías privilegiadas que hace 50 o 100 años? ¿Qué poder tienen? ¿Qué tienen que ver con la democracia? ¿Querrán hacer algo con la desigualdad?

Afines del siglo XIX en la Argentina había una oligarquía terrateniente, que era la minoría privilegiada por excelencia: tenía la suma del poder económico, el control del Estado y ostentaba además ser el modelo cultural, que imitaba a las élites europeas e imponía a las clases medias en ascenso. Pero ya a lo largo del siglo XX se empezó a hablar de clases altas o de burguesías terratenientes e industriales. La introducción es de Ana Castellani, doctora en Ciencias Sociales, investigadora, especializada en la relación entre Estado y élites económicas y una de las creadoras del Observatorio de las Élites Argentinas (CITRA-UMET): «Hoy se puede hablar de élites económicas en un sentido clásico para referirse a los sectores que tienen control de los resortes claves como la acumulación de capital, nacional o extranjero; por otro lado, hay una élite política con un origen social mucho más heterogéneo que es la que controla los resortes del Estado; y por último una

élite cultural que está “mucho más estallada” y que no conforma un modelo cultural hegemónico a imitar».

La conformación heterogénea de la élite política en la Argentina que señala Castellani rastrea su origen en las primeras décadas del siglo XX: del derecho al sufragio universal establecido en 1912, surgió el primer movimiento político de masas que llevó al poder a Hipólito Yrigoyen (1916-1922). Este gobierno elegido por una mayoría fue el comienzo del desacople de las élites económica y política que, a partir de 1945, profundizó Juan Domingo Perón, y dio origen al mayor movimiento nacional y popular: «El Peronismo fue el gran «plebeyizador» de la élite política y marcó una diferencia entre nuestro país y otros de la región. Aparecieron nuevos sujetos sociales en la élite política: los trabajadores y sus representantes organizados pasaron a formar parte de las instituciones y del Estado. Eso, sumado al acceso a la educación superior de los hijos e hijas de la clase obrera, transformó la historia reciente del país y la conformación de la élite política definitivamente», dice Castellani, que puede ilustrar esa trayectoria con su historia de vida: hija de trabajadores que apenas alcanzaron la educación primaria y algo de la media, ella accedió a la educación pública y gratuita universitaria. Hoy es secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación.

Las ventanas dan sobre la avenida 9 de Julio, la más famosa de la Argentina. Al frente, en diagonal, están el Teatro Colón y los Tribunales de justicia; a tres cuadras, el Obelisco. Es un departamento elegante de estilo europeo, de ascensores jaula y pisos de parquet, de los que abundan en el centro de la Ciudad de Buenos Aires desde las primeras décadas del siglo pasado. El país era entonces «el granero del mundo» y los dueños de las tierras un puñado de apellidos, muchos de ellos los mismos que figuraban en la historia y nombraban calles. En las paredes hay cuadros con fotos históricas e ilustraciones de escenas campestres.

—¿Usted se siente parte de una élite?

—Claro que sí.

Sentado en el sillón a rayas beige y crema de su estudio jurídico, responde Federico Pinedo. Abogado, tres veces diputado de la Nación, 12 años en total, y una senador, desde 2015 hasta 2019, fue vicepresidente segundo del partido Propuesta Republicana-PRO, el que llevó a Mauricio Macri al poder. Acaba de terminar un almuerzo con amigos unos pisos más abajo del mismo edificio, donde vive. Son las 3 de la tarde de un miércoles y en la Argentina ya arrancó la campaña para las elecciones de medio término. Esta vez está fuera de la contienda.

De origen español y linaje militar, su familia cuenta historia argentina desde fines del siglo XVIII. En su genealogía, de parte de madre y de padre, se cruzan apellidos patricios y terratenientes. Sin embargo, dice, nunca fue de las más adineradas del país. Su bisabuelo fue intendente de Buenos Aires a finales del siglo XIX y su abuelo fue ministro de Hacienda en tres gobiernos del siglo XX, dos *de facto* y uno acusado de fraguar las elecciones. Su abuelo materno fue canciller de otro gobierno *de facto*, jefe editorial del tradicional diario *La Nación* y después del diario *La Prensa*. Él nació y creció en la Ciudad de Buenos Aires, educado en colegios bilingües de los más caros de Buenos Aires y después egresado de la Universidad de Buenos Aires, que es pública y gratuita.

—La pertenencia a esa familia, militar y política, no se vivía como un privilegio sino como un deber con el país. Yo crecí con esa responsabilidad. Y eso creo que es muy distinto a ser parte de una élite económica. Porque en mi casa no importaba que te perjudicaras económicamente. No se medía por eso tu tarea. Y porque además nuestra vida era lo contrario: mientras ellos se socializaban en circuitos de exclusividad y distinción, nosotros en la política nos involucramos con el pueblo, nos mezclamos.

A su lado hay un cuadro con la foto de su abuelo homónimo cuando en 1919 fue candidato a diputado por el Partido Socialista. Era un lector de Carlos Marx en su idioma original, visitó varias veces Alemania y se relacionó con los referentes del socialismo entonces. El otro abuelo era seguidor de la derecha francesa. Él, dice, hizo un «peregrinaje desde el liberalismo al conservadurismo popular»:

—Lo defino como un realismo político y, en ese sentido, me siento cercano al Peronismo del ala más liberal. Porque para entender este país, y por lo tanto para poder gobernarlo, hay que asumir que somos esas dos cosas que Jorge Luis Borges retrata en el «Poema conjetural»: la Argentina es liberal, cosmopolita, literaria y de derecho; y al mismo tiempo es el cau-dillo, la lanza y el degüello.

Pinedo nombra ese par de opuestos como liberales progresistas y peronistas. Y dice que son dos facciones que no se entenderán nunca. Explica: «Los primeros creen que los segundos arruinaron el país y los segundos creen que los primeros tienen ínfulas de élite y vanguardia privilegiada que no quiere más que gobernar para sí misma. Para mí, la Argentina son las dos cosas y por eso me dedico a la política».

—¿Quién decide acá?

—Yo creo que los que deciden acá son los políticos. Pero el problema es que los políticos se sienten inferiores a los ricos y los ponen como los más poderosos. Y no es así. Siendo yo funcionario, he visto a tipos muy ricos, empresarios, decir en plena democracia: «Acá se hace lo que yo digo». Y los mandé a la mierda. Dos veces me pasó, en dos gobiernos y en dos cargos muy distintos. Eso me enorgullece de la Argentina: el Estado tiene el poder para hacer lo que quiera. Más que eso no necesitamos.

Elige una anécdota de su adolescencia para ilustrar la sociedad que quiere: dice que a los 14 años le preguntó a un intelectual de izquierda muy reconocido si prefería un país sin pobres y con ricos y

ARGENTINA

muy ricos o un país con todos igualmente pobres: «El tipo me dijo que prefería a todos igualmente pobres. Es decir que ¡prefería la pobreza antes que la desigualdad! Me pareció terrible. Yo me defino como un tipo que quiere que no haya pobres, no que no quiere que haya ricos».

—Pero hoy, con un 42 % de pobreza, ¿cómo se hace?

—Yo soy un productivista. Y acá les digo a los izquierdistas que lean más a Marx: la existencia de empresas es la que genera la prosperidad y hay que tener políticas pro-producción. Pero acá estamos focalizados en que el Estado gane y gaste más dinero. Desde que empezó Ricardo Alfonsín —primer gobierno democrático después de la última dictadura militar— todos aumentaron los impuestos. Sólo Macri los bajó un poquito. Llega un punto en que no es distribución de la riqueza sino destrucción de la riqueza. Y eso me parece que es aberrante. Porque, además, yo soy cristiano. Y creo que existe la dignidad humana y que todas las personas, por el sólo hecho de ser personas, tienen que acceder a servicios básicos que les permitan desarrollar su potencial.

—¿Cómo se hace?

—Con la política. Son fallas de la organización social, de la política. Si nos organizáramos bien e impulsáramos la producción...

—¿Estuvo de acuerdo con el aporte extraordinario de las grandes fortunas que votó el Congreso para afrontar la pandemia?

—No. Porque estamos en un momento desastroso del país, con 11 años de recesión, y si agarrás parte del capital acumulado que debería ir a la producción y te lo gastás, lo que vas a tener en el ciclo siguiente es menos producción y más pobreza. Otra vez: hay que leer a Marx.

—¿De dónde sale la plata si no se la cobran a los ricos?

—Claro que son los ricos los que tienen que pagar más, porque los pobres no tienen. Eso es obvio, pero con impuesto a las ganancias y no a la producción y al trabajo. Lo que hacemos acá es al revés. Y además se necesitan reglas claras para las empresas, que les permitan tener una previsión.

En diciembre de 2020, tras varios meses de debate mediático y *lobby* en contra en el Congreso de la Nación, Argentina aprobó por ley el Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas. Se trata de una iniciativa que aplicaron muchos países del mundo, pobres y ricos, para paliar las consecuencias de la pandemia. Acá se impuso un gravamen por única vez a los patrimonios mayores a los 200 millones de pesos —unos 2 millones de euros—. El destino es financiar subsidios de emergencia y créditos para la población y las pequeñas empresas más golpeadas, comprar equipamiento para el sistema de salud, urbanizar barrios precarios y apoyar a jóvenes para que puedan seguir estudiando, entre otros. En total, la ley alcanzó a unas 13 mil personas, lo que equivale al 0,02% de la población. La gran mayoría lo pagó. Casi 300 hicieron presentaciones en la justicia y demandaron a la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para no aportar lo suyo. De ellas, 60 ya fueron rechazadas por la justicia. El Estado ya recaudó 223 de los 300 mil millones de pesos que esperaba.

«Hoy pagué el Aporte Solidario Extraordinario. Seamos claros, es un impuesto. (...) Decidí pagarlo y no cuestionarlo, aunque estoy convencido de que es un pésimo tributo, que no soluciona los problemas de insolvencia fiscal y, peor aún, ahuyenta lo que nuestro país más necesita atraer: capitales que tengan la osadía de invertir aquí a pesar de lo mal que se los trata desde hace muchos años. (...) Sentí mezcla de sorpresa y tristeza cuando supe que debía pagar este impuesto. Es obvio que nadie disfruta pagar un tributo y, menos aún, uno tan alto.

Pero no es eso lo que me causó tales sentimientos. Lo que me sorprendió es que el conjunto de mis bienes fuera considerado una “gran fortuna” y me entristeció entender que eso es muestra de lo mucho que se empobreció la Argentina. Mi patrimonio estaría muy, pero muy, lejos de ser calificado como una gran fortuna en cualquier nación de ingresos medios. ¡Es que ahora jugamos en la liga de los países pobres!», escribió en una carta publicada en el diario La Nación el empresario agropecuario y abogado Juan Manuel Vaquer en marzo de 2021 tras hacer efectivo el pago. Entre sus argumentos, decía que sus bienes no eran herencia ni azar, sino fruto de su trabajo y el de su esposa, de un estilo de vida austero que les permitió ahorrar, y de llevar siempre las cuentas al día y formalizadas.

Además, en su misiva, Vaquer daba indicaciones a los legisladores y funcionarios del Estado: «¡Ahora te toca a vos! No te pido un «esfuerzo solidario y extraordinario» como me exigiste a mí. Te pido, nada más, que hagas tu trabajo, pero que lo hagas bien y buscando el bien común, no tu beneficio personal, ni el de tu facción o partido político. Para eso fuiste elegido o nombrado, y para eso se te paga un sueldo». Entre los pedidos enumeraba transparencia en los actos, rendición de cuentas, «sin trampas ni avivadas». También a los jueces les pidió «independencia y probidad». Luego solicitó a las autoridades votar «con boleta única» en las elecciones por venir, para los pobres «educación, salud, seguridad y oportunidades para que a través de su propio esfuerzo y dedicación puedan construir un porvenir del cual se sientan orgullosos» y también pidió el «ejemplo de virtudes cívicas y republicanas» porque «una sociedad virtuosa se construye dando el ejemplo desde arriba».

La empresaria Andrea Grobocopatel dice que la carta de su amigo Vaquer representa su sentir sobre el aporte que también le tocó pagar. Economista de profesión, es una de las artífices de la evolución y profesionalización de Los Grobo, el principal grupo agroindustrial argentino y uno de los más grandes de Latinoamérica que surgió de una empresa familiar que iniciaron sus abuelos inmigrantes a principios del siglo XX.

Fue su vicepresidenta hasta 2016, cuando vendió su parte accionaria y renunció. El año pasado renunció su hermano, Gustavo Grobocopatel, considerado uno de los empresarios más influyentes de la Argentina, además de «el rey de la soja». Él se fue a vivir a Uruguay, como otros empresarios argentinos en los últimos años. Ella vive entre la Ciudad de Buenos Aires, donde tiene sus oficinas, y su pueblo natal, Carlos Casares, a 326 kilómetros. Parte de su vida sigue ahí, en la llamada «capital nacional del girasol» porque su marido es el intendente por segundo mandato consecutivo, reelecto en 2019 como parte del Frente de Todos, el partido en el gobierno nacional y provincial.

Grobocopatel tiene cuatro hijos ya adultos y profesionales, es accionista de varias empresas, fundadora y presidenta de Ampatel S.A. —agricultura y ganadería—, de Resiliencia SGR —sociedad de inclusión financiera para pequeñas y medianas empresas con participación de mujeres y personas con discapacidad— y creó y preside Fundación por Liderazgos y Organizaciones Responsables (F.L.O.R.), una ONG donde promueve la transparencia, responsabilidad y la diversidad. Fue Co-Chair del W20 y hoy es delegada argentina. «Es distinto cuando vos salís de una comunidad de 30 mil personas. Ni en mi pueblo ni en mi familia nos sentimos nunca parte de una élite. Yo empecé de cero, porque vivía de un sueldito y llegué a administrar mi propio patrimonio. En lo único en lo que me considero parte de una minoría es en que soy de las mujeres que lograron equilibrar su vida familiar y profesional».

—Hay algo de lo que decís que es del orden del esfuerzo personal, pero también hay una sociedad y sobre todo un lugar en la sociedad que lo habilita.

—Nosotros nacimos de nada. Mi papá y mi abuelo eran personas muy trabajadoras y todo lo que hicieron lo hicieron con mucho esfuerzo. A mí todo me cuesta y me ha costado. A mí, mi equipo me dice que soy detallista y yo les digo que mi papá me decía: «El que no cuida lo poco no cuida lo mucho». Pudimos crecer gracias a mucha preparación, mucho esfuerzo.

ARGENTINA

—Es distinto tu origen del de las élites tradicionales, sin duda, pero sos parte de la élite económica de este país.

—Claro, pero por eso hay que definir primero qué es una élite. Desde qué lugar hablamos. Yo no me considero más que nadie, aprendo mucho de todos y todas. Sí creo que tengo una voz que no tiene cualquiera, que vos me estás dando ahora por ejemplo, y que uno tiene que hacerse cargo. Creo en los liderazgos responsables, en los que construyen un mensaje que llega a muchas personas, que entusiasman a participar y comprometerse.

—Hablás de mérito y esfuerzo al contar la historia de tu familia. ¿Alcanza eso en la sociedad hoy?

—Nosotros hablamos mucho de la interacción de las minorías que necesitan trabajar e integrarse en la sociedad y que con la única vara de la meritocracia las excluís. Nosotros estamos para ayudar a que todas las personas puedan tener su mejor versión, su mejor lugar y ser felices. Porque si no podemos tender a ser injustos. Porque algunos tuvimos algunos privilegios que otras personas no tuvieron y algunos nacieron con algunas dificultades. Yo creo que la vida me fue enseñando a ver todo esto, primero por ser mujer y después porque tuve una hija, mi hija mayor, con una discapacidad, y yo no puedo entonces pensar en que todos tenemos las mismas posibilidades. Si creo que, más allá de las diferencias, cada uno se de cuenta de que tiene que esforzarse, que las cosas hay que conseguirlas, que hay que entrenarse lo más que uno pueda y no hay que quedarse esperando que te regalen nada. Yo aprendo más de la gente que tuvo dificultades en la vida y no de las que lo tuvieron servido. Creo que el desafío está en pensar en la individualidad y en cómo cada uno desde su individualidad tiene que construir colectivamente para todos.

—En la pandemia, una de las discusiones fue la desigualdad. ¿cuál creés vos que es la manera de conseguir una sociedad más igualitaria?

—Yo sigo creando empresas y sigo dando empleo. Yo doy empleo y hago a las personas más empleables. Creo que todos tenemos que hacer las cosas mucho mejor: los gobiernos, los empleados, los empresarios, los sindicatos. El éxito de Los Grobo fue tener buenas prácticas de gobierno corporativo —varias veces fue elegida como la empresa del agro más responsable y con mejor gobierno corporativo—. Además de ser los primeros en hablar de RSE y crecer como empresa con el entorno, las personas y el medio ambiente.

—¿Qué rol creés que tiene el Estado?

—Me parece que es importante y que fue importante en la pandemia. Por eso creo que hay que pagar los impuestos, y formalizar la economía. Es un poco lo que hacemos también en la empresa de inclusión financiera. Porque quienes no lo hacen se quedan afuera de créditos y de cosas que otorga el Estado. Pero el tema es que lo que hay que hacer es que las personas dependan menos del Estado. Y eso es lo que yo hago: enseñarles a trabajar para que no se acostumbren a recibir subsidios, dar educación financiera.

Dice que le duele mucho cuando escucha que dicen que hay que irse del país, que acá no hay futuro. A mí me encanta mi país, tengo una gran preocupación por nuestro destino y de Latinoamérica y siento que si yo me voy ¿quién lo hace? Eso me moviliza a trabajar para cambiar lo que creo que puedo cambiar.

—Trabajás en temas de género y postulás que las tareas de cuidado son centrales para pensar en una sociedad igualitaria. Inclusive que es una responsabilidad colectiva.

—Creo que la Argentina está trabajando bien en eso: se necesitan espacios de cuidados para que las mujeres puedan desarrollar su emprendimiento y armar su patrimonio. También hay que educar a las mujeres para que tengan menos hijos y a la sociedad para que no

se divida entre quienes cuidan y quienes no cuidan. Si sos económicamente dependiente sos menos libre para crecer. Creo que en algunos aspectos el Estado tiene un rol pero que debe ser encarado de manera que sea por un tiempo y luego esas personas puedan independizarse.

—¿Qué sentimientos te generó tener que pagar el aporte solidario de las grandes fortunas?

—La verdad es que me dolió, no te lo voy a negar. Me parece que es un impuesto altísimo y que eso ahuyenta... A mí me gustaría haber podido elegir en qué invertirlo, porque así es como darle a alguien que maneje mi dinero. Y ojalá lo manejen bien. Para mí fue un gran esfuerzo y me gustaría que el esfuerzo sea de todos: de los políticos, de los sindicatos. Porque si no siempre siento que el esfuerzo lo hacemos los mismos, los empresarios que pagamos los impuestos. Nos debemos como sociedad la discusión de qué pone cada uno. Debería estar claro que no se va a repetir y que también otros van a aportar.

En medio del debate público por el aporte extraordinario de las grandes fortunas, una nueva edición del ranking de la revista Forbes reveló que, en 2020, los 50 argentinos más ricos acumulaban una riqueza de unos 50 mil millones de dólares. «En ese listado, se pueden ver tres momentos de la Argentina», analiza Leandro Navarro, magister en sociología económica e investigador del Centro de Estudios Sociales de la Economía (CESE-UNSAM), especializado en élites económicas y grandes empresas. El primero es el de los grupos económicos tradicionales, la burguesía argentina más clásica, que crecieron en las décadas del 70 y el 80, en la dictadura militar y en la década siguiente, que se hicieron fuertes al amparo de relaciones privilegiadas con el Estado. A estos grupos corresponden tres de los primeros cuatro nombres de la lista: la familia

Bulgheroni, dueña de la petrolera Pan American Energy Group, con una riqueza de 5.400 millones de dólares; Paolo Rocca, a la cabeza del Grupo Techint, dedicada a la ingeniería, industria pesada y minería, con 3.400 millones de dólares; y en el cuarto lugar, el holding familiar Pérez Compañac con inversiones en la industria alimenticia, y una fortuna calculada en 2.700 millones de dólares. En ese grupo, aunque hoy en el vigésimo puesto, está el grupo empresario de la familia del expresidente Mauricio Macri con una riqueza de 540 millones de dólares.

Un segundo momento, explica Navarro, es la década del 90 con la apertura de la economía y la ola privatizadora. «Se produjo un cambio en la conformación de las élites y sus negocios: la cúpula empresarial se extranjerizó y se achicó la participación del gran empresariado. Algunos grupos vendieron, otros se reconfiguraron y cambiaron de rubro. Se cierra el ciclo de los grupos clásicos que crecieron en los 70 y 80». El tercero surge post crisis de 2001, cuando estalló esa década de desindustrialización y convertibilidad —en la que se hizo equivaler la moneda argentina al dólar—: «Acá se consolidan nuevos grupos económicos: mientras se internacionalizan los ligados a la exportación de recursos naturales o producción de mercancías de poco valor agregado, surgen otros vinculados a áreas que el kirchnerismo (el gobierno de Néstor Kirchner y los dos de Cristina Fernández) habilitaron y propiciaron: energía, medios de comunicación, infraestructura, juegos de azar, regímenes de producción industrial, entre otros. Apareció entonces una coyuntura más favorable hacia el capital nacional, en lo discursivo y en lo práctico, que tuvo nuevos ganadores». Para Navarro, hoy hay un conjunto de nuevos grupos económicos, nuevos empresarios y nuevos millonarios vinculados a una fuerte inserción internacional, al capitalismo de servicios y a una relación aceptada con los mercados financieros internacionales, en especial de empresas de *e-commerce* y fintech con Mercado Libre a la cabeza y su creador, Marcos Galperín, escalando en los últimos meses los primeros puestos de Forbes.

«Históricamente, las élites desplegaron estrategias para influir en la élite política y condicionar la orientación de la acción pública en beneficio propio. La más extrema fueron los golpes militares, pero también lo hicieron y hacen con *lobby* sobre el Poder Ejecutivo y Legislativo, también sobre el judicial. Tuvieron a sus representantes y tienen también otros mecanismos como son las corporaciones del empresariado que buscan influenciar a la opinión pública e intervenir en el debate político. Son una serie de acciones que funcionan constantemente y que tienen articulaciones complejas que incluyen a los medios, a las ONG, a las organizaciones de representación sectorial y hasta a las embajadas». Por todo esto, señala Navarro, «el poder real de la élite económica argentina es mucho mayor que el poder estructural como grandes empleadores, con control de empresas claves, y eso hace que sea mucho más difícil avanzar sobre ella».

Lo que aparece como una característica de las élites económicas es un proceso de offshorización de su riqueza, señala el investigador: «Lo que vemos en el índice de Forbes son los valores bursátiles de los bienes y activos declarados. Pero son bien conocidos los mecanismos de elusión y evasión que tienen las empresas y los millonarios. Este es un fenómeno global que nuestros ricos usaron y usan mucho. Por eso es importante avanzar tributariamente y fue importante el aporte solidario de las grandes fortunas». Al cierre de este artículo se publicaron los Pandora Papers y la Argentina apareció como el tercer país del mundo con más beneficiarios de empresas *offshore*: 2.521 nombres y 57.307 menciones.

Castellani lo dice así: «Un rasgo de las élites económicas argentinas es la poca capacidad de acumular capital en el país: hay siempre una búsqueda de un destino exterior de transferencia de los capitales de los generados en el país. Y entonces las empresas nacionales no se distinguen de las transnacionales, que por definición los van a sacar». Ahí está, además, el eje de un debate sin definición: «La cuestión de fondo es si lo primero es el huevo o la gallina. Los capitalistas siempre van a decir que no pueden invertir sostenidamente porque no hay una definición política

de hacia dónde va el país. Pero ellos también juegan para no saldarla porque van para donde más les conviene en cada momento y también por cuestiones ideológicas. Hay un ejemplo muy claro de que cuando se apostó a una salida más industrializadora, distintas fracciones de la élite la entorpecieron y se opusieron a pesar de sus resultados óptimos».

Navarro profundiza en esa idea del conflicto distributivo no resuelto: «Argentina no ha resuelto cómo se reparte la torta, la renta nacional. Si miramos otros países vecinos y de la región, vemos que son más desiguales, pero no tienen los conflictos y las disputas que tenemos acá. Y ahí también se puede analizar esto desde los cambios que trajo el peronismo, como un movimiento que representa de manera transversal a fracciones de distintas clases sociales». El partido se juega, dice Navarro, en hacia dónde van los dólares: si al consumo o al desarrollo de la estructura productiva: «¿Cómo juegan las élites? No se puede culpar a un empresario de querer hacer dinero, pero hay que compatibilizar esa búsqueda con las demandas populares concretas».

Los datos de 2018 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indican que en la región los sectores de mayores ingresos pagan menos que en los países más ricos: aportan un 2,3% del PIB por impuestos a la renta personal frente al 8,3% de la Unión Europea; en la Argentina, el 10% en la cima de la pirámide económica paga 9,2% de sus ingresos en impuestos, mientras que ese porcentaje alcanza al 21,3% en países del primer mundo. Además, el 43% de la recaudación nacional es de impuestos al consumo de bienes y servicios, que siempre afectan más a los pobres. Y las propiedades inmobiliarias también están menos gravadas por acá: un 0,3% del PBI frente al 1% en economías más fuertes. El dato más fuerte es que el impuesto nacional a los bienes personales —inmuebles, automotores, acciones societarias y dinero— ha reducido a la mitad su participación en la recaudación nacional, pasando de representar el 1,2% en 2015 al 0,6% en 2019, un aporte muy bajo que se explica, en gran medida, porque no alcanza a las grandes riquezas de forma progresiva por dos problemas: subregistro y subdeclaración.

Hoy, dice Navarro, el capitalismo es una máquina inmensa de generar riqueza: nunca se generó tanta riqueza en los últimos 200 años como ahora y nunca bajó tanta la pobreza, pero a la vez la desigualdad no para de aumentar desde hace cuatro décadas ¿Por qué? Lo que creció es la apropiación de las renta del decil más rico: si antes se apropiaban del 20 o 30 por ciento, hoy se apropian del 50 y hasta del 70. «Entonces, de lo que hay que hablar es de una cuestión política e ideológica más que económica. Aunque la desigualdad se mida en cuestiones materiales, no es posible si no hay una forma de justificarla: ¿Cómo se justifican las desigualdades existentes? ¿Cómo se naturaliza que las cosas sean de esta manera? Las disputas económicas son políticas e ideológicas», explica el investigador. Y cita al inversor estadounidense y uno de los hombres más ricos del mundo Warren Buffet, quien suele reflexionar sobre las injusticias del sistema, y cuando le preguntaron si creía que aún existía la guerra de clases dijo: «Hay una guerra de clases, pero es la mía la que la hace y estamos ganando».

El de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019, fue el primer gobierno de las élites económicas por mandato popular en un siglo de sufragio universal. «Fue la primera vez que las élites lograron llegar al poder sin transgredir el régimen democrático vía golpes de Estado y sin tener que estar mediadas por el peronismo, como fue el caso del gobierno de Carlos Menem (1989-1999), cuando tuvieron la primera posibilidad efectiva pudieron hacerse cargo de manera exitosa de los asuntos del Estado a través del Peronismo», explica el sociólogo e historiador Ernesto Semán, autor del recién publicado *Breve historia del antipopulismo. Los intentos por domesticar a la Argentina plebeya, de 1810 a Macri (Siglo XXI)*. El de Menem fue un gobierno neoliberal en lo económico pero, dice Semán, «no pudo desplegar las ideas más intrínsecas del antipopulismo en el sentido de cuestionar el espíritu plebeyo de las demandas sociales. La idea de que contener las demandas por una expansión de la ciudadanía económica

o política estaba en la base de un proyecto democrático conservador estable. Eso no terminó de plasmarse en el menemismo».

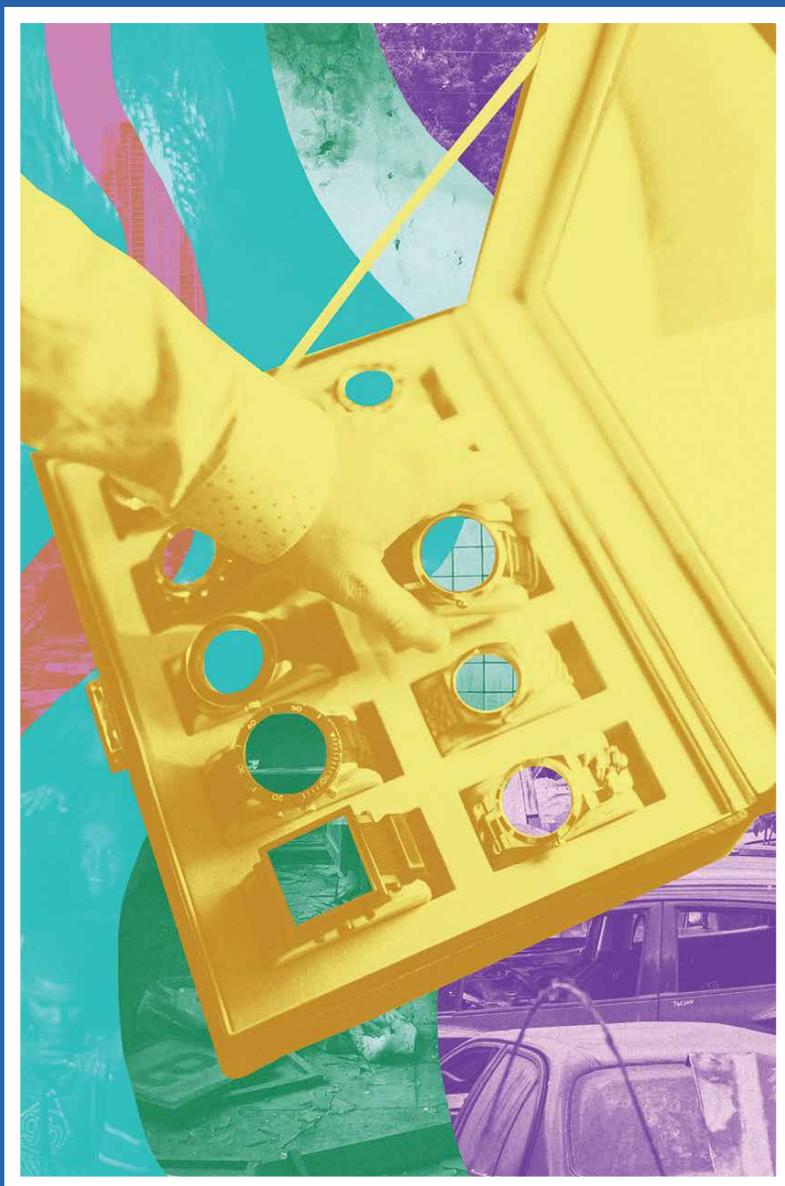
La relación de las élites argentinas con las masas, sostiene Semán, tiene una particularidad específica e histórica: al no haber legado esclavista, desde mediados del siglo XIX Argentina casi siempre se pensó como Nación con la inclusión de las masas. «Aunque contempla la potencial amenaza al orden que representan, la manera de neutralizarlas fue a través de la integración sin alterar ciertas relaciones de poder, cierto statu quo. Eso complejiza y tensa la relación de las élites con la idea de antipopulismo». Cuando a este rasgo se le suma la experiencia kirchnerista, dice Semán, y el primer triunfo electoral con Macri a la cabeza, las élites económicas argentinas terminan de ver algo obvio: que el Estado no sólo no es un obstáculo para la defensa o expansión de sus intereses, sino que inclusive les sirve para que sus intereses pueden ser reproducidos o legitimados en nombre de un interés general.

Castellani plantea un interrogante para la Argentina hoy, pero sobre todo para la región si se miran los acontecimientos de la última década: ¿Cuál es el compromiso de las élites económicas con la democracia? ¿Hasta qué punto es sólido o depende de quién gobierne y con qué modelo? ¿Qué pasa cuando aparecen gobiernos más populares que buscan dismantelar alguno de los privilegios que las élites económicas ostentan?

Para Semán, la apuesta democrática de las élites económicas argentinas no es una adscripción intrínseca sino algo que absorbieron en las primeras dos décadas de este siglo XXI: «Ya no tiene sentido ganarlo fuera de la cancha, digamos. Y ahí se ve toda la construcción de un discurso en contra del populismo que se monta en nombre de la libertad, de un ciudadano productor y emprendedor, meritócrata. Un poco reedita el discurso de las élites de hace un siglo, de liberarse de las masas y el paternalismo del Estado». Un hecho reciente que hoy está en el centro de la escena política regional complejiza la pregunta que se hace Castellani acerca de hasta qué punto las élites económicas tienen un compromiso

real con la democracia en la región: mientras se cerraba este artículo, avanzaba una investigación local e internacional sobre el envío de material bélico y represivo a Bolivia por parte del gobierno de Mauricio Macri tras el golpe de Estado cívico-militar que sacó a Evo Morales del poder y puso por la fuerza a Jeanine Añez, hoy detenida con prisión preventiva por terrorismo, sedición y conspiración..

ÉLITES SIN DESTINO LATAM



PANAMÁ

El país atajo

V.A. MOJICA

(Aguadulce, 1980) V.A. Mojica es Fundador de Editorial Descarriada. Fue incluido en la antología de crónica latinoamericana de la Revista Cuadernos Hispanoamericanos de España en 2020. Ha sido colaborador de la Revista de la Universidad de México y Soho, en Colombia, entre otras. Es autor del libro Secar en Invierno publicado en Costa Rica por la Editorial 1390, coautor del libro ¿A dónde me llevan?, de Editorial Descarriada, junto a Jon Lee Anderson y Francisco Goldman. Lom Editores en Chile prepara la antología Derrumbes Ajenos que incluye una docena de perfiles que ha escrito el autor en la última década.

Desde su fundación en 1903, Panamá se dedica con el mayor esmero al negocio del tiempo. El país es líder planetario en reducirlo o en maximizarlo. Tiene una de las aerolíneas más puntuales del mundo y acorta, como muy pocos, el camino a miles de barcos que usan su canal sin retrasos diariamente. Panamá es un gran atajo —como su sistema financiero— y un designio divino, para gran parte de sus élites. ¿Qué hace un vendedor de libros en un país al que no le gusta perder el tiempo?

1

La primera mujer en ganar el premio Ricardo Miró en la categoría de poesía sufrió en carne propia uno de los grandes problemas de Panamá: no tenía lectores. Stella Sierra era mi vecina y de niña vivía en una casa de dos pisos que tenía el techo de teja, las paredes de calicanto y unos balcones de madera en la segunda planta con los dormitorios que miraban a la Iglesia y a la plaza principal del pueblo. Se había construido en 1898 y era propiedad del comerciante español José Sierra. En el jardín interior donde coincidían la cocina, las escaleras de madera para subir a las recámaras y el depósito de sal de la residencia rectangular, Stella organizaba recitales para sus familiares, el único público que existía.

En esa década del veinte del siglo pasado, la joven escritora soñaba con ser una estrella del verso. En Chile se vivía una guerrilla literaria entre Pablo Neruda, Vicente Huidobro y Pablo de Rokha, que acaparaba la atención de su sociedad y que era seguida en el periódico y en los hogares como quien sigue los amores en tiempo real de Jennifer López en Instagram. En París estaban Hemingway, Joyce, Pound, Stein, en sus cafés y en sus bares, y en Aguadulce mi vecina recibía aplausos de sus tías y de sus primos. Uno de ellos, Benjamín Sierra, en broma y en serio, le decía —y así lo recordó a un periódico años más tarde— «que todos los poetas se mueren de hambre». Stella enfurecía porque el primo le decía la mayor de las honestidades: «Eso no produce».

Aguadulce tenía más de medio siglo en el negocio del atajo y era un territorio importante de Panamá. El país tenía un presidente aguadulceño y el pueblo se dedicaba a tiempo completo a no perder el tiempo porque Rodolfo Chiari, el mandatario, había construido un puerto muy cerca de donde vivía Stella que provocó una intensa actividad comercial y migratoria en esos años. En Aguadulce surgió una élite de comerciantes y de terratenientes —como la familia de Stella, entre un migrante y una aguadulceña— que usaban el atajo para mover ganado y alimentos a los pueblos costeros de Panamá y a México y a otros países por la costa pacífica. El pueblo les proporcionaba sal en abundancia, llanuras para sus animales y una plataforma logística a unos metros de casa. En Aguadulce había lo necesario para no distraerse, menos librerías, y mi vecina, para salvarse del aburrimiento, según se puede leer en su libro *Agua dulce*, se la pasaba con su abuela que en las noches le leía *Madame Bramé* y otras novelas que llegaron a su casa desde el viejo continente con su pareja, el marino de Cádiz.

Un siglo más tarde, en desgracia y en bancarrota, se me ocurrió ganarme la vida vendiendo libros. El libro tenía un antecedente nada alentador. Los libreros que explicaban su oficio en los diarios recordaban que eran ellos o sus padres quienes traían maletas con novedades de otros países que de otra forma jamás llegarían a Panamá. Al país llegaba de todo menos libros. En el pasado se leía más —pero no lo suficiente—, decían. Ahora con teléfonos más inteligentes que uno, con escobas que limpian a control remoto y con drones voyeristas que espían vecinos, el libro tenía el lugar más distante que podría existir para su sobrevivencia: no estaba en sus manos.

Por supuesto que yo no quería traer libros del extranjero, quería hacer mi propia colección de bolsillo con las más distinguidas ideas de un país donde las librerías se cuentan con los dedos de las manos desde aquellos días que a mi vecina le leían novelas que llegaban en barco. Llamé al invento Editorial Descarriada porque sus adversarios eran un conservadurismo que se siente legendario y se extendía por todo el país

como una enredadera en un árbol y un optimismo sin precedentes que había convertido a Paulo Coelho en el más destacado e importante autor de las bibliotecas de los hogares panameños.

Estaba en una playa en aquellos días. No hay oposición cuando estás en la ruina, así que me pareció una notable idea. Anoté el nombre en una libreta, la guardé entre la toalla con un Kindle —única propiedad entonces— que sólo tenía libros piratas, porque sólo tenía para PDF, y me zambullí al mar caliente.

Hay un escritor panameño que ha logrado lo que ningún otro escritor ha logrado en Panamá: que le presten atención. Uno de sus ensayos —que nos recuerda que el único negocio es el tiempo— está escrito en diez piedras inmensas de casi tres metros de altura, talladas a mano, desde el 4 de diciembre de 1925, en la plaza más glamurosa y simbólica del Casco Antiguo de Panamá, la Plaza de Francia. Nadie ha hecho lo que Octavio Méndez Pereira ha hecho, ni nadie más lo hará.

Panamá competía en esa época con la Zona del Canal de Estados Unidos y las élites de la capital panameña —rentistas ante todo—, veían con buenos ojos que un escritor ayudara en la pelea que enfrentaban. En el presente sería impensable inmortalizar a un escritor. Hace unos años, el poeta José Franco fue condecorado por las autoridades culturales y recibió un cheque sin fondos y una medalla que le quitaron cuando acabó el evento porque era prestada. Pero en esos años que el vecino imperialista construía el canal y su hogar al lado de nosotros sin escatimar recursos, el escritor era necesario.

El presidente Belisario Porras creía que la identidad del país y su orgullo se vería muy afectado si no tomaba cartas en el asunto y aprovechó sus tres gobiernos entre 1910 y 1924 para construir «plazas, parques y avenidas que manifestaran la historia antigua de Panamá y la voluntad de ser una nación persistente pero atropellada, ocupada y colonizada». Se construyó el Parque Urracá en la Avenida Balboa, se

embelleció la Plaza de Santa Ana y el Palacio de las Garzas, y se construyó la Plaza de Francia, como recuerda una de las descendientes del presidente Porras, la antropóloga Ana Elena Porras.

Como Stella, Octavio era mi vecino. Nació el 30 de agosto de 1887. Era hijo de la élite agudulceña. Hizo la primaria en Aguadulce, pero luego se mudó a la ciudad de Panamá y destacó como un joven intelectual y apasionado de las letras. Fue becado por el gobierno y estudió en Chile. En 1912 se hizo Profesor de Estado y no dejó de escribir más nunca. Con treinta y siete años —dice Matilde Real de Gonzalez, una estudiosa del escritor— «es llamado por el Jefe del Estado a formar parte del Gabinete en la Cartera de Educación. Vive entonces un periodo de gran prestigio y popularidad».

En ese contexto, un año después, en 1925, llegó mi vecino a las lápidas gigantes con el texto *Los Zapadores del Canal*, que había escrito, al menos, una década antes. El año que oficialmente inició operaciones la vía interoceánica, Octavio Méndez Pereira editó el libro *Antología del Canal* que incluía opiniones de personalidades, grabados, mapas y este pequeño ensayo sobre la historia del Canal de su autoría que nos dice en la primera línea que ese canal que construyeron los gringos tenía más de medio siglo de existencia. «Surgió con el descubrimiento del Nuevo Mundo por Colón». Méndez enumeró los principales intentos que se sucedieron en el viejo continente para cortar el país por el medio, como lo haría un mago con su ayudante, para así unir dos océanos, y los obstáculos que en el camino surgían, pero que no impedirían el gran logro: someter la naturaleza al humano. Lo escribió en orden ascendente, por épocas, para aclarar cualquier autoría exclusiva de los gringos, con el tono del narrador que quiere ganar la pelea desde la precisión y no desde el lirismo, hasta que llega al final y concluye con una exageración: «La obra de ingeniería más portentosa que vieron los siglos».

Su casa estaba a unos metros de la mía. Es una residencia de estilo colonial de una planta que está detrás de la iglesia que veía desde

su balcón Stella. No se sabe cuándo se construyó. Tiene un tejado rojo, ventanas de vidrios tan grandes que puedes ver sus salones vacíos de techos altos y atrás el jardín sin limpiar que en el pasado tuvo ganado. Frente a su casa hay un parque de unos cuantos metros con un busto del ensayista. Un parque que lleva su nombre y donde encuentras condones, restos de envases de cocaína y de todas las adicciones que sufrimos los aguadulceños. Octavio Méndez logró de todo. Fue diplomático en Gran Bretaña y en Francia, dirigió la Academia Panameña de Historia, fundó la Academia Panameña de la Lengua y la Universidad de Panamá donde yo estudiaría más tarde una carrera que no me da trabajo. De todos los Octavio Méndez que conozco, sin embargo, el que más disfruto es el cronista que cuenta sus viajes:

«Hice mi entrada en España por Castilla la Vieja, como quien dice por la Tierra Sagrada de la Madre Patria —escribe el vecino en *Emociones y evocaciones*—. Las altas montañas que cantó Pereda estaban cubiertas de nieve, y era una sola sábana blanca la llanura clásica por donde brillaron para gloria de la Península, al paso de su Babiaca, la colada y la tizona del Cid Campeador».

El siglo pasado Panamá se dedicó a tiempo completo a recuperar su canal. Primero surgió el deseo de recuperarlo, luego la posibilidad de recuperarlo, luego la negociación para tenerlo y, cuando lo tuvimos, el deseo de explotarlo. Nada nos perturbó la cabeza más que ese peaje intraoceánico. En efecto, le hicimos caso a Méndez Pereira y a los demás voceros de las élites, que con los años nos martillaron, como el carpintero al árbol —con insistencia y puntualidad— la idea de que Panamá solo es un atajo. Sucedieron magnicidios, golpes de Estado, fraudes electorales, invasiones militares con cientos de muertos, tuvimos una vida llena de altibajos emocionales y de muertes y de decapitaciones que no cambiaron el deseo supremo. En el primer libro que publicó Editorial Descarriada, Harry Brown Araúz, otro vecino, pero politólogo, que se la pasa estudiando nuestras elecciones y sus resultados, nos reveló lo que sospechábamos y nos dijo el nombre de lo que no sabíamos. No había existido turbulencia alguna

que afectara nuestra visión del país: existía un consenso sobre Panamá, entre sus poderosos, a lo largo de su vida, que sobre todas las cosas establecía que se dedicaba al negocio del tiempo. Me propuso llamar al libro *Consenso Transitista*, que es un título preciso, pero poco seductor, y finalmente lo llamamos *El vencedor no aparece en la papeleta*.

Con esa idea de ser atajo, de ser primero y aprovechar al máximo el tiempo, nos hicimos primeros en muchas cosas. En Panamá se abren corporaciones en segundos, se desvían fortunas sin pagar impuestos en menos tiempo que un estornudo, hicimos un metro en semanas, urbanizaciones en días, llevamos a cientos de ciudades en todo el mundo a miles de pasajeros con una puntualidad de campana de misa, cruzamos todo el año barcos de un lugar a otro sin detenernos un segundo, construimos rascacielos más rápido que una acera. Panamá se la pasa ocupado desde su origen y, como sabemos, uno de los mayores enemigos del libro es el tiempo. Preocuparse por el tiempo es olvidar la lectura. Por algo escribió Luis Tejada Cano: «Sería preferible que el reloj no existiera».

2

Una mañana los panameños encendieron su televisión y observaron en el noticiero matutino más visto a la profesora Ileana Golcher indignada con una pancarta que tenía unos reclamos terribles de unos docentes de la escuela Carlos A. Mendoza, pero que lastimosamente decía:

Vasta de Dictadura
Vasta de Humillaciones
Vasta de Acoso
Vasta de Persecución

No sólo era una pancarta. Eran varias con la misma letra, que usaba mayúsculas «indiscriminadamente» y sufría, según Golcher, de una redacción «precaria». La profesora dijo que el responsable de ese texto

tenía problemas de psicomotricidad. «Me niego a pensar que eso lo escribió un docente.» Pero detrás de las pancartas había maestros, mujeres pobres como los panameños, que denunciaban el sistema perverso que sufren, sin notar que mirábamos sus errores ortográficos que nos revelaban más detalles del problema. No leen ni los educadores.

Golcher dijo que «la ortografía en gran parte es visual. Usted aprende de esa forma, repite, lee mucho la palabra y eso se va grabando en la memoria de cada persona».

Allí no acababa todo ese mañana. Panamá se disputaba el último lugar entre los países con más jóvenes menores de quince años que menos entendían lo que leían. La profesora presentó unos gráficos que decían que esos jóvenes fracasaban en español como no fracasaban con ninguna otra materia. «¿Es el chat?», preguntó el periodista. «Es el chat», dijo ella y agregó algo más triste: «No tenemos plan nacional de educación». Esa entrevista sucedió en el año 2010. En los siguientes cinco años tendríamos la menor tasa de desempleo de nuestra existencia. En Panamá había trabajo hasta el desperdicio, para regalar. Sin embargo, la bonanza que propició ampliar el peaje en esos años no trajo mejoras significativas en nuestros estudiantes. En la última prueba Pisa (2018), examen que mide la comprensión lectora a nivel planetario, seguimos peleando el último lugar, como lo hacemos también en los informes de transparencia. Perdíamos como en el fútbol, pero en el fútbol teníamos esperanza.

A Kafka lo entendí en la universidad —y no tanto— y a mis cuarenta años todavía me enreda y me provoca comprar las peores ediciones que existen de sus libros para comprobar que a lo mejor no estaba tan equivocado. A Beckett lo sigo leyendo como una adivinanza. De Bernhard ni se diga. No sé qué dijo, pero disfruto sus libros. No comprendo mucho lo que leo, como los estudiantes panameños, y esa falta de comprensión hacia otras cosas, como las películas o el prójimo, me ha traído desamores y sexo con personas que acabo de conocer en

una fiesta. Pero no por ello podemos justificar que los estudiantes de Panamá no lean a Joaquín Beleño o lo lean y no lo entiendan.

Este escritor lo conozco bastante bien porque revivimos en Editorial Descarriada una de sus novelas, que tenía más de medio siglo desaparecida de nuestras librerías. Beleño fue, durante los años de la dictadura del General Omar Torrijos y de Manuel Antonio Noriega (1968-1989), una leyenda viviente en el país y fuera de él. Traducido al ruso, estudiado en universidades en Estados Unidos y en América Latina, es el único panameño integrante de la colección de narrativas de la fundación del señor William Faulkner. Su trilogía sobre la Zona del Canal —*Luna Verde, Gamboa Road Gang, Curundú*— es de los mejores artefactos en Panamá. Falleció el mismo día que nació y en su última columna de opinión, que escribió muriéndose, se comparaba con el viento que regresa. Se sabía inmortal. A diferencia de mis vecinos Stella y Octavio, Beleño era de un arrabal conocido como Santa Ana, un barrio de negros explotados, con tugurios y prostitución, y con la Zona del Canal de vecino que los perseguía con sus militares y con sus fusiles por tomar un mango de un árbol. Beleño era el Panamá obrero portuario marginado negro capitalino, y un total desconocido que un buen día se ganó el principal premio de las letras panameñas. Beleño sabía que sólo podía o escribir o dedicarse a vender mercancía de quinta categoría, así que se inclinó por lo primero. Fue, para dicha de los panameños, el mejor testigo que tuvimos dentro de ese terreno panameño donde vivían los gringos y nos contó con honestidad qué pasaba allá dentro, cómo sabía el racismo y la colonización. Beleño se inclinó por la narrativa ultrarealista. Por ello contó la historia que sabía de primera mano: un negro amante de una gringa terminó en un calabozo porque era negro y porque a la gringa le gustaba. Beleño logró sacarlo de la cárcel con una novela. Más nadie ha hecho algo parecido.

Pero lastimosamente el escritor ya no es una celebridad como antes. Lo sacaron de los colegios y lo sacaron de las bibliotecas familiares por unas novelas optimistas que ningún crítico quiere criticar que

surgieron después que los gringos nos masacraron una madrugada. Tiene una explicación más allá de la vejez de la novela realista.

En 2012, la Ministra de Educación —y activista del Opus Dei— Lucy Molinar organizó con una red de profesores de español un concurso nacional de cuento con miles de estudiantes y se recibieron medio millón de trabajos. Ochenta de esos relatos terminaron siendo un programa de lectura de las aulas panameñas que dejaba más en el olvido a Beleño. «El loro educado», de la niña Casilda Montezuma de la Comarca Ngäbe-Buglé fue una de las ganadoras. La antología incluyó al chiricano Jahír Castillo con «El niño que no le gustaba compartir» y a la capitalina Alba Lineth Camilo con el «El Periquito que quería ser rojo».

«Acercar a los jóvenes a materiales de lectura que ellos mismos han escrito puede ser una idea muy bonita, pero los aleja de la verdadera literatura (...)» escribió tiempo después Carlos Fong, en *Instrucciones para no leer Panamá*. La promoción de la lectura, para el novelista, sufría de los vaivenes de la política y de la burocracia. La mayor evidencia sucedería meses después durante el VI Congreso Internacional de la Lengua Española que se celebró en Panamá. El Ministerio de Educación (MEDUCA) aprovecharía que nos visitaban Mario Vargas Llosa, William Ospina y Sergio Ramírez para anunciar que tenía un nuevo plan de lectura. Para Fong eso significaba que todo el trabajo que habían realizado desde 1990, después de la invasión a Panamá, en encuentros y en talleres, todas las reuniones entre editores, libreros, bibliotecarios, todo el plan que habían diseñado para mejorar la lectura entre los jóvenes, sería ignorado nuevamente. «Cada ministro tenía en su agenda otros planes, otras ideas, otras razones políticas.»

Fong es hoy día el responsable de la promoción de la lectura en Panamá. En redes sociales se le ve en proyectos que figuran en el documento que escribió en el pasado —recomendaciones que no tomaron en cuenta—, como mejorar las bibliotecas de las escuelas y de las comunidades, capacitando a docentes en literatura y llevando libros de autores nacionales a lugares apartados del país. Es una tarea

titánica, porque además de pelear contra el hábito de no saber cómo sacar tiempo para leer, también se pelea contra la enorme presencia que ganaron los *best sellers*, que aprovecharon nuestras debilidades institucionales y editoriales, nuestra visión ultra mercantilista de la cultura, para crear un monopolio de autores sin mucho que decir, guiado por las ventas, dentro de los colegios y fuera de los colegios, que llegan en barcos —o en aviones— desde el viejo continente.

El autor panameño está igual de abandonado que el piedrero y tiene que competir con los clásicos que venden las transnacionales del libro y con los gurús de la ceguera que venden las mismas transnacionales. El escritor panameño tiene la peor desventaja que puede existir porque ni libro tiene. Debe ganarse un premio nacional para que existan porque en Panamá se puede imprimir sin mayor dificultad una valla publicitaria del tamaño de una montaña, pero no 25 libros de 100 páginas. Algunos optan por vender libros digitales que pagan centavos por épocas y otros se endeudan con su propio libro y se hacen emprendedores de cuentos que nadie ha leído nunca. A veces, pero eso sucede poco, encuentran un cómplice como Editorial Descarriada, que pierde dinero cada vez que publica, y así sale Beleño del olvido. De lo contrario leeríamos sin menor oposición a Walter Riso y compañía. Muchos panameños leen libros para su «crecimiento personal», reveló una encuesta que midió los hábitos de lectura de los visitantes a la Feria del Libro de Panamá. Aquella noción del libro rayo que te destruye como al árbol durante la lluvia tiene poco público. La investigación de los economistas Javier Stanziola y Manuel Quintero también reveló el gran problema de siempre: se le preguntó a los panameños por qué no leen más —el 59,9 % de los encuestados leen 5 libros o menos al año— y dijeron: «Si tuviese más tiempo».

3

Uno de los hombres que diseñó el modelo económico de Panamá, el país con el más rápido crecimiento del Producto Interno Bruto de América

Latina de los últimos treinta años, en medio de la pandemia reconoció que el negocio del tiempo se había agotado. «Ya en el año 2019 estaba dando señales de llegar a su fin.» Con el mayor desempleo desde la Segunda Guerra Mundial, con una recesión planetaria ocasionada por una pandemia, con un país sin ahorros, endeudado y con limitadas posibilidades de endeudarse más, el economista Guillermo Chapman solo veía hambre y explosiones sociales y escribió —tal vez lleno de pánico—, un libro que nos llegó a los panameños por WhatsApp.

El economista del milagro económico para los ricos panameños era el primer integrante de la élite del país que reconocía públicamente el agotamiento de la idea y señalaba a sus pasados. Para Chapman, el modelo panameño que crea grandes fortunas para unos cuantos y grandes pobrezas para el resto tenía una explicación en los inicios del país. Con la construcción del Canal y la Zona, las élites empresariales y políticas construyeron una economía alrededor del atajo. «Fue una reacción intuitiva», escribió. Se estableció la dolarización del país, el desarrollo de la opacidad tributaria y de las sociedades anónimas, así como la interconexión aérea. «La función económica del istmo ha sido, en buena medida, determinada por su posición y configuración geográfica.» En el país surgieron dos Panamá's: los integrantes del sector moderno y los tradicionales, los llamó. El primer grupo se preocupó por el tiempo como negocio, el segundo grupo, que son la mayoría de los trabajadores panameños, no tenía tiempo ni para descansar. Las élites no consideraban importante realizar políticas públicas para sus compatriotas, porque pensaban —según Chapman— que el dinero que recibían por montones, sin mucho esfuerzo, del resto del mundo que utiliza sus servicios, sería para toda la vida. Se imaginaban una lluvia de hamburguesas permanente, como en la película que ven mis hijas, pero de dólares. ¿Para qué necesitan los panameños un país si la riqueza llega sola? Pero por supuesto que los dólares no caen del cielo y si caen no llegaron nunca o muy poco a las grandes mayorías, lo que convirtió a Panamá en uno de los países más desiguales del mundo, donde está normalizado que tu vecino tenga millones y una mansión al lado de tu casa que se cae a pedazos.

Sin embargo, Chapman veía soluciones profundizando el modelo. Contratando mano de obra de otro país, flexibilizando el mercado laboral que casi no tenía ni sindicatos, combatiendo la corrupción que jamás pudieron combatir y regulando la tendencia al oligopolio que había crecido como hierba en invierno por un «capitalismo distorsionado» que creaba mercados sólo para amistades cercanas a ellos mismos. Chapman, que había asesorado a gobiernos y a empresarios que son su familia en dictadura y en democracia, de lo único que no habló fue de libros.

Nada pasó con su informe, por supuesto. Nuestras élites son procrastinadoras por excelencia y creen que el panameño, a diferencia de los chilenos, de los colombianos, de los peruanos, de los centroamericanos, de todo el mundo, es sumiso sin explicación. Esto lo conocimos porque otra mañana amanecemos con una aplicación por Internet parecida a WhatsApp, pero con todos los mensajes del teléfono personal del ex presidente Juan Carlos Varela, un Opus Dei que reza más veces al día de lo que se come. Era una venganza que dejaba la puerta abierta a todos los panameños para que conocieran las intimidades del poder como nunca antes. Varela, otro empresario, pero del alcohol, daba órdenes a la justicia y tenía de aliado a la Procuradora de la Nación, Kenia Porcel, que el día 14 de marzo de 2018, entre las 11:30 y las 11:32 de la mañana le chateó: «Me di cuenta q en otros países las manifestaciones populares son fuertes Cuando se enteran en actos de corrupción Aquí me di cuenta q x la fuerza de las redes, la gente se manifiesta x allí Hasta en eso somos diferentes».

Panamá creció con un modelo rentista que no necesitaba mayores especializaciones. Complejizar la economía, como los japoneses, es un chiste para nuestras élites. Los panameños tomaron maestrías en cargar cajas, en cargar guineos, en cortar caña y en vender mercancía de China o frutas de los nórdicos en los semáforos, al menor costo y tiempo posible. Un amigo que hace paredes y tumbas, un día, en vista de que yo no conseguía nunca trabajo, me dijo que el problema laboral lo tienen profesionales y no personas como él, sin mayores estudios. Me lo dijo porque le hice la pregunta más tonta que puedes hacerle a un padre como

él: ¿a qué se va a dedicar tu hijo? Me miró como a un pendejo, y me dijo que su hijo seguiría sus pasos. Si las élites panameñas no necesitan de la mayoría de la mano de obra panameña, ¿para que van a requerir libros?

Después de la invasión a Panamá en 1989 surgieron unas élites más rentistas que disfrutaban el reguetón y se emborrachan con el pueblo en carnavales. Mezcla de migrantes y nacionales, con un pasado político conservador o liberal —y de derechas—, muchos de ellos primeros, con intereses económicos en todo lo que se hacía rápido y ofrecía grandes ganancias. Se hicieron constructores, importadores, financistas, banqueros, mineros y, ante todo, se hicieron políticos. Los grandes empresarios se hicieron presidentes.

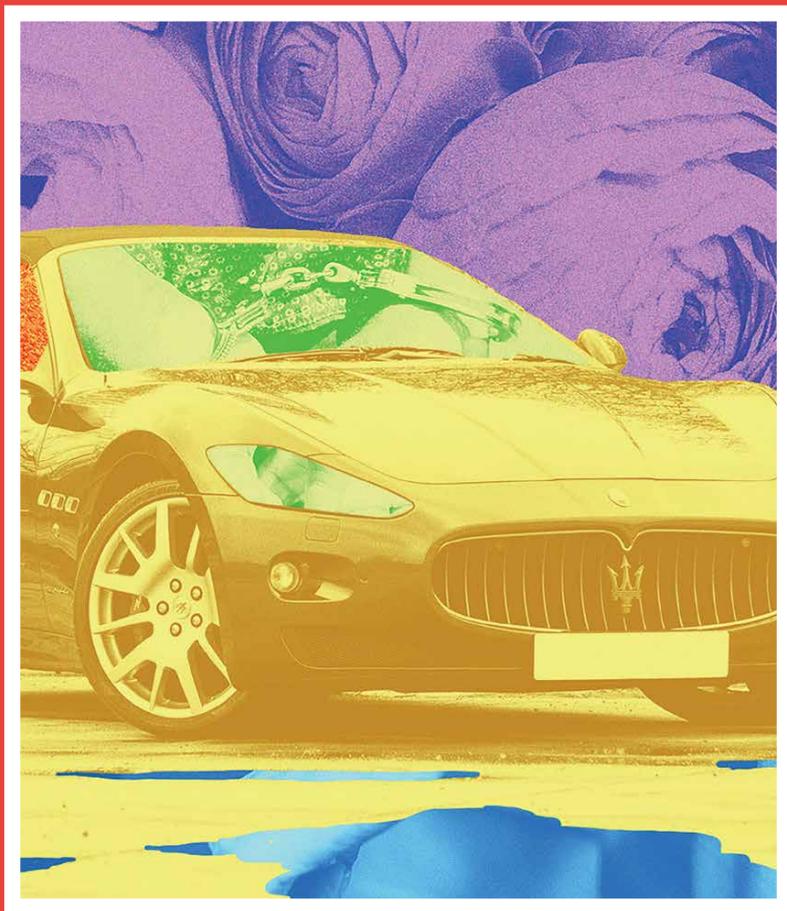
Un día viajé con el antepenúltimo de ellos, Ricardo Martinelli, y otro amigo suyo banquero y constructor, Alberto Vallarino, en un jet. Ese día Martinelli ganaría las elecciones y yo estaba en ese avión porque era periodista de una televisora y tenía que decirle al país que el comerciante andaba de gira. El avión tenía asientos de cuero, tragos y comida, pero ninguna revista ni ningún libro para leer. «Qué lástima», me dije. «Yo tendría una biblioteca finísima aquí con Oé, Genet», pensé, pero Dios da barba al que no tiene quijada, así que pasé la mañana en ese avión más aburrido que un oso perezoso con esos magnates que no leen cuando viajan, viéndoles la cara de felicidad porque tenían encuestas que les decían a esa hora lo que sabríamos más tarde.

Richard Morales, otro autor de Editorial Descarriada, me dijo un día que discutíamos su libro sobre desobedecer a los próceres que su sueño es el colapso. Tal vez por ello han desarrollado a lo largo del tiempo el macrodesdén. Nuestras élites son más cínicas que los ejecutivos de los bancos, que te endeudan sonriéndote, y se han relacionado con la pobreza desde la distancia. No hay un libro sobre pobres en sus editoriales, y por ello, a esta hora, edito a una poeta, Lucy Chau, que escribió un libro sobre una hermana bailarina, de las mejores que ha tenido el país, que fue negada por negra, por mujer y por pobre. *La*

PANAMÁ

Oveja Negra de mi familia se titula la última novedad. No sabemos si venderemos algún libro, pero estamos felices porque un editor de un país que no tiene tiempo para la lectura no puede pensar en audiencias, sino en resistencias.

ÉLITES SIN DESTINO LATAM



COSTA RICA *Las élites alteradas*

ÁLVARO MURILLO

Periodista costarricense con 20 años de experiencia en la cobertura política de su país y sus ribetes económicos, sociales o ambientales. Trabaja en el Semanario Universidad y escribe para El País y la agencia Reuters, además de compartir espacios en la radio y proyectos especiales. Su redacción hábil y profunda es el resultado de su experiencia en medios locales e internacionales, durante dos décadas de transiciones. Vivió el paso del modelo analógico al digital y del sistema político bipartidista a la fragmentación de las banderas, así como la transformación silenciosa pero acelerada de un país que en el nuevo siglo ha visto deteriorarse su modelo de bienestar igualitario. Las enseñanzas de maestros como Martín Caparrós, Leila Guerriero, Roberto Herrscher y Miguel Ángel Bastenier le ayudan ahora a contar esas historias con los grises, los contextos y los matices que la realidad amerita.

Tiempos inciertos viven las élites económicas del estable país centroamericano por las tendencias de la economía, la erosión de los instrumentos políticos y una relación amor/odio con el Estado y con su sistema institucional. Mucho se expresa y se acentúa con el encarcelamiento de un magnate local de la construcción.

Carlos Cerdas Araya era hasta junio del 2021 un empresario fácil de describir como un caso de milagro económico en Costa Rica: un chico cualquiera de familia sencilla en la conservadora ciudad de Cartago que de grande llegó a ocupar un lugar en el olimpo de las personas más millonarias de Centroamérica.

Era el hijo de un hombre trabajador que alquilaba maquinaria al estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en los años 70, momento de fuerte desarrollo de infraestructura pública, pero aprovechó el recambio generacional para dar un salto sobre otras compañías y dominar en el nuevo siglo al sector de la construcción y mantenimiento de obra pública vial. La marca MECO empezó a verse como un sello de poder en las vallas de las construcciones hasta que el país se le hizo pequeño.

Entonces cruzó a Nicaragua, donde hizo buenas migas con el autoritarismo de Daniel Ortega, y a Panamá, donde la ampliación del canal interoceánico permitió a la compañía graduarse en el escenario internacional. Después llegó a Colombia y a El Salvador, en la segunda década del siglo, hasta ganarse el título de empresa transnacional, quizás la única nacida en un país donde las familias ricas nunca han llegado ni cerca de los grupos poderosos de otros países centroamericanos.

La riqueza le había dado ascenso social, cómo no. Se movía en un avión propio que guardaba en el mismo hangar del propietario de la principal televisora del país y llevaba o traía a algunos de los políticos más pintados de Costa Rica. Cerdas era un nuevo millonario que recogía el mérito de haber convertido su herencia en una fortuna incluso superior que la de algunas de las familias poderosas de toda la vida, incluidas las de la

oligarquía cafetalera del siglo XIX, que han ido moviendo sus capitales por distintas industrias de la economía según qué momentos de la historia; o mayor que la riqueza acumulada por la clase profesional que mejor vive con los altos volúmenes de inversión extranjera ingresada en las últimas tres décadas. Carlos Cerdas era una variante más, pero integrante al fin de la élite económica de Costa Rica. Por eso era difícil digerir la escena de verlo esposado y encaminado a la cárcel, con su chaqueta de la Fórmula 1 y zapatillas deportivas de quien sale a hacer mandados.

Carlos Cerdas, con su empresa MECO, es uno de los principales sospechosos de la red de sobornos que por muchos años ha cubierto al sector de las concesiones de obras viales públicas, de acuerdo con una investigación policial desarrollada desde el 2019. Horas y horas de conversaciones telefónicas escuchadas por los agentes judiciales dieron elementos para que toda Costa Rica tuviera en sus manos informaciones que parecen antagónicas: 1) el empresario manejaba a toda la burocracia que requería para controlar al sector y ser, por ejemplo, el principal proveedor del Estado en 2018; y 2) el sistema de control funcionó, al menos al principio, atendiendo las denuncias en instancias judiciales y permitiendo desarrollar investigaciones que derivaron en la detención y la orden de seis meses de prisión preventiva, por ahora, para él y para otra rica empresaria de la construcción llamada Mélida Solís.

Que se determinen los delitos y los paguen es otro tema, poco probable por los antecedentes del sistema judicial, pero el mensaje con el caso Cochinilla (llamado así por la plaga que se pega a las plantas hasta secarlas) parecía ser que los millonarios en Costa Rica tienen límites o al menos obstáculos. Cerdas pagó sin problemas una primera fianza de 5 millones de dólares y luego otro juez ordenó prisión sin derecho a fianza para evitar que el acusado alterara la continuidad de las investigaciones. Ahora comparte celdas con personas que pudieron haber sido sus compañeros en la escuela, pero que jamás se habría cruzado en los años recientes, cuando él era ya un magnate que solo se rozaba con los herederos de las burguesías tradicionales o con los nuevos ricos

desarrollados alrededor de las inversiones extranjeras que han reconvertido la economía de Costa Rica en este siglo.

El caso policial trajo sorpresa en los círculos empresariales. Carlos Cerdas no era el mejor representante de las élites dominantes en Costa Rica, pero se había colado en sus círculos y había ido ganando influencia política. No habla sus idiomas ni tiene lazos genealógicos con ellos, pero sí comparte sus números y la multiplicación de los dólares le había acreditado licencia de hombre poderoso. Finalmente aparecía como miembro y donante de una organización llamada Horizonte Positivo que los propietarios más fuertes crearon en 2012 para incidir en la política, ahora reconfigurada, de maneras distintas a las tradicionales de las cámaras empresariales y sectoriales donde abundan los gerentes.

Al mismo tiempo, sin embargo, Cerdas era visto como un advenedizo en las élites y, como tal, un sujeto vulnerable. Sus viajes entre Colombia y Estados Unidos en avión privado, sus amistades y sus espacios de ocio no bastaban. Las operaciones multimillonarias dependían de un solo cliente, el Estado, y eso tampoco está bien visto entre hombres de negocios. En algunos sectores poderosos quedó la sensación de que la caída por vías judiciales era algo fácil de pronosticar, una sorpresa a medias a pesar del andamiaje legal que rodeaba a MECO. «Eso a los Arias no les hubiera pasado», dijo un banquero entrevistado para este trabajo, en alusión a la familia de Óscar Arias, dos veces presidente de Costa Rica y representante de los herederos del desarrollo cafetalero del siglo XIX.

Previsible o no, la detonación del caso Cochinilla era una sacudida más en las cimas del pequeño y tranquilo país centroamericano. Un recordatorio de que la institucionalidad pública existe; con sus trillos y sus trampas, con ejércitos de bufetes privados que un día inciden en la construcción de las leyes y al día siguiente trabajan para sortearlas. Con sus sesgos que hacen a las cárceles llenarse de gente pobre y que numerosos casos grandes se diluyan antes de llegar a sentencia, pero el Poder Judicial de Costa Rica conserva una fuerza suficiente para llegar de

repente y destapar una red corrupta de muchos años. De poco sirvió a MECO tener entre sus principales abogados al esposo de la Fiscal General, Emilia Navas, que semanas después dejó su cargo ante cuestionamientos de la Corte Suprema por el manejo de este caso.

SORTEAR AL ESTADO

Las investigaciones siguen su curso, pero el expediente Cochinilla frenó totalmente las operaciones de MECO y puso cuesta arriba la promesa del gobierno de Carlos Alvarado de entregar en su despedida, en 2022, un país distinto en términos de infraestructura pública, pero además dejó un sabor agridulce en los grupos de mayor poder económico. Por un lado, ser multimillonario no es una condición que exima a alguien de ir a la cárcel, pero por otro hay una institucionalidad que funciona y eso repercute en la estabilidad política que, a su vez, es indispensable (aunque no suficiente) para atraer inversiones extranjeras y para la solvencia del clima de negocios. Es parte del Estado que ha alimentado las cuentas de un sector, que ha repartido la riqueza de manera menos ingrata que en otros países de América Latina y que al mismo tiempo es visto como una carga o un estorbo para el segmento que tiene todos los recursos para comprar en el mercado la seguridad, los servicios de salud y la educación de sus hijos dentro o fuera del país.

El momento tampoco es neutro. El remezón del caso Cochinilla llegó ocho meses antes de unas elecciones nacionales que se presentan como las más inciertas en la historia¹¹, con una inédita fragmentación partidaria producto de la erosión de las dos agrupaciones que se repartieron el poder durante la segunda mitad del siglo XX, e incluso

¹¹ Las elecciones fueron el domingo 3 de abril del 2022, y fue elegido como presidente a Rodrigo Chaves, quien está acusado de acoso sexual en el Banco Mundial.

del actual partido gobernante, que sufre de una alta impopularidad. La reconfiguración partidaria se acelera sin un rumbo claro y las élites se han quedado sin instrumentos certeros para ejercer influencia a la vieja usanza, describe el politólogo y sociólogo Constantino Urcuyo, profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR) y exdiputado con el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

A Cerdas se le identificaba más cercano a algunos dirigentes del Partido Liberación Nacional (PLN), bandera protagonista de los tiempos del bipartidismo desde la Revolución de 1948, un movimiento armado que abrió las puertas del poder a nuevas clases más allá de los círculos dominantes de principios del siglo XX mediante el impulso al protagonismo del Estado en la economía. Elevó entonces a una nueva capa económica de la mano de diversas industrias, en el sector secundario por lo menos hasta la década de los 80, antes de la llegada de los años de crisis y de los nuevos modelos financieros que empujaron a Costa Rica a abrirse al comercio exterior y a la inversión extranjera. Empezó el arribo fuerte de transnacionales que aprovecharon el capital educativo costarricense para producir bajo modelos ventajosos y forjar una economía paralela que ahora crece en dos dígitos incluso en tiempos de pandemia; son las empresas de servicios o de manufactura sofisticada establecidas mayoritariamente en zonas exentas de impuestos y generadoras de la nueva generación de adinerados.

Es el grupo que puede ingresar más de 400.000 dólares anuales (frente al promedio de 12.000 per cápita) por ser alto cargo de una transnacional o en honorarios de servicios legales y que ahora integra al 5% más rico de la población. No son propietarios, sino apoderados en una suerte de economía de enclave que hace a algunos estudiosos sentirse tentados a compararlos con los jefes de la United Fruit Company, la compañía estadounidense que operaba a sus anchas un siglo atrás.

Uno de los principales rostros políticos lo define así: «Ahora hay una élite profesional muy bien remunerada que vive fuera de la

normalidad. Viven en residenciales muy exclusivos, tienen a sus hijos en colegios muy específicos o estudiando afuera. No utilizan los servicios de salud del país y para vacacionar van a Europa en el verano y a esquiar a Colorado en enero, o van a su segunda casa en los condominios junto a las de los extranjeros. Quizás son producto de un Estado social, pero hoy más bien lo ven como un estorbo. Y si ven condiciones que amenazan sus privilegios, no tienen problema en irse del país, porque seguro tienen sus ahorros en el extranjero o su casa en Estados Unidos».

A diferencia de Cerdas y otros fuertes empresarios que han construido o engordado su fortuna vendiendo servicios o bienes al Estado, o que se han financiado con el poderoso sistema de banca estatal, este grupo más globalizado tiene poco o nulo interés en la política, una muestra más de la distancia con lo público a grado supremo. David Díaz, director del Centro de Investigaciones Históricas de la UCR, señala que estos grupos ya no aspiran a educarse en Europa o hablar francés, como los tradicionales, sino que persiguen vivir como los millonarios famosos de Estados Unidos. Están desdibujados en términos culturales y no ven problema en concentrar poder en exceso o destruir la obra institucional y afectar al sistema político. Al fin y al cabo, entre los retratos de beneméritos o benefactores no están sus abuelos.

En las galerías históricas tampoco están los ancestros de Cerdas y otros empresarios que también se han enriquecido alimentándose del aparato público, que consume en volúmenes proporcionales a los de los países ricos. Y para eso deben saber transar con quien gobierna sin importar qué bandera traiga, como demostró el dueño de MECO al impulsar con éxito sus negocios, mientras pudo, a través de gobiernos de tres partidos políticos distintos y de ayuntamientos de cualquier color.

Lo suyo está lejos de ser exclusivo. Lo muestra también la empresa Purdy Motor, concesionaria en Costa Rica de los vehículos marca Toyota, que en este país abundan en todas las instituciones públicas, aunque logró colocarse también en México y Texas en años

recientes y aspiraba a vender 70.000 unidades nuevas antes de la pandemia. El nombre de Javier Quirós, presidente corporativo e hijo del fundador de la compañía, es uno de los nombres frecuentes en las conversaciones informales en este 2021 sobre financiamiento de campañas electorales, junto con otros nombres que han sabido manejarse con bajo perfil.

Quirós, sin embargo, es solo un ejemplo de los adinerados que supieron aprovechar la herencia y una relación vigorosa con el Estado más operaciones exitosas en la oferta privada, y que se encuentran apegados al entorno local y, por tanto, con interés en participar en las tareas de influencia, a veces incluso de manera directa. Forma parte de los asociados a Horizonte Positivo, la organización que hasta 2018 era presidida por un empresario rico llamado André Garnier, quien tomó el cargo en el Gobierno como enlace con el sector privado, merced a una relación de confianza especial con el presidente Alvarado. Este hombre pequeño y callado, de muy poca presencia pública, ponía en pausa el manejo de sus negocios en el sector de zonas francas (donde están instaladas las compañías más dinámicas) y en el turismo, para ocupar funciones que solo permitieron conectar a la Administración con una parte del empresariado. Las cámaras empresariales están entre las voces críticas contra el gobierno de Alvarado, por sus intentos de elevar la recaudación de impuestos para estabilizar las finanzas, aunque en la realidad las propuestas han sido limitadas y es parte de lo que le cobran otros sectores sociales.

De formas sutiles pero profundas, como dice un expresidente, Horizonte Positivo tuvo entrada directa a las discusiones de Gobierno mientras las asociaciones patronales mostraban más recelo con las políticas del presidente Alvarado en el manejo de la crisis fiscal y de las contingencias de la pandemia. El grupo firmó alianzas formales con la Administración y en lo informal se constituyó en una fuerza de apoyo para el gobierno, duramente criticado por la central de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), a pesar de

conflictos internos derivados de la fragmentación de poder y del debilitamiento de liderazgos, que también alcanza a la clase empresarial.

«Horizonte Positivo ha sido un dulce salvavidas para el gobierno de Alvarado», dice un abogado y estudioso de los movimientos de poder. «Ha sido el patrón de un presidente que se ha comportado como gerente», dice un reconocido dirigente del movimiento sindical, desde donde se achaca al mandatario haber impulsado soluciones fiscales con medidas que exigen de esfuerzo a la clase empresariales y que lo cargan sobre las espaldas de las clases profesionales del sector público o privado y los trabajadores de estratos medios.

«Esto ocurre porque la clase empresarial se quedó sin los canales que tenía. Perdieron la hegemonía y la capacidad de dirigir en un sentido u otro. Se diversificaron y tienen intereses dispersos o en algunos casos hasta contradictorios. Por supuesto que tienen poder de influencia aún, pero es más limitado y complicado», describe el profesor Urcuyo. Formas como la asociación Horizonte Positivo son un esfuerzo por encontrar nuevos caminos desde el seno del Estado, sabiendo que es alto el riesgo de hacer apuestas electorales por la creciente volatilidad partidaria.

UN GRAN DESACOMODO POLÍTICO

En agosto de 2021, a seis meses de las elecciones, la lista de posibles candidatos presidenciales para los comicios del 2022 llegaba a 20. Las elecciones del 2018 llevaron a segunda ronda a un candidato presidencial que venía de ser el único diputado de su partido en la Asamblea Legislativa, ante otros 56 legisladores. La discusión electoral, salpicada de sermón religioso, permitió ascender al predicador evangélico Fabricio Alvarado mientras los empresarios, sorprendidos, contemplaban su contienda contra Carlos Alvarado, el representante del Partido Acción Ciudadana (PAC), la bandera que irrumpió 20 años atrás al romper el

bipartidismo y que había llegado al poder en 2014 con un Luis Guillermo Solís en un gobierno que acabaría siendo muy impopular.

En 2018, el Partido Liberación Nacional (PLN, de raíces socialdemócratas) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC, conservador) quedaron ambos, por primera vez, fuera de una segunda ronda presidencial, solo dos décadas después de una época en que ni siquiera se abrían esos balotajes porque alguno de los dos seguro triunfaba en primera vuelta. De poco sirvieron a esas agrupaciones tradicionales las candidaturas del millonario empresario agrícola e inmobiliario Antonio Álvarez Desanti y del abogado Rodolfo Piza Rocafort, nombres que le eran familiares a las élites económicas. No, el electorado ahora toma decisiones misteriosas y el apoyo de los adinerados a uno u otro ya no garantiza nada.

La zozobra venía desde cuatro años atrás, en 2014, cuando Luis Guillermo Solís se hizo con la presidencia del país al poner el clavo final al bipartidismo. El candidato de centroizquierda del Partido Acción Ciudadana (PAC) salió beneficiado con los movimientos de poderosos empresarios para frenar al izquierdista José María Villalta, quienes crearon un frente de acción contra la candidatura a la que sometían a comparaciones con el chavismo en Venezuela o el castrismo en Cuba. El PUSC estaba en ruinas por los resabios de escándalos de corrupción y el PLN llevaba como candidato al alcalde de San José, Johnny Araya, pero sin el apoyo de algunas fuerzas tradicionales y poderosas, como el mismo expresidente Óscar Arias. Ganó entonces el «mal menor», como le llamaban empresarios de ese grupo llamado Grupo Alianza Costa Rica, creado al calor de la campaña para impulsar acciones en empresas que permitieran descarrilar a Villalta, aunque al comenzar la nueva administración empezaron a notar que no conocían a los nuevos gobernantes. Y para el Gobierno eso también era un problema, reconoce Solís.

Lo cuenta ahora como expresidente y profesor invitado en la Florida International University: «Hubo que construir canales sobre la marcha. Nos dimos a la tarea de entender quiénes eran los

interlocutores del sector privado. Quiénes eran los propietarios de los medios de producción, quiénes los gerentes de las corporaciones transnacionales que son cada vez más relevantes, quiénes los sectores tradicionales como el agro, los exportadores, los especuladores del sector financiero... Porque cada uno quería operar sobre el Gobierno con racionalidades diferentes y demandas distintas, a veces contradictorias. La UCCAEP era una sombrilla, es cierto, no se había quebrado todavía, pero habría sido un gran error pensar que era la única voz de los grupos económicos». Después sí se quebraron, observa Solís.

Su gobierno llevaba el emblema del «cambio» y eso no agradaba del todo a las élites. ¿Cambio para qué? ¿Cambio hacia dónde? La vicepresidenta Ana Helena Chacón, procedente del PUSC, servía como enlace con los empresarios, pero la incertidumbre era pan de cada día, más aún cuando Solís hablaba sin tapujos de la necesidad de fortalecer el rol del sector público y recuperar al Estado Social de Derecho de los años 70, un Estado benefactor y potente. En su despacho destacaba la foto de José Figueres Ferrer, el líder de la Revolución de 1948 que gobernó después tres veces y que impulsó la incursión de intelectuales, profesionales y burócratas en procura de límites a la clase dominante de primera mitad del siglo XX.

Era ese Figueres quien decía que «los presidentes se eligen en el Club Unión», en referencia al club de negocios fundado en San José en 1925, al lado del Banco Central, aunque el historiador David Díaz aclara que esa afirmación no era del todo cierta. Explica que desde el siglo XIX hubo parámetros que limitaban en parte la acción de las oligarquías y hacían de las elecciones verdaderas competencias entre grupos políticos, con necesidad de cabalgatas y recorridos por los pueblos para ganar su voto. Sí es cierto que la revolución a mitad del XX acabó de abrir las puertas al poder a nuevos estratos sociales con la visión de aplanar los privilegios heredados de las familias cafetaleras. «Se reforzó la visión del Estado y creció con cierto acuerdo con las élites, hasta la década de los 80», explica Díaz, en alusión al momento de crisis en que

entran en escena las políticas del Fondo Monetario Internacional y la globalización, los minerales del terreno para la atracción de inversiones extranjeras y para el surgimiento de la élite local que las maneja.

Ese Estado fuerte también aloja su propia élite económica, la de una capa de funcionarios que reciben salarios mensuales superiores a los 10.000 dólares, en ocasiones el doble del salario del Presidente, en instituciones públicas descentralizadas, gracias a los beneficios de los regímenes salariales del sector público forjados entre los gremios y los gobiernos de turno durante décadas. Estos sistemas salariales han llegado a ser un factor de la desigualdad social que creció en Costa Rica en los últimos 15 años, en contra de la tendencia general de América Latina. En proporción, en una muestra de 100 habitantes, los 10 de mayores ingresos reciben 25 veces lo que reciben los 10 de menores recursos, según el Informe Estado de la Nación del año 2019, pero las acciones de los sindicatos estatales han obstaculizado el ajuste hacia la baja de esos beneficios salariales, incluidos los de los funcionarios de sueldos millonarios situados en posiciones con capacidad de influencia sobre las acciones del gobierno central o de la Asamblea Legislativa.

«HAY QUE ANDAR CON CUIDADO»

Les llaman «el olimpo del sector público» con el mismo encono con el que desde otros flancos dicen «los nuevos ricos» a quienes manejan localmente la representación de las multinacionales y a empresarios como Carlos Cerdas, que han encontrado entre la burocracia el camino (riesgoso) para ascender alimentándose de los contratos con el Estado sin importar la bandera del gobierno. Se suman familias de origen judío que mantienen control sobre una parte de la banca privada y el sector financiero, además de las inversiones de este siglo de centroamericanos poderosos en el sector comercial que buscan la relativa estabilidad costarricense; pero la categoría «familia rica» suele reservarse para los

herederos de las fortunas de antaño. Las fortunas nacidas en los albores del negocio cafetalero o desarrolladas en el sector industrial durante la segunda mitad del siglo XX, aunque posteriormente hayan migrado a negocios más lucrativos como los financieros, el inmobiliario o el turismo, por el que se conoce a Costa Rica en el mundo.

También hay otros sectores con poder económico que se mueven distinto: las cooperativas financieras y empresarios de origen chino o sus descendientes con un perfil muy bajo pero fuertes operaciones en comercio y en hoteles de paso, además de grupos que manejan altas sumas de dólares procedentes del narcotráfico internacional y tratan de legitimarlo en distintas actividades, pues hay una tendencia hacia la formación de grupos locales que trabajan de manera directa con los mercados de la droga desde este país ubicado en una posición estratégica en mitad del continente.

Muchos de estos flujos de capitales se mezclan eventualmente y es cada vez más difícil señalar con nombres y apellidos a los miembros de las élites económicas del país, asegura Fernando Naranjo, un veterano empresario, excanciller de la República y exgerente del estatal Banco Nacional de Costa Rica, la entidad bancaria que domina el mercado local y que suele estar dirigida por nombres conocidos procedentes de grupos de poder económico. «Hace 50 años era fácil saber quiénes eran los ricos, al menos lo que aquí consideramos tales, porque en otros países de Centroamérica las proporciones son muy diferentes y, por tanto, el poder en la política también. La UCCAEP de aquí está muy lejos de tener el dominio que tiene la CACIF (Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras) en Guatemala», comenta.

El profesor Díaz suma a las diferencias: «La institucionalidad del Estado no ha dejado a las élites actuar como las mexicanas o guatemaltecas, pero cuando pueden sí lo hacen para no pagar impuestos, modificar legislación laboral... En otros países ha sido fácil porque ante una reacción popular se reprimía con el ejército, casi siempre muy ligado a

la política y a las familias ricas, pero en Costa Rica hay una democracia institucionalizada desde 1870. Eso contribuía a limitar la ambición de las élites. Hoy, el fenómeno es con élites que, aunque más diversificadas, tienen menos contrapesos o frenos y han logrado transformar algunos instrumentos jurídicos. Por eso se habla de la “centroamericanización”, al tratar de forzar la institucionalidad y abrir espacios para elementos autoritarios, aunque no tenemos acá un Ejército».

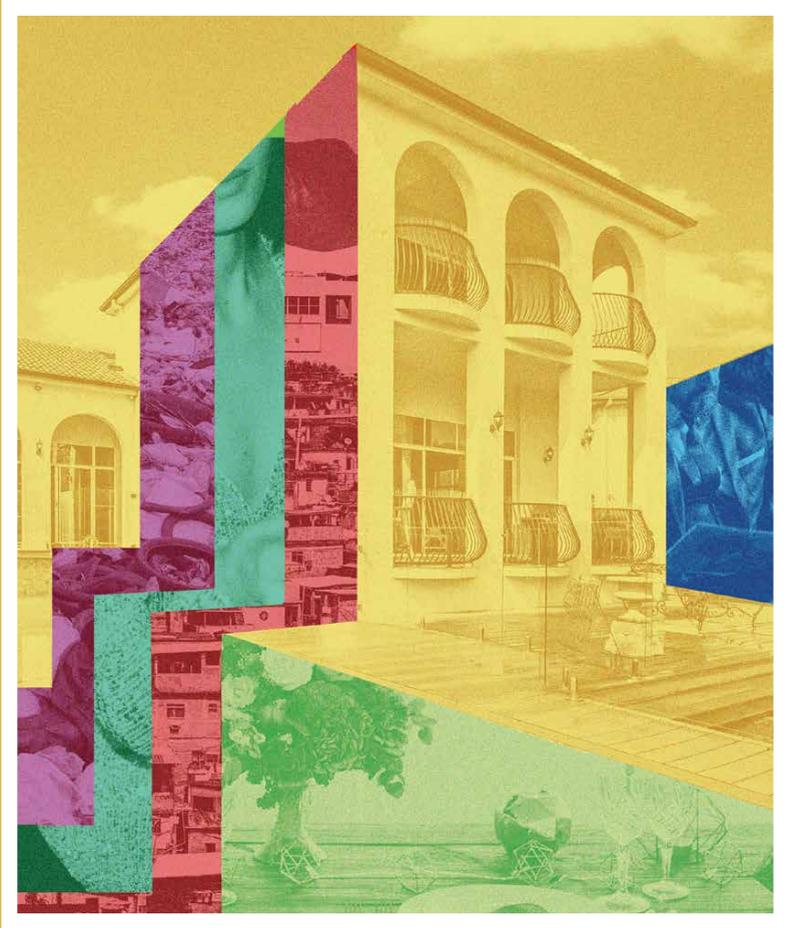
Lo hacen con un poder remanente o renovado, según qué sector, aunque de manera menos coordinada. Desde los años 80 se debilitó el músculo de los grupos tradicionales, ingresaron nuevas inversiones cuyo propietario puede que jamás haya venido a Costa Rica y los canales políticos usuales desaparecieron conforme los partidos perdieron su base social, señala el economista y catedrático universitario Leonardo Garnier, exministro de Planificación y de Educación en gobiernos del PLN. El Estado, sin embargo, sigue siendo determinante. «Los grupos de élite y en general la derecha necesita al Estado aunque les molesta el intervencionismo. Solo toleran la socialdemocracia si es la manera de evitar el comunismo. Es claro que las élites, en plural, siempre van a intentar controlar al Estado, aunque aquí a grandes rasgos responde a sectores medios y población en general. Es un pulso permanente.»

A veces la institucionalidad se activa y cambia el curso de las pretensiones de las élites. Pasó con el Poder Judicial al levantar el velo, de momento, sobre la corrupción en el multimillonario sector de la construcción, dominado por menos de cuatro empresas, con especial poder de Carlos Cerdas y Mélida Solís. Las repercusiones son fuertes y variadas, y seguro se mira también como una vuelta de rosca más a la tendencia de alteración del poder económico. Podría acelerarse la movilidad de capitales y abrir nuevas oportunidades a otros sectores; saben que los espacios vacíos no existen en la política ni en los negocios, menos en los tiempos revolucionados actuales.

«Hay que andar con más cuidado; se mueve el piso», dijo un joven empresario de la construcción que solía tomar jugosos subcontratos de MECO y que ha preferido el perfil bajo a pesar de su apellido con reconocimiento social. Una luz de advertencia más se ha encendido, aunque traten de disimularla en los círculos donde se mueven las familias de los adinerados, que suelen coincidir en espacios de ocio o educación, porque independientemente del origen de su riqueza piden a su chofer llevar al hijo adolescente para que pasen la tarde dentro de los muros del Country Club, en el adinerado cantón Escazú, en el costado oeste de la capital. Tampoco es requisito que los retratos de los antepasados estén en la galería de los exdirectivos del club, eso ha ido cambiando.

Se juntan en los colegios elitistas, sean el tradicional Lincoln o algunas opciones creadas en las últimas décadas para esa capa social, ahora que sus hijos no asisten más a la educación pública. Quizás se crucen en oficinas o comercios cerca de una zona llamada Lindora, donde está la única tienda de vehículos deportivos Maserati, o tal vez lo hagan esquiendo en Aspen o en su paseo anual por Europa. Con menos suerte, comparten médicos en el sistema privado, que ha crecido fuerte en este siglo, o en las páginas de esquelas, cada vez más escasas y exclusivas, de los periódicos.

ÉLITES SIN DESTINO LATAM



CHILE
Un retrato familiar

YASNA MUSSA

Reportera freelance en Latinoamérica. Ha trabajado como corresponsal internacional cubriendo desde Europa, Asia, Medio Oriente y Latinoamérica. Sus publicaciones se han registrado en medios como La Tercera (Chile), El Desconcierto (Chile), El Comercio (Perú), Etiqueta Negra (Perú), The New York Times en español, Vice (México) y El Espectador (Colombia). Actualmente es corresponsal de Radio France Internationale en Chile y reportera freelance para medios nacionales e internacionales. También ha dictado talleres online y presenciales para organismos y medios internacionales. Es cofundadora y editora de Revista Late.

En la mitad de la ciudad se erige un muro que no se ve. Un hilo invisible que segrega el espacio y deja en evidencia, a grandes rasgos, dos realidades donde cambian los colores, los tonos, los modos, las entonaciones, los sonidos e incluso, el aire. Podría ser cualquier ciudad en cualquier lugar del mundo, pero es Santiago de Chile, un país tan centralizado que para intentar explicar cómo se mueven sus élites es necesario escribir este texto justamente desde la capital.

Hay quienes asocian esta ciudad al acceso: aquí se instalan los mejores colegios, las principales universidades, los hospitales y clínicas con más altos estándares; las tiendas de lujo y de objetos extraños; aquí se hacen los estrenos de teatro, de cine y conciertos; se ubican también las principales oficinas donde funciona la burocracia, donde se firman documentos importantes o donde se tramitan las visas; en Santiago se encuentra el único sistema de metro con 6 líneas que conectan la ciudad; el aeropuerto internacional desde y para todos los destinos y los grandes centros comerciales. Además, esta es la ciudad con más ciclovías; donde se encuentran las principales librerías; la mayoría de los museos, exposiciones y se realizan casi todos los eventos culturales y congresos. Aquí también vive, en un delimitado perímetro, la gente más rica del país. Coinciden en los mismos barrios, concentrados en un área pequeña, los tomadores de decisiones, aquellos que ocupan los grandes cargos en el mundo de la cultura, en la economía y la política.

Tanto el propietario de una gran mina de cobre en el norte del país como el de una hidroeléctrica en el sur, al otro extremo de Chile, fijan su residencia en el centro, en una de las tres comunas más ricas de Santiago: Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. Allí, en pocos kilómetros cuadrados se concentra un grupo selecto y minoritario de personas. Del otro lado, todo lo demás.

Santiago se sostiene por sus opuestos. Podrían ser dos países en dos continentes muy distintos, pero basta tomar la línea 1 del metro para recorrer el subsuelo de extremo a extremo y ver las dos realidades, sus

colores, sus tonos, los modos, las entonaciones, los sonidos y, sobre todo, respirar la diferencia. De un lado hay una ciudad gris, mientras que del otro sus habitantes tendrán 4 veces más acceso a áreas verdes.

Barrio alto, como se llama coloquialmente a este sector, es una descripción geográfica pero también literal. La cercanía con la cordillera de Los Andes, la cantidad de metros sobre el nivel del mar, es también sinónimo de status, de altura social. Podría ser una ciudad europea, pero es la misma capital del sur global en uno de los 3 países más desiguales de Latinoamérica (junto a México y Colombia). Desde que Chile es Chile, el centro se impuso como núcleo indivisible en el que los ricos se segregan voluntariamente, las clases medias se instalan dónde pueden y los pobres donde los dejen.

Ya a fines de los 60 y principio de los 70, el cantautor chileno Víctor Jara retrataba las diferencias sociales en una canción que más allá del tono caricaturesco reflejaba un «ellos» y un «nosotros» marcado por la clase. Jara tomó la canción de la estadounidense Malvina Reynolds, titulada *Little boxes* en inglés, y la adaptó a su propia versión local a la que tituló de manera lúdica como *Las casitas del Barrio Alto*.

*Las casitas del Barrio Alto
con rejas y antejardín,
una preciosa entrada de autos
esperando un Peugeot.
Hay rosadas, verdecitas,
blanquitas y celestitas,
las casitas del Barrio Alto
todas hechas con resipol.*

—El 4 por ciento más rico de Chile vive como el 4 por ciento más rico de Alemania y el 20 por ciento más pobre, vive como el 20 por ciento más pobre de Mongolia—, me dirá después Hassan Akram, un académico de

la escuela de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales y director de la sede chilena de la universidad norteamericana Wake Forest.

Una de las cosas que más le ha llamado la atención a este economista británico ha sido la costumbre que tienen los chilenos de acompañar un primer encuentro social con la inusual pregunta: ¿en qué colegio estudiaste?

—Es fuera de todo lugar — dice Akram con un gesto incrédulo—. Y esa forma de ubicarse desde la educación primaria y secundaria es una cosa de una sociedad muy chica, donde son muy reducidos los puestos de poder y el grupo que accede a ellos es también muy reducido.

*Y las gentes de las casitas
se sonríen y se visitan.
Van al supermarket
y todos tienen televisor.
Hay dentistas, comerciantes,
latifundistas y traficantes,
abogados y rentistas.
Y todos visten poligrón,
juegan bridge, toman Martini-dry.
Y los niños son rubiecitos
van juntitos al colegio high.*

LA FAMILIA

La mañana en que Miguel Juan Sebastián Piñera Echeñique abandonaba la idea de nombrar a su hermano Pablo como embajador de Chile en Argentina, en abril de 2018, no tenía cómo imaginar que ese error político sería apenas un impasse comparado con los que vendrían. Un año

y 6 meses después buena parte del país que comenzaba a dirigir por segunda vez estaría en medio del caos. Tampoco había cómo adivinar que muy cerca de su oficina en el palacio La Moneda habría barricadas que llenarían de humo el corazón de la ciudad y la volverían gris por meses. Mucho menos que varias líneas del metro serían quemadas, tendría que suspender dos eventos mundiales en los que Chile sería anfitrión (COP25 y APEC) o que el ministro del Interior y seguridad Pública, su primo hermano Andrés Chadwick Piñera, enfrentaría una acusación constitucional por su responsabilidad política en violaciones a los Derechos Humanos y el Estado de emergencia. Tampoco que Magdalena Diaz, hija de uno de los mejores amigos de Piñera y embajadora de Chile en ese momento en Portugal, protagonizaría un escándalo al llamar al dueño de un canal de televisión y quejarse por el contenido crítico hacia el gobierno.

Miguel Juan Sebastián Piñera Echeñique, a quien siempre han llamado por su tercer nombre, es uno de los hombres más ricos del país, quien tiene en sus ministerios a miembros de una élite que se conoce bien. Hay matrimonios cruzados, hijos que fueron compañeros de colegio o universidad; que veranean en las mismas playas, coinciden los domingos en la iglesia o van al mismo club social. Son hermanos, primos, tíos, cuñados y amigos cercanos. Una foto oficial del gobierno podría perfectamente ser un retrato familiar en el salón de sus casas. Y aunque algunos culpan a la poca población que habita este territorio, lo cierto es que la endogamia aparece como un sello distintivo que caracteriza a las clases altas e influyentes del país, donde el nepotismo y recurrir al árbol genealógico pareció por mucho tiempo una actitud inevitable que se fue naturalizando. Pero sobre todo, no es patrimonio exclusivo de ningún color político, sino más bien un rasgo transversal.

Un ejemplo: Fernanda Bachelet Coto, una ingeniera sin estudios de posgrado ni mucha experiencia laboral, fue designada por Piñera en octubre de 2018 como jefa de la oficina comercial de Chile en Nueva York, Estados Unidos. Con un salario sobre los 10 millones de pesos (unos 13 mil dólares), Bachelet Coto fue, sin proponérselo, la muestra

más representativa de las relaciones que se tejen desde la cuna: Ricardo Bachelet Artigues, amigo de juventud del presidente y antiguo socio en CMB Inversiones, es también primo en segundo grado de la ex presidenta socialista Michelle Bachelet.

Si la élite chilena fuese un puzzle podría hacer encajar las piezas y colores más disímiles. Piñera y Bachelet —o la derecha y la izquierda; el conservadurismo y el progresismo; el catolicismo y ateísmo— no solo tienen en común haber llegado a gobernar el país en dos ocasiones de manera intercalada. Antes de ese zigzag político, cuando aún no llegaban a La Moneda, sus vidas ya coincidían a unos 900 kilómetros al sur de Santiago, frente al lago Caburgua, donde ambos pasaban sus vacaciones de verano en 2005. En una foto que cada tanto reaparece en Internet, Piñera y Bachelet posan destartalados, bronceados, sonriendo a la cámara de manera familiar.

La gracia de ser un país tan joven — con apenas dos siglos — es que la tradición es un concepto más bien subjetivo. En esta nación de tierras fértiles y viñedos, tener ciertos apellidos de origen europeo funciona como una tarjeta de presentación o credencial para acceder directo a cierto escalafón. Más tarde, pese a la resistencia y discriminación, fueron las nuevas generaciones de hijos y nietos de migrantes árabes —palestinos, sirios y libaneses principalmente—, quienes accedieron a los mismos círculos que por décadas les fueron ajenos. Consiguieron las llaves de un club cerrado al que se ingresa por invitación y que cada unos 50 años redefine sus exigencias.

—Se llama integración horizontal entre las élites— me dice una tarde de agosto el sociólogo Cristóbal Rovira— Si yo tengo una sociedad donde la integración horizontal es perfecta, todas las élites se conocen entre sí. Puede que esas élites puedan hacer un montón de cosas, pero van a tener como déficit que no tienen ninguna conexión con la sociedad o viceversa.

La charla comienza con una confesión: «Yo también soy bastante élite, en el sentido que vivo con la clase media alta, mando a mi hijo a un colegio privado, etcétera», dice Rovira, adelantando que sus comentarios se ajustan a las investigaciones que realiza desde el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES). Luego Rovira explicará con una voz grave y un ritmo enérgico, algo acelerado, que en Chile existen vasos comunicantes que permiten que alguien que conoce a Pepito, que fue a la misma universidad o colegio, lo pueda llamar y poner en contacto con el rector de una universidad o con un empresario. Algo como lo que le pasó a Bachelet Coto. Pero falta enraizamiento con la sociedad.

La gran mayoría de las cúpulas empresariales, políticas y culturales provienen de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad de Chile, ambas en Santiago. Se pueden contar con los dedos la mayoría de los colegios privados —y uno que otro público y de excelencia— donde estudiaron. Gran parte de quienes han intentado perpetuar el modelo económico y social, como de quienes se han esforzado por cambiarlo, han tenido como punto en común el acceso a un nivel de educación y ciertos círculos intelectuales y sociales que todavía son patrimonio de un porcentaje ínfimo de la población.

Salvador Allende, quien intentó liderar un proyecto popular siendo el primer presidente socialista elegido democráticamente en el mundo, fue un médico descendiente de una familia de migrantes vascos, masón como su padre y abuelo, y que realizó sus estudios en la Universidad de Chile.

El caso de Miguel Enríquez, el líder y fundador del Movimiento de Izquierda Revolucionario, quien murió en un enfrentamiento armado en plena dictadura, no fue muy distinto. Otra vez: médico, hijo del rector de la Universidad de Concepción —la segunda ciudad más grande del país— y ministro de Educación del gobierno de Allende; sobrino de dos senadores de la República.

Cinco décadas después, su hijo Marco Enríquez-Ominami es uno de los protagonistas de la política y la farándula actual. A diferencia de su padre y lejos de la vía armada, Enríquez-Ominami es un cineasta socialdemócrata que estuvo exiliado en Francia y que al volver continuó sus estudios en la Alianza Francesa de Santiago y el Saint George's College, dos de los colegios privados más caros del país, de esos que se cuentan con los dedos de las manos y que tienen entre sus ex alumnos a ministros, subsecretarios y parlamentarios. En noviembre próximo aparecerá por cuarta vez en una papeleta de una elección presidencial¹². También vive cerca de la cordillera, en el oriente de Santiago, en una de las tres comunas con el metro cuadrado más caro, según el mercado inmobiliario, o en una de las casitas del barrio alto, según la canción de Víctor Jara.

Cuando Rovira habla de la integración horizontal también se refiere a esto. El sociólogo trabajó junto a su equipo por más de un año en una investigación, cuyo informe se publicó en marzo de 2021. Entrevistaron a cientos de miembros de la élite local para conocer sus gustos, preferencias y conexiones. El perfil que entregó el COES es preciso: individuos que ocupan los máximos puestos de poder en la sociedad y, por tanto, ejercen influencia constante y sustancial sobre las decisiones que afectan el funcionamiento de la sociedad.

De los resultados le llamó la atención un detalle no menor: el drástico declive de la educación pública en las trayectorias familiares de los miembros de las élites. Si Miguel Enríquez y la mitad de sus coetáneos fueron a la escuela pública, el acceso a estos establecimientos educacionales se reduce cerca de la mitad al revisar los colegios a los que fueron las élites actuales, como es el caso de su hijo y actual candidato presidencial. Pero las cifras van más allá y demuestran que casi

¹² Gabriel Osorio salió electo el 19 de diciembre de 2022. Boric era un diputado de 35 años y antiguo líder estudiantil que se define como ecologista y feminista.

desaparecen al observar dónde estudia la generación de los nietos del líder revolucionario. El 87% de los encuestados tienen a sus hijos en colegios privados.

Si hace 5 generaciones era común coincidir en un salón de clases con el hijo de un obrero, de una dueña de casa, de una profesora o un jardinero, en 2021 menos del 25 por ciento de las élites de Santiago cruzarán ese muro invisible que corta la ciudad. Las otras posibilidades han sido el azar, la excelencia académica, algún contacto o una oportunidad que se quedó en la excepción que confirma la regla y que ayudó a promocionar el concepto de la meritocracia.

LA RABIA

Antes de que el país que conocíamos dejase de existir, algunos miembros de la élites económicas y políticas dijeron frases como: «El que madruga será ayudado... De manera que alguien que sale más temprano y toma el metro a las 7 de la mañana tiene la posibilidad de una tarifa más baja que la de hoy. Ahí se ha abierto un espacio para que quien madrugue pueda ser ayudado con una tarifa más baja». O: «Los pacientes siempre quieren ir temprano a un consultorio, algunos de ellos, porque no solamente van a ver al médico, sino que es su elemento social, de reunión social». O: «Es un debate transversal, sobre todo en un país donde la gran mayoría son o somos propietarios, no tenemos mucho más, porque es nuestro patrimonio... la casita, dos departamentos». O: «Todos los días recibo reclamos de gente que quiere que el Ministerio le arregle el techo de un colegio que tiene gotera, o una sala de clases que tiene el piso malo. Y yo me pregunto, ¿y por qué no hacen un bingo? ¿Por qué desde Santiago tengo que ir a arreglar el techo de un gimnasio? Y quizá la más significativa, por lo que pasaría 10 días después: «En medio de esta América Latina convulsionada veamos a Chile, es un verdadero oasis, con una democracia estable, el país está creciendo».

En un país donde el billete de metro cuesta lo mismo que en Francia, pero el sueldo mínimo es 4 veces menor; que tiene uno de los sistemas de salud más precarizados y privatizados, donde la gente tiene que realizar a menudo un bingo para costear tratamientos contra el cáncer o para mejorar la infraestructura de una escuela pública, donde buena parte de la población no logra llegar a fin de mes por causa de las deudas y uno de cada tres no cuenta con casa propia y sobre todo, donde gran parte de la población está endeudada, la ausencia de tino era un síntoma de una enfermedad mayor.

Los autores de estas palabras tenían varios puntos en común: eran hombres, de clase alta, con cargos de poder, todos miembros del segundo gobierno de la alianza de derecha Chile Vamos. Un ministro de Economía, un subsecretario de Redes Asistenciales, un ministro de Vivienda y Urbanismo, un ministro de Educación. Y, por último, el presidente de la República.

—¿Cuál es el problema de esta élite?— se pregunta Rovira— Está muy desconectada. No tiene integración vertical. Y eso es lo que el estallido social dejó en absoluta evidencia: que cuando estas élites están tan desconectadas de la realidad generan una serie de problemas de gobernabilidad.

10 días (18 de octubre del 2019) después de que Piñera demostrara que vive en un país distinto al de otros 17 millones de personas, vino el estallido.

Nadie sabe a ciencia cierta cuál fue el tiro de gracia que terminó con un país a cuyas heridas no se le prestaba mucha atención. Desde fuera o con distancia se repetían frases hechas que colaboraron a la creación de un mito que la élite se contó a sí misma: Chile, un país latinoamericano comparable a Suiza o Inglaterra.

Quienes tenían claro que se trataba de un mito eran los trabajadores que debían salir temprano para cruzar la ciudad y sabían que

madrugar no los ayudaría. También los ancianos que salían antes que el sol para conseguir un cupo en el consultorio médico, no para charlar en un club social. Por supuesto, también lo sabía ese extenso grupo de profesionales que pese a haber estudiado —endeudándose por 15 o 30 años — sigue viviendo en casas rentadas, compartiendo techo con amigos, porque pensar en una casa propia está lejos de ser una realidad. Lo tenían claro los estudiantes que llevan años saliendo a marchar para pedir educación de calidad y tener salas de clases dignas, por donde no se cuele la lluvia o el frío en cada invierno. Pero sobre todo la gran mayoría de la población, que sabe que Chile puede ser muchas cosas pero en ningún caso el oasis que describía el presidente.

Lo cierto es que la ministra de Transporte anunció 30 pesos de aumento en el billete de metro y que un día un puñado de estudiantes se saltó un torniquete y evadió el pasaje para protestar y que luego se sumaron otros y que con celular en mano la imagen se viralizó y cada día se multiplicaban y que el jumper no fue impedimento para que las chicas saltasen la barrera y corrieran hacia el tren y que señoras se entusiasmaran y se contagiaron de rebeldía y hubo abuelos que dijeron que estaba bien, qué los jóvenes tenían razón, que hasta cuándo el abuso y las pensiones miserables y que lo que dijo el ministro o más bien, los ministros, era inaceptable. Y así, sin que nadie supiera bien quién o cuándo se comenzó a prender cada esquina y las calles se llenaron y 16 días después de que el presidente dijera que este país es un oasis fue la marcha más grande de Chile y solo en Santiago 2 millones de personas se juntaron en ese punto que divide dos mundos y por unas horas el muro invisible en medio de la ciudad dejó de existir.

EL CUERPO

Es la tarde de un jueves de julio y en los jardines del ex Congreso Nacional, en el centro histórico de Santiago, hay un movimiento inusual. Ha

pasado un poco más de una semana desde que se instaló la Convención Constitucional. Un salto en *el tiempo* desde el 18 de octubre de 2019, cuando todo comenzó. Luego de eso vinieron meses en las calles, represión, más de 400 personas con daños oculares, muertos, presos, incendios, desmanes, robos, renunciaciones, acusaciones, más humo, una *performance feminista* que se viralizó, más marchas, muros pintados, un monumento rayado, re pintado y, finalmente, retirado de la llamada zona cero hacia rumbo desconocido.

La pandemia mundial llegó a Chile y en medio del encierro se organizó un plebiscito para saber si era cierto que la ciudadanía quería terminar con una Constitución heredada de Augusto Pinochet, escrita por una comisión elegida de manera arbitraria, por hombres que se encerraron entre cuatro paredes, y definieron el destino de su país por las próximas cuatro décadas. La opción Apruebo, que respaldaba la idea de una nueva Carta Magna arrasó con el 78,27 por ciento de los votos. El rechazo ganó en las tres comunas más ricas del país.

—En el estallido se notaba una rabia profunda contra algo— dice Hassan Akram— Una rabia contra el modelo, contra los abusos.

El economista mira con la distancia que le concede el poco más de año y medio que ha pasado en este recorrido que comenzó en las calles. Recuerda los resultados de una encuesta que por esos días realizó la Universidad de Chile en la que un 85,8 por ciento de la gente a quienes se les consultó apoyaba al movimiento social y un número similar respaldó avanzar hacia una nueva Constitución, además de manifestar un apoyo transversal a reformas a los sistemas de pensiones, salud y educación.

De esos días aún quedan presos en las cárceles. Por eso en esta tarde de invierno algunas de las 155 personas que conforman la Convención Constitucional se pasean inquietas por los jardines de este edificio que dejó de funcionar cuando Pinochet trasladó el Congreso a Valparaíso como una señal de descentralización que solo se quedó

en el gesto. Un grupo de familiares de esos manifestantes que reclaman ser presos políticos ha sido detenido en las cercanías de donde funciona la Convención exigiendo la liberación de sus hijos, hermanos, sobrinos y esposos. También han arrestado a varios de los constituyentes y el vicepresidente de la Convención, el abogado constitucionalista Jaime Bassa ha tenido que interceder y recordarle a la policía que sus pares cuentan con un fuero especial.

La escena en sí era impensada hace apenas un par de años. Las elecciones en que se eligió a estos representantes que redactarán la nueva Constitución reafirmaron el síntoma: fue el fracaso de los partidos políticos tradicionales y el triunfo de independientes, de gente común, sin apellidos aristocráticos, pertenecientes a pueblos indígenas, pieles morenas, personas comunes que estaban en las calles, en las plazas o en sus centros sociales luchando y participando colectivamente. Es simbólico.

—Lo simbólico es tremendamente importante, sobre todo cuando se habla de una Constitución— dice Akram mientras abre los ojos recordando entusiasta— porque una Constitución no es un programa de política pública. No son cambios concretos. La Constitución es la estructura para después hacer nuevas leyes, la estructura para después hacer cambios. Entonces, esta es una etapa previa, es una etapa precisamente de sentar las reglas y, por ende, es una etapa simbólica, y la importancia de ser la primera Constitución en la historia de la humanidad con paridad de género y, además, con un país que nunca ha aceptado su plurinacionalidad, tener una mujer mapuche hablando mapuzugún y las distintas otras lenguas de Chile. Todo eso va hablando de un contexto distinto.

Hassan Akram se refiere a la elección de Elisa Loncón, una de las representantes mapuche en uno de los 17 escaños reservados para pueblos originarios, como presidenta de la Convención. El día que los convencionales juraron, las autoridades del gobierno organizaron un acto en el frontis del palacio para seguir los protocolos sanitarios por

la COVID-19. Cuando las imágenes son tan obvias no queda mucho por explicar: por primera vez un órgano político representativo se parecía tanto a su pueblo. Había una diversidad inusual que hacía parecer distintos a los que siempre fueron la regla. En un rincón, amontonados, atónitos, la élite política tradicional observaba el acto destartalado, colorido, inusual en un país donde el clasismo ha sido determinante para definir gustos, nombres, espacios y posiciones.

Quizá es demasiado pronto para afirmarlo, pero que la líder de los 155 sea una mujer, de origen pobre, de una región golpeada por la violencia de Estado, representante de un pueblo que ha sufrido el despojo y la humillación, y donde además ha sido la aristocracia la que los ubicó por décadas en posiciones que miró con desdén, ha sido quizá la reivindicación popular más grande de un país que aún se burla del acento campesino indígena y corrige a los niños y niñas que tímidamente pronuncian una palabra en su lengua materna en vez de hacerlo en castellano. Pero además, una mujer que es lo que siempre la élite celebró: la excepción. El éxito de la meritocracia.

Elisa Loncón, una profesora de inglés, que tiene doble doctorado en Lingüística y Humanidades y es académica de la Universidad Católica y la Universidad de Santiago de Chile, fue electa por 96 votos para liderar la directiva de la Convención. Su presencia en el escenario, con una voz suave, portando su tradicional vestimenta, usando *el tiempo* a un ritmo que no acostumbramos, ha marcado un hito en los espacios de poder.

Cada vez que la políglota Loncón pronuncia palabras en mapuzugun hay reacciones. Convencionales de la élite tradicional y elegidas en las comunas donde ganó el rechazo, como Teresa Marinovic, se irritan y alegan que el castellano es la lengua común, que paren el show, que hasta cuándo.

Loncón tiene la paciencia de quien ha tenido que lidiar toda una vida con una sociedad que la pone a prueba. Cuando le disparan odio,

racismo y clasismo, ella responde reivindicando la ternura y, de paso, incorporando un vocabulario que la mayoría desconoce.

—Quiero poner el énfasis en el *pojewn*, es el amor y es la base para poder entendernos, comprendernos, escucharnos. La invitación que hace mi pueblo y que siempre hicieron mientras yo crecía, mientras nosotros hemos sido agredidos, siempre me dijeron: «El *pojewn*, hija»— decía Loncón con la mirada atenta de Jaime Bassa y el silencio de la asamblea—. Con el amor es posible vencer el odio, es posible generar esperanza, es posible armar un futuro. Y la verdad es que yo, sentándome aquí, en este hemiciclo, como presidenta de esta Convención, llamo a todos los convencionales a hablar desde ese amor. Somos seres humanos, tenemos los mismos derechos y con ese amor yo creo que vamos a aceptar que somos diferentes, porque no somos iguales, porque hay identidades diferentes en todas las casas.

Solo el aplauso rotundo la interrumpió. Uno a uno, los convencionales se fueron poniendo de pie para continuar la ovación.

María Luisa Méndez está emocionada. Dice que está encantada con lo que ve en este proceso. La directora de COES me recibe en el campus Lo Contador de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Esta sede de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos está ubicada en una casona colonial que hoy es considerada Monumento Nacional y que da la impresión de estar en medio de una zona rural y no en Providencia, una comuna donde habita la clase media alta, llena de cafés *hipsters* y bares de moda.

Es un día lluvioso de agosto y el campus está vacío. La pandemia ha limitado al máximo las clases presenciales y el amplio patio de naranjos cargados huele a tierra mojada y humedad. María Luisa, profesora asociada del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de esta universidad, dice que la Constituyente es un proceso político-cultural y se manifiestan las tensiones que existen entre las mismas élites.

Méndez mira a su alrededor y piensa en esta facultad como un ejemplo de su estudio actual, en el que observa cómo en torno a la esfera económica también hay una esfera cultural que convive en espacios como este, donde hay una producción de identidad, una producción simbólica sobre el arte, sobre la belleza, sobre cuestiones estéticas y que van de la mano con un sector económico que trata de disputar ese valor.

De pronto, la Convención aparece como remolino que mezcla y desarma el orden que hasta ahora se aceptaba como establecido. En la presidencia de Loncón, Méndez ve que se cierra un ciclo.

—Hay una parte que la mayoría de la población esperaba —dice Méndez— y es que se destrabara esta hegemonía política, económica, cultural y que pudiesen efectivamente emerger las voces, las demandas y el sentir de posiciones que habían estado históricamente excluidas. Revertir esta cosa sombría que tuvimos durante tanto tiempo en el país como teniendo que responder a esta idea del éxito del país ordenado, del país modelo y, en realidad, poniendo bajo la alfombra todo este sufrimiento cotidiano de deuda, de maltrato, de sufrimiento físico y ambiental.

Elisa Loncón resalta en el escenario, rodeada por tres hombres vestidos de oscuro. Su vestimenta tradicional mapuche captura la atención pero además contrasta con el enorme lienzo que cuelga sobre su cabeza. *Descubrimiento de Chile por Diego de Almagro* es el nombre del cuadro pintado por Pedro Subercaseaux, en el que aparece glorioso sobre su caballo el conquistador español, considerado el primero en llegar al país, rodeado de indígenas y soldados. El pasado es una imagen estática y el presente es movimiento.

Pero no solo hay un contenido simbólico sino también popular. Un contenido que incomoda incluso a cierta vanguardia presente entre los 155. Una élite de «avanzada cultural», podríamos decir. Méndez lo ve como una situación paradójica. «Uno pensaría», me dice, «que al tener una visión más progresista estarían más preparados incluso para convivir con un

entorno efectivamente diverso. Pero también veo una dificultad porque son un grupo que se preparó para tener esa posición de liderazgo dentro de un progresismo que se mira a sí mismo. En realidad, no es progresismo para el resto de la población, sino que dentro de la élite y que cuando irrumpen otras fuerzas su posición simbólica se ve mermada».

Como cuando en el salón principal del ex Congreso Nacional aparecieron Pikachú y un dinosaurio azul. Bajo los disfraces figuraban dos convencionales: Giovanna Grandón y Cristóbal Andrade. La tía Pikachú, como se le conoció popularmente durante la revuelta social, trabajaba como transportista escolar junto a su marido cuando decidió sumarse a las manifestaciones con el traje amarillo que encargó por AliExpress para subir el ánimo en las calles. Luego continuó apareciendo en barrios pobres de Santiago, participando en ollas comunes donde se le reparte comida a los vecinos que no tienen. Fue un fenómeno. Su nombre sonó como candidata a la Convención y junto a un cupo de una recién nacida organización llamada la Lista del Pueblo consiguió un escaño. Por eso un día de julio, cuando la Convención aún no tenía un mes de existencia, apareció con su traje amarillo.

—Durante el receso (hora de almuerzo) hicimos este gesto porque muchísima gente me lo había pedido como símbolo de que el Pueblo y el 18 de Octubre están dentro de la Convención— dijo la tía Pikachú cuando algunos criticaron la inusual *performance*.

Méndez sonrío. Recuerda la imagen: un personaje de animé y un dinosaurio desconcertando a todos a su alrededor. Llegan con sus cuerpos —me dice ahora con una actitud seria—. Llegan con estos corpóreos. Llegan con todo este simbolismo y con su urgencia encarnada físicamente, corporalmente. Nadie más puede arrogarse la urgencia de ese cuerpo.

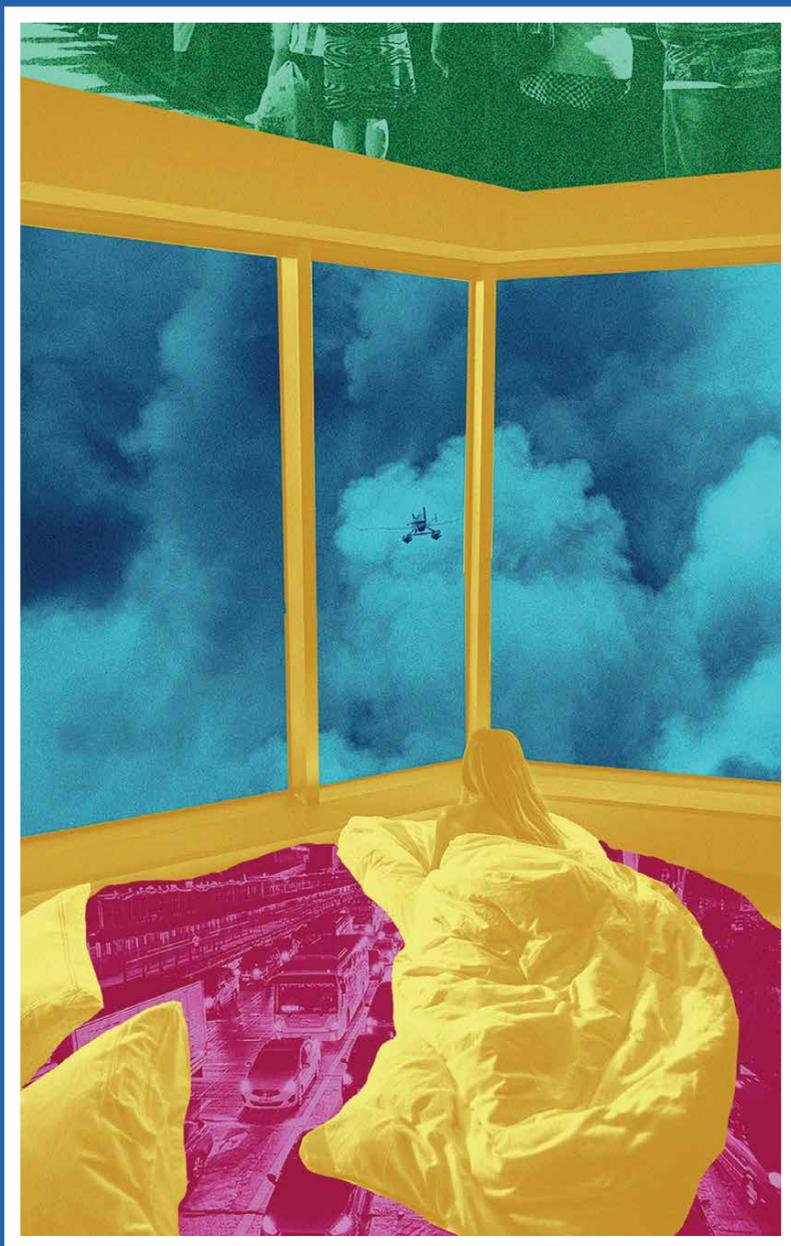
El día que la Convención Constitucional cumplió un mes de funcionamiento, la presidenta y el vicepresidente se pararon frente a la prensa que esperaba expectante sus impresiones. Una periodista les

preguntó: si cada uno tuviese que elegir una palabra para describir este primer mes ¿qué elegirían?

Loncón le dio la palabra a Bassa, quien algo sorprendido por la solicitud respondió amable y sonriente destacando la democracia y el rol de institucionalizar el proceso. Cuando fue el turno de la presidenta, Elisa Loncón prefirió salir de los tecnicismos.

—Yo pongo también algo del corazón y ya también he hablado de la ternura. Y tomado también de la poesía de nuestro Premio Nacional de Literatura, Elicura Chihuailaf, y él habla de la ternura de la hermosa morenidad. Aquí está instalada la hermosa morenidad desde el norte de Chile hacia el sur. Y con esa hermosa morenidad estamos soñando para dar a este país una Constitución que sea de todas, de todes y de todas las diversidades, y la ternura es también para los niños que están soñando. Porque hemos tenido reportes de niños que quieren ver un trabajo y un Chile distinto. .

ÉLITES SIN DESTINO LATAM



URUGUAY
*El sello uruguayo:
tradición y lentitud*

MATHÍAS DA SILVA

Periodista especializado en economía con 10 años de trayectoria en medios de comunicación. Actual coeditor de la sección política de La Diaria e integrante del suplemento de economía. Experiencia previa en el diario El País, radio Monte Carlo y Unoticias. Participó desde Uruguay como coautor de la investigación regional que ganó en 2020 el premio Ortega y Gasset como mejor historia investigativa.

La idiosincrasia uruguaya calza a medida con la idea de la clase media, aspiración común entre los nacidos en estas tierras. Entre una población de 3,3 millones, solo un 4% se autopercibía dentro de la clase alta, según una encuesta de Latinobarómetro en 2016, y un informe del gobierno en 2018 —del Frente Amplio, hoy oposición— planteaba que el 75% de la población era clase media, según un criterio monetario del Banco Mundial. Uruguay es un país en que los hogares de bajos ingresos aspiran al confort de los sectores medios, y los ricos buscan el reconocimiento social que ostenta el pequeño empresario de clase media.

«En Uruguay no hay ricos, hay riquitos», es una frase que inmortalizó hace varios años un pintoresco banquero y hombre de negocios, José Pedro Damiani, que cobró popularidad por haber presidido por 15 años al Club Atlético Peñarol. Su verdad ha sido refutada por diversas fuentes de información, y su figura podría representar varias de las características de las clases altas: la subestimación de la riqueza que poseen, un perfil público —solo en los casos que no tienen otra alternativa— que no busca ostentar, la formación de negocios dentro de los círculos de las élites y el linaje familiar. Su hijo, Juan Pedro Damiani, no solo heredó y expandió los negocios financieros, sino que también presidió Peñarol por 11 años.

Los trabajos más recientes que recopilaron información de registros financieros, del fisco y de encuestas oficiales de ingresos muestran que existe un selecto grupo de personas que forman parte de la élite económica del país. Un 14% de la riqueza —como mínimo— está en manos de unos 2.500 uruguayos, esto es, el 0,1% de la población, y unos 120 compatriotas lograron el mote de «ultraricos» según un reporte financiero internacional, al poseer un patrimonio mayor a los 30 millones de dólares.

Esto echa luz sobre que sí hay ricos en Uruguay, y que esa bonanza está muy concentrada en pequeños segmentos de la población de un país ya de por sí pequeño. Eso podría explicar, sumado a ciertas

particularidades comunes en la personalidad de los nacidos en estas tierras, que los nombres de las familias ricas no sean los que más aparecen en las noticias y que gocen en su gran mayoría de un bajo perfil.

Así y todo se pueden esbozar algunas características de la élite local, como que sus ingresos surgen de activos financieros y en menor medida de las utilidades empresariales, ya que son familias que han sido o son propietarias de negocios en sectores claves de la economía, históricamente ubicados dentro de la cadena agroexportadora. También que el poder económico está fuertemente sustentado en las herencias, factor que frena la movilidad social descendente, y que la presencia femenina en los puestos de poder empresarial suele ser testimonial. A su vez, hay una parte que llegó a integrar este grupo debido a los ingresos salariales que reciben, principalmente profesionales médicos.

Más desde el plano antropológico, se puede mencionar que las familias ricas de Uruguay viven en zonas costeras y desde inicios del siglo han comenzado a volcarse a barrios privados; que en el verano suelen trasladarse hacia su segunda residencia en Punta del Este, balneario predilecto también del jet set argentino; que se mueven en pequeños círculos sociales y replican actividades típicas de las clases ricas como la práctica de golf o la colección de automóviles clásicos; y que si bien tienen contacto asiduo con el poder político, prefieren en mayor medida mantenerse por fuera y no comprometerse activamente.

EL CAMPO, DEL PODER MATERIAL AL SIMBÓLICO

El primer paso para definir a una élite es establecer un umbral que la delimite, una tarea en cierto modo arbitraria, según el investigador Mauricio De Rosa, del Instituto de Economía de la Universidad de

la República, que se dedica a estudiar sobre la concentración de la riqueza en Uruguay. Sin embargo, explicó que al observar los niveles de ingreso de la población queda en evidencia que hay un grupo selecto: «Encontramos desigualdad a lo largo de toda la distribución, pero el incremento es bastante paulatino, es decir, al dividir a la población por centiles hay pequeñas diferencias entre el centil 55 y 56, o el 96 y 97. El salto grande se da cuando paso del 99 al 100 [esto es el 1% más rico] y de ahí surge un problema de percepción, porque se suele creer que las élites son simplemente un conjunto de individuos con un poco más de ingresos que el resto, pero no es así, ocurre un salto muy sustantivo».

En promedio, estas personas perciben unos 15.000 dólares mensuales, monto que multiplica por 35 el salario mínimo nacional y por ejemplo permitiría comprarse un auto cero kilómetros de marcas tradicionales como Fiat, Chevrolet o Volkswagen; o al término de seis meses un apartamento de un dormitorio en un barrio típico de Montevideo.

En base al análisis de datos anonimizados del fisco sobre el pago del impuesto a la renta, De Rosa remarcó que resulta muy diferente la fuente de ingresos de la élite, que concentra las rentas de capital financiero. «Incluso dentro del tramo más rico del 99% [que no pertenece a la élite] los ingresos por rendimiento de capital no llegan al 5% del total. En el 1% eso salta al 40% y en el 0,1% más rico llega al 70%», expresó. Pero, además, es común que este grupo de personas también tenga ingresos salariales y cobre utilidades empresariales, formando una renta mixta, siendo un caso típico el de un gerente de una empresa con alta remuneración que además recibe dividendos de esa u otra compañía y tiene otras inversiones.

Dentro de las rentas de capital aparecen desde los bonos o títulos públicos hasta los rendimientos por depósitos en el exterior, otra práctica común dentro de la élite. Según información divulgada por el sindicato bancario, los uruguayos tienen depósitos fuera del país que equivalen a 16 puntos del Producto, unos 8.700 millones de dólares.

Los lugares predilectos para resguardar el dinero son Estados Unidos y Suiza, de acuerdo a datos del Banco Internacional de Pagos que consignó el diario *El País*.

Definidos estos aspectos netamente monetarios, cabe preguntarse a qué se dedican estas familias y en qué sectores de la economía se concentran. Para Miguel Serna, docente de la Facultad de Ciencias Sociales que ha estudiado las élites en Uruguay como foco de sus investigaciones, hay «una marca tradicional» que asocia a la burguesía local con los negocios ligados al campo y la exportación de materias primas. Esto surge desde los inicios mismos del Uruguay como nación, muy ligado a la importancia del puerto de Montevideo y a la riqueza de sus tierras para actividades agropecuarias.

Así se fue conformando desde el siglo XIX una clase alta con algunos apellidos que se mantienen hasta hoy, aunque en virtud de distintos procesos históricos la referencia al campo como lugar de generación de la riqueza ha quedado atrás. «Las familias tradicionales del empresariado uruguayo se han ido diversificando y especializando. Primero porque grupos que tenían sus pies originalmente en la tierra se han extendido hacia otras áreas como los servicios, y además han buscado nichos donde hacerse fuertes como forma de competir ante el avance de los inversores extranjeros en Uruguay», analizó.

Volviendo a la idiosincrasia nacional, está en la cabeza de los nacidos en estas tierras que «el poder económico está ligado a la propiedad rural, y eso hace varias décadas que no es así», sostuvo Juan Geymonat, docente de la Facultad de Ciencias Sociales especializado en el estudio de grupos económicos. Las agroindustrias, con los frigoríficos como principal exponente, el comercio a gran escala y el sector financiero, surgieron desde mediados del siglo pasado como sectores concentradores de riqueza, indicó. Pero con el avance de los años y la globalización de los flujos financieros, los grandes grupos transnacionales —primero de la región y luego de otras partes del

mundo— posaron sus ojos sobre estos redituables negocios y fueron adquirieron gran parte de ellos.

En esa línea opinó también el economista Ignacio Munyo, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo y director ejecutivo de Ceres, el principal *think tank* de Uruguay de corriente liberal. «Un fenómeno que se ha acelerado en los últimos años es la reducción significativa del empresariado uruguayo, por la adquisición de empresas por parte de multinacionales, lo que muchas veces hace que quien era el dueño o principal accionista pase a ser un empleado de alto nivel», manifestó.

Otra actividad ligada al campo que creció con fuerza a impulso de grupos extranjeros fue la forestal, nueva punta de lanza de la economía local a partir de una ley que brindó incentivos en la década del 80, y la instalación ya entrado el nuevo siglo de dos plantas de procesamiento de celulosa de capitales nórdicos en el interior del país.

Así fue perdiendo peso material la otrora burguesía nacional, que según Geymonat mantiene un poder simbólico ligado principalmente a las gremiales del agro —la Asociación Rural y la Federación Rural—, a su entender el sector empresarial que mejor ha sabido organizarse para incidir políticamente. Y si bien ya no manejan los negocios más redituables ni tampoco la tierra, que ha pasado a manos de sociedades anónimas y fondos de inversión foráneos, los sectores de la élite rural y agroindustrial mantienen una carta de poder que suelen repetir: si nos va mal el país tiene problemas, y si nos va bien llega la bonanza.

LOS SECTORES NO TRADICIONALES, ¿UNA NUEVA BURGUESÍA?

Los distintos fenómenos internos ya repasados y algunos factores externos fueron corriendo el poder económico del campo a la ciudad, generando nuevas formas de riqueza, aunque sin cambiar demasiado los beneficiarios de esa renta. El mismo camino han seguido las inversiones de los ricos, que si bien mantienen la tendencia a comprar campos, en las últimas décadas apostaron más fuertemente por invertir en propiedades inmobiliarias. Según Geymonat, parte del dinero obtenido por las ventas de los negocios a los grupos extranjeros fue colocado «en actividades rentistas y no productivas».

Dentro de los rubros de actividad no tradicional y muy ligado a los rasgos que diferencian a Uruguay del país vecino Argentina —naciones hermanas por su historia y las similitudes culturales—, desde los 70 cobró fuerza la intermediación financiera, la administración de capitales y la provisión de servicios profesionales. «Es un papel nada menor que ha tenido Uruguay como economía pequeña», señaló Serna.

El abogado Leonardo Costa, ex jerarca de gobierno y referente en derecho tributario y corporativo, explicó que la «plataforma» para el despliegue de estos negocios desde Uruguay al mundo fue la reforma que impulsó tras la crisis bancaria de 1982 el referente económico de la dictadura militar —que duró de 1973 a 1985—, Alejandro Végh Villegas. Se reguló por ley la intermediación financiera y la vigencia del secreto bancario, lo que significó «un activo para brindar servicios, en especial como contracara de Argentina», país con habituales vaivenes políticos, tributación más elevada y mayores restricciones financieras.

Con fuerte énfasis desde los años 90, la provisión de servicios profesionales «generó una pequeña burguesía» ligada al sistema financiero y los clientes argentinos de alto perfil económico, evaluó Costa. Luego, al igual que en otros rubros, parte de esos negocios fueron adquiridos por bancos y entidades internacionales. Hoy día, son numerosas las actividades de consultoría y administración patrimonial desde las zonas francas de servicios, territorios libres de todo

impuesto desde donde operan distintas compañías locales y del exterior. Para el abogado, estos negocios generaron un cambio de cabeza en parte del sector empresarial más joven y formado, que vio que era posible «salir al mundo» y provocó años después un ascenso de empresas de servicios vinculadas a las nuevas tecnologías.

Desde el 2001, cuando se aprobó un marco legal específico con beneficios para la industria del *software*, Uruguay se posicionó como exportador de servicios tecnológicos, aunque su mayor hito dentro del rubro es anterior. A mediados de los 80 y cuando aún la inteligencia artificial era una quimera, dos ingenieros uruguayos desarrollaron el primer programa informático de uso universal para la sistematización de una base de datos. Eso fue GeneXus, *software* adquirido por Windows y que dio inicio a una empresa local —hoy expandida en el mundo— que lidera Nicolás Jodal, principal referente del sector y que declaró hace unos años que bajo el influjo de la tecnología «hay un nuevo Uruguay que está naciendo».

Este año se alcanzó otro hito a través de la firma dLocal, dedicada al procesamiento de pagos y con presencia en 29 países, que se transformó en el primer unicornio uruguayo y hoy tiene un valor de mercado superior a 13.000 millones de dólares. Para Munyo, los rubros ligados a la tecnología tienen un presente «muy pujante» en el país y existen «ventajas» comparativas para esas empresas. También mencionó a la industria audiovisual como otra con potencial para desarrollarse fuertemente en los próximos años, en especial por su esencia creativa que impide el avance de la automatización.

Más allá de que no hay unanimidad entre los consultados sobre la magnitud de estos fenómenos de industrias no tradicionales en la formación de la riqueza, hay una cuestión de base y es que parecen no *mover* la aguja en términos de distribución. Sobre este punto habló Sebastián Olivera, especialista en innovación digital y fundador de la Cámara Uruguaya de Fintech (tecnología aplicada al sector financiero):

«¿Puede una persona que no tenga un cierto nivel de bienestar económico emprender? No, salvo excepciones. Las características comunes de la mayoría de los *founders* son: estudios en universidades top, experiencia en banca y nivel socioeconómico medio-medio alto». Sí defendió el rol en términos de ascenso social de la formación en tecnología para quienes trabajan en la industria.

REDES FAMILIARES, HERENCIA E INAMOVILIDAD SOCIAL

Retomando el aspecto de Uruguay como país pequeño, Serna marcó que cobra mayor relevancia una «particularidad» de las élites, que es «el fuerte relacionamiento familiar», con la conformación de grupos económicos entrelazados tanto por parentesco sanguíneo como político. «Al mirar la estructura de los principales grupos empresariales nacionales, en su mayoría son familias con varios negocios, y si mirás estudios de hace 50 años los apellidos coinciden. Hay un linaje que viene de muy larga data en algunos casos, desde finales del siglo XIX, con riquezas que se gestaron en esos tiempos en que llegaban las familias de inmigrantes desde Europa», señaló Geymonat.

Estas características hacen que cobre fuerza el papel de las herencias en la reproducción de una élite, lo que actúa como contrapeso para la movilidad social. De Rosa comentó que un estudio realizado siguiendo al mismo grupo de personas de altos ingresos durante varios años, mostró que «la probabilidad de bajar en la distribución se reducía conforme uno se movía hacia la parte alta de la fila; había movilidad ascendente y descendente en toda la distribución, pero eso se reducía fuertemente cuando se llegaba al 1% más rico». En otras palabras, esto indica que los hogares más adinerados tienen escasas chances de perder ese estatus una vez que lo alcanzaron.

De acuerdo a un capítulo del libro *Los de arriba*, escrito por la economista Evelin Lasarga, un tercio de la riqueza de los uruguayos proviene de herencias. A su vez, la autora expresó que «la riqueza heredada presenta una mayor concentración en los sectores más ricos de la población», dado que en el decil 10 un 72% del patrimonio proviene de herencias. En esa línea, concluyó que «la actual distribución de la riqueza depende en gran parte de condiciones presumiblemente arbitrarias, no controladas por las personas, sino que provienen de su origen familiar».

Esta realidad común y, quizás, otras similitudes entre sí, hacen que los integrantes de la élite conformen grupos de relacionamiento cada vez más cerrados, aunque aún este fenómeno resulta lejano en comparación con otros países de la región. Al respecto, Serna dijo: «No viven en lugares amurallados como quizás en Brasil o Colombia, pero crecen los barrios privados en Canelones, y desde antes ya había un barrio tradicional de clase alta en Montevideo [Carrasco, ubicado en el límite con el departamento de Canelones]. También está Punta del Este, con las chacras con alto valor patrimonial, un lugar considerado de lujo a nivel internacional y que tiene un volumen de inversión muy alto para lo que es nuestro país. Esto marca un estándar de vida que solo se permite a personas con mucha riqueza».

El investigador de la Facultad de Ciencias Sociales también apuntó que con el renacer del negocio de la soja en los últimos años, se formó «una nueva ruta de la riqueza» en la zona del litoral de Uruguay, en los departamentos ubicados al oeste, es decir en el extremo contrario a Punta del Este. «No es casualidad que se hayan construido allí canchas de golf, o que el país tenga dos festivales de jazz, uno en Punta del Este y otro en Mercedes [capital del departamento de Soriano], o el auge de los yates, o una mayor cantidad de clubes deportivos, hípicas o de colección de automóviles; son todas cosas que tienen que ver con *el tiempo* libre de los sectores de mayor riqueza», complementó.

El sector de los medios de comunicación surge como ejemplo paradigmático de varios de los rasgos de la élite local, con tres familias vinculadas a los principales canales de televisión que supieron acaparar por décadas el poder mediático, así como la pauta publicitaria —oficial y privada— y lograr tener peso político. Los canales 4, 10 y 12, los únicos que podían sintonizarse desde los televisores uruguayos junto a la señal pública, nacieron como grupos económicos a mediados del siglo pasado con el liderazgo de las familias Romay, De Feo-Fontaina y Scheck respectivamente.

El investigador Gustavo Gómez, ex director de Telecomunicaciones y actual director del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), analizó que las tres familias han desarrollado un esquema «de alianzas y competencia», además de ser titulares de la propiedad de radios y medios de prensa escrita, así como de inversiones en otros rubros como el agropecuario. «Su poder lo consolidaron en los 90, cuando por decisión del gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera [1990-1995, padre del actual presidente] accedieron a las licencias de televisión para abonados de Montevideo. Así los mismos dueños de los canales tenían la propiedad de los cables, rubros donde en otros países suele haber mucha competencia. Además, formaron una alianza para tener una red de canales de televisión abierta en el interior del país, y luego de televisión por cable», detalló.

Para Gómez, a través de esta connivencia económica entre supuestos competidores y con el aval del poder político, las tres familias «no solo concentraron audiencias y recursos, sino también los contenidos que los uruguayos podían ver» a través de los medios de comunicación más masivos. En tiempos más recientes ocurrió un desprendimiento de los propietarios originales de los canales 10 y 12, aunque en este último caso entró a escena «otro grupo muy importante de la élite económica uruguaya como la familia Cardoso», antiguos propietarios de la cadena de supermercados Disco, una de las más grandes del país.

El supermercadismo local es uno de los rubros donde en las últimas décadas ocurrió un proceso de extranjerización, con la llegada de capitales argentinos con el grupo De Narváez, colombianos con Almacenes Éxito y estadounidenses con Goldman Sachs, que adquirieron las principales cadenas de manos de las familias nacionales que fundaron los negocios.

LA BAJA REPRESENTACIÓN FEMENINA Y EL PODER TESTIMONIAL

A mitad de este año, la productora ganadera Mónica Silva se convirtió en la primera mujer que llegó a la presidencia de la Federación Rural, gremial fundada a inicios del siglo pasado. En la Asociación Rural, la actual directiva de 44 miembros no tiene mujeres, ni las ha tenido en los últimos períodos. Estos casos sirven para ilustrar la baja participación femenina en los cargos de poder, rasgo que no resulta característico solo de Uruguay, en donde hay una representación del 4% en las directivas empresariales y del 10% en los puestos gerenciales.

Los datos surgen del estudio *La discriminación de género en las carreras empresariales*, realizado por Serna y Marcia Barbero, socióloga e investigadora que está realizando su tesis sobre las desigualdades de género en la cúspide del poder corporativo. «Conforme se sube jerárquicamente en las empresas, u otros espacios de poder, las mujeres somos una menor cantidad, eso da cuenta de una desigualdad persistente, que se va reproduciendo pese al paso *del tiempo* y los avances normativos o en el plano discursivo», subrayó.

También el guarismo es del 10% al observar el número de mujeres que conforman los directorios de las principales compañías de Uruguay, y en general no ocupan el rol de presidenta de la firma sino

cargos menores como vocal o secretaria. Inclusive, se hallaron casos de mujeres que integraban el directorio por ser la esposa o hermana de un director hombre, es decir con un rol «de papel, más bien testimonial».

Del avance de su trabajo de tesis, donde se propone encontrar las causas de esta baja representativa, Barbero comentó que en entrevistas con hombres y mujeres que ocupan roles de poder en compañías locales surgieron «historias de discriminación, sexismo y machismo», pero que sin embargo al indagar en la trayectoria personal «dicen “yo barreras no tuve”». Su evaluación es que en las altas esferas «sigue primando el discurso de la meritocracia, que invisibiliza» los sesgos de género y subestima «los privilegios obtenidos por el punto de partida».

En relación a esto último, afirmó que puede verse que las mujeres que accedieron a cargos de poder —más allá de algún avance progresivo— pertenecen a un mismo círculo: «Hay puntos en común en sus trayectorias, por los centros educativos a los que asistieron o las universidades donde se formaron, cómo consiguieron su primer empleo o la profesión de sus padres».

EL SALTO A LA POLÍTICA E INDICIOS DE UN NUEVO URUGUAYO

La sociedad uruguaya está altamente politizada y los temas de debate en la opinión pública suelen girar en torno a los asuntos del momento. Las élites no escapan a esto, aunque al igual que hacen gala de un bajo perfil en lo económico, suelen optar por lo mismo en el plano político, al menos en sus apariciones públicas. Una práctica bastante extendida es donar a modo de financiación a todos los partidos políticos y mantener una relación cordial con el poder sin importar la orientación de quien lo ostente.

Esto no esconde que hay pares del otro lado del mostrador. Según un trabajo efectuado por Serna y otros investigadores, un 20% de quienes ocuparon cargos políticos entre 2000 y 2015 tienen un pasado como empresarios, en casi la mitad de los casos ligados al agro. En las conclusiones del estudio, se distinguen dos perfiles: uno más tradicional de «políticos empresarios», que suelen relativizar su pasado en la actividad privada y plantean su tarea pública como una vocación; y los «empresarios políticos», que subrayan su pasado en cargos gerenciales o de dirección de empresas como un crédito de cara a la gestión pública.

Siguiendo esas categorías, se puede contrastar dos modelos de integrantes de la élite local que compitieron en las últimas elecciones, y según Serna en función del resultado electoral que obtuvieron puede haber una señal acerca de un cambio de era en el perfil público de los más poderosos en Uruguay.

¿Quién es Juan Sartori? Con esa interrogante como centro de varias piezas publicitarias se presentó a la sociedad uruguaya, previo a la elección de 2019, un joven millonario hasta entonces desconocido. Formado en el exterior, casado con una rusa perteneciente a una poderosa familia de aquel país, y con pasado en diversos negocios, Sartori dio el salto a la política y el resultado fue sorprendente: quedó segundo en la interna del Partido Nacional y luego obtuvo 96.000 votos que lo llevaron al Senado. Con un patrimonio cercano a los 100 millones de dólares, nunca le escapó el mote de millonario.

En la misma elección, otro adinerado hombre de negocios se postuló a presidente, aunque no corrió con la misma suerte. Se trató de Edgardo Novick, que apostó por fundar de cero un partido propio tras una experiencia positiva como candidato en una elección departamental, pero apenas logró un diputado.

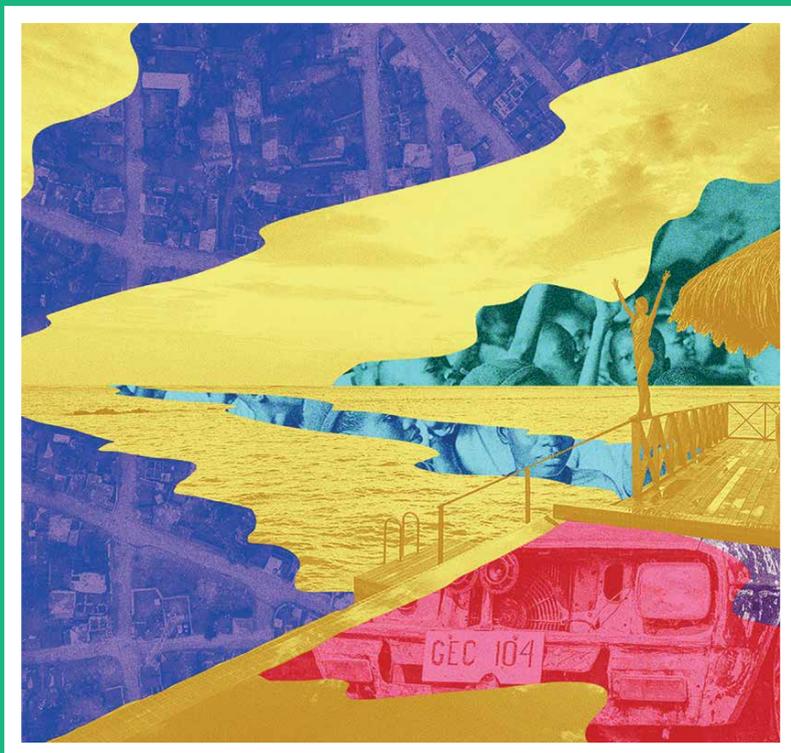
«Ya vimos un cambio de épocas con políticos que se presentan como empresarios, algo que antes no pasaba. Pero Sartori es otra

novedad, porque es un empresario del nuevo tipo, un joven millonario vinculado a grupos transnacionales y cosmopolita. Es un waggiornado, no tiene la propiedad de la tierra sino la gestión», consideró Serna. Su hipótesis es que podemos estar ante un nuevo estilo de la élite nacional, más ligado a la ostentación y exposición pública que al bajo perfil. «La idea histórica que aún persiste de la medianía uruguaya, de que todos somos clase media, empieza a convivir con otro fenómeno: los nuevos ricos que se presentan como tales», añadió el investigador.

Volviendo a poner el foco en los nuevos sectores pujantes de la economía uruguaya ligados a la tecnología, también puede percibirse según Olivera un choque con los estereotipos: «Son empresas que sirven a clientes del exterior, y por una cuestión de las dinámicas del mercado global el empresario tecnológico tiene que distanciarse de la visión tradicional del empresario uruguayo».

A modo de chiste pero con un buen grado de realidad, en Uruguay se dice que todo tarda pero llega, y hay indicios de que algunos rasgos históricos de las élites puedan estar sufriendo un lento proceso de cambio, con la misma cadencia que décadas atrás sus negocios se movieron del campo a la ciudad. Más no parece haber variaciones en cuestiones más ligadas a nuestra tradición, como los apellidos.

ÉLITES SIN DESTINO LATAM



REPÚBLICA DOMINICANA
*Blancos, subvencionados
y heroicos*

RIAMNY MÉNDEZ FÉLIZ

Periodista e investigadora con experiencia en periódicos, revistas, radio, organizaciones sociales y organismos internacionales. Actualmente investiga sobre comunicación y movimientos sociales, como parte de la maestría en Metodología de la investigación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Produce y conduce el segmento Libertarias, de La República Radio. Fue becaria Fulbright Hubert Humphrey Fellowship en Periodismo y Género en la Universidad de Maryland. Es especialista en Relaciones Internacionales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y la Universidad INTEC.

La élite política y la élite empresarial dominicanas han empezado a acercarse y mezclarse cada vez más desde 1992. En la actualidad, el empresariado más influyente no es solo poder detrás del trono: es parte del trono. La vicepresidenta Raquel Peña procede de la élite empresarial de Santiago, y el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, del grupo MAC, ha estado vinculado al poderoso grupo INICIA (Vicini), con inversiones en diversas actividades económicas, entre estas la producción azucarera.

Retratar a un colectivo tan amplio y diverso como el empresariado siempre conlleva un riesgo: reducir todo un grupo a un estereotipo o, peor aún, a una caricatura. En el empresariado dominicano, tradicionalmente, hay y ha habido tantas visiones del país y del mundo como en el resto de la sociedad: vinculados a regímenes autoritarios y también a luchas democráticas; promotores de la reducción de las políticas sociales e impulsores de procesos contra la desigualdad para evitar un estallido social, cercanos al poder religioso y también indiferentes o desafectos de éste.

Además, no todos los empresarios y organizaciones comparten los mismos intereses o tienen la misma influencia en la sociedad. El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) agrupa a grandes empresarios tradicionales, con gran influencia y poder, mientras que la Asociación de Empresas Industriales de Herrera incluye a compañías medianas, que con frecuencia no comparten los mismos intereses que los grandes emporios y procuran distintas políticas públicas.

Sin embargo, los datos recopilados por el periodista e investigador Esteban Rosario en sus libros *Los nuevos grupos de poder* (2020) y *Los dueños de la República Dominicana* (2008), ideas expresadas por líderes del empresariado más poderoso y el análisis de investigadores como Anselmo Muñiz y el sociólogo Juan Miguel Pérez permiten establecer un perfil de la élite empresarial dominicana.

Contra todo el discurso de esfuerzo, superación individual y reducción del Estado que abunda en el empresariado, en general, como grupo, la élite ha sido subvencionada o apoyada de diferentes maneras por los gobiernos, están cada vez más cercanos y mezclados con la política partidista y tienen una visión idealizada de sí mismos, como si fueran el motor que empuja el desarrollo del país.

VISIÓN ACRÍTICA Y HEROICA

Un ejemplo de la visión heroica de sí misma que la élite empresarial ha posicionado en los medios de comunicación, sin un balance que también ponga en valor los aportes de las trabajadoras y los trabajadores (ahora llamados «colaboradores» en los departamentos de Recursos Humanos), la dio Celso Marranzini en el artículo «El peso de ser empresario».

«Nunca olvido cuando la crisis bancaria del 2003, uno de mis gerentes y buen amigo, cerca del fin de mes entra a mi oficina y me dice: “Celso, yo soy más feliz que tú”. Mi respuesta fue: “No lo dudo, pero ¿por qué lo dices?” A lo que contestó: “El país se está cayendo, tú tienes que buscar el sueldo de todos nosotros que cobramos los treinta y nos vamos tranquilos sin deber nada a los bancos, a nuestras casas y tú posiblemente no duermes”. Cuánta razón tenía», concluye el empresario dedicado a las industrias químicas, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, nombrado presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Público Central Termoeléctrica Punta Catalina (Fideicomiso CTPC), mediante el decreto 539-21.

Esta visión no es aislada. El investigador social Anselmo Muñiz explica que el discurso heroico sobre su clase social es común en la élite económica dominicana. «Según su visión, ellos están cargando al país, con todos los sacrificios del mundo, pero son ellos que lo están cargando, ellos

son los que hacen, contra viento y marea, por ellos el país no se ha hundido, es una visión heroica, casi cristiana de su rol», asegura Muñiz.

Muñiz, junto con otros investigadores, ha analizado el imaginario de las élites dominicanas sobre el país y la democracia. Destaca que para las élites dominicanas no existe la autocrítica, ya que básicamente se ven a sí mismos como los salvadores porque generan empleos, bienes y servicios. Esta visión puede llevar a los líderes a menospreciar el peso político o social que tienen otros actores, particularmente los trabajadores, en tiempos de crisis.

Mientras República Dominicana, con una de las economías de mayor crecimiento en América Latina y el Caribe (6% anual entre 2015 y 2019 según el Banco Mundial) trataba de sobrevivir a la pandemia de COVID-19 con uno de los peores sistemas de salud de la región, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Pedro Brache, mandaba a los médicos, que perdían colegas y amigos ante un virus desconocido, a trabajar más, en vez de quejarse porque no se imponían medidas más restrictivas al tránsito, que afectaban la economía pero reducían los contagios.

Brache reaccionó a una petición de Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), quien pedía mayores restricciones y menos apertura de locales comerciales para frenar la expansión del virus. «El Colegio Médico Dominicano lo que tiene que hacer es mandar a sus médicos a trabajar», dijo Brache y por primera vez en mucho tiempo, un grupo de trabajadores defendió su valía ante una posición del empresariado de forma abierta y pública.

Muchos médicos se expresaron en las redes sociales o en medios de comunicación tradicionales defendiendo tanto a Suero como a sus colegas y a otros empleados del sector salud ante lo que consideraron una insensibilidad del empresario. Hablaron del valor de su trabajo y de sus largas jornadas laborales. Y otros trabajadores, incluyendo a periodistas de medios

importantes, los acompañaron en su indignación. Se le pedía a Brache, al menos, una disculpa. No se disculpó públicamente.

¿Quién es Brache, presidente del CONEP? Es «presidente Ejecutivo Corporativo de Grupo Rica e hijo de Don Julio A. Brache», según su biografía oficial en la página del emporio económico agroindustrial. Como otros empresarios dominicanos, proviene de una familia oriunda del Cibao, ha heredado buena parte de su riqueza y estudió fuera del país, algo poco común entre dominicanos de su generación. En la actualidad es relativamente común que hijos de algunas familias de clase media y clase trabajadora estudien fuera del país con becas nacionales o internacionales.

Brache, cuando no era común, culminó el bachillerato en Princeton, Nueva Jersey, y su licenciatura y maestría en Syracuse y en la American University de Washington D.C. Terminó sus estudios en 1987, de acuerdo con su biografía oficial, publicada en la página del grupo.

ODA A LA PRIVATIZACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y ALIANZAS CON EL GOBIERNO

Waldo Ariel Suero, el dirigente gremial, también ha cuestionado en diversos momentos la Ley de Seguridad Social, en lo que concierne al sistema de Aseguradoras de Riesgos de Salud (ARS). Suero ha considerado que la ley es una estafa para los médicos, pues reciben pocas prestaciones por sus servicios en el sector privado; y para los pacientes, que deben hacer elevados copagos por las consultas o dirigirse a hospitales públicos, con frecuencia precarios, donde funciona el Seguro Nacional de Salud.

Los grandes ganadores de esta ley, que ya tiene más de 20 años, fueron los empresarios, según investigadores sociales como Matías

Bosch, que ha analizado en diversos informes el impacto de la legislación entre la clase trabajadora y los sectores marginalizados. Las conclusiones de Bosch son claras: el sistema de salud sigue siendo ineficiente y caro para los más empobrecidos y los trabajadores recibirán pensiones de miseria, ya que las Aseguradoras de Fondo de Pensiones (AFP) privadas, al igual que ocurre con las ARS, se quedan con la mayor parte de la ganancia.

No obstante, en 2005 el gobierno del entonces Partido de la Liberación Dominicana (PLD) invirtió 25 millones de pesos dominicanos en el Hospital Metropolitano de Santiago, centro privado, cuya junta directiva estaba integrada en ese entonces por empresarios como Carlos Sully Fondeur, presidente de la Corporación del Aeropuerto Internacional del Cibao y Manuel Estrella, presidente de Acero Estrella, entre otros empresarios, según archivos de prensa del 2005.

El financiamiento fue defendido por el entonces presidente Leonel Fernández, que a la fecha militaba en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y encabezaba un gobierno que enfrentó protestas de diferentes grupos sociales que se oponían al apoyo a un centro privado y no a hospitales públicos, como el María Cabral y Báez que tradicionalmente funciona con precariedades. Pero los empresarios avanzan en la privatización de la salud y de la seguridad social en general, según ha explicado el investigador Matías Bosch.

Grandes grupos empresariales tienen inversiones en la parte privada del sistema de seguridad social, que comprende tanto las Aseguradoras de Riesgos de Salud como las Aseguradoras de Fondos de Pensiones. De acuerdo con el libro *Los nuevos grupos del poder*, «el grupo Rizek es el más dinámico, poderoso e influyente de los nuevos grupos del poder empresarial. Tiene inversiones en la producción y exportación de cacao, medios de comunicación, bolsa de valores, AFP, bienes raíces, construcción y la banca nacional», explica Rosario en su libro.

Agrega que aunque la familia Rizek ha sido parte de la élite empresarial durante mucho tiempo, comenzó a operar como grupo en la década del 2000, e interactúa a su vez con los grupos Vicini, Bonneti y Rainieri. Los Rainieri se dedican al sector del turismo y son dueños del grupo Punta Cana.

El sistema de ARS privado ha sido defendido por el empresariado, que ve la solución al tema de salud en el mercado. A raíz del rifirrafe con el dirigente gremial Waldo Suero por las prestaciones de las ARS, Celso Marranzini respondió a Suero que acallara «los tambores de guerra» en un artículo publicado en el periódico *El Caribe*.

Marranzini defiende el sistema de aseguradoras de salud que se impuso con la Ley de Seguridad Social y anima a Suero a dejar atrás las formas de luchar, a su juicio, anticuadas, propias de la década de 1970, para entender que en el negocio de la salud, entre proveedores y médicos debe promoverse la negociación de mercado, la oferta entre compradores y vendedores. «Su lucha contra las Administradoras de Riesgo de Salud es lo normal entre proveedor y cliente. Créame que lo vemos todos los días, unos quieren vender más caro, otros quieren comprar más barato. Pero al final, nos ponemos de acuerdo», enfatiza Marranzini en su artículo, que aborda un derecho humano fundamental, el derecho a la salud, como simple negocio de servicios.

Brache no es el único empresario dominicano que ha dicho comentarios insensibles sobre un grupo de trabajadores. En 2015, Juan Vicini, uno de los líderes del grupo VICINI, ahora llamado INICIA, dijo que los cañeros son pobres porque «no se organizaron en cooperativas».

Los cañeros son trabajadores y extrabajadores de la industria azucarera, muchos de ellos migrantes, que vivían en barracones y ganaban menos del salario mínimo. Los extranjeros, además, tenían limitado el movimiento. Tanto a dominicanos como a extranjeros se les ha negado

históricamente las pensiones por las que han cotizado. Durante 20 años la prensa ha reseñado las luchas de los cañeros que construyeron la riqueza de la industria azucarera por estos derechos básicos.

LOS SUBSIDIADOS HÉROES DE LA NACIÓN

A pesar de estas odas a la ética del trabajo para lograr las metas, y a dar rienda suelta al mercado y su mano invisible, los empresarios dominicanos han crecido de la mano del Estado, que ha invertido en sus iniciativas, como es el caso del Hospital Metropolitano de Santiago, ha entregado tierras en condiciones ventajosas y también ha otorgado exenciones fiscales para facilitar su crecimiento.

«Según un estudio encargado por el gobierno dominicano al Banco Mundial, el país deja de recaudar un 1% del PIB por las exenciones en el impuesto sobre la renta a empresas. Las empresas ubicadas en zonas económicas especiales (ZEE), más conocidas como Zonas Francas, son unas de las principales receptoras de los incentivos tributarios», se explica en el informe *Mecanismos de captura de la política fiscal por parte de las élites y su impacto en la desigualdad en América Latina y el Caribe* (1990-2017), elaborado junto al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

Muñiz explica que a pesar de grandes ventajas reflejadas en beneficios fiscales y de otro tipo, el empresariado dominicano no ha desarrollado una gran potencia. «Los privilegios que se le han dado a la élite no han servido para gran cosa, no somos país puntero en desarrollo humano, y nuestros empresarios están acostumbrados a que los platos rotos se los paga el Estado y por tanto ellos no tienen que molestarse», enfatiza el investigador social, para quien la economía dominicana se salva, en parte, porque puede venderle a Haití, su segundo socio

comercial. El primer socio comercial es Estados Unidos, con quien existe un fuerte desequilibrio en la balanza comercial.

Mientras los empresarios se roban las alabanzas públicas, la falta de sindicatos fuertes y con potencia para hacer valer su discurso no solo en los medios de prestigio, tampoco en casi ningún espacio popular o de las redes sociales, dificulta un discurso en el que los trabajadores obtengan también su cuota de buena representación y heroísmo.

EL CONTROL DEL DEBATE PÚBLICO

El sociólogo Juan Miguel Pérez explica que esta ideología de las élites nacionales y extranjeras que influyen en la vida nacional se impone como el sentido común y se refleja en el debate público. A su juicio, en República Dominicana, por su propiedad de los medios de comunicación, las élites controlan el discurso. «Controla los que son temas, los que no deberían ser temas y como los que son temas deberían ser tratados», afirma.

En efecto, empresarios de distintos rubros tienen fuertes inversiones en medios de comunicación. El grupo Corripio es dueño o tiene acciones o intereses en al menos tres de los cinco principales diarios impresos, la radio y la televisión, y se dedica a la importación de diversos productos.

Pero además de controlar los medios, también controlan el debate en organismos claves de toma de decisiones, alega el sociólogo Juan Miguel Pérez. «Este discurso de las élites y las acciones que se desprenden de este se reproduce en todos los espacios de prestigio del país, como los consejos consultivos, dado que el empresariado, como sector dominante, controla el debate y tiene una presencia más potente y permanente que otros sectores», dice Pérez. Explica que debido a su

capacidad de influencia directa, y a tener mayor cantidad de recursos, la visión empresarial se impone en todas las políticas públicas.

Y aunque hay gran diversidad de medios de comunicación y de opiniones dentro de los medios y en diferentes espacios sociales, Pérez considera que, a fin de cuentas, el discurso dominante en la opinión pública, así como la forma en la que se lleva a cabo, está determinada por la propiedad de estos espacios. Los empresarios de diversos sectores, como el financiero, el turístico y el agroindustrial, son dueños o tienen acciones en los medios tradicionales dominicanos.

Los demás medios, más novedosos o innovadores, posibles gracias al Internet, también se ven condicionados al discurso dominante, tanto porque su presencia se reproduce en todas partes como por algo pragmático: para crecer, los medios dependen de la publicidad, indica Pérez.

Esta dominación de los espacios de decisión y debate hace que con frecuencia ni siquiera se necesiten acciones de fuerza o censuras directas. Así, es posible que, contra toda evidencia, 20 años después, se pueda reproducir sin fuerte rechazo social, al menos no reflejado en los medios, la visión de que el problema del bajo pago de los médicos en las consultas y el copago de los pacientes deba resolverse como un problema de mercado y no se relacione con un problema de salud que genera graves desigualdades y violaciones a los derechos humanos.

La mortalidad infantil en el país es de 23,5 por cada 1.000 nacidos vivos. En América Latina el promedio es de 13 por cada 1.000 nacidos vivos, de acuerdo con datos recopilados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). «Hay una élite ideológica: en el campo político nacional hay ideas que prevalecen reconoce a quienes las portan», agrega el sociólogo, y por eso el empresariado, particularmente vinculado al sector financiero, se preocupa por tener acciones en medios de comunicación para auto legitimarse.

LA MERITOCRACIA DE SER RICO, HEREDERO Y DE ORÍGENES EUROPEOS

Vicini y Brache tienen en común ser descendientes de familias que han sido empresarias por décadas, son blancos o podrían pasar por blancos en el sistema racial de América Latina y El Caribe, que, en el caso concreto de los países colonizados por España, heredó un sistema de castas raciales en las que los europeos y posteriormente sus hijos no mezclados o poco mezclados con negros o indígenas, los criollos, estaban en la cúspide de la escala social.

¿Pero qué significaba estar en la cúspide? La historiadora Quisqueya Lora explica en su diálogo de *In Cultured Company* que aun en una colonia pobre como el territorio que posteriormente sería República Dominicana, implicaba tener derechos, libertad, acceso a buenas tierras y capital social, este estaba para los más cercanos a la blanquitud porque tenemos un sistema que entremezcla clase y raza como privilegios.

Con todos esos privilegios, más el respaldo de los gobiernos, surgió el emporio de los Vicini, del que desciende el joven y mediático Juan Vicini, que habla de sí mismo como un emprendedor y de los trabajadores como gente pobre porque no se organizó.

Los Vicini, que participan en casi 50 actividades económicas distintas, han estado en la República Dominicana desde al menos 1860. En su historiografía oficial, su fortuna es fruto del trabajo de un laborioso migrante italiano que se abrió paso en la nueva república. La República Dominicana nació oficialmente el 27 de febrero de 1844, tras separarse de Haití, país con el que comparte la isla Española o Hispaniola. Aunque posteriormente, en 1863 tuvo que recuperar su independencia de España, que en 1861 se había anexoado su antigua colonia.

Pero la verdad es que parte importante de la fortuna de los Vicini está relacionada con el acceso a la tierra, que le permitió ser parte clave de la industria azucarera y otros negocios agropecuarios y, posteriormente, expandirse hacia otras ramas de la economía. En la actualidad también están en la banca y en el negocio de la electricidad. Suyo era el terreno de la controversial planta Punta Catalina, construida durante el pasado gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en alianza con capital nacional y Odebrecht, y cuestionada por lo costosa, la corrupción y por producir daños ambientales.

La familia de origen italiano ha estado presente, de alguna forma, en cada gobierno. En el actual, uno de sus socios tradicionales, Lisandro Macarrulla, es ministro de la Presidencia. Por cierto, Macarrulla es también un mestizo de los que en el Caribe pueden pasar por blancos, como buena parte de quienes encabezan el actual gobierno, con fuertes vínculos con el sector empresarial. La vicepresidenta, Raquel Peña, es de la élite empresarial de Santiago.

PODER POLÍTICO VERSUS PODER ECONÓMICO

Desde el punto de vista histórico, el gobierno dominicano ha sido más blanco o blanco-mestizo (mulato) que su población general y que las bases de sus partidos políticos, pero esta vez la blanquitud es particularmente notable. A pesar de que tradicionalmente el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), del que nace el Partido Revolucionario Moderno (PRM), ha sido una mezcla de algunos grupos de élite con ideas avanzadas, clase media, grupos populares y sectores de barrios marginados con mayoría de la población negra.

El actual presidente de la República, Luis Abinader, viene del mundo empresarial. Su familia, de origen libanés, tiene inversiones en el turismo y en la educación universitaria, entre otros sectores. Pero no es, como ha ocurrido en otros países de América Latina, un empresario que dio el salto a la política como advenedizo. Su familia ha sido, a la vez, política y empresaria por al menos dos generaciones. Tradicionalmente estuvo vinculada al Partido Revolucionario Dominicano, del que nació el Partido Revolucionario Moderno, que actualmente se encuentra en el gobierno. Abinader y otros funcionarios dominicanos fueron citados en la investigación Pandora Papers por tener empresas *offshore* en paraísos fiscales. Tanto el presidente como los demás han insistido en que actuaron en el marco de la ley.

Para el investigador Anselmo Muñiz, en los últimos años ha habido una recomposición de las élites que hace cada vez más relativo el peso del Cibao. Esteban Rosario, quien se ha dedicado a documentar a los grupos económicos, considera que ese cambio se empezó a producir desde 1992. Muñiz entiende que en los últimos 20 años ha habido una mezcla entre el poder político y el poder económico en la República Dominicana, que ha facilitado un cambio en la constitución de las élites.

Así, en su opinión, expresidentes como Danilo Medina o Leonel Fernández, que no son parte de ese pasado vinculado a las familias tradicionalmente ricas, ni blancas, más bien parte del «crisol de razas» del que se habla para definir a América Latina y obviar la discriminación racial, sí pueden considerarse parte de la élite, al igual que otros nuevos ricos vinculados tanto a la política como al empresariado.

Juan de los Santos, fallecido exalcalde de Santo Domingo Este, el segundo municipio más grande del país y con una riqueza relativamente importante, representa, para él, un ejemplo de esa nueva élite. Su fortuna surgió del negocio de bancas de apuestas y se involucró en actividades políticas que lo llevaron a ser un importante alcalde y representante de la Liga Municipal Dominicana.

Pero el sociólogo Juan Miguel Pérez no lo ve de la misma manera. Entiende que, a fin de cuentas, el poder real todavía es principalmente el económico de los grupos tradicionales y que las cuotas a esos políticos que no provienen de la élite tradicional son temporales. «Que algo cambie para que nada cambie», dice. Entiende que, ya sea a través de la corrupción o de otras vías, los empresarios que son un poder más permanente le dan poder a determinados políticos para facilitarse ciertos procesos, pero no hay una entrada definitiva en la élite.

Además, en países de América Latina y el Caribe algo complica aún más la ecuación: la dependencia de los capitales internacionales y su alianza con los capitales nacionales. Esto se ve en la familia de Raquel Peña, tradicionales ricos santiagueros, vinculados a proyectos como el de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) en el que se formaron, en principio, hijos de la élite del Cibao. Y también los ejecutivos de la compañía minera Barrick Gold que explota la mina de oro más importante del país. Durante la pandemia, la Barrick Gold adelantó dinero de ganancias futuras, lo que salvó al país en un momento problemático por la crisis. Pero la Barrick ha estado bajo críticas en distintos momentos por denuncias de contaminación ambiental, no devolución de beneficios a las comunidades afectadas por intervenciones problemáticas que afectan el tejido social.

ÉLITES Y DESARROLLO O ÉLITES Y CARIDAD

En el bachillerato, los dominicanos aprenden que parte importante de la identidad nacional se formó a raíz del surgimiento de una alta burguesía cibaëña y santiaguera, que fue clave en la Restauración de la República: tenía intereses económicos que defender. Y, algo que hay que esperar a

la universidad para aprender: su blanquitud, real o imaginada y pasada por el mestizaje, difícilmente sería plenamente reconocida por españoles que reconquistaron su colonia, así que su estatus racial dependía de permanecer en la cúspide económica y social del país.

De todos modos, esa burguesía de la que descienden muchas familias ricas en la actualidad, al igual que algunos hateros de la región Este, fue clave para la Guerra de Restauración que se convirtió en un momento de unidad nacional, con generales negros y mestizos liderando batallas y familias negras gozando de algún reconocimiento social: todas las clases se unieron por primera vez en torno a la idea de la República, explica la historiadora Quisqueya Lora en un conversatorio de *In Cultured Company*.

Y en otros momentos históricos, la burguesía cibaëña ha creado instituciones que han contribuido a impulsar procesos importantes para el país. Uno de ellos, después de la caída del dictador Rafael Leónidas Trujillo, cuando se consolida la acumulación de capital privado que impulsaría el capitalismo propiamente dicho en el país, es la creación de asociaciones empresariales y de instituciones educativas como la PUCMM en Santiago, vinculada también a la iglesia Católica, que permitió la formación de las élites técnicas e intelectuales y, posteriormente, de una cierta clase media e incluso de jóvenes de clase trabajadora con acceso a becas.

También, de una de esas familias ricas tradicionales, los León, vinculados a la producción de tabaco y de productos alcohólicos, nace un importante centro de arte, que tradicionalmente ha estado abierto a manifestaciones que van tan a contracorriente como la obra del escritor Johan Mijail, que cuestiona la blanquitud, el heteropatriarcado, el clasismo y el racismo en la República Dominicana. En ese espacio, antropólogos y otros científicos sociales progresistas han abordado temas centrales como la clase social y la raza en el país.

Pero, en general, los ricos dominicanos han hecho caridad, que ha servido para consolidar lazos con los políticos y hacer relaciones

públicas mientras los salarios y la movilidad socioeconómica son de los peores de la región, algo entendible si se tiene en cuenta que este es uno de los países que menos recursos destina al gasto (o inversión) público social con relación al PIB. «Guatemala, Honduras y la República Dominicana son los países latinoamericanos que destinan una menor cantidad de recursos como proporción del PIB (menos del 8,0%)», de acuerdo con el informe *Panorama Social de América Latina 2020*, publicado por la CEPAL.

Y NO ES SOLO EL SALARIO, EN POLÍTICAS SOCIALES «HAY QUE DAR OVER»

Uno de los personajes de *Over*, la icónica novela del escritor dominicano Ramón Marero Aristy, explica que en los ingenios no se trataba solo de la explotación de los jornaleros a través de los bajos salarios y malas condiciones laborales. También había que «dar *over*».

Y el *over* (en el Este hay inversiones de capital estadounidense en la industria azucarera) significaba, a fin de cuentas, engañar a los trabajadores con una balanza trucada. Era un secreto a voces, pero los bodegueros necesitaban mantener la explotación para conservar sus empleos y no ser acusados de ladrones, mientras los patrones mantenían su imagen de «honorabilidad» y bondad.

«¡Y si fuera esto solamente! Pero hay que dar *over*. Y sépase que los precios son fijos. El almacén despacha a cinco para que se venda a cinco, de acuerdo con los reglamentos y con la muy clara y visible lista de precios que hay en cada bodega; pero a fines de mes, o mejor dicho, cuando se pasan los inventarios, las cuentas deben aparecer como si se hubiera vendido a seis o a siete. Y si no se trabaja en esa forma, ¡a la

calle! Y si la compañía comprueba que el bodeguero vende incompleto, ¡a la calle también! Porque antes de todo, ellos necesitan demostrar que son personas muy rectas, honestas y metódicas. ¡Y dicen los curas que el infierno está por ahí!»

En un sentido más amplio, el *Over* hace referencia al sistema de explotación global sobre el trabajador, que le engaña de diversas formas, muchas veces legales, es decir con la protección de la ley y de la institucionalidad.

Actualmente, una de las formas en las que se expresa el control de las élites sobre toda la clase trabajadora es su influencia desproporcionada en la definición de las políticas públicas, al igual que el dueño del ingenio definía las normas de vida de la empleomanía.

David Arbona, quien ha trabajado investigaciones sobre la política de vivienda de la República Dominicana, explica que tradicionalmente las decisiones sobre producción de vivienda, en un país con cerca de 11 millones de habitantes y un déficit de 1.200.000 unidades habitacionales, está muy vinculada a los intereses de las élites de la construcción y no a la necesidad de fomentar la vivienda social.

Por ejemplo, el empresario José Miguel González Cuadra, del Centro Cuesta Nacional, dirige la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos que ha impulsado desalojos en los barrios de la zona norte del Distrito Nacional y la construcción de viviendas en otros espacios a los que la gente más empobrecida no tiene acceso, según han denunciado organizaciones como Ciudad Alternativa. Más allá de este hecho concreto, la captura de las élites de las políticas de vivienda se refleja en un déficit constante, y en la vida precaria de miles de familias, enfatiza Arbona.

Esta situación se asemeja al tema de la salud y, para Juan Miguel Pérez, incluso a la educación, aunque en esta última área el país ha

empezado a implementar el 4 % del PIB a la educación no universitaria, como diferentes grupos sociales habían demandado. No obstante, Pérez entiende que el empresariado, que tiene una presencia notable en todos los espacios de decisión intersectoriales como el Consejo Económico y Social, impulsa una educación que, aunque con mejores técnicos para mejorar la productividad, no fomenta la movilidad económica o social.

En efecto, la República Dominicana es de los países que menos movilidad social tiene en la región de América Latina y el Caribe y que más desaprovecha su crecimiento económico para generar desarrollo humano, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Esta dificultad para ascender es incluso confirmada por pequeños empresarios exitosos como Noel Ureña, que sin venir de una familia rica tradicional logró posicionar sus productos de belleza en el mercado nacional e internacional. Ureña admite que ascender socialmente es muy complicado en el país.

Ureña, también dirigente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera, Inc. (ANEIH), cuenta que pudo impulsar su negocio gracias a la experiencia y contactos que adquirió trabajando para una empresa multinacional en el país.

Su empresa ha crecido y se ha tecnificado, pero no ha logrado dar el salto a una gran empresa, porque conseguir capitales no es un proceso tan simple en la República Dominicana. Por eso existen asociaciones distintas al CONEP, que representan los intereses de medianos empresarios que lograron a partir de ciertos beneficios fiscales insertarse en nichos específicos, como el de la belleza. «No siempre tenemos los mismos intereses que esas grandes empresas que vienen de empresarios tradicionales de hace décadas», sentencia Ureña, al referirse a la diferencia entre los empresarios de Herrera, que con frecuencia han hecho alianza con el sector social.

RELIGIÓN, RIQUEZA Y PODER

Una fotografía ha sido bastante comentada entre los jóvenes dominicanos con una visión crítica del poder y que se expresan con firmeza en redes sociales como Twitter. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, se ve rodeada por los obispos. Raquel es católica, se declaró «provida» incluso desde la campaña y, además, fue una ejecutiva de la Pontificia Universidad Católica de Santo Domingo (PUCMM).

En un país donde todavía existe un concordato entre la Iglesia Católica y el Estado, y en el que el obispado influye en la vida de la población, hasta el punto de que ha detenido la educación sexual en las escuelas, según organizaciones *feministas*, ser rico, católico, cercano a la jerarquía que representa el arzobispado y, por demás, santiaguero, es casi el estereotipo perfecto de la élite conservadora.

Sin embargo, Pérez piensa que el poder de la iglesia no es tanto como se piensa, y que los políticos podrían, si quisieran, desligarse de la iglesia Católica sin sufrir pérdidas de votos ni de recursos.

Pero no toda la élite es católica. El protestantismo en su variante evangélica tiene una cuota importante del pastel político e influye en el país. Dio Astacio, un protestante que habla de lo grandioso que es Israel y de la familia tradicional, es uno de los hombres fuertes del protestantismo en el Gobierno.

Los protestantes cuentan con emisoras que ahora son tan escuchadas entre sus feligresías como en otros momentos lo han sido las de las iglesias católicas, conservadoras o progresistas.

En muchas de esas emisoras se habla sobre la importancia y bondades del Estado de Israel, los valores de familias tradicionales y antifeminismo.

Hay un movimiento neoconservador tanto en Estados Unidos como en América Latina que tiene sus representantes en las iglesias protestantes, pero también en el catolicismo. Con frecuencia, «los hermanos separados» se unen para boicotear avances sociales, como la aprobación de las tres causales que permitirían el aborto en caso de riesgo para la vida de la madre, violación o incesto o si el embarazo es incompatible con la vida.

¿LA ÉLITE ES LA MISMA DE SIEMPRE O SE HA AMPLIADO?

En un país en el que no hay mucha movilidad social, ni siquiera para pasar verdaderamente de la pobreza a la clase media, dar el salto a la élite es casi una odisea. Sin embargo, Muñiz piensa que hay políticos que sí lo han dado, por el capital económico acumulado, ya sea por vías legales o no legales. Un ejemplo icónico es Félix Bautista, acusado de corrupción, que nunca fue condenado y que él ha negado reiteradas veces.

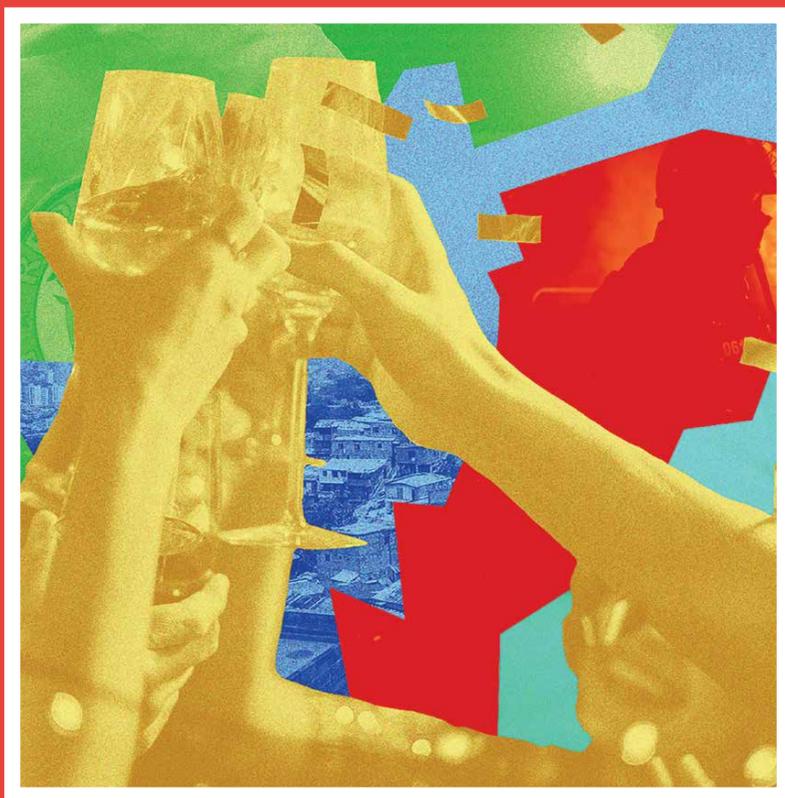
«El ingeniero Félix Bautista es el mejor ejemplo del político empresario de nuevo tipo que ha surgido en los últimos 50 años. De ser un ingeniero sin experiencia empresarial, hoy posee un contrato integrado por 12 empresas que movilizan miles de millones de pesos», explica Rosario en su libro *Nuevos grupos de poder*. Para Rosario, los grupos que han surgido después de 1992 no tienen, a diferencia de las familias tradicionales, un proyecto de país (del tipo que sea), sino que están concentradas en obtener ganancias.

Por ejemplo, los expresidentes, que no necesariamente pertenecían a una élite económica, como Leonel Fernández, mantienen una gran influencia en la vida política y social de manera indefinida, lo que a su juicio los vuelve parte de la élite, en el sentido de que influyen desproporcionadamente en las decisiones sobre la vida pública. Aunque en el caso de Leonel Fernández, un motivo para su influencia puede estar en sus alianzas con cierto sector conservador, que alienta el nacionalismo extremo y valores conservadores vinculados a la no adquisición de la nacionalidad por hijos de extranjeros, el matrimonio gay o el aborto.

Pero en un mundo cada vez más interconectado, ¿qué rol jugarán las élites nacionales? Uno de los sectores fundamentales de la economía dominicana es el turismo, en el negocio del turismo a gran escala y de resorts, modelo que ha escogido el país en contraste con Costa Rica, que se ha decantado por el turismo ecológico. En el turismo dominicano hay más participación de capital europeo, y español en particular, que dominicano. Hay «24 cadenas hoteleras españolas, propietarias de 98 hoteles compuestos por 46.142 habitaciones que corresponden al 56% del total de la oferta turística dominicana», de acuerdo con datos de la Cámara Española de Comercio en el país.

Y empresas tradicionales dominicanas, como el ron y la cerveza, han pasado parte importante de sus capitales a corporaciones extranjeras. La economista Rosa Cañete destaca que estos pactos, basados solo en el interés económico, han ocurrido en toda América Latina y muestran que las élites no tienen, cuando de dinero se trata, un gran arraigo nacionalista. No se trata de entregar las empresas luego de luchas o resistencias por mantener el negocio como de capital nacional, sino cuando el cálculo económico les es favorable. Y esto después de haber crecido a la sombra del Estado que abogan por reducir.

ÉLITES SIN DESTINO LATAM



COLOMBIA
*Las nuevas batallas
políticas de la élite empresarial*

NOHORA CELEDÓN

Periodista de La Silla Vacía (Colombia). Reportera desde hace doce años. Desde 2010 cubre temas económicos en Colombia, primero en Vanguardia Liberal y después en el diario Portafolio. Magister en Ciencia Política y en Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes.

COLOMBIA

El 28 de abril de 2021 el empresario Juan Ramón Guzmán voló a Estados Unidos a vacunarse contra la COVID-19. Después de ese día, Cali, la principal ciudad al sur de Colombia, donde vive, no volvería a ser la misma. Ese miércoles arrancó el Paro Nacional de Colombia, una movilización convocada por sindicatos, estudiantes y organizaciones campesinas e indígenas, motivada por la reforma tributaria promovida por el Gobierno nacional en plena pandemia.

La reforma tenía entre sus propuestas ponerle impuesto a las ventas a productos de la canasta familiar, llevar a más personas a pagar impuesto de renta y aumentarles la tarifa a los que ya pagan. Iván Duque, el presidente colombiano que llegó al poder a lomos de la popularidad del exmandatario Álvaro Uribe Vélez, prometía que con esos nuevos impuestos se financiarían programas sociales y subsidios para las personas más pobres, afectadas por la pandemia.

La calle no le creyó.

La reforma sacó a la gente a las calles, pero muy temprano fue claro que esa no era la única razón por la que, en pleno pico de la pandemia, las personas decidieron salir a marchar.

En Cali, a las 7 de la mañana, un grupo de indígenas del pueblo misak derribó la estatua del conquistador español y fundador de la ciudad, Sebastián de Belalcázar. Al mediodía ya los manifestantes habían saqueado o vandalizado seis almacenes de cadena, 15 cajeros y sedes de bancos, símbolos del sector privado.

La concentración de la riqueza y del poder, más el hambre y la escasez que tocó fondo en la pandemia, despertaron la frustración y la rabia en las principales ciudades del país.

Colombia, después de Brasil, es el país con mayor desigualdad en América Latina y la brecha entre ricos y pobres se profundizó con la pandemia

de la COVID-19. Más de 3 millones de hogares entraron a engrosar las cifras de pobreza. Es decir, dejaron de recibir los ingresos suficientes para cumplir con sus necesidades básicas, comer, pagar servicios, estudiar. Más de 10 millones de personas dejaron de comer tres veces al día por falta de dinero.

Y mientras esto pasaba, en 2020, el año de la peor recesión económica de la historia reciente de Colombia, 488 de las mil empresas más grandes del país aumentaron sus utilidades respecto a 2019.

Las movilizaciones fueron masivas y violentas en todas las principales ciudades del país, y en algunas zonas rurales también. Cali estuvo bloqueada durante tres meses por manifestantes, en su mayoría jóvenes, concentrados en más de 20 puntos. La calle se convirtió en el escenario de confrontación entre la policía y quienes protestaban: 29 homicidios asociados a estos combates se registraron en Cali y sus alrededores.

Cali pasó de ser la «sucursal del cielo» a la «capital de la resistencia».

Juan Ramón es uno de los empresarios más visibles de la ciudad. Su empresa tiene 25 años y fabrica algunas de las marcas de cosmética más reconocidas del país. Él se ha convertido en parte de la élite empresarial caleña, ha liderado la Unidad de Acción Vallecaucana, una corporación formada por empresarios para promover líderes políticos en la región, y le ha hablado al oído a los alcaldes de la ciudad, por lo menos durante la última década.

Pero el día que salió del país viajó pensando que sería una marcha como cualquier otra, una manifestación que empieza y acaba en un día. La magnitud del descontento social y la violencia que vio en las calles a través de videos que le llegaban por redes sociales lo tomó por sorpresa.

Su empresa, de cerca de mil empleados, tuvo que parar varias semanas porque los empleados no podían llegar a la fábrica. No entendía por qué si las personas estaban en las calles reclamando empleos

y oportunidades, bloqueaban y atacaban a las empresas que, desde su visión, son las que podían generar esos empleos y oportunidades.

«La verdad es que a mí me dieron ganas de salir. Yo pensé que había que ir a entender lo que estaba pasando», dijo.

No fue el único que pensó lo mismo. Al igual que él, varios empresarios del país decidieron ir a las primeras líneas, a los puntos de manifestación. Desde hace varios años, como comenta Juan Ramón, habían escuchado discursos políticos en contra de las grandes empresas, pero el paro les daba una oportunidad única de conocerlos de primera mano.

A mediados de mayo, cuando el empresario volvió al país, llamó a una amiga, a la directora del *Diario Occidente*, Rosa María Agudelo, y le pidió que lo ayudara a conectarse con algunos de los líderes de la protesta.

Justo por esos días Agudelo estaba programando ir con dos investigadores de la Universidad del Valle a Siloé, un barrio fundado por campesinos desplazados por la violencia y uno de los puntos más violentos de la protesta. En una sola noche, el 4 de mayo, en Siloé hubo cuatro muertos y 19 heridos de bala en las manifestaciones.

Juan Ramón no conocía Siloé.

«Iba como con la adrenalina que uno siente cuando va a recoger a la novia en la primera cita. Más o menos así iba yo. Entonces le pedí el favor al conductor que me dejara como a cinco cuadras del barrio: “Usted quédese aquí tranquilo” y yo me subí. Tenía solo como 50 mil pesos (unos 13 dólares) en el bolsillo. Cuando llegué a la zona de Siloé eran como 5 cuadras caminando hacia arriba, porque esa parte es en subida. Allí Rosa me presentó a una de las líderes.»

El barrio estaba rodeado de barricadas, personas con tapabocas y pasamontañas, el uniforme no oficial de los miembros de la primera

línea, que encabezaban siempre las marchas y manifestaciones y eran los primeros en enfrentarse con la policía.

Juan Ramón caminó por las calles sin pavimentar, rodeadas de casas con sus ladrillos expuestos hasta que llegó a una caseta de metal. Los profesores le presentaron a Maira, una de las líderes de la protesta que estaba allí con otros de sus compañeros.

«Yo les dije: “soy un empresario y vengo a ver en qué puedo colaborarles. Y escucharlos y ver si puedo ayudar en algo, para saber qué nuevas oportunidades pueden surgir. Yo no soy político ni nada, soy un empresario”. Se animaron muchos y empezamos a hablar.»

Hablaron de la pandemia, del hambre, del cierre del comedor escolar, de la falta de empleos, de la falta de futuro, de la rabia que da que unos tengan tanto y otros tan poco, de la violencia, de cómo uniformados de la policía los estaban tratando y de que no estaban dispuestos a seguir así.

Ruth Piedrahíta, una de las voceras de las resistencias de Cali (como se les llamó a los puntos de concentración de los protestantes en la ciudad) ubicada frente a la Universidad del Valle, cuenta que fue raro ver a los empresarios, en sus camionetas y con sus choferes llegar a los barrios. Ella recibió a varios de ellos:

«Dan mucha desconfianza, la verdad. Iban ellos o mandaban voceros y delegados, vimos el historial de ellos y pues uno no confía mucho, más en el contexto en el que estábamos. Es que muchos de estos empresarios se han portado mal con sus trabajadores, no les dan beneficios, seguridad social. ¿Por qué ahora sí quieren buscarnos, justo cuando les bloqueamos? Porque se están afectando, ahora sí vienen a buscarnos cuando desde antes podían ser mejores. Había incluso un acuerdo entre todas las resistencias de no aceptar las propuestas que ellos nos dieron».

La propuesta era básicamente que los empresarios —a través de una organización que se llama Propacífico, y que se dedica a promover inversiones en la región— harían una bolsa de dinero para financiar iniciativas concretas que solucionarían los problemas más apremiantes, el hambre, el desempleo, la educación, la falta de oportunidades. Todo coordinado con las resistencias. A la iniciativa le llamaron Compromiso Valle (como Valle del Cauca, el departamento del que Cali es la capital) y en dos meses reunió 45.000 millones de pesos (12 millones de dólares) para invertir en varios programas sociales.

Está programado que dure año y medio.

Ahí, entre los que crearon Compromiso Valle estuvo Juan Ramón.

Al final las resistencias decidieron apoyar la iniciativa de los empresarios, pero aún con recelos. De hecho, generó división entre sus voceros.

«Unos decían que sí y otros que no, pero al final la mayoría aceptó. Y es que en ese momento en el que fueron a la Unión de Resistencias fue un momento de quiebre. Todo estaba mal, muy mal. Las personas llevaban tiempo ya sin comer, o sin empleo y con muchas necesidades. Ya hay un poco más de confianza, porque se han cumplido los compromisos, en general, pero apenas el proyecto empieza, así que hay que esperar.»

El paro de 2021 acabó justamente porque no era sostenible mantener el aparato productivo bloqueado por más tiempo. Los mismos manifestantes se veían afectados por la falta de alimentos e insumos básicos.

Pero no acabó el problema de fondo y el empresariado tomó nota.

Iniciativas como Compromiso Valle se multiplicaron en todo el país: en Bogotá, la capital, Medellín y Barranquilla, empresarios asociados y

por cuenta propia, armaron paquetes de programa que incluían puestos de trabajo, entrenamiento, financiación para comedores escolares.

Otros empresarios de manera individual crearon programas específicos para aumentar los puestos de trabajo para jóvenes e invertir en programas educativos, dos de los principales reclamos del paro.

Y tal vez el gesto más inusual, que va en contra de todo lo que las agremiaciones empresariales han pedido durante años en Colombia, fue que le propusieron al Gobierno nacional una reforma tributaria que les pusiera más impuestos a las empresas para financiar el hueco fiscal que dejó la atención de la pandemia.

La propuesta se orquestó desde la ANDI, el gremio de empresarios más grande y más influyente del país. Su presidente, Bruce Mac Master, cuenta que desde antes del paro pidió a sus agremiados permiso para pedirle al gobierno que les subieran los impuestos.

«Hicimos una llamada de conferencia grande y les dije: «vean, yo no veo otra solución. Yo siento que el país se va a incendiar, está pasando algo que nunca ha sucedido y es que por primera vez todo el mundo va a estar en contra del gobierno. Yo necesito tener el mandato de ustedes y saber que estoy representándolos para decirle al gobierno, señores, esta es la única solución y esto nos va a valer más plata, claro que sí, pero es que el país vale más.»

Los empresarios le dieron el mandato, pero el Gobierno no les hizo caso al principio. Presentó su reforma tributaria y el resto es historia. Pero después del paro y con la caída del ministro de Hacienda, que renunció en medio de las movilizaciones, retomó la propuesta de los empresarios, que fue aprobada por el Congreso de la República. La ley terminó aumentando el impuesto sobre la renta del 31 al 35 por ciento para las empresas y al 38 por ciento, específicamente a los bancos y entidades financieras.

El compromiso del Gobierno, y así lo dejó escrito en la reforma tributaria, es que el próximo año deberá evaluar la conveniencia de esta alza de impuestos. La narrativa en torno a este punto ha sido que los grandes empresarios, que son determinantes en las decisiones de la ANDI y los gremios, se sacrificaron para salvar al país.

Las salidas a la calle y las propuestas del empresariado son algunas de las estrategias de los grandes empresarios para reaccionar a los problemas de fondo que la pandemia sacó a flote en Colombia. Pero también hace parte de una nueva batalla política, inédita en el país, por mantener su buena imagen.

UN CAMBIO DE PERCEPCIÓN

Beatriz Rodríguez-Satizábal es economista y lleva más de 15 años investigando a las élites empresariales en Colombia. Cuenta que, a partir de los años 90, con el proceso de apertura económica que facilitó la actividad importadora y exportadora, se puede ver con claridad un enaltecimiento de los grandes empresarios y grupos económicos en los reportes de prensa.

Ella misma fue periodista en un diario económico a principios de la década pasada y recuerda cómo en las páginas eran protagonistas los empresarios. Apellidos como Sarmiento, Ardila, Pacheco y Santodomingo se repetían con frecuencia. Porque si hay algo que caracteriza a las grandes élites económicas colombianas es su concentración.

En su investigación de doctorado, Rodríguez-Satizábal muestra cómo los principales grupos económicos de Colombia, desde los años 30 hasta la fecha, están conformados por las mismas familias. Que buena parte de su riqueza proviene de la tenencia de tierras y de bienes raíces, que el acceso al capital les da un privilegio que muy pocos

empresarios tienen en Colombia y que durante buena parte del siglo pasado su influencia en el Estado era tan grande que era difícil diferenciar el límite entre unos y otros.

Para bien y para mal, estas élites han sido actores claves en los grandes momentos de la historia del país. El siglo pasado eran los gremios económicos los que fijaban la tasa de cambio del país y, aún hoy, varias asociaciones empresariales como la de los ganaderos (FEDEGAN), la de los avicultores y la de los cafeteros administran impuestos que pagan sus empresarios al Estado.

En los noventa, sin el apoyo de los empresarios no se hubiera dado el proceso de apertura económica que impulsó en su momento el expresidente Gaviria, quien en un discurso pronunciado en 1993 en el Primer Congreso de Competitividad dijo a los empresarios que eran ahora ellos quienes tenían que desarrollar la economía ya que tenían más continuidad en *el tiempo* que los políticos.

En los 2000, en la era de la seguridad democrática del expresidente Uribe, el apoyo de los empresarios en pagar un impuesto a la guerra financió la política que debilitó a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), pero también produjo abusos sistemáticos de las Fuerzas Armadas contra la población civil y millones de víctimas inocentes.

Y en el 2016, el apoyo de los empresarios más poderosos del país al Proceso de Paz ayudó a destrabar un momento crítico de la negociación. En el conflicto fueron víctimas, como dice el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, pero también fueron victimarios y muchos de ellos fueron condenados por apoyar grupos paramilitares y beneficiarse económicamente de la guerra.

Pero, en medio de esa complejidad, la tendencia en Colombia es percibir al empresariado desde un lente de heroísmo.

«El hecho de que el empresariado no se hubiera ido y no se hubiera llevado sus negocios en uno de los momentos más críticos, durante la crisis de los años 80, 90 y de inicio de este siglo, permitió que se diera una condición necesaria, quizá no suficiente pero necesaria, para que el país no se derrumbara», dice Mac Master.

Rodríguez-Satizábal también apunta que el empresariado colombiano, al tener un gran arraigo en las regiones a las que pertenece, tiende a promover el desarrollo y el crecimiento de las regiones donde se asienta. Y que esto explica su nivel de favorabilidad.

Los empresarios, en general, tienen una buena percepción ante la opinión pública colombiana. La encuesta de Invamer Gallup que mide esto mensualmente desde el año 2000 muestra que, en octubre de 2021, la imagen favorable de los empresarios era del 57 por ciento, superior a la de las fuerzas militares y la Iglesia católica y 17 puntos por encima de la de los medios de comunicación.

En todo este siglo, desde que Gallup mide a los empresarios, la opinión favorable ha superado a la desfavorable. Hubo una excepción, en noviembre de 2019, cuando estallaron las movilizaciones en el país en contra del gobierno de Iván Duque.

Pero la percepción hacia las élites empresariales no es igual.

Dos encuestas dan cuenta de este cambio: una de Ipsos, publicada en julio de 2021, y otra de Latinobarómetro de octubre del mismo año. Muestran la inconformidad de los colombianos por el gran poder que concentran las élites empresariales. Lo ven como un problema para la democracia.

En Colombia, Ipsos dice que el 81 por ciento de los encuestados (en su mayoría de zonas urbanas) opina que a las élites políticas y económicas no les interesa el bienestar de las clases trabajadoras. En toda América Latina

es el país donde una mayor proporción de los consultados (84 por ciento) opina que el sistema está amañado para favorecer a los ricos y poderosos.

Según la encuesta de Latinobarómetro, el 38 por ciento de los colombianos opina que el mayor poder en el país lo tienen los grandes empresarios, y el 76 por ciento considera «que el país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio».

La profesora Rodríguez-Satizábal también percibe el cambio de percepción. Cuenta que desde el paro de 2019 empezó a ver un cambio de actitud hacia lo que se considera élite empresarial. Lo veía en sus estudiantes y sus comentarios en clase, en foros académicos y en las calles. Ya no era solo una percepción de personas de izquierda, sino un fenómeno más generalizado:

«Yo decía: «es la primera vez en mis años de vida que noto un clima antiempresarial». Si yo pienso en la Colombia de los 90, era un sí a la competencia, un sí a los productos importados, sí a que los empresarios aparezcan en los medios de comunicación, sí a que aprendamos sobre los empresarios. Ahora no.»

Una sensación de decepción e impotencia que tiene en su base las promesas incumplidas del capitalismo. Promesas que, en Colombia en particular, fueron estandarte de los grandes empresarios en los noventa y que hoy muestran no ser suficientes para cumplir con las necesidades básicas de los ciudadanos.

«Ignorar el peligro de que haya animadversión contra el sector privado es un error. En el peor de los casos puede venir una ola de populismo antiempresarial, como ha ocurrido en otras partes de la región. El de Venezuela y las nacionalizaciones promovidas por Hugo Chávez es un caso que merece ser estudiado», escribió el analista y exdirector del diario económico Portafolio, Ricardo Ávila, en el diario *El Tiempo* en noviembre de 2019.

Porque esa animadversión es ahora una batalla política.

LA BATALLA EN LA ARENA POLÍTICA

«Vamos a presentar una reforma tributaria al Congreso en la que los estratos altos, sobre todo los que deberían pagar impuestos y no están pagando, van a chillar.» La frase la pronunció en abril de 2012 el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, al anunciar una reforma fiscal, la primera de cuatro que pasó en sus ocho años de gobierno.

Santos arrancó su primer periodo presidencial proclamándose como el presidente de los pobres, pese a ser miembro de una de las familias más poderosas del país. Llegó a su segundo año proclamándose como el verdugo de los millonarios. Un traidor de su clase, como él mismo se describió meses después.

Detrás de las cámaras, mientras Santos prometía hacer chillar a los ricos, estaba Bruce Mac Master, hoy presidente de la asociación empresarial más grande del país, la ANDI, en ese entonces funcionario del gabinete presidencial.

Hoy, Mac Master recuerda ese episodio como un hito del populismo en Colombia. El momento en el que la división de clases entre ricos y pobres empezó a ser utilizada por políticos para ganar puntos con el electorado.

«Él (Santos) comienza con ese jueguito y el empresariado no se lo perdonó», dice.

Hoy, en el debate político y electoral de Colombia, las élites empresariales y los ricos están en el centro del debate.

La lucha contra las élites y los ricos es una bandera que representa en su discurso el candidato presidencial Gustavo Petro, quien se ha convertido en el «coco» del empresariado colombiano. Con una campaña en la que ha prometido distribuir ciertas ganancias de las empresas entre sus trabajadores, hacer una reforma tributaria que grave más a las personas ricas y poner mayores impuestos a los tenedores de grandes extensiones de tierras, Petro hoy lidera en las encuestas de intención de voto.

No es el único ejemplo.

En 2019, en Medellín, la segunda ciudad más grande del país y epicentro del desarrollo industrial de Colombia desde el siglo pasado, ganó las elecciones Daniel Quintero, un candidato que se montó sobre un discurso en contra del Grupo Empresarial Antioqueño, una serie de compañías con inversiones en el sector financiero, cementero y energético, eje del poder privado de esa región. Quintero le ganó al candidato del partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez, de origen antioqueño, con casi 70.000 votos de diferencia.

Para Mac Master es el populismo y el discurso de lucha de clases lo que fomenta ese ambiente:

«Es muy fácil, el ser humano reacciona ante la lucha de clases. Entonces hablar en contra de Sarmiento, Santo Domingo o Ardila (los apellidos de los hombres más ricos del país) es una cosa muy sencilla y no requiere casi que de pruebas y toca sentimientos muy rápidamente».

Populismo de izquierda y de derecha que le está costando ya al empresariado ceder parte de su poder. Hace un par de décadas era impensable aprobar una ley en el Congreso que fuera en contra de los grandes conglomerados empresariales.

Solo en los últimos tres años, el Congreso ha aprobado: sobretasas al impuesto de renta al sector financiero, reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana, la ley de etiquetado frontal que advierte sobre los altos contenidos de azúcar, grasas y sal en los alimentos ultraprocesados, la ley que obliga a las grandes empresas a pagar a sus proveedores en menos de 60 días, una ley que evita que las empresas cerveceras descuenten de sus gastos parte del IVA.

Todas son leyes que afectan a sectores tradicionales de las élites empresariales colombianas: el financiero, alimentos, comercio y licores, que financian campañas electorales y que tienen aliados en el legislativo.

En los 90, por ejemplo, Bavaria, la cervecera más grande del país, entonces en manos del magnate Julio Mario Santodomingo, era conocida en los pasillos del Congreso como el Senador 103, por su capacidad de pasar y frenar leyes en el Congreso y hasta de tumbar ministros con una llamada.

El costo de perder influencia en lo público es alto para los resultados empresariales. Desde la perspectiva de los empresarios, uno de los motores que alimenta ese populismo es su silencio, el mantener calladas sus posturas ante el debate político del país.

«Yo he visto a los empresarios diciendo: «Nos hemos dejado fregar por quedarnos callados». Por eso queda en el aire la idea de que nosotros no estamos siendo, entre comillas, inconscientes de lo que sucede en Colombia. Que nosotros aquí somos un problema», dice Mac Master.

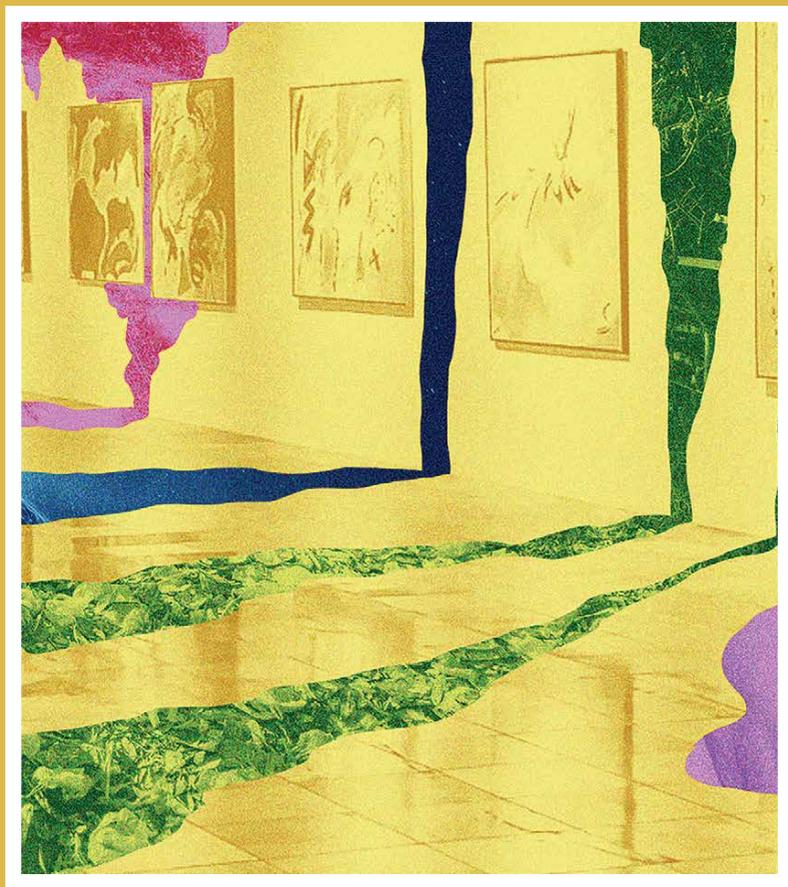
Lo mismo piensa Juan Ramón, dice que los empresarios también deben participar abiertamente en los debates públicos.

«A mí también me molesta mucho que el Estado no cumpla, que los políticos no cumplan, yo pago impuestos y me frustra ver que esa plata no se ve. Pero creo que si nos unimos es mucho lo que podemos lograr.»

COLOMBIA

Es un cambio discursivo que estará presente en las elecciones presidenciales y de congreso en 2022. Pero no es claro cuánto durará, qué tan profundo es y si significará una transformación profunda en la sociedad colombiana. .

ÉLITES SIN DESTINO LATAM



GUATEMALA

Atentamente, la gerencia

OSWALDO J. HERNÁNDEZ

1983 (Guatemala). Es cofundador de No Ficción, proyecto periodístico sobre narrativa, investigación y datos. En 2019 su trabajo sobre la corrupción en el deporte de Guatemala fue reconocido entre los 15 mejores de Latinoamérica por la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN). En 2016 ganó el Premio Nacional de Periodismo en Guatemala. También obtuvo el Premio de la Sociedad Interamericana de Prensa en 2014. Y fue finalista del Daniel Pearl Award en 2013 y del premio de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano Gabriel García Márquez de 2014. Su trabajo periodístico fue incluido en el libro «El futuro empezó ayer. Apuesta por las nuevas escrituras de Guatemala» publicado por la UNESCO. Ha trabajado como periodista en medios como Plaza Pública, Siglo XXI y el Periódico. Fue editor general de la revista RARA, especializada en Arte y Arquitectura; y ha colaborado para revista FACTum de El Salvador y Anfibia en Argentina.

Para una buena parte de la generación más contemporánea de Guatemala, no fue normal ver aquella noche calurosa de abril de 2018, en trending topic y en directo, la ignominia masiva y viral que incendiaba todas las redes sociales con la disculpa que provenía de la élite más conservadora y recalcitrante, esa misma que ha configurado todo el país a su imagen y semejanza por más de, sí, 200 años y contando.

No fue fácil digerirlo. Los abucheos en forma de memes. La burla en forma de emoticones. Los insultos habituales. Generacionalmente, era un evento que lo atravesaba todo: tiempo, espacio e historia. Imaginen: los ricos del país, por primera vez expuestos y cuestionados, en modo de escarnio viral, investigados y señalados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de haber aportado dinero de manera fraudulenta a candidatos presidenciales, de haber manipulado con su dinero las elecciones de 2015, de haber pactado favores con un montón de políticos durante el proceso electoral... Algo que todos sabíamos que habían hecho por años, pero que se manejaba como ese gran rumor de un río con piedras y sus sonidos... Y por eso, esa tarde, al menos ocho megaempresarios habían convocado a una conferencia de prensa donde pedían perdón a todos los guatemaltecos. «Quizás... quizás cometimos un error», dijeron, no sin deslizar algún gesto de molestia.

Aquella disculpa, por lo menos desde la interpretación comentarista de las redes sociales, imaginen, no era para nada algo baladí. Se la podía comparar, como se analizaba en hilos interminables de Twitter, con una respuesta directa desde la desigualdad, el racismo estructural, el privilegio, la hipocresía, la religión, el genocidio, la economía de monopolios, la industria de la cerveza, el cemento y el azúcar. Se sentía raro para cualquiera que lo viera. Y al mismo tiempo falso. El sistema nunca, nunca, nunca te pide una disculpa.

Desde luego, los miembros de la élite señalados no fueron capturados. Únicamente se les había dado un aviso. Se tenían que presentar ante el Ministerio Público para «solventar diversas circunstancias

derivadas de hechos delictivos o fraudulentos». Pero tan solo el hecho de imaginarlos en la cárcel se volvía algo poderoso colectivamente.

Ahí estaba entonces la élite en las pantallas de teléfono. Esa noche vi a varios comerciantes cerrando sus negocios sin despegar sus manos de los celulares, viendo cómo aparecían todos esos hombres blancos y elegantes en las pantallas. Felipe Bosch de Negocios Bursátiles Consolidados S.A.; Guillermo Castillo de Cervecería Centroamericana; José Torrebiarte Novella de Cementos Progreso S.A.; Salvador Paiz del Grupo Paiz del Carmen PDC; Fraterno Vila de Ingenio San Diego S.A.; Andrés Botrán del Ingenio Santa Ana; Ramiro Samayoa de Ingenio Pantaleón y Herbert González de Ingenio Palo Gordo.

Un amigo lo comparó todo a la temporada final de *Carnivale*, una serie que trataba de crímenes y varios eventos paranormales alrededor de un circo que operaba en los años de la Gran Depresión norteamericana. «El circo siempre puede ser un país», era su argumento base. Durante toda esa serie, el administrador, el maestro de ceremonias (que podría ser cualquier presidente o candidato latinoamericano), ante cualquier problema o reclamo (como un estallido social), solo se limitaba a responder: «Lo consultaré con la Gerencia». Y la Gerencia, oculta en un tétrico camarote, nunca aparecía en escena. No es sino hasta la última temporada que, ante la cadencia de las circunstancias, los directores lo presentan a plano, y la Gerencia aparece como un hombre deforme, completamente desfigurado, rodeado de barras de oro, billetes y monedas, al fondo de su oficina apestosa desde donde ha controlado los eventos más importantes que han detonado las escenas más violentas que protagonizan los personajes principales. Una revelación que, según mi amigo, obcecado con esas series interminables, se podría extrapolar fácilmente a la aparición de la élite, pidiendo finalmente una disculpa a la nación aquella noche de abril del 2018.

No es difícil llegar a esa conclusión. La élite de Guatemala ha estado detrás de todos los eventos que han configurado cada elemento

de la democracia. Y no únicamente la reciente. Pero siempre como sombras. Como titiriteros. Como la verdadera Gerencia. Tras bambalinas. En la oscuridad. Detrás de todas las elecciones, los partidos políticos y sus candidatos. Por eso, subrepticamente una disculpa era algo sospechoso, algo que podría interpretarse también como la antesala de algo más grande, incluso la venganza.

Después de ese evento nacional, muchos personajes de la élite (o al menos sus hijos, los herederos) empezaron a desaparecer de varios eventos culturales. No iban a los conciertos de punk o de Straight Edge (movimiento de *hardcore* que extrañamente, en Guatemala, es dirigido por jóvenes oligarcas, quienes además respetan sus códigos: el veganismo, los tatuajes, el celibato, la abstinencia del alcohol; es una música violentamente poderosa y atractiva, aunque contradictoria). Tampoco se les veía en las exposiciones de arte contemporáneo. Y se alejaron, al menos los más mayores, como me comentó un amigo *cigartender*, de los *lounge* públicos donde se puede fumar puros de la Habana o de República Dominicana. Eso fue antes de la pandemia, antes del 2020. Supe, incluso, de conciertos de *hardcore* que se llevaron a cabo en los garajes de mansiones del área más ostentosa de la ciudad, pero con acceso de público reducido. Era como si la élite decidiera replegarse y evitar ciertos espacios de convivencia. Quizás por una orden de sus abuelos, los patriarcas y matriarcas de cada familia.

Nunca lo sabremos, pero después de aquella disculpa pública, como me comentó un agremiado de la construcción, muchos megaempresarios, los abuelos de esas familias, no podían dormir tranquilos, esperando que un día la policía tocara a sus puertas de madrugada y los llevara encadenados a los tribunales. Había que considerar una forma de bajar el perfil y el de sus familias. Sobre todo, porque existía una autoconsciencia de lo que habían hecho: manipular todo un país a

su antojo durante años sin consecuencias, sorteando leyes y procedimientos. Los delitos realmente habían sido cometidos.

Luego, durante el año electoral de 2019, como me mostró expectante el politólogo Renzo Rosal, durante una de las muchas entrevistas de contexto que tuve la oportunidad de realizarle, había un tema que necesitaba atención, y era cómo la élite cada vez más se ausentaba de las candidaturas políticas de cualquier nivel. No hay estudios estadísticos al respecto. Pero se sabe que desde hace un par de décadas existe una disputa por el control político de ciertos territorios en Guatemala, entre el poder tradicional (los viejos ricos) y los poderes emergentes (los nuevos ricos, de capitales no tan claros). Estuve investigando al respecto durante las últimas elecciones para ver si el tema era viable periodísticamente (cosa que no sucedió) y encontré una entrevista que se le realizó al ex canciller Édgar Gutiérrez donde comentaba ya desde 2011 lo siguiente: «Es la primera vez, durante el periodo democrático, que veo a los grupos tradicionales en segunda fila en un proceso electoral. Perdieron visión política y tardaron en entender. Van a tener que esperar al próximo gobierno y buscar un acuerdo. Pero llegarán en desventaja, pues su «abono» a las campañas no fue significativo esta vez». Como lo predijo el excanciller, las élites aumentaron su «abono» y su dinero sirvió para manipular las siguientes elecciones. Habían reaccionado ante aquella amenaza y desventaja. Y años más tarde estaban ahí, en las pantallas de los celulares de toda la nación, pidiendo una disculpa a marchas forzadas.

Hablé con Gutiérrez sobre este tema. Me contó que el fenómeno es complejo, pero que la élite sobre todo tiene un espíritu de autoconservación, de sobrevivencia a toda costa. La élite no se ha planteado una derrota durante más de 200 años. Como cuando en la escuela te enseñan que la independencia de Guatemala se declaró en 1821 pero omiten el detalle de que fue la oligarquía liberal la que firmó el documento con la siguiente frase: «Para prevenir las consecuencias que serían terribles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo». O cuando la élite, la élite tradicional, orquestó un golpe de Estado

en 1954 tras oponerse a una reforma agraria que consistía en limitar el número de hectáreas que una persona o empresa podía poseer, con posibilidad de distribuir la tierra entre aquellos que no tenían nada, absolutamente nada. Luego, la élite, como me explicó Gutiérrez, «utilizó la «amenaza comunista» a lo largo de las siguientes décadas para soldar la última línea de defensa despertando el sentido de autoconservación por encima de las rencillas e intereses, encontrados entre los grupos económicos, derivados de la diversificación económica y la más fina estratificación social».

Gutiérrez analizaba la disputa constante por el statu quo. Que no ha sido cosa menor. Porque la élite ha configurado un imaginario colectivo en el que todos quieren ser como ellos. Pero en la realidad todo se queda en algo aspiracional, inalcanzable. Tengo presente, durante varios años de mi preadolescencia, a aquel profesor de música regordete de un colegio evangélico de clase media, cantando en inglés y bailando por todo el salón de clases con su acordeón aquellas frases de «*If I were a rich man (Si yo fuera rico) Ya ha deedle deedle, bubba bubba deedle deedle dum...*». Y todo el salón de niños repitiendo: «*All day long I'd (todo el día me la pasaría) biddy biddy bum / If I were a wealthy man I wouldn't have to work hard (si yo fuera rico no tendría que trabajar tan duro)... Ya ha deedle deedle, bubba bubba deedle deedle dum*». Esa canción que el personaje de Topol del musical *El violinista en el tejado* —cosa que no sabía entonces— canta emotivamente desde su granero lleno de vacas, caballos y patos. Y que todos cantábamos sin saber que había un trasfondo que nos configuraba cierta relación existencial con el país y su historia. Eso era los que pasaba en los años noventa: «*When you're rich, they think you really know!*» (¡Cuando eres rico, todo el mundo cree que lo sabes todo!), como dice en algún punto la canción. Y que, en esencia, era cantar una paradoja.

El primer editor que tuve en una redacción periodística, Luis Aceituno, que podría ser un gurú del periodismo latinoamericano pero que simplemente no ha querido, solía repetir una frase: «Están esos

que creen en el objetivismo y el hipercapitalismo, que esperan que con la libertad de mercado, y la escuela de Chicago, la riqueza se desbordará algún día sobre los pobres. Pero en Guatemala la única forma en que los ricos pueden dejar que la riqueza se desborde será siempre la corrupción. A estas alturas, la única forma aspiracional de volverte rico en Guatemala es siendo corrupto», decía.

Los actores políticos emergentes, los que disputan el statu quo desde hace menos de dos décadas, provienen de las clases medias urbanas y rurales con acceso a educación. Según me comentó el excaniciller Gutiérrez, se diferencian por tres rasgos fundamentales: a) por lo regular, son la primera generación de ascenso social y de poder, muchos provienen de las provincias y su vocación política y de negocios tiende hacia lo popular o populista, en un amplio rango ideológico, sin definiciones explícitas; b) la base de su acumulación la constituye una relación directa con el Estado por medio de concesiones (los llamaremos los «concesionarios», con creciente vocación oligopólica), sea en campos modernos de usufructo de frecuencias de telecomunicaciones (televisión abierta y de cable, telefonía y cadenas radiales), en operaciones financieras mixtas (bancos, cooperativas y financieras), mediante contratos tradicionales (los denominaremos los «contratistas») y concesiones de obras públicas (medicinas, carreteras, puertos, aeropuerto), mediante la alteración de reglas comerciales (operaciones de contrabando de bienes de consumo y subfacturación, «contrabandistas»), o abiertamente ilegales (narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, diversas operaciones de blanqueo de dinero, los de «economía ilícita»); y c) una relación más directa y activa que busca incidir en la conformación de los poderes del Estado (Ejecutivo, Congreso y cortes de Justicia), sea financiando campañas o postulándose directamente y, mediante usos clientelares, determinando decisiones administrativas, proyectos y programas de inversión pública.

Antes de la pandemia, encontré al heredero de un oligopolio cafetalero tradicional en una de las exposiciones que premia el arte

emergente contemporáneo en Guatemala. Uno de esos espacios de validación del arte que últimamente ha buscado dar reconocimiento a las propuestas conceptuales de artistas indígenas, cosa que algunos críticos han visto como una cuestión de tutela paternalista de la élite en la conducción del arte contemporáneo. Otra forma de administrar la culpa del hombre blanco, supongo. Como patrocinador, el joven heredero oligarca estaba obligado a llegar. Su hermano, uno de los pocos casos existentes, había competido como candidato a diputado por un partido político durante las elecciones de 2019, pero no había sido electo. En esa ocasión, en medio de una charla anodina y trillada sobre los resultados electorales, escuché decir al heredero oligarca que estaba preocupado, debido a que los narcos estaban tomando todo el control político. «Los narcos, los shumos, están metiéndose en todos los negocios», dijo.

Otro politólogo, Hugo Novales, también interesado en este tipo de temas, me había comentado que a la élite le gustan sobre todo los actos de conducción a nivel macro, y han estado más entretenidos en la conducción de proyectos de Estado. Pero, en la última década, la élite ha descuidado el flanco de lo político. Y los poderes emergentes, menos articulados y más oportunistas coyunturales, han aprovechado este vacío para posicionarse. «La porosidad de los partidos políticos a los negocios y su lógica clientelar también convierten la contienda electoral en un frente de batalla ventajoso para los actores emergentes», me decía. Aunque indefectiblemente, una vez que estos «nuevos ricos» asumen el poder, la presión de la élite mediante redes familiares empresariales, equipos de cabildeo especializados y sus más de treinta representaciones corporativas de decisión en diversas entidades del Estado, los convertía en algo demasiado pesado, difícil de obviar, y en efecto apareciendo en todo ese entramado como la verdadera Gerencia.

Para gran parte de mi generación, resulta muy difícil entender la forma en que muchos de los jóvenes oligarcas están chapeados a la antigua. Es decir, la forma en que niegan el reconocimiento de derechos fundamentales. O ejercen el racismo abiertamente en sus redes sociales. O critican la diversidad de género en defensa de la familia. Tengo pocos amigos o conocidos (o he tenido muy poco acceso a ese mundo) que tengan vínculos con la élite. Es extraño. A los que tengo acceso son ovejas negras de su familia. Rechazados. Apestados. Intelectuales. Tienen claro sus privilegios. Por ejemplo, cuando emprenden un negocio no tienen miedo a fracasar, saben que pase lo que pase los recursos son ilimitados. Y que la familia, a pesar de sus reclamos, siempre les termina perdonando y estará ahí para ellos. Si ponen una tienda de tatuajes, o una venta de videojuegos, o una galería de arte, no importa, ya luego ellos verán en qué otra cosa se volverá a emprender. La política se la dejan para alguien más, ya no es una cosa importante para ellos, a menos que realmente los invoquen para ser los sucesores, pero en realidad, como incluso han comentado, por sus ideas más abiertas e incluyentes los ven como fracasados en este ámbito. La única condición para hacer lo que quieran —al parecer— es mantener «el honor» de la familia, que no jodan el apellido. Punks vemos, padres oligarcas no sabemos.

Pedí la autorización de uno de ellos para intentar publicar varios recuerdos en torno a diversas conversaciones que me parecen importantes para atender ciertos puntos, quizás pertinentes. Mike accedió con la condición de citarlo como «Mike Apellido Impronunciable». De tal manera que Mike Apellido Impronunciable (de hecho, su apellido lleva una diéresis y una x y es en verdad difícil de pronunciar) está un día comentando cómo a su vecina, una adolescente oligarca que se había enganchado a las drogas de diseño, la enviaron a Europa a desintoxicarse mientras la familia explicaba a todo el mundo que se había ido becada al extranjero a estudiar una licenciatura en Economía. Otro día, Mike Apellido Impronunciable nos contaba que sus abuelos estaban enfrentando una demanda judicial en la que una familia indígena q'eq-chí del altiplano guatemalteco les reclamaba una porción de su finca

de cardamomo, debido a que en su juventud el abuelo había embarazado (¿violado?) a dos de sus trabajadoras; los demandantes, de hecho, tenían el mismo Apellido Impronunciable de Mike y otro indígena en todos los documentos. Otro día, Mike Apellido Impronunciable llegó con una anécdota en la que su padre, durante los años ochenta, había defendido con escopetas y granadas la sede del partido Movimiento de Liberación Nacional, el MLN (un partido facho de ultraderecha, bastante violento, que tenía como eslogan no oficial la lucha contra el comunismo), un día en el que habían asesinado a un periodista y entre los manifestantes se había esparcido el rumor de que el candidato presidencial del MLN, Mario Sandoval Alarcón (quien debido a una complicación en la garganta siempre tuvo una voz similar a la de Darth Vader), había ordenado su muerte.

En cierta ocasión, con algunos amigos y amigas de Mike Apellido Impronunciable discutimos sobre cuál sería el mejor ejemplo narrativo de sus infancias en Guatemala dentro de la actual literatura contemporánea nacional. Se supone que los escritores escriben de eso. El mío fue Javier Payeras y su novela *Afuera*, que trata de un niño de clase media que vive solitario junto a su madre soltera: «Era difícil que los domingos mi mamá me sacara a pasear a algún lado. Se sentía incómoda cuando tenía que hablar conmigo, porque nunca tenía algo que decirme que no fuera esa burocrática intolerancia a mis defectos. Yo ayudaba con la limpieza a profundidad. Cuando eso se trataba de desalojar el patio de latas viejas o guardar los cachivaches y tirar la basura, mientras la casa entera se llenaba con la música que salía de dos pequeñas bocinas».

Para Mike Apellido Impronunciable, su vehemente referencia fue decir Maurice Echeverría, un escritor que puede relatar infancias alucinógenas, con niños a los que nunca les ha faltado nada salvo un poco de amor mientras recorren perdidos (y drogados) los pasillos de los colegios más caros de la ciudad. Un escritor que lo ha ganado casi todo, como con su cuento *Pura Sangre dieciohera* donde narra cómo un miembro de la élite, luego de que le roban el celular, se enamora de una pandillera

(VII Premio Centroamericano Carátula, 2012); o su novela *Labios*, que cuenta el cortejo y la consecuencia de la relación entre dos lesbianas en Guatemala (Premio Nacional de Novela Corta Luis de Lión 2003) o su novela *Diccionario Esotérico* (Premio Centroamericano Monteforte Toledo, 2005) donde está escrita la siguiente escena:

«Ahora mismo viene a mi memoria alguien, una bruma... Leticia. Leticia era la empleada, entonces. Y yo un niño: un niño blondo, bello y pulcro. Y por lo mismo no soportaba a Leticia. Sirvienta amargada que sólo me sonrió cuatro o cinco veces en el tiempo en que trabajó con nosotros. ¿Cuál era el motivo de su desdén? Era muy malagradecida. Así son los Enojados del Pueblo, los Pobres. Cierta día, encerré a su hija de cinco años —quien vivía también con nosotros— en el clóset, la desnudé, cuidadosamente inspeccioné su cuerpecito oscuro. Fue mi venganza... Recuerdo haber estado muy excitado. La hija de Leticia no decía nada. Tenía esa mudez de los indios. No dijo nada ni siquiera cuando mi abuela abrió la puerta del clóset y nos reprendió con cierta violencia. ¿Le habrá relatado mi abuela el incidente a Leticia? No, por supuesto. El error de las clases evolucionadas es el morbo. Quiero decir con esto que el mayor superávit de los ricos es sin duda el lujo de la enfermedad, de la curiosidad malsana. Mi abuela aparentó estar enojada por la escena, pero en el fondo le gustó. Cierta vez, me hablaron de una familia muy adinerada cuyo mayor entretenimiento era el incesto. Tenían hijos tontos que escondían en una finca, esto es: innumerables hijos tontos. Como los tontos del ático, pero, en este caso, el ático era una finca de cuarenta caballerías. No: definitivamente mi abuela no le contó nada a Leticia».

Mike Apellido Impronunciable, cierto día, narró también algo que le había sucedido a uno de los primos que él más había envidiado en su vida. Era

un primo exitoso. Había salido del país becado para estudiar en una de las universidades más importantes de Francia. Allí pudo explorar su homosexualidad sin remordimientos, sin esa paranoia/preocupación/pesadilla tan real y tan guatemalteca de la oligarquía en la que sus vecinos y conocidos llegan y lo juzgan y lo aniquilan, no a él directamente, sino a su familia y su fracaso. Cuando volvió a Guatemala, como comentaba Mike Apellido Impronunciable riendo, el primo exitoso tuvo que cambiar radicalmente. Si quería heredar el negocio familiar, si quería conservar sus privilegios, tenía que «reformarse». Intenté seguir esa historia, hablar con el primo exitoso, entender sus predicamentos. Pero Mike Apellido Impronunciable, extrañamente, levantó un muro gigantesco por primera vez a todo lo que había contado y puso aún más condicionamientos. Supongo que siempre en defensa del honor de la familia. Tras indagar un poco, solo pude obtener una foto que Mike Apellido Impronunciable había subido a su Instagram, sí, celebrando la boda heterosexual de hace dos años de su primo exitoso, quien ahora es un empresario exitoso y padre de familia.

El excanciller Edgar Gutiérrez ya analizaba este fenómeno tan reaccionario de la élite también en una entrevista de 2011: «Son conscientes de la necesidad del cambio generacional, y que estos son tiempos de crisis. Tienen magníficos cuadros jóvenes formados en el extranjero, que ahora deberán sudar sus doctorados *in situ* de negocios, antropología y política nacional. Como no se sabe exactamente qué tanto influyeron las universidades y sociedades liberales extranjeras, deben tutelar la generación del relevo».

Leo esto y pienso en los nuevos cuadros que ha expuesto mediáticamente la oligarquía en los últimos años. Un Juan Carlos Tefel, joven, estudiado en una respetuosa universidad de Chicago, ex presidente de la Cámara de la Industria y del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) tirando tweets como: «La izquierda radical ha destruido decenas de países y sociedades sin embargo le ponen un nombre “cool” como “progres” y todos la aplauden». O bien: «Esta es la retórica marxista leninista del siglo XX. Ex guerrilleros marxistas disfrazados de defensores de derechos humanos.

Cambiaron las armas por las togas». Pienso también en otro heredero del poder de la élite, el diputado Álvaro Arzú Escobar, quien definitivamente sin la estirpe de su padre, la sombra del ex presidente Álvaro Arzú Irigoyen, no sería absolutamente nadie, pienso en él cuando promueve la amnistía desde el parlamento para todos los delitos de lesa humanidad cometidos durante 36 años de conflicto armado interno, con más de 200.000 desaparecidos y asesinados, un genocidio pendiente de juzgar, mientras él desde su teléfono escribe hilos de Twitter como este: «El espíritu de la Firma de la Paz (1996) fue violado por quienes buscan lucrar de los resarcimientos y vivir del odio y la venganza. Las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional nos van a permitir poner un punto final y concentrarnos en construir un mejor futuro para todos».

Tengo una amiga psicóloga que para divertirse un poco del tedio académico creó en cierto informe una nueva categoría de análisis (que desde luego no publicó) y que bautizó como «los canches». Ya saben que los académicos necesitan de estas estrategias metodológicas para estudiar un fenómeno. «Canche» se utiliza en Guatemala para referirse a cualquier persona con rasgos europeos o caucásicos. Algo así como el «gringos» que usamos en toda Latinoamérica para referirnos a los estadounidenses. La etimología de canche, entonces, proviene de uno de los 23 idiomas indígenas que se habla en el país, el kiché, con la palabra «caxlán» cuyo uso se remonta a la época colonial, cuando fue utilizada para referirse a los blancos y los mestizos. Al usarla como categoría de análisis a modo de broma académica, «los canches» se refiere a la élite y a todo lo que hacen y profesan intelectualmente. De hecho, en mi familia la hemos empezado a utilizar de manera coloquial incómoda. Si gastamos más de lo debido decimos: «Esto es de canches». Si nos damos el pequeño lujo de comer en un restaurante caro decimos: «Esto es de canches». La última vez que recuerdo que todos en la familia la utilizamos fue cuando me compré una Xbox Series X con capacidad de

retrocompatibilidad y salidas de video 8K para poder jugar los títulos más violentos de la historia. «Es de canches», resolvió mi madre, a sus setenta y tantos años de edad.

Aunque, de cierta, manera es fascinante utilizar esta categoría de análisis para todo. Porque es obvia y simple y demasiado fácil de entender. Cuando la élite sale a protestar a las calles por algo tan absurdo como la imposición gubernamental del uso de las mascarillas para evitar el contagio de la COVID-19, lo hace en caravanas de autos de lujo. Bajan la ventanilla y entonces aparecen ellos con sus rasgos rubios, blancos y europeos, siendo lo que son: una categoría de análisis que se puede llamar «los canches».

Recuerdo cuando se dieron las largas jornadas de manifestaciones durante 2015 donde todos pedíamos la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, señalado de haber dirigido una importante red de defraudación aduanera, como parte de una investigación presentada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Los canches nos acompañaron. Se mezclaron con nosotros. Emocionalmente compartíamos un sentimiento similar al que deviene inmediatamente después de que te han asaltado: frustración, enojo, impotencia... (En mi vida me han asaltado tres veces de forma violenta y es algo que te afecta.) Y eso era lo que se sentía cuando se supo que el presidente y la vicepresidenta de ese momento nos habían robado a todos desde las aduanas. Los canches estaban ahí, incluso cuando el binomio presidencial presentó su renuncia. Incluso durante el proceso electoral que se dio luego de todos esos eventos. Pero para entonces, los canches entendieron todo como una nueva amenaza al statu quo. Si el pueblo salía a protestar... no vaya a ser que... Y acordaron que había que actuar como la Gerencia. Y manipular con su dinero las elecciones.

Eso fue algo que se supo después. Pero las investigaciones en contra de los políticos corruptos derivaron en buscar también a los corruptores. Y la CICIG empezó a armar casos donde los empresarios, los más

importantes de la industria, estaban involucrados. La lista de los grandes empresarios capturados era larga y empezó en mayo de 2015 con Max Quirín, expresidente de la entidad que regula los precios de exportación del café (Anacafé). Quirín había sido señalado por la CICIG en el caso IGSS-Pisa, donde era parte de la junta directiva del Seguro Social que no se opuso a un soborno de 2,3 millones de dólares estadounidenses para un contrato de diálisis otorgado a una empresa de cartón que costó la vida de 50 pacientes renales.

En 2016, uno de los accionistas mayoritarios de Banco Industrial, José Luis Gabriel Abularch, fue arraigado y citado en tribunales, cuando su empresa Aceros de Guatemala, la mayor metalúrgica en el país, fue señalada de haber utilizado 30 empresas fantasmas, en un complejo esquema que tenía como propósito evadir el pago de 100 millones de dólares estadounidenses en impuestos y conseguir devoluciones de crédito fiscal por 1,5 millones.

Ese mismo año, 19 empresarios de alto rango fueron llevados a tribunales por haber financiado de manera ilegal al Partido Patriota, a través de la exvicepresidenta Roxanna Baldetti. Entre los implicados de este caso llamado Cooptación del Estado había expresidentes de la Cámara de la Construcción, miembros de la Cámara de Finanzas, gerentes generales de la industria extractiva de Montana Exploradora y de Claro, la gigante de las telecomunicaciones en Guatemala.

En 2017, el caso Construcción y Corrupción llevó al banquillo a decenas de constructores, acusados de pagar sobornos millonarios al exministro Alejandro Sinibaldi a cambio del pago de deuda por obras públicas realizadas en años anteriores.

Y en 2018, la lista de empresas tuvo una escalada importante cuando el caso Traficantes de Influencias, presentado por la CICIG, daba cuenta de una estructura criminal que funcionaba dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) dedicada a tramitar

expedientes de devolución de crédito fiscal a cambio de sobornos para las siguientes empresas: Maya Quetzal (350.600 USD), Industria de Tubo y Perfiles S.A. Inturpesa (700.500 USD), Reforestadora de Palma El Petén, REPSA (5 millones USD), Producción y Negocios Industriales (500.000 USD), Ingenio Palo Gordo (no se concretó el crédito fiscal), Grupo Magdalena (2.500.000 USD). Fue el año en que también se presentó el caso Odebrecht en su versión guatemalteca, pero con el mismo patrón de sobornos a cambio de contratos para la construcción de obra pública.

El punto máximo llegó ese 2018 cuando la cervecería, la industria del azúcar, la banca, fueron acusados de financiar la campaña del ex presidente Jimmy Morales de manera ilícita. Ese fue el día en que los empresarios pidieron perdón públicamente por sus errores. Y fue el día en que la Gerencia dijo basta.

Revisé varias publicaciones luego de esta máxima reacción de la élite. Hay muchas iniciativas académicas, culturales y literarias que intentan comprender qué fue lo que ocurrió durante estos años. Cómo pasaron todos esos canches de acompañarnos en las protestas, gritando con pancartas, haciendo memes para redes sociales... incluso recuerdo que saludé una tarde a los Straight Edge que estaban organizando un concierto estridente en uno de los rincones de la plaza central durante una de las manifestaciones más masivas. Pero luego desaparecieron. Cambiaron su lógica de manera abrupta al sentirse amenazados. En una de estas publicaciones que encontré, publicada por la editorial Catafixia y el Instituto 25A, Iván Velásquez, el fiscal anticorrupción colombiano que había sido el responsable de haber señalado a la élite de Guatemala de todos estos delitos como jefe de la CICIG, decía:

«La actitud frente a la CICIG cambió desde que se mencionaron empresarios. Fue un proceso gradual. Todos los que iban a la cárcel de Mariscal Zabala se integraban al proyecto contra la CICIG. Ese fue un factor que incidió bastante en el resultado final: permitir que

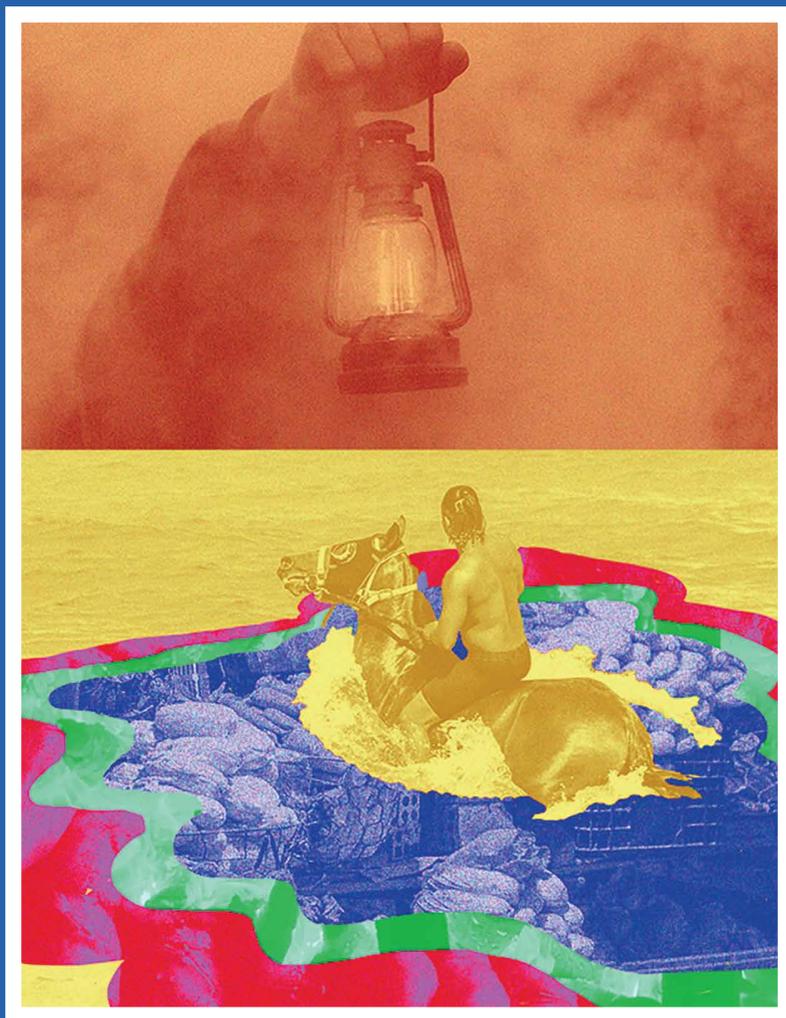
todos los afectados por las investigaciones estuvieran juntos confabulando para organizar un ataque mediático y jurídico, para realizar campañas de desprestigio a las que a principios de 2017 se sumó el presidente Morales con ministros de su gobierno. Luego en junio de 2016 se sumó la fuerza mayor de empresarios, luego de los temores que generó el caso Cooptación. Ellos sabían qué era lo que habían hecho. No solo en cuanto a sobornos, sino en cuanto a financiamiento electoral ilícito, que probablemente era una de sus mayores preocupaciones. Yo les dije a la élite: nosotros llegamos hasta donde la prueba lo permita. Ellos me respondieron que eran muchos, que había que seleccionar, o que mejor le pusiéramos una alambrada al país y que nadie saliera de aquí porque todos estaban metidos en esto».

Según las investigaciones de Ministerio Público (MP), y gracias a la colaboración eficaz de dos empresarias, se había descubierto una trama de la élite guatemalteca que operó en 2015, inyectando más de un millón de dólares estadounidenses, mediante simulacros de contratación de personal, que fueron a dar a las cuentas bancarias del partido de FCN-Nación. Ese dinero nunca fue reportado al Tribunal Supremo Electoral y eso constituía un delito. En los testimonios de colaboración, se narraba cómo el expresidente Morales fue quien sugirió el mecanismo ilícito para recibir el dinero. Los empresarios, a pesar de algunas alertas dentro del mismo grupo, aceptaron colaborar de forma anómala con el entonces candidato, cuyo eslogan de campaña era «Ni corrupto ni ladrón».

Tras aquella conferencia de disculpa nacional que incendió las redes sociales, el sentimiento de autoconservación se disparó. Las élites no dejarían que les ganaran en su propia cancha, en el país que han manejado durante siglos. La disculpa se convirtió en una venganza. Tengo presente el día en que una colega periodista, Jody García, publicó un extenso reportaje sobre cómo la élite había pagado un *lobby* en el

Congreso de Estados Unidos con el objetivo de expulsar del país a la CICIG, que había sido creada mediante un convenio con la ONU. Ese día yo estaba en las oficinas de las cámaras patronales a la espera de una entrevista que había solicitado con antelación. Primero salieron nerviosos los de personal de comunicación, luego los empresarios bajaron por algún ascensor exclusivo y se disculparon de suspender la reunión. Tenían, dijeron, que analizar otros asuntos. Desde la ventana del noveno nivel, junto a varios de sus empleados, vimos cómo salió del edificio una caravana de autos de lujo blindados. Después la élite decidió desempolvar la alianza con el candidato que habían llevado a la presidencia. Y Jimmy Morales, el expresidente de Guatemala que durante décadas había sido un comediante conservador, pero con un repertorio de chistes machistas, racistas y misóginos, también acusado por la CICIG para entonces, decidió devolver el favor y poner punto final a las investigaciones. Expulsó a varios investigadores extranjeros. No dejó reingresar al país al Comisionado Iván Velásquez. Y dio por terminado el acuerdo firmado con la ONU, 12 años antes, con el que se había establecido la CICIG para atacar a los poderes paralelos que habían capturado el Estado. Fue el mensaje más claro que ha dado la Gerencia. No tuvo que salir a desgastarse en directo en todas las pantallas celulares. Aunque fue directo. Le habló al pueblo, a los poderes emergentes, a los políticos, jueces y magistrados, a la comunidad internacional... Entre líneas, o, en resumen, era algo como esto: «Este país es nuestro. Y nunca será de ustedes», atentamente: la Gerencia».

ÉLITES SIN DESTINO LATAM



HONDURAS

Las élites económicas del narcoestado

JENNIFER ÁVILA REYES

Periodista de tiempo completo en Honduras, país donde ha sido reportera, fixer, analista e investigadora los últimos 10 años. Con experiencia en radio y multimedia, ha cubierto historias relacionadas con violencia basada en género, violencia urbana, corrupción en el Estado y empresas privadas, conflictos socioambientales, migraciones forzadas y violaciones de derechos humanos en medio de una autocracia. En todos estos años ha participado en investigaciones transnacionales con el Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación (CLIP) y recientemente con el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) con la investigación Pandora Papers. Actualmente es editora y periodista de Contracorriente, medio de comunicación digital que fundó en 2017 y que ha sido premiado por su aporte periodístico en Honduras con el Lasa Media Award en 2020 y el Democracy Award en 2021 así como también recibió una mención honorífica en el Premio María Moors Cabot en 2021.

Un golpe de Estado¹³ nos puso en la cara quiénes mandaban en Honduras, cuando las élites económicas de origen extranjero fueron señaladas como las que movieron las piezas para no perder sus beneficios. Doce años han pasado desde esa ruptura y en este tiempo, en que un régimen autoritario se instauró, se volvió más evidente la vinculación entre élites económicas, políticos y grupos criminales. Ahora, con la llegada de un nuevo gobierno de corte izquierdista, no solamente está la expectativa de que la autocracia se desmonte, sino también de que se acaben los privilegios de una élite que colaboró en el saqueo del Estado.

Hay una imagen en la ciudad de San Pedro Sula que muestra la caída de la burguesía local y el empoderamiento de una élite económica extranjera, me dice el escritor e historiador Julio Escoto. Estamos en el estudio de su familia, donde él se reúne con una élite intelectual bien reducida de San Pedro Sula y su esposa da clases de ballet a niñas en edad escolar. Escoto es un observador, se ha dedicado toda su vida a escribir novelas históricas, por eso me dice que, desde su perspectiva, el edificio del Casino Sampedrano, totalmente en ruinas en pleno bulevar principal de la ciudad, es un símbolo.

El Casino Sampedrano era el escenario donde la burguesía local del siglo XX, terratenientes herederos de la precaria administración colonial, presumía de sus excesos. Y eran excluyentes, los nuevos comerciantes árabes y judíos, recién emigrados huyendo de la pobreza en sus países, no podían entrar al casino. En ese momento, San Pedro Sula y toda la zona norte del país estaba sumida en las plantaciones de las compañías bananeras y el abandono del precario estado nacional; el escenario de la verdadera *Banana Republic*. El progreso que trajo la compañía frutera a esa región olvidada alcanzaba también para nutrir la riqueza de esa poco educada burguesía local.

¹³ El 28 de junio del 2009 se dio el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya en Honduras.

Escoto, así como otros historiadores, argumenta que la burguesía nacional de Honduras era la más pobre de la región y por eso rápidamente sucumbió al tiempo que las familias de origen palestino fueron acumulando riquezas en la ciudad desde 1939. También construyeron sus propios símbolos de poder, el Club Árabe Hondureño. Del Casino —y de esa burguesía local— solo quedaron ruinas que, siguiendo con las metáforas, algunos indigentes de la ciudad ahora han tomado como hogar. Pero una nueva élite terminó erigiéndose y colocó a sus familias en las listas de la revista Forbes por ser poderosos dueños de medios de comunicación y actores importantes de la política hondureña.

La desigualdad económica en Honduras es la cuarta más alta de América Latina. Según el reporte del Bertelsmann Transformation Index de 2020, el 20% más rico de la sociedad recibió el 55% del ingreso total del país, mientras que el 20% más pobre recibió solo el 3,2% del ingreso agregado, una desproporción que poco ha cambiado desde 1999. Honduras es un país eminentemente rural, solo tiene dos ciudades con algunos servicios públicos mínimos: San Pedro Sula y Tegucigalpa. Ambas también son las ciudades más violentas del país. San Pedro Sula es una de las ciudades que mejor retrata esa desigualdad reportada en los índices de transformación o desarrollo. Allí donde los cinturones de pobreza han desencadenado además una crisis de violencia muy grave, también radica el hombre más rico del país, el pakistaní Yusuf Amdani. Y de esa ciudad es la familia Rosenthal, de origen judío, que se convirtió en grupo económico en los años 90 y desarrolló un imperio que la colocó como la familia más rica del país. El patriarca, Jaime Rosenthal Oliva, ya de la segunda generación, intentó ser presidente en dos ocasiones sin éxito, aunque logró ser vicepresidente y diputado. Su hijo, Yani Rosenthal Oliva, es quien le ha seguido los pasos en la política, en las pasadas elecciones generales fue uno de los candidatos más controversiales, ya que cumplió una pena de 36 meses de cárcel en EE.UU. por delitos relacionados al lavado de activos. Su pasado se reflejó en las urnas ya que solamente el 9% de los hondureños votó por él para presidente. A pesar de eso, tiene un poder simbólico aplastante.

Pero de Yani Rosenthal hablaremos después. Por ahora, Escoto sigue contando cómo con la llegada de los migrantes desde Palestina y Rumanía y su nacionalización en 1937, la zona norte despegó de la mano de ellos. «En ese contexto entra una población con ciertas características étnicas, que es la árabe, a principios del siglo XX en Honduras, muchos de ellos venían de Palestina con pasaporte turco. Se dedicaban a recoger el banano que se tiraba al lado de las líneas férreas y lo iban a vender a los barrios, era gente que producía camisas, pantalones y los iba a vender al crédito a veces a cinco lempiras por semana y comenzaron poco a poco a adquirir capital, muy trabajadores, y fueron constituyendo sobre todo acá en el Valle de Sula la fuerza económica que mantiene a sus hijos», cuenta, mientras se hidrata con un vaso de agua; la temperatura está quizá a unos 40 grados centígrados, hay una humedad que noquea y zancudos que desangran.

UN GOLPE DE ÉLITES

Durante el golpe de Estado de 2009 se veían pintas en los muros de Tegucigalpa: «Turcos fuera». En Honduras se les dice despectivamente «turcos» a los descendientes de los árabes que llegaron en los años 30 y se nacionalizaron hondureños; muchas de estas familias conforman la élite hondureña. Varios estudiosos les han llamado «familias o poderes fácticos», ya que han acumulado capital financiero pero además poder simbólico a través de sus inversiones en medios de comunicación y su inclusión en la política hondureña. Varios incluso les llamaron «la oligarquía», una «élite golpista» por la cual el golpe de Estado se materializó. Sin embargo, el historiador que más objetivamente ha abordado el papel de las familias ricas desde un punto etnoracial, Darío Euraque, difiere de colocarles esa descripción.

En un documento publicado en el *Anuario de Estudios Centroamericanos*, vol. 45, de la Universidad de Costa Rica en 2019, Euraque argumenta que las «élites», «oligarquías» y «burguesías» en Honduras aún carecen de estudios históricos sistemáticos. Apunta en su ensayo que:

«En este vacío historiográfico es difícil caracterizar el accionar y motivación de las «10 familias» que supuestamente financiaron el golpe de Estado del 2009, aunque aun así continúan publicaciones con superficiales referencias a la «oligarquía hondureña» (Shirpley). Tampoco es fácil determinar claramente el accionar de las élites en su conjunto, en sus segmentos, fracciones y personajes más conspicuos, ante la disyuntiva que presenta la ilegitimidad que sufre el sistema político hondureño, y los partidos políticos, sobre todo con el hecho de que durante la década posterior al golpe de Estado parece ser que el peso de los segmentos tradicionales más poderosos y su influencia sobre el Estado concesionario lo asumieron más bien clanes de narcotraficantes transnacionales, quienes invirtieron en los mecanismos políticos partidarios clientelistas de antaño (Chayes, 2017)».

Las élites económicas hondureñas son un conglomerado heterogéneo que se enriquece de los vacíos del Estado y de la defraudación oportunista de la poca institucionalidad existente.

Después de las elecciones de 2010 (un año después del golpe), tomó posesión el Partido Nacional bajo el liderazgo de Juan Orlando Hernández, quien desde la presidencia del Congreso Nacional se encargó de consolidar su poder y concentrar los tres poderes del Estado. Desde ese entonces, Hernández gobernó en una clara autocracia electoral, pero es desde ese entonces también que nuevos actores económicos se involucraron en el financiamiento de su gobierno y en las redes de corrupción. Ya no son solamente esas familias que han tenido

su cuota de poder y su margen de negociación gracias a su capital, ahora hablamos también de narcotraficantes, algo ya mundialmente conocido por los juicios en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, sobre todo el de Antonio Hernández, hermano del presidente. También hablamos de una élite política que gracias a estos nuevos ingresos comenzó a tener más capital y más poder a la hora de negociar con los empresarios tradicionales. También son clanes familiares como el de Hernández o como el de Porfirio Lobo Sosa, el expresidente de 2010. Y también surge una nueva generación de empresarios beneficiados con concesiones millonarias del Estado y con gran influencia en los poderes del Estado como es el caso de Lenir Pérez, esposo de una de las hijas de Miguel Facussé.

El historiador Escoto cuenta que su grupo de amigos de «élite intelectual» se rompió para el golpe de Estado porque cinco de ellos se sintieron acusados de ser «oligarquía», algo que ellos aseguraban no era su culpa.

«Una de las interpretaciones que tuvimos inmediatamente es que ellos no eran oligarquía. Oligarquía es un estamento mayormente económico que ejerce grandes influencias políticas y que usualmente no es conocido o es muy discreto, casi lo que conocemos como grupos fácticos, y caen más bien dentro de un rango moral negativo»; de esos no eran sus amigos, dice Escoto.

«Hay fotografías simbólicas, una por ejemplo, cuando Michelletti (el presidente de facto de 2009) vino a San Pedro Sula después del golpe más o menos al mes y fue recibido en Expocentro en un salón enorme por todo Arabia Saudita o Arabia Sulita, diría yo. Todos los árabes aplaudiendo, aplaudiendo al hombre todo por miedo de que efectivamente iba a entrar a Honduras un gobierno de izquierda aliado con Chávez y que les podía reducir sus ingresos, ponerles más impuestos, quitarles propiedades aunque yo creo que más bien fue porque de pronto se dieron cuenta que se podían repartir el Estado entre ellos mismos», explica Escoto. Y la repartición se dio.

Independientemente de la precisión del concepto de oligarquía con que Escoto analiza a su grupo de amigos intelectuales, tal como él mismo lo señala, élites, burguesías y oligarquías se plegaron totalmente al golpe de Estado.

UN MODELO ECONÓMICO Y UNAS ÉLITES QUE SE NUTREN DE LA CORRUPCIÓN

Uno de los apellidos árabes más comunes y controversiales en Honduras es el Facussé, sobre todo por Miguel Facussé, ya de segunda generación, quien murió en 2015, después de crear un imperio con la industria de la palma aceitera. Fue el protagonista de una cruenta guerra por la tierra en el valle más productivo del país, el Valle del Aguán al norte de Honduras. Cuando entró el modelo neoliberal a Honduras en 1990 de la mano del presidente del Partido Nacional, Rafael Leonardo Callejas (quien murió preso en Estados Unidos por el escándalo del Fifagate), se echó para atrás la reforma agraria para dar paso a una Ley de Modernización Agrícola que permitía la acumulación de tierras en pocas manos y la venta de tierras que habían sido entregadas a campesinos durante la reforma. La mayoría de tierras en el valle del Aguán, que hasta este momento suman 12.000 hectáreas, cayeron en manos de Facussé con su empresa Dinant. Entre 2008 y 2012 murieron 128 personas, mayormente campesinos y varios guardias de seguridad en medio de un conflicto en el que los campesinos buscaron recuperar tierras enfrentándose al empresario.

Todo esto sucedió en la zona atlántica de Honduras, donde en esos años floreció el cártel de tráfico de drogas más grande que ha habido en el país, el cártel de los Cachiros, llamados así porque el patriarca de esa familia se llama Isidro y todos ellos son fieles a San

Isidro Labrador. A Facussé se le señaló de colaborar con el aterrizaje de avionetas con drogas en sus propiedades. Una ciudadana de Tocoa, la ciudad central del valle del Aguán donde vivían los Cachiros y donde está la empresa de Facussé, me dijo una vez que entre más droga circulaba por el Aguán, más palma africana iba a inundar el territorio. La palma es la materia prima del imperio de Facussé y la cocaína el motor de la economía en un sector olvidado por el Estado. El modelo económico propuesto por la reforma agraria, la distribución de tierras a cooperativas para diversificar la producción agrícola y con ello activar el campo en el norte, fue sustituido por la concentración de grandes extensiones de tierra para el cultivo extensivo de la palma, dejando fuera a las cooperativas campesinas y abriendo la costa caribe de Honduras al narcotráfico.

Ese cambio de modelo económico en los 90 es el punto de partida para lo que tenemos ahora y para entender el poder de las élites, me explica Eduardo Facussé, quien a pesar de su apellido, se desliga de Miguel Facussé. Eduardo es actualmente el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, su padre fue presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) antes del golpe de Estado, pero aunque en ese momento no tenía una posición beligerante, ahora es un crítico del gobierno nacionalista. Ahora su hijo es una voz crítica que se desvincula de las élites empresariales más poderosas.

Como en otros países de Latinoamérica, las políticas neoliberales no produjeron economías abiertas y competitivas, con burocracias estatales reducidas y eficientes. Al contrario, los precarios activos del Estado fueron depredados por élites económicas tradicionales, la burocracia estatal creció como forma de garantizar el clientelismo y la clase política se independizó económicamente gracias a la corrupción convirtiéndose en la principal fuente de financiamiento mafioso del sistema político. El neoliberalismo no hizo un mejor capitalismo, porque aquí en Honduras eso no existía ni aún en sus formas más incipientes.

Eduardo Facussé dice que en los años de la entrada del neoliberalismo, la relación entre élites económicas y políticas fue simbiótica, ahora más bien parece una relación competitiva. «Los grupos económicos financiaban la parte política y solicitaban los cambios para tratar de hacer progreso en Honduras o para agenciar negocios o intereses particulares. Hoy en día el incremento de la corrupción ha causado que la clase política se ha vuelto más independiente, tiene su propia oligarquía y ellos también están demandando su propio espacio, entonces están amarrados los dos de manera de que no dejan al país progresar», dice este empresario radicado en San Pedro Sula.

Facussé se considera un empresario en la lucha anticorrupción, algo impopular en estos tiempos. «Ahora lo que mantiene unida a la oligarquía económica con la oligarquía política es la corrupción, ese es el vehículo.»

Y hay varios ejemplos que ilustran que la corrupción no puede ser posible sin la participación de los dos actores, empresarios y políticos. En octubre de 2021, el ICJ (Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación) reveló el *leak* más grande en la historia del periodismo, más de 11 millones de archivos de 14 empresas facilitadoras de servicios *offshore* en el mundo que vinculaban a empresarios y políticos de alto nivel en inversiones cuestionables y poco transparentes. En Honduras, desde el medio que dirigió investigamos cinco casos, entre los cuales estaba el expresidente Porfirio Lobo Sosa, el actual contendiente por el mismo partido que Lobo para la presidencia, el empresario de la construcción de origen palestino Nasry Asfura y un diputado del mismo partido y también de origen árabe, Yaudet Burbara. Pero también hubo dos empresarios, uno de ellos Yankel Rosenthal, de origen judío, quien estuvo preso en Estados Unidos por delitos relacionados al lavado de activos y primo del presidente Yaní Rosenthal, y el empresario Fauzi Rishmawi de origen árabe.

En el caso de Yankel Rosenthal, quien se declaró culpable de realizar transacciones con bienes ilícitos en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, se reveló cómo también servía de enlace entre la élite, los

narcotraficantes y el gobierno. Los Rosenthal han sido miembros del Partido Liberal desde siempre, y han tenido su cuota de poder también con el Partido Nacional. Yankel, por ejemplo, incluso fue ministro del presidente Juan Orlando Hernández y tuvo pláticas con narcotraficantes para financiar su campaña.

Yankel manejó empresas *offshore* que pueden dar pistas de más delitos relacionados al lavado de activos, pero después de que cumplió su pena de 36 meses en EE.UU., pareciera que ya nadie lo busca más. Las veces que intenté contactarlo me dijeron que pasaba viajando entre México y Portugal y que regresaba a Honduras solo cuando jugaba el equipo de fútbol del que aún es presidente en San Pedro Sula. Su primo Yani, el candidato a presidente, se negó a hablar conmigo; después de un mes de espera accedí a darme una entrevista que canceló el día que habíamos pactado. La última vez que lo vi e intenté hablar con él, daba una conferencia de prensa como coordinador del Partido Liberal de Honduras tras su apabullante derrota en las elecciones, jugaba la última carta que le queda en la política hondureña: la negociación con el Partido Libre de la ganadora Xiomara Castro para controlar el Congreso Nacional.

Por otro lado, Fauzi Rishmawy representa la figura del «cómplice necesario» para la corrupción. Rishmawy fue procesado judicialmente por fraude en el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), un caso que levantó la indignación del pueblo hondureño que pedía una lucha anticorrupción independiente. El padre de Rishmawi llegó a Honduras desde Chile, se casó con una hondureña en el norte del país y consolidó su familia aquí. Ahora los Rishmawi son un grupo empresarial de la construcción y la energía que se ha expandido por Centroamérica. Rishmawy fue acusado por sobrevalorar por más o menos un millón de dólares unas calderas que vendió al Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS, y por transferir dinero a funcionarios públicos. Rishmawy me dijo que por un millón de dólares él no pondría en riesgo el trabajo de más de 40 años, el nombre de su familia y sus relaciones con comerciantes internacionales. Y seguramente es

cierto; lo que no dijo Rishmawy es que esa sobrevaloración, ese millón, no es para ser más millonario sino para garantizarse ser proveedor del Estado, que es uno de sus clientes más grandes.

La sobrevaloración no es la ganancia de los empresarios, sino que es lo necesario para poder seguir en el juego como proveedores exclusivos y así asegurar la renovación continua de contratos con el Estado. Esa es la relación simbiótica de la que habló Facussé.

Estamos en la Cámara de Comercio que lidera Facussé en San Pedro Sula y ese día llegará Nasry Asfura a presentar su plan de gobierno a los empresarios. Facussé dice que Asfura es una buena persona pero que carga una pesada mochila, todos los crímenes de su partido, el Partido Nacional, el mismo de Juan Orlando Hernández.

En el momento que vive Honduras, con la salida del presidente Hernández tras 8 años en el poder, Facussé reconoce que las élites cometieron un error apoyando el golpe de Estado de 2009, pero también apoyando la misma reelección de Juan Orlando Hernández en 2017. «Ese suceso no podía llevarse a cabo si no era con el apoyo de la oligarquía económica, esa es tal vez la prueba más fehaciente de que había una simbiosis ahí ya creándose y creo que ya los últimos años han sido desastrosos en términos de esa relación, se ha degenerado, hemos visto el incremento en los niveles de corrupción y en la deformación de las leyes, no hay reglas justas en el juego y ese es el deterioro que vemos de 2014 a este año. Creo que en el 2014 al país le entraban 1.600 millones de dólares de inversiones extranjeras directas y hoy en día estamos debajo de 400, lo han aniquilado realmente», explica.

A diferencia de lo que dice Facussé de que el país está quebrado y que no hay ni negocios nuevos, a pesar de la devastación de dos tormentas tropicales y la pandemia por COVID-19, se ven en San Pedro Sula grandes y nuevas edificaciones de condominios, muchas de ellas vacías, el lujo de una ciudad que no puede dárselo. Dice Facussé que esos

excesos que se ven no son reales y que ese es el gran daño que hace el narco a la economía de este país, que convierte todo en un espejismo y profundiza la desigualdad.

«Declaraban en New York que han financiado campañas políticas (los narcos). Bueno, pregunto, ¿por qué? ¿Por qué los políticos habrán aceptado eso? Porque querían tener mayor independencia de la élite económica para decidir más ellos y que no les dijeran qué hacer. Aunque la mayoría de la economía es real, no es que vamos a decir que hay una gran parte de la economía que se mueve por estos dineros ilícitos, lo que pasa es que distorsiona la realidad, porque tienes ingresos que no son reales. Entonces muchas veces estamos viviendo hasta cierto punto en una falacia de dinero que realmente no se produce localmente. En la medida que se formalizan las transacciones, se formalicen los empleos, se formalicen los comerciantes, eso creo yo que va a ir desapareciendo», dice Facussé desde la oficina del empresariado, muy lejos del centro de la ciudad, inundada por comerciantes informales que sobreviven día a día.

Dice Facussé que son al menos unas cincuenta personas las que deciden por el país ahora, la élite económica, que no se puede ver uniforme, que ahora incluye algunos políticos o familiares lejanos que han agarrado poder gracias a la corrupción. Y también las históricas, las que negocian con quien sea: «las grandes familias».

«Tradicionalmente en este país los negocios han sido familiares, o sea, Honduras no ha pasado a negocios donde salimos a una bolsa, bolsa donde hay una inversión pública, estamos todavía bajo un esquema bien tradicional. Entonces lógicamente los patrimonios son familiares no porque así lo escogieron, sino porque sencillamente el medio es lo único que permite. Nuestra economía no ha dado ese avance cualitativo como lo ha dado la élite en Guatemala, por ejemplo», dice.

La economía hondureña no se diversificó lo suficiente para que las nuevas generaciones de élites económicas pudieran seguir multiplicando su riqueza. A eso se sumó que el modelo extractivo de recursos naturales produjo una sociedad convulsionada por conflictos sociales. Entonces fue la corrupción y el narcotráfico lo que vino a renovar las fuentes de enriquecimiento para unas élites y a crear otras nuevas élites cuya única virtud productiva es controlar la política de forma mafiosa. Lo desleal de esta competencia entre élites es que ahora, las nuevas surgidas de la política ya no tienen que negociar con las tradicionales el financiamiento de los partidos. Ahora, esas nuevas élites se financian solas y los beneficios del gran productor de riqueza, el Estado, los monopolizan poniendo muy difícil la sobrevivencia a unas élites tradicionales que deben enfrentar conflictos sociales producidos por su fuente de riqueza, los recursos naturales. Así las cosas, la corrupción sí es un problema, pero no lo fue antes, cuando la política estuvo subordinada a las «oligarquías».

DE NARCOS, POLÍTICOS Y EMPRESARIOS

«Yo no soy de élite, no soy de andar en clubes, asociaciones, yo soy de andar en la iglesia... paso trabajando todo el día en la política, en la noche en los Emiratos... Yo no soy hombre de pistolas, nunca he querido andar armado, allí tengo una AK (47) que me regalaron y ni la he tocado. No soy un hombre tufoso como dicen en mi pueblo», responde el diputado Óscar Nájera cuando le pregunto si él se considera un hombre de élite. No es «tufoso»; en el argot popular hondureño eso quiere decir engreído. No es como las élites, dice.

Nájera fue diputado desde 1987, y antes de perder su curul en estas elecciones me dijo que para la próxima contienda electoral en 2026

él aspiraría por la presidencia desde su partido, el Partido Nacional. Pero ahora está derrotado y en el fin de su carrera política como diputado porque en las elecciones de noviembre de 2021 le pasaron factura los muchos señalamientos y sanciones internacionales, como haber sido enlistado en las sanciones de la Ley Magnitsky en Estados Unidos y en la Lista Engel. A pesar de esto, Nájera sigue siendo un hombre popular y siempre atribuyó los señalamientos a «la envidia» de algunos de sus amigos e incluso de algunos de sus compañeros de partido.

Nájera es de Colón, en el valle del Aguán, allí mismo donde Miguel Facussé hizo su imperio de palma africana. «Territorio najerista», decía un rótulo en la entrada de Tocoa. El poder simbólico de este diputado eterno no se acaba con haber perdido las elecciones esta vez, él también es un reconocido empresario palmero, por eso dice que por las noches trabaja en los Emiratos Árabes o en Malasia, porque tiene que ver con sus inversiones en ese rubro. A veces se filma llegando a Colón en su helicóptero después de recorrer sus fincas de palma. Nájera no niega que fue amigo de los Cachiros, quienes en los juicios de Nueva York lo han mencionado como el enlace entre narcos y políticos para garantizar protección. Pero dice que aunque fueron amigos jamás hizo negocios con ellos porque es cristiano. «Uno no escoge su familia pero sí sus amigos, si tengo amigos buenos es el 99,9%, que uno que otro se me haya colado, igual los quiero porque todos somos hijos de Dios», asegura.

Este diputado representa lo que Eduardo Facussé hablaba antes, esa élite política que se independizó, que con recursos frescos, muchas veces ilícitos, no quería recibir instrucciones de ningún «tufoso» y que desde su finca (llámese así también el departamento que controla) hace y deshace además con los fondos del Estado.

«Yo soy un diputado de pueblo, beligerante, miedo a nadie, solo temor a Dios, he sido diputado, nunca he peleado con nadie. El voto del millonario y el del pobre son iguales, no soy un diputado de élite, de andar en embajadas, en fiestas, soy normal», aduce.

Nájera nació en el territorio bananero y aunque salió a estudiar a la ciudad, su pensamiento se quedó como el de un capataz. El historiador Julio Escoto dice que así era la burguesía local hondureña a inicios del siglo XX, «regresaba de sus asuntos políticos al campo, a su casa, a vivir como un campesino sin servicios ni educación».

Antes de las elecciones del 2021 pensaba que no era descabellado que Honduras diera la oportunidad a Nájera de ser presidente. El país ha tenido solamente cuatro presidentes empresarios o intelectuales: el presidente Callejas, heredero de una burguesía local en 1990; en 1994 el presidente Carlos Roberto Reina del Partido Liberal, un intelectual, abogado y diplomático; en 1998 el presidente Carlos Flores Facussé, empresario también del Partido Liberal y en 2002 el presidente nacionalista Ricardo Maduro, reconocido empresario de origen panameño. Después de Maduro los presidentes han sido populistas rurales que hablan y se comportan como finqueros.

Por otro lado, en la misma jungla electoral pero desde su posición de élite judía está Yani Rosenthal Hidalgo. Yani es ya de la tercera generación de la familia Rosenthal, cuyo grupo económico fue golpeado con las acusaciones contra él, su padre Jaime Rosenthal Oliva y su primo Yankel Rosenthal. Los tres reconocidos empresarios y políticos del Partido Liberal fueron investigados por la DEA y acusados por la Fiscalía del Distrito Sur por lavado de activos provenientes del narcotráfico. No fue una sorpresa en Honduras que los Cachiros revelaran que esta familia era su socio comercial más importante. Se veían rótulos en todas las construcciones de los Cachiros que decían que eran financiados por Banco Continental, el corazón del grupo económico de los Rosenthal.

Ya en Nueva York después de su entrega, los Rosenthal —a excepción del padre, don Jaime, quien se quedó en Honduras enfrentando un cargo por evasión fiscal— se declararon culpables de un delito menor y la negociación con la fiscalía nos quitó la oportunidad de conocer los indicios de una red de lavado de activos que al final no se pudo

comprobar. Mientras tanto, en Honduras, el gobierno de Juan Orlando Hernández incautó las empresas más importantes de la familia y repartió la cartera de Banco Continental a diversos bancos; el más beneficiado fue el banco guatemalteco Banrural.

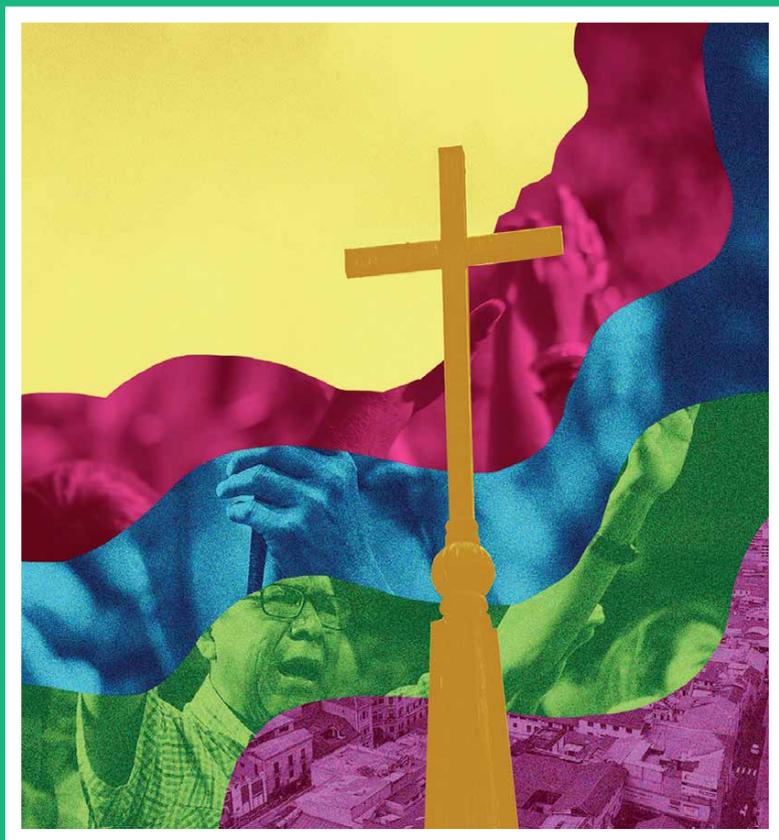
Ahora Yani, que regresó para recuperar poder, hizo una campaña de victimización con su historia y llama a sus años de cárcel un exilio, así como a las incautaciones como un ataque político. «Yo he sufrido como ustedes», le decía a la población hondureña que ha sufrido por la pobreza y la violencia por décadas, y sobre todo por la impunidad que ha cobijado a la clase política y que le permitió al mismo Yani ser candidato presidencial.

Antes de las elecciones, decía Eduardo Facussé que Yani es «de los candidatos, el más estructurado mentalmente, tiene tal vez el mejor plan de gobierno, pero la mochila que anda atrás es bien pesada». Y admite que el caso de los Rosenthal le dio una gran lección a la élite. «Que tenemos que tener más cuidado de cómo hacemos la operación, fue un llamado de atención a la clase empresarial para recordarle que tiene que tener cuidado con quién hace negocio y de qué manera», dice.

En Honduras tener dinero y poder es equivalente a ser oligarquía. Curiosamente, ninguno de los que poseen esos dos recursos se asume como parte de las élites, con las responsabilidades de liderazgo e influencia que también se espera de ellas y que inevitablemente tienen. Las élites, para bien o para mal, son parte fundamental del proceso de formación de los Estados, al menos así lo han sido en la historia de los países. Las élites se integran en cámaras, grupos de influencia, tanques de pensamiento y hasta en partidos políticos. En Honduras parece que esa influencia se hace pero no se asume, se opta por lo oculto, lo indirecto, por un sistema de relaciones que no dejan de ser familiares, locales y carentes de perspectiva de futuro más allá de sus intereses inmediatos. Esa corta visión ha hecho que la corrupción y otras fuentes ilegales de enriquecimiento sean el principal campo de la

competencia entre élites nuevas, principalmente surgidas de unos partidos políticos tradicionales y desgastados, y las nuevas generaciones de las viejas élites, que aún buscan distanciarse de los otros, aunque cada vez sea más difícil establecer la diferencia entre ambos. Oligarcas al estilo hondureños todos, algo que dudosamente cambiará con el nuevo gobierno de la primera mujer en la presidencia de Honduras, la ex primera dama Xiomara Castro, esposa del presidente depuesto por un golpe de Estado, Manuel Zelaya Rosales.

ÉLITES SIN DESTINO LATAM



ECUADOR

Los elegidos de Dios

VERO CALVOPÍÑA

Articulista y productora multimedia de Wambra, medio digital comunitario de Ecuador; medio que ha sido premiado en dos ocasiones por el Premio de Periodismo Eugenio Espejo en Ecuador por sus reportajes «Las Niñas Invisibles de Ecuador» y «Hablar del Aborto con todas sus letras». Escribe historias sobre conflictos socio ambientales, derechos humanos y feminismo. Investigadora de medios comunitarios y concentración mediática. Maestrante de Sociología Política por FLACSO-Ecuador.

«Dios está poniendo gobernantes» aseguraba efusivamente el pastor evangélico Gerson Almeida, mientras aceptaba lo que, para él, era «el reto» de presentarse como candidato a la presidencia de Ecuador. Con un traje impecable, el cabello engominado y la barba bien cortada, Almeida se dirigía a los líderes evangélicos y activistas antiderechos que lo acompañaron en el evento de presentación del partido Promotores del Cambio, realizado el 18 de diciembre de 2019, en un hotel de Quito.

Al igual que cuando dirige un culto en su iglesia, Betel, en este evento político Almeida alzaba fuertemente la voz, dando testimonio de vida, y repetía como un mantra que «sí se puede», que «ya era tiempo»; que, si el fenómeno Bolsonaro y Trump se estaban dando, acá en Ecuador ya era tiempo de «entrar a tomar decisiones».

La candidatura de Almeida cristalizaba las aspiraciones políticas de un grupo de pastores evangélicos y activistas autodenominados providas, de tener un partido político y representantes propios capaces de llevar su agenda tanto dentro de la Asamblea Nacional como en la Presidencia de la República.

A ellos, el pastor les dedicaba esa noche, por ser, según mencionó, «quienes juntos hemos luchado en la Asamblea Nacional para que leyes de muerte no pasen», refiriéndose a las políticas de género, derechos sexuales y aborto que se han debatido en los últimos cinco años en Ecuador.

Esta candidatura afianzaba también la alianza evangélica-católica que se ha articulado en los últimos años en Ecuador y que se hizo públicamente visible en octubre de 2017, con la primera marcha de *Con Mis Hijos no te Metas*, que se oponía a la aprobación de una ley relativa a la violencia de género en la Asamblea Nacional.

Pero ¿cómo pasaron los grupos evangélicos pentecostales provida a disputarse la presidencia de la República en Ecuador? ¿A ser una élite en ascenso que intenta incidir en la vida política del país?

LA BÚSQUEDA DEL PODER POLÍTICO

La marcha Con mis Hijos no te Metas se realizó por primera vez en Ecuador el 14 de octubre de 2017. Como organizaciones convocantes aparecían el Frente Nacional por la Familia y el Movimiento Vida y Familia. Ambas se presentan en redes sociales como movimientos ciudadanos formados por madres y padres de familia a nivel nacional. Estas familias son, a su vez, líderes de organizaciones evangélicas y católicas que se articulan en lo que llaman la defensa de la vida y la familia tradicional, pero no se reconocen como organizaciones religiosas, sino que resaltan su carácter ciudadano.

En el 2017, esta marcha se presentaba como una respuesta frente a la Ley para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer que se trataba en la Asamblea Nacional. De acuerdo con estas organizaciones, la ley promovía la ideología de género, principalmente en la educación. La marcha se anunciaba, entonces, en defensa del derecho de los padres a educar a sus hijos, según lo señalaban en un comunicado emitido en redes sociales.

Si bien era la primera vez que esta marcha se realizaba en Ecuador, la idea había nacido en Perú un año antes, en rechazo a la implementación de un programa de educación sexual en el sistema educativo. Christian Rosas, hijo del pastor y excongresista peruano Julio Rosas, fue uno de sus mentalizadores y quien expandiría esta acción por varios países de la región, incluido Ecuador.

La marcha en Ecuador tuvo las mismas características que en otros países: el uso de los colores rosado y celeste; imágenes de familias, en su mayoría blancas, con parejas heterosexuales; cartelones y pancartas donde se divisaban frases en contra de la ideología de género, a favor del matrimonio o del derecho a educar a los hijos.

Aunque las marchas en los diferentes países tienen estas similitudes, los organizadores ensalzan en todo momento el nacionalismo y el espíritu patrio para recalcar la idea de que esta acción es ciudadana y promovida por padres y madres de familia de cada país. Así, en 2017, las y los asistentes a la marcha realizada en la ciudad de Guayaquil entonaron el Himno Nacional como parte de las actividades previstas.

Una frase coreada fuertemente por los asistentes de esta marcha fue «Este es el inicio», frase que daba a entender que esta era la primera acción de muchas otras, que era el inicio de Con mis Hijos no te Metas. El Frente Nacional por la Familia también señalaría en un comunicado que «El león dormido despertó», haciendo alusión al despertar político y público de estos grupos. Esta misma frase sería usada posteriormente por Gerson Almeida durante su campaña presidencial.

A la marcha de 2017 le siguieron dos marchas más: una en junio de 2018 que pedía la renuncia del entonces Ministro de Educación, Fander Falconí, y otra en junio de 2019, en rechazo a la aprobación del Matrimonio Igualitario por parte de la Corte Constitucional. También hubo plantones fuera de la Asamblea Nacional y reuniones con asambleístas.

Es a partir de 2019 cuando las figuras de Francisco Loor y Gerson Almeida tomaron más protagonismo dentro de Con Mis Hijos no te Metas. Ambos encabezaron las marchas en Quito y Guayaquil y hablaron en la tarima. Hicieron vocería pública, daban ruedas de prensa y entrevistas. A estas acciones públicas se sumaría el *lobby* político dentro de la Asamblea Nacional durante el debate de proyectos de ley referentes al aborto entre 2019 y 2020.

En fotos compartidas en redes sociales se puede ver a Loor y Almeida reunidos con asambleístas de manera privada o haciendo eventos en los salones legislativos. Almeida era visto con su característico sombrero vaquero y traje blanco en la Asamblea Nacional, mientras

que Loor se reunía con la Alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, y oraban en el Palacio Municipal.

En septiembre de 2019, Con Mis Hijos no te Metas tendría lo que ellos consideran como uno de sus primeros triunfos políticos, la no aprobación de la despenalización del aborto en el Código Penal. Anteriormente, la Ley para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer y el Matrimonio Igualitario se habían aprobado pese a las marchas y al *lobby* político de esta agrupación. Sin embargo, para ese año, las organizaciones de defensa de la vida y la familia se multiplicaron, tuvieron una presencia más organizada en redes sociales.

Así aparecieron colectivos como *Feministas* Provida, Frente Joven, Abogados por la Vida o Quiteños Provida; colectivos donde también circulan los líderes de Con Mis Hijos no te Metas, sus familiares y asambleístas de elección popular. Estos grupos realizan acciones digitales y suman su presencia en acciones públicas. De su parte, Loor formó el Consejo de Resistencia, Fe, Vida y Familia junto con otros pastores evangélicos de la provincia del Guayas.

La articulación del Frente Nacional por la Familia y del Movimiento Vida y Familia con otros grupos antiderechos y de derecha radical aumentó en Ecuador y en América Latina. Así, en 2018, los líderes de Con Mis Hijos no te Metas se reunieron con personajes del activismo provida de América Latina. En febrero de ese año, Christian Rosas estuvo en Ecuador y dio charlas en la Iglesia Evangélica de Ñaquito de Quito y en el Centro Evangélico Peninsular de las Asambleas de Dios, en la provincia de Santa Elena.

Así también, se realizó la 1ª Convención Internacional de la Familia, en octubre de 2018, donde fueron invitados Agustín Laje y Nicolás Márquez, autodenominados pensadores de derecha que han sustentado la idea de la Ideología de Género en la región. De su parte, los activistas católicos y esposos Nelson Martínez y Gina Guevara

participaron en ese año del Congreso Sudamericano por la Vida y la Familia en Uruguay.

Todas estas circunstancias fortalecieron el movimiento denominado provida, y es así que, en 2019, durante la votación de la reforma al Código Penal para despenalizar el aborto, los líderes de Con Mis Hijos no te Metas influyeron en la decisión de varios asambleístas, quienes terminaron votando en contra de la reforma, ausentándose o absteniéndose.

Con la pandemia de COVID-19, el accionar de Con Mis Hijos no te Metas no desapareció, sino que continuó esta vez para rechazar el Código Orgánico de la Salud, donde también se planteaban causales como el incesto para permitir el aborto en el país. La influencia de estos grupos y otros factores hicieron que, finalmente, el proyecto sea archivado, a pesar de los años de discusión y de la participación de varios sectores sociales.

Joseph Salazar, en su texto «La doble vía entre lo local y lo transnacional», publicado en el libro *Derechos en Riesgo en América Latina*, señala que estas acciones muestran que los grupos evangélicos principalmente, pasaron a «concebirse como ciudadanxs activxs capaces de cambiar el rumbo de la política nacional».

Pero fueron los diferentes resultados en la Asamblea Nacional, con leyes que a veces se aprobaban y otras que se rechazaban, lo que hicieron que los denominados grupos provida ecuatorianos sintieran la necesidad no solo de hacer *lobby* o de influir en la votación de tal o cual asambleísta, sino de tomarse ellos mismo el Estado, con sus propios candidatos y partido político.

La marcha Con mis Hijos no te Metas también ha significado la articulación de los grupos antiderechos ecuatorianos con grupos de otros países. Asisten a eventos, dan conferencias, hacen *lobby* con congresistas de otros países. Así, el pastor Gerson Almeida asistió al Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, desarrollado en

marzo de 2020, apenas días antes de las medidas de confinamiento globales frente a la pandemia de COVID-19. En este evento habló de la experiencia de los grupos antiderechos en Ecuador para oponerse a la despenalización del aborto.

A Ecuador también vienen líderes antiderechos como el peruano Christian Rosas, quien se reunió con los líderes de la Marcha Con mis Hijos no te Metas en 2018 y 2020. En la serie periodística *Transnacionales de la Fe*¹⁴, Rosas es identificado como un vocero de los grupos provida a nivel latinoamericano que, a la par, articula con la organización cristiana Alliance Defending Freedom, ADF.

La ADF es identificada como una de las organizaciones cristianas estadounidenses que más dinero invierte en Latinoamérica para hacer *lobby* antiderechos en el Sistema Interamericano de DDHH y en cada país, para capacitar y apoyar grupos religiosos y realizar eventos como el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, y la marcha Con Mis Hijos no te Metas, según el reportaje <Dinero Opaco> de Open Democracy.

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ÉLITE EVANGÉLICA

¹⁴ Transnacionales de la Fe es un proyecto liderado por Columbia Journalism Investigations (CJI) de la Universidad de Columbia, en conjunto con Agência Pública (Brasil); CIPER (Chile); El Tiempo (Colombia); La Voz de Guanacaste y Semanario Universidad (Costa Rica); El Faro (El Salvador); Univisión (Estados Unidos); Nómada y Plaza Pública (Guatemala); Contracorriente (Honduras); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México); El Surtidor (Paraguay); La República (Perú); El País (Uruguay), Armando.info (Venezuela) y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

Hay que ser, pero también parecer, menciona una conocida frase. Así, una élite es un grupo de personas que se reconocen como tal. La auto-definición como élite es para la socióloga Soledad Varea, docente de la Universidad Central del Ecuador, una característica primordial de estos grupos. Otra forma en que las élites se pueden distinguir, menciona, es por su capacidad de construir espacios que los diferencien de la masa. Varea asegura, además, que estos grupos tienen valores comunes, una cosmovisión y prácticas que comparten.

El economista ecuatoriano Carlos Pástor agrega que las élites «son realidades mucho más complejas que la simple ostentación de acumulación de capitales», y asegura que su organización y estructura, así como sus lazos de parentesco, les dan una «unidad de pensamiento», aspectos que juntos les permiten mantenerse en el poder.

En el caso de las élites evangélicas de Ecuador, estas no se reconocen a sí mismas como una élite o como un grupo privilegiado. Al contrario, constantemente los líderes de Con mis Hijos no te Metas recalcan que el Estado y los grupos *feministas* y LGBTI están atentando contra sus derechos. Se presentan, más bien, como un grupo que está denunciando las consecuencias de la supuesta Ideología de Género para sus familias, frente a lo cual se organizan y autofinancian.

Los líderes evangélicos, principalmente, no ostentan extravagancias ni lujos en su vida privada o pública porque «tienen este valor de la austeridad, del ahorro, la no ostentación», nos dice Varea. Así, mientras otras élites presumen de viajes o visitas a lugares costosos en sus redes sociales, las élites religiosas muestran a sus familias, a sus matrimonios y a sus hijos. Los evangélicos también muestran sus iglesias, el tamaño de sus templos y congregaciones.

Estos valores, nos dice la socióloga Soledad Varea, les diferencia de otras élites latinoamericanas, sobre todo de aquellas que se están formando, de «esta clase popular latinoamericana en ascenso que

necesita demostrar que está en ascenso». En cambio, el ascenso de los evangélicos es más bien silencioso, asegura la académica. Pero no solo se diferencian de otras élites sino también del resto de la sociedad.

Y, a la vez que se diferencian, se separan, creando sus propios espacios «La iglesia donde van solo ellos, los barrios donde solo están ellos, los clubes donde solo frecuentan ellos, finalmente se terminan relacionando entre ellos, para diferenciarse del resto de la sociedad», concluye Varea.

Sin embargo, igual que el resto de élites de la región, la constitución de la élite evangélica está vinculada con una acumulación económica y con una captura del Estado, explica Soledad Varea, y agrega que «la captura del Estado les da poder, lo que no les da el dinero», y este poder se expresa en relaciones políticas.

Dentro de las élites evangélicas ecuatorianas, Francisco Loor, pastor del Centro Evangélico de las Asambleas de Dios en Guayaquil y Gerson Almeida, de Ministerios Betel Casa Apostólica, son un ejemplo de acumulación económica y del intento por la captura del Estado por parte de los grupos evangélicos.

A diferencia de las iglesias evangélicas tradicionales, como la luterana, que no creían en las cosas del mundo, como llaman a la política, Francisco Loor y Gerson Almeida están convencidos que los cristianos deben llegar a la política, estar en los espacios públicos y gobernar. «Ya es hora», repetía Almeida durante su mitin de presentación como candidato presidencial.

Pero, además, tanto Almeida como Loor van acumulando vínculos con organizaciones provida, con políticos locales, conexiones a nivel latinoamericano y perfilándose como los principales líderes y voceros antiderechos del país. Desde el 2019 han liderado las marchas, dan sendos discursos en tarimas, están en todas las acciones de los grupos provida que se dan en las calles o reuniéndose con asambleístas y hasta presidentes de la república.

FRANCISCO LOOR: EL PERSONAJE DE TODAS LAS MARCHAS

Loor dirige desde 1992 el Centro Evangélico de las Asambleas de Dios en Guayaquil, una de las ciudades más pobladas de Ecuador y de gran desarrollo comercial e industrial. La iglesia Asamblea de Dios se originó en EE.UU. a inicios del siglo XX y actualmente tiene presencia en alrededor de 190 países. Esta iglesia se caracteriza por la construcción de grandes templos o megatemplos. En Ecuador, Loor ha fundado aproximadamente 170 templos en todo el país; uno de ellos, ubicado en el centro de Guayaquil, donde predica tanto él como su familia.

La imagen de la familia Loor es central en esta iglesia. En redes sociales aparecen juntos, abrazados en una gran foto familiar: la pastora Elsa Pincay, Israel Loor quien es co-pastor de la Iglesia y Raquel Loor, conferencista y administradora del canal de televisión ABC, parte de esta iglesia. Esta foto que muestra la unión de una familia tradicional es una imagen que se repite entre los grupos antiderechos, y donde tanto padres como hijos dirigen organizaciones que luego se articulan al movimiento provida, multiplicando su presencia.

La familia Loor también tiene presencia mediática. Francisco y Elsa Loor fundaron la Radio Dinámica y la televisora ABC, medios de contenido cristiano, que son parte de la cadena Enlace, un grupo mediático de la iglesia Asamblea de Dios presente en toda Latinoamérica. En ambos medios se transmiten los cultos realizados por Loor y de otros pastores vinculados con esa iglesia en la región. También se realizan los eventos de recolección masiva de fondos, llamados Maratónicas, donde la audiencia de estos medios entrega ofrendas que consisten en un depósito bancario a cambio de oraciones y bendiciones del medio. Estos eventos se presentan como la fuente de recursos para su sostenibilidad. A diferencia de otros

medios evangélicos como la radio HCJB, no hay información pública del dinero que recolectan ambos medios en este tipo de eventos.

En cuanto a lo político, Loor ha sido un personaje visible al menos en los últimos 15 años. Se muestra como el aglutinador y vocero de las iglesias y pastores evangélicos, principalmente de la ciudad de Guayaquil. En el 2008, cuando en el país se redactaba una nueva Constitución, el pastor guayaquileño encabezó una marcha exigiendo que el nombre de Dios fuese incluido en el texto; así como que se prohibiese expresamente el matrimonio entre parejas del mismo sexo y el aborto. En ese momento Loor logró un primer acercamiento con representantes de la Iglesia Católica para juntos rechazar la Constitución, a la que denominaban como «constitución abortista». Para ese momento, además, logró movilizar una primera marcha provida hasta la ciudad de Montecristi, donde se reunía la Asamblea Constituyente.

Solo un par de años antes de esta acción, los grupos antiderechos habían logrado que en el país se instaurase como fecha oficial de conmemoración el 25 de marzo como Día del Niño por Nacer. Esta acción vendría a fortalecer su discurso antiaborto, que se haría más fuerte a partir del 2008.

Producto de estas presiones al entonces gobierno de Rafael Correa, los grupos antiderechos lograron que el artículo 45 de la Constitución hable de la protección de la vida desde la concepción y que el artículo 67 se refiera al reconocimiento del matrimonio entre hombre y mujer. Estos artículos han sido embanderados como un triunfo por los grupos antiderechos en sus sucesivas acciones y discursos, donde reivindican de manera constante la defensa de estos artículos constitucionales, aunque inicialmente estaban opuestos. Sin embargo, Loor no ha desistido de plasmar su agenda antiderechos dentro de la Constitución.

Es así que con el cambio de gobierno este pasado año de 2021, volvió a insistir en modificar la Constitución para exigir que se invoque el nombre del dios cristiano y evangélico en el texto constitucional.

Loor, en estos años, se ha convertido en un personaje capaz de movilizar los recursos y alianzas de las iglesias evangélicas en contra de cualquier tema. Su nombre ha figurado en demandas de inconstitucionalidad ante leyes, pero su figura ha sido capaz de mediar acuerdos y conflictos entre el gobierno y grupos evangélicos, tal como pasó en las protestas de 2019, cuando logró un acercamiento entre las organizaciones indígenas evangélicas y el gobierno de Lenín Moreno.

Si bien Loor ha sido un personaje visible de la lucha antiderechos, no se ha perfilado personalmente para llegar a las urnas. Ha preferido más bien, junto con organizaciones e iglesias evangélicas de la provincia de Guayas, impulsar y apoyar candidaturas de pastores evangélicos a la presidencia de la República, como la campaña de la pastora evangélica Melba Jácome en 2009 o la campaña del pastor evangélico Nelson Zavala en 2013, quien fue multado por sus comentarios homofóbicos; y la más reciente, de Gerson Almeida en 2021.

Los grupos evangélicos de Guayas también se han aliado con partidos de derecha como el Partido Roldosista Ecuatoriano, PRE, formado por el expresidente Abdalá Bucaram, que fue destituido en 1997 en medio de escándalos de corrupción. Con este partido presentaron la candidatura del pastor Zavala y la candidatura de Abdalá Bucaram Pulley, hijo de expresidente, en 2017.

Los evangélicos y el PRE se juntaron en una agenda antiderechos durante estas dos elecciones presidenciales. Como candidatos, Zavala y Bucaram hacían campaña Biblia en mano, con un discurso similar. En sus respectivas campañas, hablaron de incorporar a Dios en la Constitución y prohibir el aborto y el matrimonio igualitario, pues, según ellos, Ecuador era un país ateo y sin valores.

En la última elección presidencial, el rol de Loor en la campaña del pastor Gerson Almeida y de los otros pastores fue más activo. El Consejo de Resistencia, Fe, Vida y Familia acompañó a Almeida en varios eventos

de recolección de firmas para inscribir su partido. Pero, además, Raquel Loor, hija de Francisco Loor, participó como candidata a asambleísta por la provincia de Guayas, aunque no logró una curul. Sin embargo, su perfil político va cobrando fuerza dentro de las actorías antiderechos.

La influencia de Loor y de los pastores evangélicos también está presente en la actual Alcaldía de Guayaquil. Durante el debate en la Asamblea Nacional por la despenalización del aborto en el Código Penal realizada en 2019, los pastores se reunieron con la alcaldesa Cynthia Viteri, logrando su posicionamiento en contra de la propuesta.

Así mismo, Loor ha sido el enlace de la marcha Con Mis Hijos no te Metas con los grupos evangélicos indígenas que se articulan entre Guayas y las provincias de la sierra centro. En el 2019, tras la sentencia de la Corte Constitucional sobre el matrimonio igualitario, los líderes de esta marcha se reunieron en repetidas veces con la Federación de Indígenas Evangélicos FEINE y lograron que esta organización convocase una masiva marcha de indígenas evangélicos hasta la Asamblea Nacional y reuniera en una tarima a un grupo de asambleístas provinciales a quienes les exigieron una consulta popular sobre el tema.

El nexos de Loor fue también visible en octubre de 2019, cuando en medio del Paro Nacional y Levantamiento Indígena en contra de las medidas económicas, articuló una reunión entre los líderes indígenas evangélicos y autoridades nacionales con el fin de incidir en la paralización.

GERSON ALMEIDA: LOBBY CON SOMBRERO Y TERNO BLANCO

Gerson Almeida es pastor y fundador de la Iglesia Cristiana Ministerios Betel Casa Apostólica en Ecuador, desde 2008. Se reconoce a sí mismo

como consejero familiar y es director del movimiento político Promotores por el Cambio.

Almeida cobró protagonismo a partir de 2019 y se convirtió en una pieza clave del movimiento provida. En sus propias palabras, decidió organizarse ante la decisión de la Corte Constitucional de aprobar el matrimonio igualitario; desde allí, su presencia y acción de *lobby* antiderechos ha sido importante para lograr el voto de asambleístas en contra de la despenalización del aborto.

Pero Almeida no se contentó solo con ser activista, sino que decidió a ser parte de la política ecuatoriana. Junto con abogados y organizaciones provida, formó el Movimiento Promotores del Cambio, que pretendía participar como organización política en las elecciones generales de 2021.

El movimiento hizo su presentación en diciembre de 2019, y comenzó a juntar firmas para constituirse legalmente. Sin embargo, con la llegada de la pandemia, el movimiento no logró inscribirse, pero la candidatura de Almeida no declinó y, más bien, se alió con otro movimiento político para finalmente presentarse en elecciones.

El binomio de Almeida para la presidencia fue Martha Villafuerte, una mujer guayaquileña, activista católica, ligada con fundaciones provida estadounidenses. A diferencia de candidaturas de años anteriores donde participaron pastores evangélicos, el binomio Almeida-Villafuerte remarcó fuertemente su carácter provida, la alianza evangélica y católica y la representación de estos sectores, buscando su voto por identificarse con su agenda.

Almeida y Villafuerte han organizado y gestionado la presencia de activistas antiderechos de Latinoamérica como Agustín Laje, quien ha venido a Ecuador en los últimos años para fortalecer los argumentos y posicionamientos de los grupos del país.

**CON MIS HIJOS NO TE METAS
Y SU ALIANZA CONSERVADORA**

Para la socióloga Soledad Varea, quienes lideran Con Mis Hijos no te Metas son «hombres blancos de clase media» que están en diálogo, a su vez, con élites religiosas y políticas. Su principal agenda, explica, son «la causa provida, la crianza compartida y la oposición al aborto», agenda que les hace entrar en diálogo con grupos de derecha y extrema derecha, quienes, a su vez apoyan estas causas que son enarboladas por la Iglesia Católica o Evangélica, de las cuales muchos forman parte.

Mientras que la derecha y extrema derecha, asegura Varea, encuentra cercanías con los grupos evangélicos y cristianos en su discurso sobre «defender el patriarcado, defender el rol de los hombres, el lugar de los hombres, la diferencia sexual marcada y, lógicamente, la penalización del aborto».

En el caso de los grupos provida ecuatorianos, por años, han hecho alianzas con los diferentes partidos políticos, incluso tuvieron acercamientos con el gobierno denominado progresista de Rafael Correa, para detener la agenda de derechos con relación al aborto, a pesar de las críticas que en varios momentos hicieron a sus políticas o de sus posturas en contra de los partidos de izquierda. Sin embargo, el acercamiento de los grupos antiderechos con la derecha política resulta más duradero. Así, desde 2019, han hecho alianza con grupos libertarios e hispanistas, con quienes coinciden en su defensa a la familia y la propiedad y su rechazo al feminismo e impulsan la formación de nuevos activistas provida jóvenes, como la agrupación Quiteños Provida.

Esta cercanía entre ambos grupos se da, según explica la socióloga, porque las élites «siempre tienen que tener estas

relaciones políticas, siempre necesitan o buscan tener una presencia en el Estado». Una característica de la élite, dice Varea, es la búsqueda y presencia en el poder; y el acceso al poder «está marcado por la política, el Estado, y les da mucho poder y les da la posibilidad de mantener estas relaciones clientelares».

Pero, además de las relaciones clientelares, la presencia en el Estado les permite a los grupos antiderechos, asegura Varea, mantener y difundir su ideología: «Por eso es que las iglesias tienen el medio, las escuelas, la influencia en el sistema educativo».

De allí que, aunque el binomio Almeida-Villafuerte no haya obtenido buenos resultados en las recientes elecciones presidenciales, su posicionamiento político no se ha debilitado; más bien, los grupos antiderechos han encontrado en el actual gobierno de Guillermo Lasso el momento para instalar su agenda, confiados en la postura presidencial, por ser afín al Opus Dei y a grupos sodalicios.

En este sentido, uno de los primeros gestos del presidente Lasso con los grupos antiderechos fue la invitación personal que realizó a su evento de posesión a líderes religiosos, entre ellos Francisco Loor. El día de la posesión presidencial, el pastor caminaba solo, con la Biblia en la mano por la alfombra roja que llevaba a las y los invitados hasta el salón principal de la Asamblea Nacional.

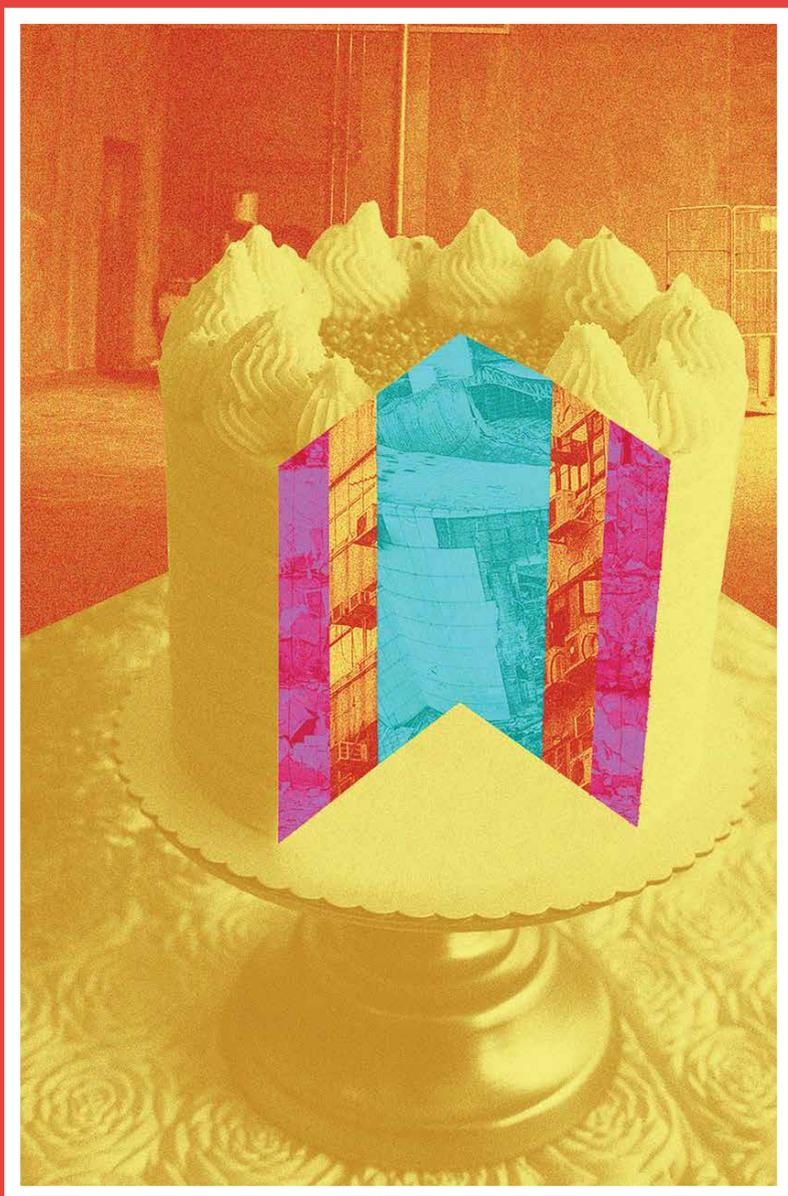
Para Lasso, esta invitación mostraba «interés de reconciliación entre el Estado y las iglesias». Para Loor, en cambio, se trataba de un hecho inusual, pues, según él, antes habían sido marginados por los gobiernos.

Este gesto se convirtió posteriormente en una acción real, cuando el Frente Nacional por la Familia logró que uno de sus líderes, Erwin Ronquillo, formase parte del gabinete presidencial como encargado de programas de niñez y desnutrición. La reconciliación Iglesia-Estado que habló Lasso en su posesión también ha significado la presencia de los

líderes denominados provida en Palacio presidencial; recientemente para intentar incidir en el nuevo debate sobre aborto por violación que se instalado en el país.

Mientras los grupos antiderechos están cómodos con el actual gobierno, Almeida se toma fotos en Palacio, en la Asamblea, sale con asambleístas y líderes antiderechos; sigue con su presencia en medios y de a poco sigue fortaleciendo su movimiento político, pues está seguro de que ahora es *el tiempo* de los evangélicos. .

ÉLITES SIN DESTINO LATAM



VENEZUELA
*Las élites fugitivas
de un país en escombros*

FLORANTONIA SINGER

Periodista (Caracas, 1983). Por 15 años fue reportera y editora en los diarios El Nacional y Últimas Noticias. Desde 2017 es colaboradora de EL PAÍS de España en la cobertura de Venezuela. Es parte de El Bus TV, un medio offline que vence la desinformación y la censura en las calles venezolanas.

De los restos del socialismo de Hugo Chávez surgió una nueva clase vinculada a los contratos gubernamentales, poderosa en dinero y fuerza, pero difusa. Este grupo metabolizó gran parte de los históricos ingresos petroleros de las últimas dos décadas, dejó un enorme agujero en el patrimonio público y 96% de pobreza. Son multimillonarios que emergen de una Venezuela en ruinas.

¿Quién manda hoy en Venezuela? La pregunta puede tornarse en un chiste cruel. La respuesta es una madeja de la que todavía no se ha encontrado punta. Venezuela, ese país al norte de Sudamérica, de clima formidable y grandes riquezas que describían en las clases de Geografía de la escuela, atraviesa la que pudiera ser su mayor crisis contemporánea. Con los harapos de la democracia, en las últimas dos décadas se consolidó un modelo autoritario en Venezuela, que ha desterrado la propiedad básica de la vida en democracia que es la alternabilidad del poder, esa que también hace pendular a las élites. Hoy varios grupos se enfrentan, hacen movimientos en el tablero, pero se unen en la repartición de privilegios y cuotas para mantener el modelo, incluso con elecciones fabricadas a la medida.

La revolución bolivariana, a la vuelta de 20 años, logró arrinconar a algunas élites y sustituirlas por otras. Los enroques de todo truco de refundación que, en el caso venezolano, han significado la quiebra del país con las más grandes reservas probadas de petróleo, justamente en la antesala del fin de la era de los combustibles fósiles. En ese terreno emergió una clase que concentra riqueza y poder fáctico, pero para los que aún el apelativo de élite se hace difuso.

Durante los primeros años de década de los 2000, Venezuela registró su mayor pico histórico en ingresos por venta de petróleo. Hugo Chávez comenzó su gobierno en 1999 con la buena estrella del mercado energético internacional. La cesta petrolera que se promediaba en 16 dólares por barril se duplicó en un lustro y no paró allí. En unos 88 dólares rondaba el barril a comienzos de 2008 y dio un salto a 146. Vivió una

fugaz caída en 2009 por la crisis financiera mundial para luego repuntar a partir de 2010 y llegar hasta los 103 dólares por barril que pudo acariciar el comandante en sus últimos años vida —y gobierno— antes de fallecer de cáncer en 2013, sin imaginar —o quizás sí— que la gasolina que regaló por años y los barriles con los que levantó su fortaleza geopolítica en la región iban a hacer falta luego.

Pero con ese caudal de ingresos y todavía algo de arrastre popular, el líder populista logró algo más importante para su consolidación. Chávez torció la Constitución que promovió para asegurar su permanencia. La enmienda constitucional de 2009 que permitió la reelección indefinida en todos los cargos de elección popular aniquiló la alternabilidad. Este zarpazo, que se concretó meses después de que el país rechazara en un referéndum la reforma de la Carta Magna que contenía esta y otras ambiciones, con aplausos de las izquierdas de la región y sin levantar ninguna sospecha en las democracias vecinas, es el alimento de la actual debacle institucional.

Venezuela es un país en bancarrota con una producción petrolera similar a la de principios del siglo XX, cuando comenzó a salir por borbotones la brea en Mene Grande, en la costa oriental del Lago de Maracaibo, en el estado de Zulia. Es también un país que ha perdido su democracia. Dos resultados de una ecuación que explica a las élites que ahora traccionan el poder.

Cerca de un billón de dólares ingresaron a Venezuela entre 1999 y 2014, el año en que el país comenzó su caída libre y el desaguadero de migrantes. Ya son 6 millones de venezolanos los que se han ido porque no hay cómo sobrevivir en un territorio donde comenzaron a instalarse agencias humanitarias, esa agria señal de que ha ocurrido un desastre ¿Cómo se repartió ese enorme botín? Otra respuesta con varios caminos.

El chavismo se ha anclado en dos tesis para explicar el rol de las clases dirigentes y la conducción económica del país. La dura, la más

radical, la cubana, es en la que creía Chávez, que fue expropiando tierras, edificios, supermercados, joyerías, empresas de todo tipo con la bandera de la propiedad pública y social.

—¿Qué es eso que está ahí? —preguntó Chávez una vez mientras caminaba por el centro de Caracas con sus cámaras de televisión. Tras una respuesta tímida dio la orden.

—¡Exprópiese!

Con su uniforme militar, Chávez decía en tono de predicador que ser rico era malo. Con esa idea hizo que el Estado se hiciera cargo de todo, o más bien se apropiara de todo. Es lo que sociólogos como Luis Pedro España se apuntan a llamar el socialismo petrolero —con su alias de Socialismo del siglo XXI— en el que los grupos económicos podían ser suplantables porque el Estado-gobierno-partido era, o pretendía ser, la única cadena de transmisión entre el ingreso y los ciudadanos. Es el modelo que hoy ha hecho aguas.

La segunda tesis que también soporta al chavismo dibuja a la llamada boliburguesía, que apostaba por unos controles moderados que permitieran a una clase vinculada a los contratos estatales acumular capitales, a la usanza de los anteriores gobiernos, pero con unos niveles de descontrol que le han labrado un hito en la historia de la corrupción venezolana. Esta burguesía estuvo a la sombra durante los años de economía centralizada, control de precios y prohibición del uso libre de divisas. Estuvo engordando en ese engranaje de restricciones y ahora muestra sus carnes.

LO QUE NACIÓ DEL COLAPSO

Numerosos relatos visten a la nueva clase venezolana que ha crecido bajo el chavismo en varias etapas. Una propina de 100.000 euros empuñada en 2009 a un trabajador de un hotel de París por un familiar del que por una década fue presidente de Petr6leos de Venezuela (PDVSA), Rafael Ram6rez, ha sido el hilo que han halado la justicia de Andorra, Estados Unidos, Suiza y Liechtenstein para hacer acusaciones contra funcionarios venezolanos. El tama1o de la «propina», sin duda, es directamente proporcional al desfalco. Este se ha convertido en uno de los mayores esc6ndalos de corrupci3n que el periodismo de investigaci3n en todo el mundo se ha dedicado a desollar. Un hallazgo reciente de esta trama tambi6n encandila: dos exministros y el primo de Ram6rez lavaron 5 millones de d3lares en una joyer6a en Caracas con la compra de 250 relojes de las marcas Rolex (de oro y acero), Cartier, Chopard y Breguet. Unos pocos de los involucrados est6n siendo juzgados en Madrid. Pero Ram6rez, el gran patriarca de la petrolera, que sali3 en la purga que vivi3 el chavismo luego de la muerte de Ch6vez, ahora es opositor a Maduro, vive en Italia y se esconde de la justicia.

Otra postal de las formas de esta nueva clase est6 en el alquiler m6s caro de Madrid, un piso en Lagasta 99 que se renta por 16.000 euros al mes, con vecinos multimillonarios de Latinoam6rica. Es propiedad de una pareja de venezolanos vinculada a contratos de construcci3n con el gobierno que hoy vive en Miami.

«Hay nuevos empresarios y hombres de negocios que gravitan en torno al chavismo que est6n pasando a ser due1os de lo que queda en Venezuela. Est6 muy claro que est6n reconfigur6ndose unas nuevas 6lites y definiendo patrones de consumo», dice el historiador Tom6s Straka, para quien los tiempos de hoy figuran como una especie de neogomecismo. A principios del siglo XX, el general Juan Vicente G3mez gobern3 por casi 30 a1os, *el tiempo* en que se inaugur3 el fest6n de la era petrolera venezolana. «El chavismo vivi3 un boom petrolero como el del gomecismo. Cuando los gomecistas ten6an 10 a1os en el poder todos compraban caballos de paso y pianolas y mandaban a sus hijos

a estudiar francés», dice comparando con las camionetas, apartamentos de lujo y otras extravagancias que pueden costearse algunas élites.

Caracas, donde se concentra la mayor riqueza y la precariedad de los servicios es más llevadera, parece hoy un parque temático de la abundancia. A mediados de agosto, las redes sociales se encendieron con la foto de un Ferrari rojo con un lazo de regalo estacionado frente a una clínica privada. Se trataba de un *push gift* que —según Google— refiere a esa tradición estadounidense de premiar a las madres por pujar un bebé. Nadie supo la identidad de los padres ni del nacido. Pero la escena, que no es casual sino que forma parte de los nuevos excesos cotidianos, sirvió para alimentar las ilusiones ópticas sobre que el país dejó atrás los años más duros de su crisis económica. «Venezuela se arregló» es una frase que se repite ahora con frecuencia, pero que rápidamente se ha vuelto un meme.

La selva de torres empresariales de espejos y luces en que se ha convertido Las Mercedes también pudiera engañar a los que se quedaron atrapados en los tiempos de hacer filas en los automercados y morir por no tener un medicamento, el momento del colapso del socialismo bolivariano. La vieja urbanización con su pasado de hacienda vive un arrase constructivo. Aunque conserva su vocación de vida nocturna, enclave de restaurantes, discotecas y ahora casinos, los ejecutivos que deberían salir de esas torres para una cerveza después de la jornada no existen. En una decena de manzanas solo hay demoliciones o torres vacías. Un cascarón.

Después de años de subsidios a la gasolina y los servicios públicos, de importaciones financiadas con petrodólares en operaciones ficticias o sobrefacturadas, Maduro se quedó sin dinero para soportar el gasto público, incluso luego de rebañar las reservas internacionales, reducidas al mínimo histórico en 2020. Las sanciones sectoriales de Estados Unidos contra Maduro, señalado por Washington de corrupción y violaciones de derechos humanos, acusaciones sostenidas por una torre de informes de organismos internacionales, complicaron su liquidez y lo han empujado a hacer reformas. Contrario a lo que la narrativa oficial considera un bloqueo comparable al de Cuba, el acicate de las sanciones,

por vía indirecta, liberalizó la economía y sirvió de paño caliente para calmar la escasez de alimentos y medicinas entre quienes pueden pagarlos.

La dolarización *de facto* que empujó la hiperinflación y la obligada liberalización de los controles han tenido su efecto. Un sector privado contra las cuerdas, sobreviviente del desastre, está dando señales de vida. Pero también se le ha abierto cancha a una economía negra que aporta el 20% del PIB —según firmas como Econanalítica— y reduce de alguna manera la tensión social, luego de los peores años de la crisis. Las sanciones internacionales contra Maduro han potenciado esta zona gris que opera en distintos ámbitos: desde valerse de barcos fantasma para vender petróleo fuera del radar de Estados Unidos hasta abrir en tiempo récord decenas de supermercados o concesionarios con coches de lujo. En esas transacciones, una parte de los dólares permea aguas abajo de quienes controlan los hilos, aunque aumentando las desigualdades.

Con un Estado colapsado por la estatización, el chavismo también empezó recientemente a privatizar todo lo que acaparó con apoyo de esos empresarios que le orbitan, que se saben mover en el terreno de la opacidad y la fragilidad institucional y jurídica. «Ha sido una apertura hecha a los trancazos, que es el verdadero capitalismo salvaje», dice el sociólogo España. Pero esta nueva economía surgida del fin del socialismo del siglo XXI, advierte el investigador, tiene techo bajo. «Estas nuevas élites solo consumen, no generan empleo ni conocimiento, y poco permean al resto del país. Estamos hablando de bodegueros.»

La ola de recuperación económica de la que el gobierno se apropia es precisamente esa, la de los llamados bodegonos, una versión de restaurantes con tiendas de ultramarinos que trajo la conquista de las importaciones libres de aranceles para una élite que ha acumulado suficiente dinero como para invertirlo en la subterránea economía venezolana, incluso sacando provecho de la moneda nacional, evaporada tras cuatro años en hiperinflación. Es la «Venezuela emprendedora y productiva» que se replica como un virus y de la que Nicolás

Maduro se ufanaba a principios de octubre mientras recorría una feria de *food trucks* y recomendaba freír las papas con aceite de trufa. Lo que también algunos analistas llaman con sorna la «*pax bodegónica*», la que ha llevado a muchos venezolanos, como indican sondeos de opinión recientes, a desprenderse del dilema sobre el cambio político, la salida de Maduro o el regreso a la democracia que daba contenido a la narrativa de la oposición hace unos años, y a preferir, quizás, el surgimiento de una Singapur en el Caribe.

Luis Pedro España tiene años estudiando la pobreza en Venezuela. Es parte del grupo de investigación que hace cinco años comenzó la Encuesta de Condiciones de Vida, el único diagnóstico estadístico consecutivo sobre cómo se vive en un país cuyo gobierno oculta sus cifras. En base a esos datos, España dice que la desigualdad al año 2021 no tiene precedentes en la historia moderna del país. «El expediente de este nuevo modelo económico es una desigualdad como nunca la habíamos tenido», añade. Al dividir el país en deciles de ingresos, el decil más rico puede ser 15 veces más rico que el que le sigue. En ese decil más rico en la cabeza de la cadena trófica, señala España, están 1,7 millones de los 28 millones de venezolanos. Unos 600.000 estarían en Caracas, alimentando la reducida economía de importación de productos de automercado, electrodomésticos y artículos de lujo, con poca capacidad de generar ingresos reales y valor al país. Con respecto al más pobre, donde se agrupa una espesa masa en la que viven personas con menos de dos dólares al día, hay un abismo. España matiza el cálculo con maña estadística, para subrayar que, pese a las evidentes contradicciones sociales, el problema venezolano actual no es la desigualdad sino la contracción. «Si dividimos el ingreso de todo el país entre los habitantes, todos somos pobres extremos.»

EL SUSTRATO DE LAS ÉLITES

El chavismo llegó con la bandera de darle el poder a los más pobres, de la lucha contra las oligarquías, de la refundación de la nación. Ciertamente, el proceso impulsado por Chávez y continuado por sus herederos políticos se ha convertido en un parteaguas en la historia contemporánea de la nación. Ya se ha visto en Cuba y otros escenarios a los revolucionarios de izquierda convertirse, apenas tocan dinero, en parte de la élite que adversaron. En Venezuela también pasó, pero en la historia antes del chavismo hay luces para entender qué son las élites en Venezuela.

Entre principios de los sesenta y los noventa, el país vivió una democracia joven con instituciones flácidas, vestida con los trajes de la centro izquierda o de la socialdemocracia cristiana. Straka describe las élites antes de la llegada del chavismo como las de una sociedad más permeable, que se acomodó al escenario en el que el Estado se volvió providencial gracias a la explotación del petróleo de principios del siglo XX. Eran unas élites vinculadas a los valores democráticos, a la educación, la cultura y sus privilegios, menos a la dirigencia. «Eran unas élites incluso porosas, como ciertas tragedias que terminan en comedias románticas», señala el profesor universitario.

La Venezuela de la última parte del siglo XX funcionó gracias al «sistema populista de conciliación de élites» descrito por el politólogo español Juan Carlos Rey, prolífico académico que dedicó su ciencia a Venezuela y falleció en Caracas hace algo más de un año, el 31 de octubre de 2020. Ese proceso implicó un reconocimiento de la pluralidad de intereses sociales, económicos y políticos que garantizó a las élites —el Estado, la Iglesia, las Fuerzas Armadas, empresarios, gremios, academia— no salir afectados por «la aplicación de la regla de la mayoría», explica Miriam Kornblith en un ensayo de 1994 publicado en la revista *Nueva Sociedad*. Este mecanismo, sin embargo, tuvo sus daños colaterales. Un ensanchamiento de las brechas sociales, apunta Straka, que le permitió a Chávez hacerle creer a los casi tres millones de venezolanos que votaron por él en 1998 que había una oligarquía que se había robado todo y que por eso él ocuparía la silla presidencial para reivindicar a los

excluidos. «La llegada de Hugo Chávez al poder es el fracaso de las élites de ese momento», subraya en una entrevista para este reportaje.

Venezuela vivió en 1989 el estallido que hoy están asimilando países como Chile o Colombia. El 27 de febrero de ese año hubo una ola de disturbios detonados por el aumento del precio de la gasolina y las tarifas del transporte público como parte de un paquete de medidas económicas del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. El Caracazo dejó saqueos, detenciones, muertos, desaparecidos; una herida social que no cerró del todo. La policía abrió un nuevo expediente de violaciones de derechos humanos que hoy siguen impunes. Pero un día antes, Venezuela era uno de los países más estables de América Latina.

El desborde de febrero de 1989, al que siguió una etapa de conflictividad que tuvo su cumbre en la intentona golpista del teniente coronel Hugo Chávez del 4 de febrero de 1992, terminó por replegar a la clase política, que no hizo nada con ese grito. El bipartidismo que servía de cadena de rodamiento a la democracia venezolana luego del fin de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez en 1958 comenzó a fracturarse. El 27 de febrero de 1989 —como afirma el periodista Alonso Moleiro en el libro *La nación incivil*— es la carta de nacimiento del fenómeno de la antipolítica que hizo posible la llegada de Chávez al poder por la vía electoral.

Uno de los mayores oráculos para comprender los pasos en falso de este país, el dramaturgo José Ignacio Cabrujas, escribió en sus artículos en la prensa de esos convulsos años ochenta y noventa sobre el disimulo, esa identidad que signa la nacionalidad venezolana, la de un país provisional con una precaria institucionalidad y una corta visión de futuro. De ese sustrato, por supuesto, también están hechas sus élites.

QUIÉNES SON

Un andamio cuelga de la pared exterior del Centro San Ignacio, un exclusivo centro comercial de Caracas, donde estaba la joyería que vendió los 250 relojes a los lavadores de PDVSA. Adentro resiste la mole de cemento con el oxígeno de restaurantes y bodegones, sin poder ocultar decenas de tiendas cerradas como lastre de una economía que se redujo a un quinto de su tamaño. Las poleas que cuelgan en lo más alto del edificio son las herramientas para un bautismo. En enormes letras blancas se lee «Gorrín», por Raúl Gorrín, que puede considerarse emblema del nuevo empresariado que ha surgido en los 20 años de revolución bolivariana. Es la marquesina que anuncia que Venezuela tiene nuevos dueños.

En este edificio el Grupo Gorrín tiene sus oficinas. El empresario, de profesión abogado, se hizo rico en el mercado de las aseguradoras. Apenas era un treintañero cuando llegó la revolución, pero en 2014, con Maduro en las riendas, despegó en otras áreas de negocios. Compró el único canal de noticias 24 horas que había en Venezuela, un contrapoder crítico del gobierno. Tras la transacción, el medio cambió totalmente su línea a una favorable al chavismo y dejó de ser un canal exclusivo de noticias para entregar su parrilla a la evasión.

Este fue un mecanismo que se aplicó con otros capitales mediáticos como el tabloide de mayor circulación en el país, el diario *Últimas Noticias*, y luego el centenario diario *El Universal*. El resto de la crítica fue apagada poco a poco, como en la fábula de la rana y el agua hirviendo, con la propia crisis económica, la restricción del acceso al papel y los insumos que ha provocado el cierre de unos 60 impresos; con la revocatoria de las licencias para transmitir de centenares de emisoras, el ejemplo que tempranamente dio Chávez en 2007 con el cierre del primer canal de televisión venezolano, *Radio Caracas Televisión*.

Ese cuarto poder que fueron los medios en Venezuela, y que todavía son en Latinoamérica, hoy no tiene ninguna incidencia en el país. Han quedado sin voz o como muñecos de ventrílocuos. Esta élite

fue enterrada junto a otras, como la de los intelectuales o universitarios, la élite del conocimiento, conformada por *w* cuyos salarios los ubican en la pobreza, al punto de autodenominarse en sus protestas «pobresores» en vez de profesores.

Estos *nuevos grupos de poder* movidos por el dinero y los contratos con el gobierno, los llamados comúnmente «enchufados», no solo se han favorecido del reparto de los ingresos del Estado sino que también han sido útiles para la consolidación de un modelo autoritario en Venezuela. Algunos de ellos tienen en común tener su nombre en expedientes en juzgados de Estados Unidos, España y Suiza y sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense. Al menos 20 países investigan 50 casos de corrupción y blanqueo de capitales ligados al desfalco del patrimonio público venezolano, según contabilizaba el capítulo local de Transparencia Internacional a finales de 2019. La anterior Asamblea Nacional, controlada por la oposición, calculó el tamaño del agujero en el patrimonio nacional. Para 2019 señalaba que se habían perdido entre 400.000 y 800.000 millones de dólares en toda la corrupción chavista. Pero el monto es una niebla aún. El costo más evidente está en la crisis humanitaria que atraviesa el que ahora es el país más pobre de América Latina y el más rezagado en superar la contracción adicional de la pandemia, según los balances del Fondo Monetario Internacional de este 2021.

Así como Gorrín tiene su apellido en alto relieve sobre un edificio, el nombre de Alex Saab está escrito en paredes por todo el país como parte de una campaña para exigir su liberación. Hace poco el gobierno desnudó el rol de un empresario que estuvo por años en las sombras, que se hizo millonario en la Venezuela más pobre y se convirtió en agente de las fortunas del entorno de Nicolás Maduro, según han demostrado investigaciones periodísticas en la región y expedientes abiertos en cortes de Estados Unidos. Así como Gorrín, tiene cargos de lavado de dinero en Estados Unidos. Ambos han sido sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense y representan a las nuevas clases en Venezuela.

El hombre más poderoso de Venezuela, el contratista favorito del gobierno de Nicolás Maduro, se ha sentado a comer en la mesa de los venezolanos. Se convirtió en agente de negocios en áreas tan distintas como la importación de espaguetis turcos y leche mexicana de mala calidad con sobreprecio —como detectó en su momento la fiscalía de México— para abastecer a los más pobres en Venezuela, y también asegurar su dependencia a las llamadas bolsas CLAP, por las siglas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, la figura de control social que ideó Maduro en 2015 para hacer frente al más dramático episodio de escasez que ha vivido el país. Saab también ha vendido lingotes de oro sacados del Arco Minero del Orinoco, una franja sometida a una voraz explotación que abarca el 12% del territorio venezolano y se monta sobre la Amazonía y áreas protegidas por su biodiversidad. Carbón, construcción de gimnasios sociales, importación de gasolina. También supermercados o bodegones. Hoy espera su juicio en una cárcel de Miami y sus cartas, supuestamente escritas durante la detención hace más de un año en Cabo Verde, desde donde fue extraditado en octubre, fueron editadas en un libro que se bautizó recientemente en la feria oficial del libro en Caracas y editó el gobierno.

Este empresario colombiano fue detenido cuando paraba en su avión a tomar gasolina en una ruta hacia Irán. Justamente iba a cerrar acuerdos para importar la gasolina por la que hoy los venezolanos hacen cola. Pese a lo grueso de su responsabilidad, solo fue hasta su detención que el gobierno pronunció su nombre en su defensa, lo designó diplomático para intentar evitar que cayera en manos de la justicia estadounidense y pudiera ser merodeado por los acuerdos de delación. Como él, antes han caído banqueros, guardaespaldas, tesoreros de la nación, empresarios, militares y funcionarios de un amplio espectro de mandos que sacaron fortunas de un país en escombros. Un exfiscal venezolano en el exilio dice que en Miami se mueve un mercado de pruebas de un impreciso número de colaboradores, testigos y actores principales de la corrupción que intentan negociar el descongelamiento de bienes y una

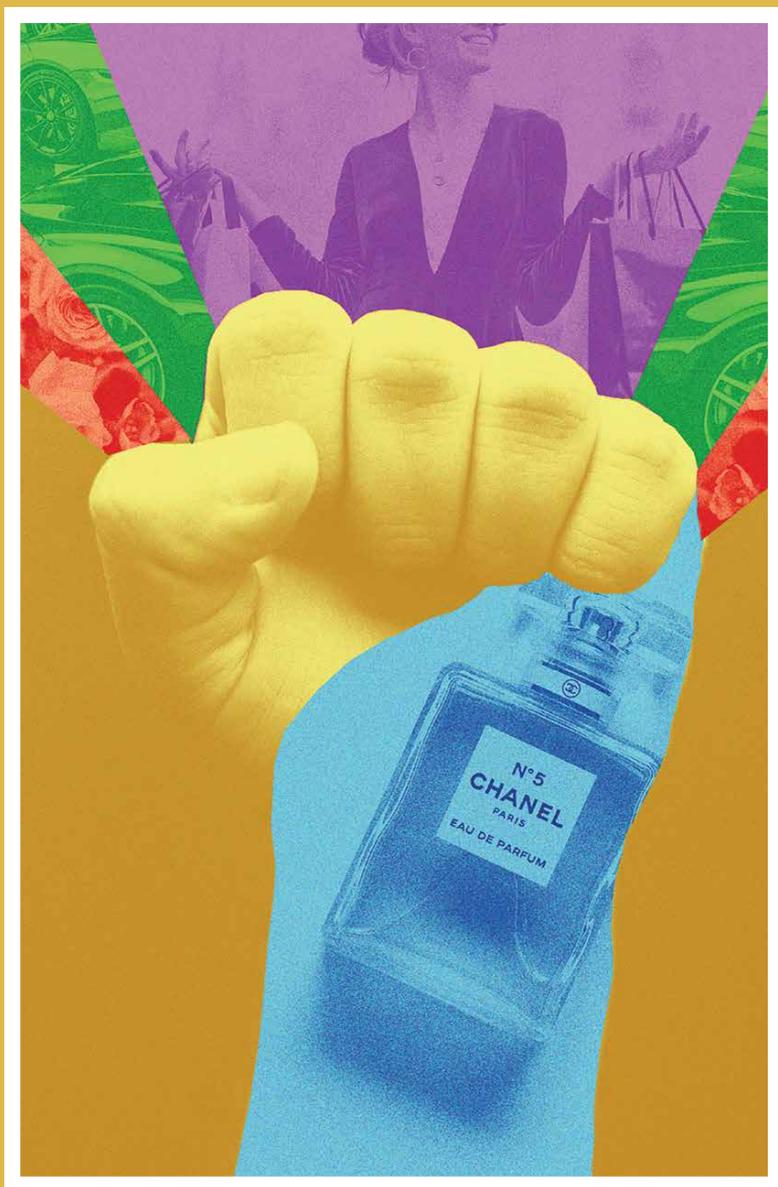
vida sin cuentas pendientes. Todos ellos fueron parte de esa élite difusa que ha mandado en Venezuela estos años.

El chavismo supo apalancarse en los poderes públicos para atornillarse en el poder, siguiendo el mismo modelo de gobiernos afines como el de Nicaragua. A los militares los puso a comandar negocios.

Chávez modeló la Fuerza Armada Nacional como un ejército revolucionario, como su guardia pretoriana. La constitucionalidad de la institución fue mellada cuando los verdes comenzaron a ocupar ministerios y cargos en empresas públicas, con terribles resultados de gestión. Siendo civil, Maduro tiene un gobierno con más piezas militares que el que tuvo Chávez. Son su sostén. Los presos políticos militares son mayoría entre los más de 250 que ha dejado la persecución política de estos años, según los reportes de organizaciones de derechos humanos como Foro Penal Venezolano. Nunca ha habido tantos militares presos, degradados, expulsados, dados de baja o desertores. Hay otro número que expresa el papel de élite que tiene la cúpula militar en la estabilidad del gobierno de Maduro, reelegido en 2018 en comicios que tuvieron serias fallas de origen que tambalean su legitimidad y le achican la diplomacia. En la última década se han ascendido a más de 1.200 generales y almirantes, «lo cual puede ser considerado un mecanismo ideado como incentivo de lealtad, ya que es excesivo, de acuerdo con el tamaño de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana», escribe en un análisis Rocío San Miguel, directora de la oenegé Control Ciudadano.

Si uno de los rasgos de la modernidad es la heterogeneidad de las élites, ese paisaje ha sido aplanado por el chavismo. Las cúpulas que se beneficiaron de los negocios con el gobierno, en torno a la Fuerza Armada o el Partido Socialista Unido de Venezuela, son las que están a flote y han establecido sus mecanismos para compartir el poder sin perderlo. El país se parece más a una nación de feudos, como el país campamento que el historiador Francisco Herrera Luque noveló en *Los amos del valle* y en otras obras; como una nación fragmentada, cuya reconstrucción dependerá del surgimiento de nuevas élites y nuevos relieves.

ÉLITES SIN DESTINO LATAM



BOLIVIA
La rebelión de la élite

FERNANDO MOLINA

(La Paz, 1965). Periodista y escritor, usualmente sus ensayos tratan sobre asuntos bolivianos contemporáneos y de historia intelectual. En el campo sociológico ha dado a imprenta «Modos del privilegio. Alta burguesía y alta gerencia en la Bolivia contemporánea» (OXFAM/CIS, 2019) y «Racismo y poder en Bolivia» (OXFAM/FES, 2021). Escribe artículos sobre Bolivia en periódicos, revistas y sitios web nacionales e internacionales.

En noviembre de 2019, la élite tradicional boliviana protagonizó uno de esos movimientos sediciosos que hasta entonces habían estado reservados a los trabajadores y los sectores populares. Este artículo describe esta revuelta y, a través de ella, a la élite, así como su relación con los indígenas del país.

«UNA VICTORIA ÉPICA»

La fisonomía de las protestas contra la reelección de Evo Morales en 2019 fue muy distinta de la de las manifestaciones «normales» en Bolivia. Uno de los jóvenes que participó en ellas le dijo a una periodista: «Elegir el presidente de tu país no [debe ser] como escoger equipo en Nintendo». Aunque muchos de los manifestantes, especialmente en los momentos más duros, fueron los estudiantes de las universidades públicas, columnas de muchachos de la Universidad Católica Boliviana y otras instituciones privadas estuvieron en el centro de los acontecimientos. Estudiar en esa universidad cuesta alrededor de 500 dólares al mes, dos salarios mínimos. Por otra parte, en ciertas ciudades y etapas de la movilización, familias enteras, desde las abuelitas hasta los niños de kínder, acudieron a bloquear las calles «por la democracia». Las crónicas periodísticas estaban llenas de fotos de familias y de «bloqueos excéntricos». Señoras que trasladaban sillas y hasta sillones al medio de una calle y se sentaban en ellos para impedir el paso de los vehículos. Un vecino que con su violín amenizaba el estar de plantón. Otros que preparaban refrigerios. Si a veces los manifestantes plebeyos echan escombros sobre las pistas, estos los reemplazaron por artefactos eléctricos defectuosos, o tendieron cordeles (en boliviano, «pitas») de un poste a otro para detener a los vehículos, compensando así su falta de *fuerza de masas*.

De esta ocurrencia surgió el nombre del movimiento. Morales se burló de quienes bloqueaban «con pititas» y ofreció darles un seminario

de capacitación en métodos de protesta. Claramente, los subestimaba. Y es que, por una vez, los que estaban en las calles no tenían las manos encallecidas, lastimadas por el trabajo físico. Algo que en Bolivia significa, según el escritor Carlos Macusaya, «no ser indio». Las fotografías de las manifestaciones muestran —no siempre, pero sí mayormente— fenotipos y pigmentos cutáneos asociados a la élite boliviana tradicional. También tuvieron un papel muy activo sus miembros emigrados al extranjero, que en todas las grandes ciudades del mundo denunciaban la «dictadura». Jóvenes, también esta vez, «de manos suaves y cuidadas», es decir, que cumplían labores de tipo académico o burocrático y no trabajaban en la construcción ni en los telares, como los emigrados bolivianos comunes.

Muchas personalidades del país se sumaron a las protestas. Jugadores y entrenadores de fútbol, una boxeadora a la que Morales había premiado años antes, que grabó un video para decirle al presidente indígena que se metiera su medalla por donde mejor le cupiera. Gerentes de empresas y banqueros. Muchísimas «amas de casa» acomodadas. También participaron escritores famosos, algunos de los cuales publicaron después libros y artículos sobre su experiencia; periodistas, directores de medios de comunicación, profesores universitarios; cantantes, actores, en fin, los personajes que suelen animar la esfera pública. Coincidentemente, el discurso sobre los hechos fue (y sigue siendo) mayoritariamente contrario al gobierno. Lleno de impotencia, el vicepresidente Álvaro García Linera despotricaba contra estos adversarios que iban a las manifestaciones «en enormes camionetas» y que se equipaban con bates, un instrumento que en Bolivia solo se usa en los círculos encumbrados.

«La primera gran impresión que me llevé», dice el académico Rafael Loayza, «fue que quienes estaban en posición de bloquear y marchar no eran iguales (ni parecidos) a quienes históricamente habían realizado estas medidas de presión en Bolivia: los movimientos indígenas periurbanos». Mientras estos últimos estaban dados a la tarea

conservadora de contener la movilización y defender al gobierno, «quienes alentaban esta vez la revuelta popular eran los más conspicuos representantes del bienestar social en Bolivia, los castellanohablantes de ascendiente español, *blancos* y *bien vestidos*».

Con esas características, ¿podrían tener éxito en una labor tan dura como sostener la paralización de las principales ciudades por mucho tiempo? Morales, ya lo hemos visto, apostaba a que no. Estuvieron 21 días en las calles. Trabaron el funcionamiento de las ciudades. Al final, a su presión constante y efectiva se sumó un motín de la policía y Morales, viendo que las Fuerzas Armadas comenzaban a dejar de responderle, decidió renunciar, tras 14 años en el poder. Había sido el presidente más fuerte y de más larga duración de toda la historia del país. De modo que su caída fue pintada por la élite tradicional con tonos épicos.

Ulteriormente serían publicados varios libros de crónica y defensa del movimiento social que estalló tras las acusaciones de fraude de las elecciones de octubre de 2019. El más importante de ellos se llama *21 días de resistencia. La caída de Evo Morales* y fue escrito por Robert Brockmann, un reconocido historiador que se considera a sí mismo «pitita». «Las pititas, una colectividad nacional tan enorme como diversa y dispersa, son, somos, poseedores de una genuina victoria política en las calles, producto de una movilización espontánea, resultado de un ideal colectivo de democracia que estaba siendo violada y secuestrada... Las pititas logramos, aunque hubiera mediado la diosa Fortuna, lo que los venezolanos o los sirios no han logrado ni con enorme sacrificio de vidas humanas», escribió Brockmann en un artículo titulado «Yo, pitita».

En otro de estos libros, Pedro Rivero, director de *El Deber*, el principal diario boliviano, consideraba lo sucedido una «epopeya» que «en tres semanas alcanzó lo que parecía imposible de lograr». Y, haciendo un pronóstico discutible, anticipaba que la gesta recibiría una «evocación orgullosa de las generaciones venideras».

Los activistas que participaron en el «movimiento pitita» hicieron esfuerzos para refutar la caracterización de elitismo que se les endilgaba. Antes de tener su nombre de honor, el movimiento comenzó con pequeñas protestas en los momentos previos al referendo organizado por Morales en 2016 para intentar levantar la prohibición constitucional de una tercera reelección. «En ese momento nos llamaban los «cuatro gatos»», recuerda Claudia Bravo, una activista y política comprometida desde entonces en la lucha contra la reelección. El movimiento se volvió mucho más amplio —pero sin involucrar aún a la «gente común»— cuando Morales pasó por alto los resultados de este referendo y se habilitó por medio de una consulta al Tribunal Constitucional. Y se tornó masivo después de que Carlos Mesa, quien creía haber obtenido votos suficientes para obligar a Morales a ir a una segunda vuelta, denunció la realización de un «fraude monumental» con el fin de declarar al entonces presidente ganador directo de las elecciones de 2019.

«Había una heterogeneidad; había mucha clase media, gente de zonas muy acomodadas, pero también universitarios, campesinos, etc. Hicimos los bloqueos compartiendo esquinas con señoras de los mercados, con estudiantes; fue una lucha conjunta y por eso se logró que el MAS (el Movimiento Al Socialismo de Morales) caiga; fue un movimiento ciudadano», asegura Bravo. La activista destaca la participación de los jóvenes y las mujeres, que estuvieron en la primera línea de los enfrentamientos callejeros y fueron los más activos críticos del MAS en las redes sociales. «Fue un movimiento generacional. La nueva generación superó a sus padres que estuvieron 14 años [durante el gobierno de Evo Morales] en sus casas y sin hacer nada. Por eso ser «pitita» era ser una especie de superhéroe», señala Bravo.

Aunque en su mejor momento los «pititas» incluyeron a muchos sectores populares descontentos con Morales, sobre todo se trató de un movimiento de clases medias, tanto de la clase media que en Bolivia lleva el nombre de «tradicional» y está compuesta por personas que perciben ingresos de entre 10 y 50 dólares diarios, como de las capas

superiores de la clase media «vulnerable», cuyos miembros perciben entre 7 y 10 dólares diarios. Es importante tomar en cuenta que la clase media tradicional es la clase superior efectiva en Bolivia, ya que solo 250.000 personas, de los 11 millones de que viven en el país, reciben ingresos por encima de los 50 dólares. Aún más importante es considerar que ambos segmentos no se consideran a sí mismos indígenas.

El 9 de noviembre, un día antes de ser derrocado, el presidente Morales hizo una declaración (cuyo contenido no viene al caso) desde el hangar presidencial, situado en el aeropuerto militar de El Alto, la ciudad que siempre lo había respaldado. Escogió este lugar porque no se sentía seguro ni en la Casa Grande del Pueblo, el palacio que se mandó a construir, ni en la residencia presidencial, situados en La Paz, una de las ciudades que protestaban contra él. La Policía, en rebelión, acababa de suspender la custodia de los edificios públicos.

¿Qué diferencia a El Alto de La Paz, ciudades que colindan y en principio deberían ser una sola? Su composición social. El Alto es una ciudad fuertemente aimara, incluso en sus clases medias, que son minoritarias en la urbe. En La Paz, en cambio, las clases medias constituyen la mayoría de la población.

Un estudio de Rafael Loayza encontró que en el barrio más «profundo» de El Alto el 90% de los habitantes se identificaba como aimaras. Al mismo tiempo, en ciertos puntos de la zona sur de La Paz, el 90% consideraba que no tenían etnia alguna. La correspondencia entre estas identidades y el voto a favor o en contra de Morales era, según el estudio, casi completa. «Los «ningunos» (es decir, los bolivianos que no pertenecen a ninguna etnia originaria, son castellano-hablantes y viven una vida urbana moderna), que antes de Evo no tenían una clara identidad étnica, comenzaron a adquirirla a partir del discurso de este, que no solo no los incluía, sino que los acusaba de ser racistas, haber explotado a los indígenas por 500 años y haberse robado el dinero del país. Los «ningunos» se sintieron segregados. Sintieron que su fenotipo valía menos», explica

Loayza. En opinión de este experto, esta sensación explica la fuerza, la radicalidad y la persistencia de la movilización de unas clases que los sociólogos siempre habían considerado «volubles e indecisas». «Lo que hemos visto fue un enorme movimiento de reivindicación, en el que los «ninguno» reclamaron un espacio en el país, un espacio que sintieron, con razón o sin ella, que el MAS les había quitado», concluye Loayza.

Querían volver a ocupar el espacio político dominante que poseían en el pasado, pero del que habían sido echados porque el gobierno ya no reconocía la educación elitista como el pasaporte para ingresar en él. Varios estudios estadísticos han comprobado que la élite tradicional cuenta con una mayor educación e invierte más en la educación de sus descendientes. Una estratificación de la población boliviana por ingresos identificaba que en 2016 el «estrato medio estable» —que sería la categoría de este estudio que podemos considerar como la clase media tradicional— tenía 11 años de educación promedio, dos más que el «estrato medio vulnerable» y cuatro más que el «estrato bajo». Esto implica que sus miembros provenían de familias que: a) ya tenían —al menos— ingresos medios, lo que les permitía costear la educación de sus hijos y b) consideraban que la educación de estos era prioritaria, lo que también indicaba la presencia de padres educados o, al menos, mejor educados que otros que, teniendo cierto pasar, preferían incorporar rápidamente a sus descendientes al mercado laboral. Otros estudios muestran, complementariamente, que los indígenas tienen menos educación y un menor peso económico que los «no indígenas».

La desigualdad en la posesión de los factores productivos, tierra, dinero, recursos naturales, educación, se originó históricamente en la distribución de estos factores entre los distintos estamentos de la sociedad colonial, que concedió la mejor parte de los mismos a los descendientes de españoles. Desde entonces, y pese a los diversos procesos de democratización de la riqueza que se han producido a lo largo de la historia nacional, la desigualdad «estamental» se ha reproducido a lo largo del tiempo. Hoy en día, la mayor parte del capital, la parte

más rica de la tierra y toda la educación de calidad se hallan en manos del «estamento» blanco. Este goza de un virtual monopolio de todos los puestos de la economía que requieren un alto nivel de conocimientos, con la sola excepción de los puestos estatales. Los principales médicos, abogados, administradores, ingenieros, pilotos y otros profesionales de alto estándar pertenecen a este estatus. También la totalidad de las personas con puestos ejecutivos en las grandes empresas. Y dado que estas grandes empresas, si bien solo emplean al 20% de la fuerza de trabajo, en cambio generan el 80% del PIB, se puede decir que, por mediación de los gerentes de estas compañías, la mayor parte de la riqueza nacional se halla en manos de blancos.

Desde esa increíble posición de poder, la élite tradicional domina en casi todos los órdenes sociales: la suya es una superioridad histórica. Su identidad es sinónimo de modernidad; la cultura nacional se considera, principalmente, un legado hispano y una creación castellano-parlante; ha logrado que el «buen gusto» estético e intelectual no sea más que su gusto interiorizado por la sociedad como el único valioso; ha impuesto ciertos hábitos y ceremonias sociales como la ritualidad deseable y aceptable del conjunto de los bolivianos (por ejemplo la sobrestimación y hasta la fetichización de la educación formal, el eurocentrismo estético y libidinal, etc.); ha dado mayor valor a ciertas maneras de comer y de beber alcohol, de bailar, de vestir y peinarse, de celebrar, enamorar, hablar, valorar los olores, etcétera.

Igualmente, la élite tradicional batalla por transformar sus intereses políticos en «intereses universales». Los manifestantes contra Morales se consideraban a sí mismos «bolivianos» y seres despojados de restricciones étnico-raciales; como ya hemos dicho, «no indígenas». Por eso su bandera era la nacional y se oponía a la *wiphala* indígena.

Su propuesta de organización del Estado es meritocrática. Si Aristóteles recomendaba el gobierno de los *mejores ciudadanos*, la élite boliviana quiere el gobierno de los ciudadanos mejor educados. En

vísperas de la crisis, uno de los intelectuales más llamativos del país, Diego Ayo, convocó a un «gobierno de los inteligentes» en contra de los «clanes familiares» del gobierno de Evo, «que no tienen mérito alguno».

Sin duda, la falta de «meritocracia» y de «gobierno de los inteligentes» fue otro de los detonadores de esta curiosa revuelta de los de arriba.

LA RESACA DEL DÍA DESPUÉS

En los barrios más acomodados de La Paz, la oposición a Evo Morales fue casi unánime. Las campanas de las iglesias llamaban a las concentraciones y marchas; cada noche, a las 21:00, hora elegida en alusión al 21F, el día en el que Morales perdió el referendo de la reelección, las calles se llenaban con el ruido del «cacerolazo» diario. El momento en que el alto mando militar «sugirió» la renuncia del presidente, el 10 de noviembre, cientos de automovilistas del sur de La Paz hicieron sonar sus bocinas en señal de júbilo. Cuando Evo finalmente renunció, horas después, la alegría se desbordó. Miles de familias se volcaron al Paseo del Prado paceño, el espacio urbano en que se exteriorizan los festejos deportivos. Según escribió con euforia el multipremiado periodista Roberto Navia, los sentimientos de ese momento eran comparables con los de principios de 1994, cuando enormes multitudes celebraron la clasificación de Bolivia al mundial. La gente paseaba envuelta en banderas bolivianas, las bocinas atronaban, los brindis —incluso con champán, según registró la prensa— se sucedían a veces entre desconocidos.

Pero la algarabía duró poco. Corrió el rumor de que una muchedumbre bajaría de El Alto a La Paz a tomar el Palacio de Gobierno; la amenaza bastó para que la fiesta acabará tan abruptamente como había comenzado y se cerraron todos los comercios, bancos y mercados de esta ciudad. Al anochecer comenzó el pánico. Las familias de clase media se

encerraban en sus casas y, pegadas a la televisión, observaban asustadas los acontecimientos. «El león despertó», decían en las redes los simpatizantes del MAS en relación a las multitudes que protestaban con furia incontenible por la renuncia de Evo, y lo hacían de la peor manera: intentando vengarse de la Policía, acusada por Morales de complicidad en su caída debido a su amotinamiento. Al grito de «Ahora sí, guerra civil», miles de jóvenes de El Alto atacaron estaciones policiales, patrullas y a algunos policías, que salieron huyendo. Los domicilios de Waldo Albarracín, rector de la universidad pública y uno de los dirigentes de las protestas, y de Casimira Lema, una conocida periodista de televisión, ardieron. Además, fueron quemadas decenas de buses municipales y una fábrica.

Esa noche y las dos que le siguieron, muchos paceños y alteños se mantuvieron en vigilia en las calles, en apronte para enfrentar físicamente la amenaza indígena. Para ello, reunieron armas de fuego e instrumentos contundentes, crearon brigadas y organizaron sistemas de comunicación y maniobra de tipo paramilitar. También construyeron barricadas y otras obras de ingeniería defensiva. Hicieron vivacs y patrullajes. Se sabe incluso de un condominio cuyos habitantes, locos de terror, se aprovisionaron de agua hervida mezclada con ají para escaldar a las «hordas» en el momento en que estas realizaran su imaginario asalto.

El 11 de noviembre, La Paz fue rodeada desde el sur por numerosas columnas de campesinos que iniciaron el «cerco» de la ciudad. Cientos de comunarios rodearon algunos de los barrios residenciales de esta zona de la urbe y, exhibiendo palos y haciendo explotar dinamitas, asustaron hasta la desesperación a sus habitantes, que clamaban en vano por la llegada de policías. Estos no podían acudir porque seguían desorganizados por su insubordinación de los días anteriores.

En uno de esos barrios fronterizos con el campo vivía el candidato Carlos Mesa, que ese día publicó un tuit pidiendo que la Policía evitara que su casa fuera atacada, mientras sus vecinos la protegían con los mismos métodos que ya hemos descrito.

La *wiphala*, la bandera indígena que Morales había convertido en la segunda del país, había sufrido represalias de los manifestantes antievistas, que la consideraban únicamente una bandera del MAS. Al mismo tiempo, ellos se habían embanderado con los colores nacionales como nunca antes se viera en un conflicto social. Cuando finalmente triunfaron, su festejo incluyó en algunos casos la quema de *whipalas*. Por otra parte, los manifestantes pro-MAS enarbolaban exclusivamente la enseña indígena y la oponían a la bandera nacional izada por los pititas. Los comerciantes y vecinos que no querían ser víctimas de su ira también levantaban esta insignia como símbolo de paz. «Bolivia vive una especie de «guerra civil de baja intensidad» y, como es de uso, cada facción lleva su propia bandera», me dijo en ese momento el historiador Pablo Stefanoni.

En las redes, los asustados vecinos se desahogaban calificando a los manifestantes agresivos con toda clase de epítetos despreciativos y racistas; al mismo tiempo, hacían circular instrucciones para organizarse y «cadenas de oración». Por su parte, la gente en la calle no dejaba de amenazar de muerte a Mesa y a Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz y líder de las protestas contra Evo.

No era la primera vez que los criollos paceños se sentían atrapados por un «cerco» indígena. El antecedente más cercano había sido «octubre negro» de 2003, la insurrección que volteó al presidente neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada, dando inicio la ciclo *evista*. Tanto en 2003 como en 2019, las reuniones de los barrios acomodados adoptaban la forma de mítines, en los cuales destacaban los vecinos con cierta formación militar y más abiertamente racistas. Reinaba un general nerviosismo, tirando a paranoia, atizado por rumores, *fake news* e incluso titulares de una prensa manejada por asustados periodistas.

En el libro que ya hemos citado, Robert Brockmann reflexiona lo siguiente: «Aquellos que, desde el extranjero, juzgaron con una ceja levantada los aplausos con que fueron recibidos los militares [que salieron a las calles] la noche siguiente, una eternidad después, no han vivido el

miedo. No saben lo que es el miedo. «No le temas al hombre» dijo una vez Nietzsche, «témelo a la masa». Tal cual.»

El miedo al acorralamiento y la matanza de blancos a manos de indios alzados pervive en la élite tradicional boliviana. Es «recordado» de los momentos del pasado que lo produjeron en sus ancestros. Con un poco de imaginación, este ejercicio puede remontarse hasta el cerco a La Paz por Túpac Katari. En mi casa, mis abuelos todavía hablaban en la sobremesa de la ocasión en la que los montoneros de Pablo Zárate Willka «se comieron» a los «chicos decentes» de dos batallones involucrados en la Guerra Federal de 1899. Mis abuelos no habían vivido este episodio, pero él estaba, por así decirlo, en su «memoria política». De una manera menos amable, otro de mis abuelos recordaba con rabia la violencia que produjo la reforma agraria de 1953 en contra de los propietarios blancos de tierra (la reforma agraria no solo expropió a hacendados en beneficio de colonos, sino, al mismo tiempo, a blancos en favor de indígenas, produciendo en los exterratenientes y sus hijos un resentimiento étnico-racial que se expresaría luego de múltiples maneras).

¿Era este miedo recordado solamente una evocación imaginaria o se correspondía con algo real? En algunos puntos específicos de la ciudad y para algunos personajes —por ejemplo, los políticos opositores— existió cierto peligro real, principalmente por la ausencia de la policía en las calles. Pero este se multiplicó por mil o por un millón en la imaginación de los grupos elitistas en estado de emergencia. Las personas que sufren este «terror de clase» padecen lo indecible por los espectros creados por su «memoria larga». Algunas viven tan mal el trance que ulteriormente condenan a Bolivia como un «Estado fallido» y tratan de abandonar el país en la primera oportunidad.

Por otra parte, a lo largo de la historia, las masacres campesinas han tenido un fuerte apoyo social: el de los blancos que se percibieron a sí mismos en peligro inminente de muerte o bancarrota. Y esta vez no fue la excepción. Quienes aplaudieron a los militares porque por fin

aseguraban la presencia del Estado en las calles, en el relato de Robert Brockmann, lo hicieron entonces y también más tarde, durante las masacres indígenas que ocurrieron pocos días después.

El 15 de noviembre, en Sacaba, una población cercana a Cochabamba, una columna de cocaleros que intentaba llegar a esta última ciudad fue detenida por fuerzas combinadas de la policía y el ejército. Murieron nueve campesinos y decenas fueron heridos de bala. El 19 de noviembre, las fuerzas conjuntas rompieron temporalmente el bloqueo de la planta de acopio de gas y gasolina de Senkata, situada en El Alto, a fin de llevar camiones cisterna con gasolina a la ciudad colindante, La Paz, que carecía de combustible. Diez de ellos murieron por disparos de armas de fuego. En respuesta, los manifestantes derribaron el muro exterior de la planta. Las autoridades del gobierno los acusaron de intentar destruir y volar las instalaciones. Según la presidenta interina que reemplazó a Morales, Jeanine Añez, «se puso en riesgo... la vida de más de 250.000 alteños. La tragedia habría alcanzado dimensiones devastadoras».

En agosto de 2021, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-Bolivia) «no encontró pruebas de que los manifestantes [en Sacaba] hicieran uso de armas de fuego o que amenazaran la vida de otros manifestantes, de los efectivos de la policía o de las Fuerzas Armadas presentes. No hubo informes de lesiones graves a ningún miembro de las fuerzas del orden». Y, sobre Senkata, el Grupo señaló que «las estructuras sensibles de la planta no fueron amenazadas por los actos vandálicos ni por las protestas. En la única ocurrencia de alguna gravedad, acaecida en el extremo sur de la planta —en el área de manejo de válvulas para reducción de la presión del sistema de distribución de gas natural— el uso proporcionado de la fuerza se ha comprobado como suficiente para prevenir riesgos o daños concretos a los servicios». Por tanto, concluyó, «ocurrió una masacre en Senkata... Aunque las Fuerzas Armadas y la Policía no hayan admitido el uso de

armas letales, las evidencias recabadas indican que los disparos con armas de fuego se originaron en sus tropas».

Si no hubiera mediado el GIEI-Bolivia, se seguiría negando la existencia de estas masacres. En realidad, se lo sigue haciendo, aunque de manera lateral. Los principales medios de comunicación hablaron en 2019 de «fuego cruzado», «choques armados» y «ataques terroristas» y cuando publicaron el informe del GIEI-Bolivia, en 2021, no reconocieron que habían tapado los hechos con un discurso invisibilizador. La revuelta de las élites debía ser recordada como una «epopeya» contra un tirano y una dictadura, no como un momento de continuidad de una larga guerra contra el pueblo.

EL FRACASO DE LA REBELIÓN. ¿FINAL?

El 10 de noviembre de 2019, día de la renuncia de Evo Morales a la presidencia, comenzó un cambio sociopolítico extra-electoral en Bolivia. Ciertos sectores de la sociedad se posicionaron activamente a favor de un conjunto de causas y transformaciones. El gobierno de Jeanine Añez adoptó muchas medidas que representaban y procuraban complacer a estos sectores.

La bandera principal de este movimiento fue el veto a la reelección de Evo Morales, pero el cambio al que aspiraba era mucho más amplio: a) detener el proceso de crecimiento del Estado en el que estaba obsesionado el gobierno de Morales y, en lo posible, revertirlo; b) darle a la gran banca privada y la agroindustria el papel principal en la recuperación de la crisis económica; c) reubicar al país en el terreno internacional, poniéndolo nuevamente entre los aliados de Estados Unidos; d) crear una burocracia «meritocrática» que se deshiciera de los

funcionarios plebeyos («masistas»), y e) sustituir el sistema normativo y simbólico asociado al «Estado Plurinacional de Bolivia» por el sistema normativo y simbólico asociado a la «república de Bolivia».

En las elecciones del 18 de octubre de 2020, el 55% de la población votó por Luis Arce del MAS y le dijo «no» a este cambio extra-electoral en curso que era impulsado por estos sectores sociales y representado por Añez, Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho (la diferencia entre estos tres candidatos frente al cambio descrito era solo de forma y grado).

¿Por qué la mayoría rechazó el cambio? Las encuestas informaban de que los valores predominantes de la población boliviana no habían dejado de ser, después de la caída de Morales, los valores nacionalistas e izquierdistas de siempre. Históricamente hablando, estos valores solo fueron minoritarios en los pocos años de auge del neoliberalismo, a comienzos de los 90. Pero en el periodo 2019-2020, la antinomia Estado/mercado, que explicaba gran parte del éxito de Morales en el pasado, no desempeñó el papel principal. Lo cedió a la antinomia Estado indígena versus Estado no indígena y desindigenizado.

Esta nueva dicotomía se debió a la actitud y a las prioridades que tuvieron los sectores sociales comprometidos con el derribo de Morales y la «transición». Recordemos que la élite tradicional había vivido la llegada y la permanencia de Evo Morales en el poder como una tragedia. Aquí la clave está en la virulencia de su sentimiento. Por supuesto, el comportamiento de Morales y su partido habían dejado mucho que desear en cuanto a derechos y equilibrios democráticos, había sido autoritario, prepotente y abusivo, pero, más allá de toda objetividad, las clases sociales de las que estamos hablando habían vivido esto de forma muy intensa, a ratos incluso histórica. Si sus columnistas dicen que este periodo fue una «tiranía», una «noche de 14 años», un «cáncer», etcétera, es porque realmente sienten eso. Hay un paralelismo entre los mecanismos psicológicos que operan en estas clases y los que actuaron en la mentalidad de la burguesía chilena en contra de Salvador Allende.

Lo normal es que un odio político de esta agudeza se origine en el miedo, aunque, a diferencia del caso chileno, en Bolivia no es tanto miedo a la expropiación, ya que el MAS es un partido de propietarios, como al «malón», es decir, al levantamiento indígena. Por eso, como hemos visto, los ataques de indígenas simpatizantes del MAS en contra de la casa de una periodista y del rector de la Universidad de La Paz, así como la destrucción de propiedad municipal y policial el 11 de noviembre, en un momento de vacío de poder, constituyeron un verdadero hiato en la politización y radicalización que vivía la élite desde 2016. El recuerdo del «cerco indígena», el terror a ser atacado por «hordas» —que es mucho más vivo en quienes tienen prejuicios racistas— dio inicio, a partir de ese momento, a un periodo mucho más agudamente anti-masista que el previo. Sin posibilidad de represalias legales, el racismo se desató en los entresijos de la cotidianidad e incluso en la esfera pública.

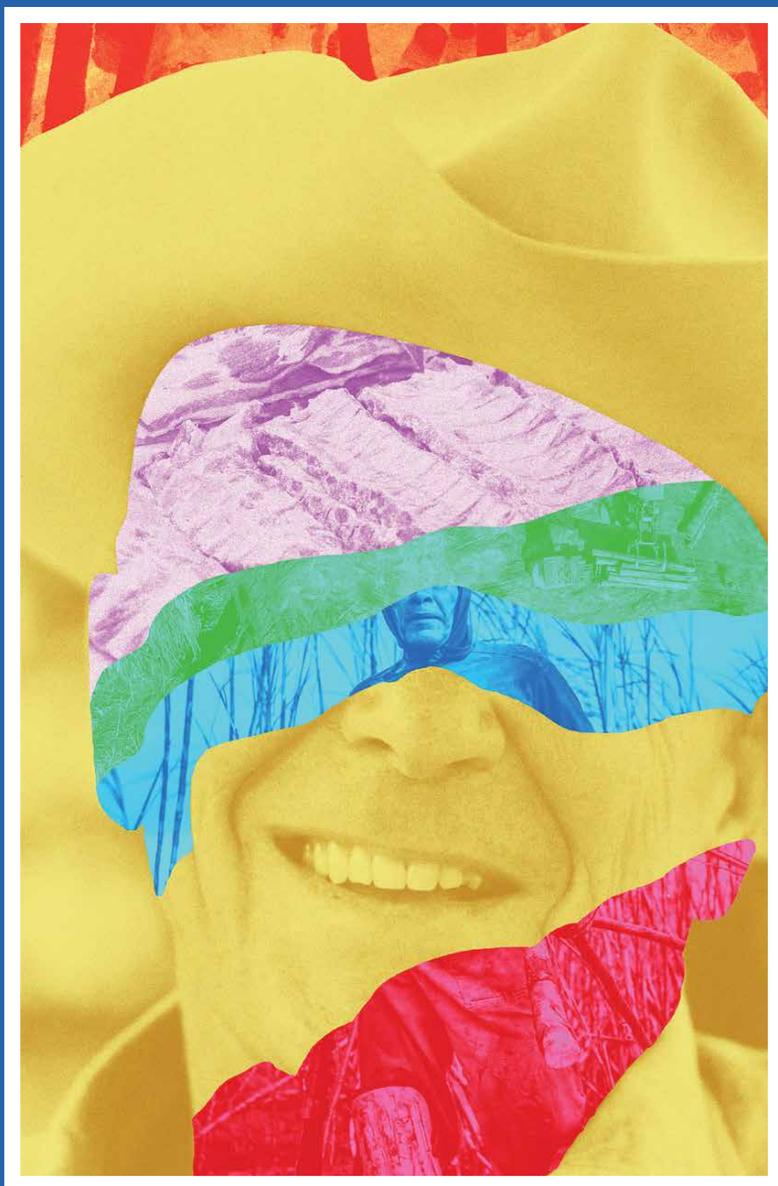
Aunque este ánimo fue menguando conforme *el tiempo* pasaba, se mantuvo como la pasión política fundamental. Ella modeló la conducta de los actores políticos, inclusive la del MAS, que al principio prácticamente tuvo que entrar en la clandestinidad. Mientras más implacable y despectivo con el MAS era el gobierno interino, más aplausos recibía. En este contexto, Añez mantuvo la actitud que ya había mostrado como senadora opositora: dio carta blanca a sus ministros de seguridad Arturo Murillo y Fernando López, llamó «salvajes» a quienes apoyaron a Morales, declaró «infundado» el principal juicio por racismo de la historia del país, dijo que la «república» había vuelto y se quedaría para siempre. Los líderes políticos de centro no se atrevieron a contradecir esta corriente de opinión, de cuyo cortejo parecía depender su futuro. Camacho incluso procuró extremarla aún más.

Como es lógico, los sectores subalternos tomaron debida nota de todo esto...

BOLIVIA

La rebelión de la élite fracasó, pero tuvo efectos. Hoy ni la élite ni el MAS son lo que solían ser. La crisis política ha traumatizado a todos los bolivianos. Y, a través de este trauma, tiende a perpetuarse. Todavía no está claro si, en el futuro, se recordará la historia que hemos narrado como un hecho puntual o el inicio de una serie de catástrofes. .

ÉLITES SIN DESTINO LATAM



BRASIL
*Las ambiciones nacionales
del agronegocio*

MATHIAS ALENCASTRO

Investigador del Centro Brasileiro de
Análise e Planejamento, enseña Relaciones
Internacionales en la UFABC.

Las manifestaciones del día 7 de septiembre de 2021, que llevaron a las calles a cientos de miles de partidarios del presidente Jair Bolsonaro, presentaban todos los elementos constitutivos de la extrema derecha brasileña: la movilización digital por las redes sociales, esencial para el surgimiento y consolidación de ese bloque desde las protestas de junio de 2013; las incesantes referencias internacionales, tanto a causas como a líderes; y su peculiar composición social: al contrario de muchos movimientos de extrema derecha que surgieron en el mundo tras la crisis financiera de 2008, el bolsonarismo está constituido por la élite brasileña, de personas blancas, mayores y nostálgicas del régimen militar iniciado por el golpe de 1964.

A esos elementos ya conocidos del movimiento bolsonarista se suma otro, cada vez más importante, pero aún poco estudiado: el agronegocio. La emergencia del agronegocio como actor clave de la economía nacional precede a la elección de Jair Bolsonaro. Sus orígenes se remontan a la Revolución Verde de los años 1970 y, más recientemente, a la política de generosos subsidios del gobierno de Dilma Rousseff, que aceleró el proceso de modernización del sector en un momento favorable de la coyuntura internacional.

En un Brasil en proceso acelerado de desindustrialización, el agro terminó asumiendo cada vez más relevancia en estados ricos como São Paulo y el interior del país. Pese a que se lo describe de forma correcta como un sector intrínsecamente extractivo y predatorio, sobre todo desde el punto de vista ambiental, el agronegocio no puede ser visto solamente como una nueva etapa del «Brasil hacienda». Toda una economía de servicios se ha organizado alrededor de la industria del agro, que también está a la vanguardia de la innovación científica y tecnológica. El contraste entre el dinamismo de la región Centro-Oeste y las demás regiones del país queda reforzado por el contexto de estancamiento económico que caracteriza el resto del país. En la prensa, el agronegocio es casi anualmente presentado como el «salvador del PIB».

Es irónico, pero la identidad política del agronegocio se afirmó en la oposición a la presidenta que ayudó a cambiar su dimensión económica. El movimiento a favor del *impeachment* de Dilma Rousseff despertó nuevas ambiciones políticas para el sector. Sus líderes industriales nunca se habían organizado tan claramente en torno a un único candidato como Jair Bolsonaro. A partir de 2018, el agronegocio desembarcó con fuerza en la política nacional, no solo apoyando políticas bolsonaristas que iban mucho más allá del Centro-Oeste, sino también alimentando los canales de la extrema derecha, de las redes sociales y participando activamente en las manifestaciones —el público de Brasilia, el 7 de septiembre, era en su gran mayoría oriundo de los estados del Centro-Oeste—. En esa ocasión, por primera vez, empresas del agronegocio fueron acusadas de apoyar financieramente a los grupos más radicales dentro del bolsonarismo, lo que llevó al Supremo Tribunal Federal a bloquear las cuentas de Aprosoja. Tal episodio dio muestras de que el sector se estableció en otro nivel: ya no quiere solamente defender sus intereses sectoriales, sino que pretende perpetuar su control sobre la política nacional.

Esa nueva ambición se puede identificar en el universo cultural del Centro-Oeste y, en particular, en el sertanejo, estilo musical local con popularidad nacional, que empezó a narrar el ascenso del agronegocio a partir de 2018. Las canciones cuentan la historia de la búsqueda de reconocimiento de parte del Centro-Oeste contra las élites litorales de Río de Janeiro y São Paulo. Insisten en la resistencia de los poderes establecidos, un tema muy común del bolsonarismo, al decir, por ejemplo, «lanzamos moda sin estar en televisión».

*No es más el país del carnaval
En el mundo entero es respetado
Brasil ahora es el país del agro*

ADSON Y ALANA - PAÍS DO AGRO

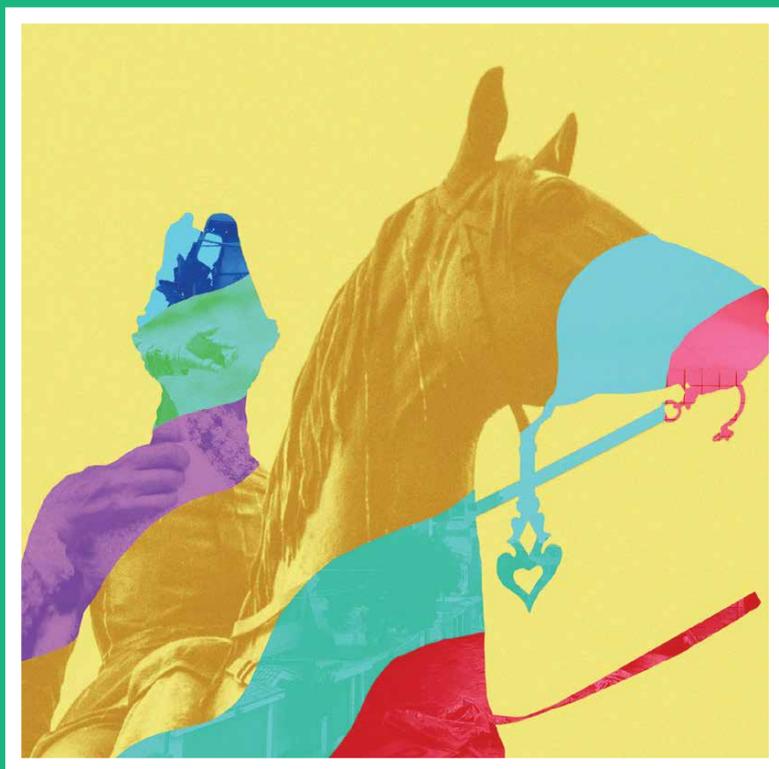
El agro ya proyecta su fuerza mucho más allá de la región Centro-Oeste. Inversionistas del agronegocio dominan nuevos negocios en el sector inmobiliario de ciudades como São Paulo y Belo Horizonte. Otras como Cuiabá y Goiânia contratan servicios y personal antes no disponibles para trabajar fuera de la región Sudeste. Si a la Avenida Faria Lima, núcleo del universo del mercado financiero de São Paulo, le gusta ostentar a sus emprendedores y jóvenes de *startups*, son los anónimos *traders* de *commodities* los que hacen girar las máquinas.

La historia de una élite extractiva que cultiva ambiciones nacionales no es novedad. El estado de Texas, en Estados Unidos, por mencionar tan solo un ejemplo, pasó a ejercer un poder político mucho mayor cuando el petróleo empezó a desempeñar un rol importante en la economía. Todos recuerdan a la familia Bush usando orgullosamente sus botas tejanas en las elecciones presidenciales. Experiencias pasadas también nos enseñan sobre la resiliencia y versatilidad de las regiones extractivas. El agronegocio precedió a Bolsonaro y sobrevivirá a su mandato. Aunque su cultura es hoy un elemento importante del bolsonarismo, el pragmatismo impera entre sus líderes industriales.

Otro elemento importante para el futuro de la élite del agronegocio es la disputa interna entre agentes predadores y progresistas. Potenciada por la intensa demanda de China, la mayoría de los líderes de esta industria apuestan por maximizar la extracción de recursos a través del apoyo a políticas que aseguren un ambiente de restricciones mínimas y, al mismo tiempo, de la inversión en masa en grandes proyectos de infraestructura en alianza con multinacionales, como es el caso de Ferrogrão. Para esa élite, los errores del gobierno Bolsonaro, incluso respecto a China, no son nada al lado de la protección que este ofrece contra las presiones internacionales y, sobre todo, de la Unión Europea. El sabotaje del acuerdo entre UE y Mercosur, por ejemplo, se debe en parte a esas élites, que vieron con malos ojos una mayor integración entre Brasil y la región del mundo más atenta a la emergencia climática.

Otra élite, más atenta a los efectos de largo plazo de la actual política, observa los movimientos bolsonaristas con aprensión. Para la élite progresista del agronegocio, el actual ciclo de la proteína está amenazado por las nuevas exigencias de los mercados de los países desarrollados y por las innovaciones en el mercado global de alimentación. El instinto predatorio del agronegocio bajo Bolsonaro puede, según la visión de este grupo todavía minoritario, tener consecuencias dramáticas a partir de 2030. Los rumbos del agronegocio y, por extensión, de Brasil, dependen en gran medida de los embates internos de su nueva élite..

ÉLITES SIN DESTINO LATAM



PERÚ
*La ultraderecha
contra la «mafia caviar»*

JOSEPH ZÁRATE

(Lima, 1986) Periodista y editor. Autor de libros como Algo nuestro sobre la tierra y Guerras del interior. Ha recibido los premios de periodismo Ortega y Gasset en 2016 y Gabriel García Márquez en 2018.

Son golpistas.

Son xenófobos.

Son antivacunas.

Son fanáticos religiosos.

Son homofóbicos.

Son *antifeministas*.

Son neofascistas...

Y están convencidos de que existe un diabólico plan global para instaurar en su país un régimen comunista. Son los grupos de extrema derecha peruanos que, con su renovado protagonismo, se han convertido en el colectivo más peligroso del convulso panorama político de Perú. Se trata de un movimiento diverso y heterogéneo que coincide, en parte, con las ideas e intereses de las élites más conservadoras de este país que han visto disminuidos su poder, su capacidad de influencia y sus privilegios y que hoy dicen sentirse amenazadas por esa ola progresista que denominan «la mafia caviar».

—¿Traes un arma?

Levanto los brazos. El tipo revisa mis bolsillos sin dejar de mirarme a los ojos, como esperando que confiese. No, le digo, es mi teléfono el que genera ese *bip-bip-bip* que resuena en su detector de metales. Me gustaría preguntarle por qué alguien llevaría un arma a una charla titulada «En defensa de la constitución», como dice el afiche que me pasaron por WhatsApp, pero no debo: conviene que el tipo crea que soy uno de ellos. Así que solo sigo su voz militar que me ordena tomar el ascensor al piso 13. Allí, en una sala de conferencias, un joven dirigente de La Resistencia, de traje y corbata, está de pie y vocifera junto a una bandera blanca con un león dorado en posición de ataque.

—¡Quieren llevar a nuestra sociedad por un camino experimental, el comunismo! Y en ese trayecto van a destruir nuestra democracia, la Constitución que hemos logrado con el presidente Fujimori. ¡Pero los peruanos no somos ratas de laboratorio! ¡Ningún socialista comunista va a venir a experimentar con nosotros sus *pelotudeces* ideológicas! Como lo hicieron en Rusia, Cuba, China, Venezuela, y ahora Argentina y para allá va Chile. ¡No lo vamos a permitir! Y este foro marca el inicio de una batalla en contra de los avances del comunismo, en contra de la ideología de género, porque el comunista lo que quiere es destruir la patria para entregársela al comunismo criminal internacional Foro de Sao Paulo ¡y no lo vamos a permitir!

Es una noche de diciembre de 2021 en San Isidro, el centro financiero de Lima. Unas 25 personas, entre hombres y mujeres, vestidos como oficinistas, estallan en palmas y ovaciones, en una escena parecida a la de un culto evangélico, aunque estas personas no estén necesariamente cerca de que aquello llamado «amor al prójimo».

De todos los grupos que se crearon para que la extrema derecha gane las calles de Lima a punta de marchas y protestas en los últimos años, es La Resistencia el más organizado y el que más

violencia proyecta contra todo lo que se perciba como «rojo», «caviar», «izquierda» o «comunista».

Todo el país los ha visto salir a marchar para defender sin pruebas la narrativa del fraude en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de junio de 2021. Llamam al gobierno de Pedro Castillo «usurpador y terruco». Realizan actos de acoso y hostigamiento a los periodistas que cubren las protestas y que los investigan. Se han plantado frente a los domicilios del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, o del fiscal del Caso Lava Jato, quien acusa por lavado de activos a Keiko Fujimori, la hija del dictador preso por corrupción y crímenes de lesa humanidad. Organizan marchas contra las vacunas, a las actividades por los derechos de las mujeres las llaman «feminazismo» y difunden mensajes homofóbicos en sus redes sociales. En julio de 2021, se atrevieron incluso a traspasar con violencia las rejas de seguridad que protegían el Palacio de Gobierno, que entonces ocupaba el presidente Francisco Sagasti, como imitando la toma del Capitolio de los Estados Unidos. Hay decenas de videos en los que, con el respaldo de sector más reaccionario de las élites de derecha, aparecen hostigando en las calles a periodistas, artistas, activistas que piensan distinto a ellos. Hechos como esos, por los que la policía peruana investiga a este grupo, también motivan los aplausos fervorosos de esta noche de diciembre en Lima.

—¡Y seguiremos en pie de lucha! Defendiendo los principios: Dios, Patria y Familia. Son las cosas que quieren destruir. Nuestra fe cristiana, aceptando la fe extranjera, como la religión islámica que es extremista, terrorista. ¡Para eso los caviares sí les abren las puertas! Como miembro de La Resistencia me siento orgulloso de protestar y levantar mi voz a favor de mi patria.

La gente aplaude otra vez. Entonces una señora muy maquillada se acerca para obsequiarme un ejemplar de la Constitución Política de 1993, uno tan diminuto como una caja de fósforos. Me mira unos segundos, nota que apunto cosas en mi libreta.

—Usted es nuevo, ¿no? —me pregunta— ¿Quién lo invitó?

Maelo me había invitado a la charla. Juan José Muñico Gonzales (que se hace llamar *Jota Maelo* en honor a un viejo salsero) es el fundador de La Resistencia. Es un tipo flaco de 43 años, piel cobriza, nariz aguileña, y obrero de una fundición, que hasta hace poco se definía en Twitter como: «Anticomunista de nacimiento, pastor de carneros NAKos y stripper de las terrucas aguantadas».

—Me considero un hombre de derecha extrema —me dijo cuando le pregunté sobre su pensamiento político, algo sobre lo cual, le había dicho, me interesaba escribir—. Pero sobre todo soy «albertista».

Antes de fundar su colectivo radical, Muñico Gonzales llevaba algunos años tratando de reivindicar lo que fue, según él, «el mejor gobierno de la historia del Perú». Primero integró el Frente Fujimori Libertad y después fundó el Movimiento Terrorismo Nunca Más. Hasta que, en septiembre de 2018, decidió salir a protestar en el centro de Lima con un grupo de amigos en apoyo de Pedro Chávarry, el exfiscal supremo investigado por corrupción en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto (también llamado el caso de los CNMAudios), que reveló un esquema de profunda corrupción en el sistema de justicia peruano. Para Muñico, el caso de Chávarry era parte del plan de «la mafia, de la izquierda caviar y las ONG filoterroristas como el IDL (Instituto de Defensa Legal), envuelta en la corrupción de Odebrecht».

Muñico Gonzales es hoy el personaje más turbio de este grupo extremista: fue procesado (aunque luego su caso fue sobreseído) por el asesinato de un veterano combatiente de la guerra del Cenepa, que tuvo lugar en los años noventa entre Perú y Ecuador, y hoy ya tiene tres querellas y una condena de un año de prisión suspendida por el delito de difamación agravada, luego de que calificara al IDL como «organización criminal».

A pesar de esos antecedentes, su forma de hacer política increíblemente capta más adeptos cada día en Perú. Según Muñico (que alguna vez planteó la idea de que su grupo portara armas en caso de «una guerra civil»), La Resistencia tiene ya 200 miembros (con integrantes incluso fuera del Perú) debidamente acreditados, aunque no cualquiera es admitido. «Sabemos quiénes son, están filtrados», dice, «les pedimos el Twitter, el Facebook, ahí buscamos las publicaciones y vemos quiénes son. Hacemos un trabajo básico de inteligencia, porque si hay un infiltrado puede soltar información y nos cae por ahí la policía y nos frustra todo.»

Lo más peligroso para la sociedad peruana es que su discurso ha tenido tal nivel de exposición e influencia que no solo se ha visto respaldado por figuras emblemáticas de la élite política más conservadora (como los políticos que integran la Coordinadora Republicana), sino que de su matriz han surgido otros grupos, incluso más radicales y extremos: Los Insurgentes, liderados por Flor de los Milagros Contreras, que fue detenida en 2021 por resistirse a cumplir las normas de bioseguridad en pandemia; y Los Combatientes del Pueblo, con Roger Ayachi, su miembro más visible y a quién se le puede ver en sus publicaciones de redes sociales hacer el saludo nazi con el brazo de recho levantado. Muñico, sin embargo, busca diferenciarse.

—Ellos han pertenecido a La Resistencia en su momento, pero han decidido hacer su colectivo tal vez por «buscar protagonismo». Otros son gentes más radicales, creen que las antenas 5G producen el virus, creen que las vacunas tienen chips que controlan a las personas por el «Nuevo Orden Mundial», que si te vacunas te va a salir una cola, te vas a convertir en un imán humano y se te va a pegar el celular en su hombro, y otras cosas ya muy paranoicas. Yo no creo en eso, tampoco me he vacunado, pero claro, cuando hay un objetivo común, participamos juntos en las marchas. Son amigos, compañeros.

Basta asistir a las marchas y plantones a favor de la vacancia o destitución del presidente electo Pedro Castillo para saber que es así. La

mañana de principios de diciembre de 2021 en que lo conocí durante un plantón frente al Congreso de la República, pude contar a varios colectivos de derecha radical junto a las banderas blancas y el león dorado de La Resistencia con su lema «Patria Dios y Familia». Allí estaban La Insurgencia y Los Combatientes del Pueblo, y La Sociedad Patriotas del Perú, y el Frente Justicia Perú y el Colectivo Ciudadano por la Democracia y el Movimiento Democrático Antiterrorista: entre todos eran por lo menos un centenar de personas con camisetas de la selección de fútbol y cascos negros y ropa de camuflaje militar y banderas blanquirrojas, con carteles y gigantografías y que exigían con sus altavoces: «¡Vacancia a la Bestia Comunista!», «¡De día Presidente, de noche delincuente!», «¡Congreso, sin miedo, vacancia a Sendero!», «¡Fuera, terruco, fuera!». Algunos peatones que no tenían nada que ver en las protestas pasaban de lado y miraban a los extremistas con extrañeza, sacaban fotos y no faltó alguna vendedora ambulante que les gritó: «¡Cállense, locos de mierda!»

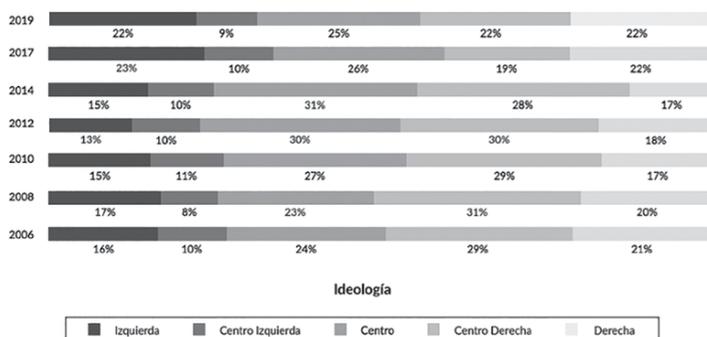
Cerca del mediodía, también llegaron marchando los sindicatos de maestros y obreros, entre otros colectivos de izquierda, mientras tropas de policías apostados en medio de la Avenida Abancay trataban de impedir un enfrentamiento violento entre las dos marchas, a favor y en contra del presidente Castillo: dos manifestaciones —una claramente más extrema y virulenta que la otra— de lo que hoy es la sociedad peruana.

UN PAÍS DE EXTREMOS

¿A qué se debe entonces que estos discursos radicales hayan calado en cierto sector del país? Para Carlos Meléndez, sociólogo y doctor en Ciencia Política y académico de la Universidad Diego Portales, una respuesta posible es que la sociedad peruana vive, desde hace algunos años y como en muchos otros lugares de América Latina y del mundo, un franco proceso de polarización.

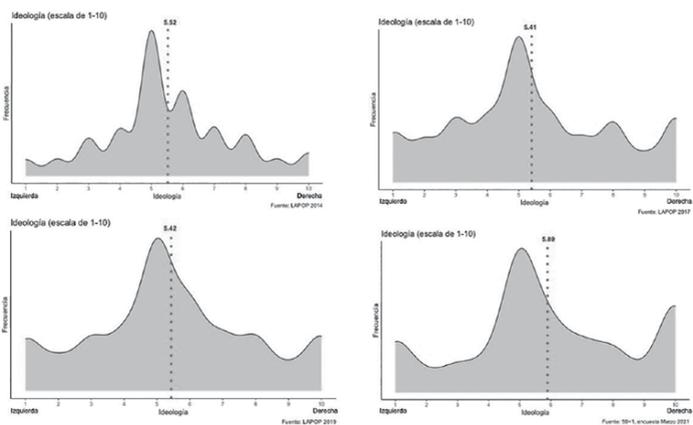
Hay datos que sustentan su postura. Observemos, por ejemplo, los estudios del Barómetro de las Américas que cada año realiza el Latin American Public Opinion Project (LAPOP) de la Universidad de Vanderbilt. En las encuestas realizadas en Perú entre 2006 y 2019, cuando a los participantes se les consultó por su ideología política y se les pidió que se ubicaran en una escala de izquierda (1) a derecha (10), la mayoría eligió el centro.

Gráfico 6.13. Evolución de las preferencias ideológicas en el Perú, 2006-2019



Fuente: © Barómetro de las Américas por LAPOP, 2006-2019; v:GM all vars 1.0

«Hasta el 2014, Perú tenía una distribución normal», explica el experto, «es decir, la mayoría se ubicaba al centro y conforme te alejabas de ese centro había menos personas posicionadas en los extremos». Pero si volvemos a observar la evolución de los datos del Barómetro entre ese año y el 2019, además del estudio realizado en 2021 por el grupo de análisis político 50+1, puede notarse que la tendencia hacia la polarización se acentúa: si bien la mayoría de peruanos todavía se identifica con el centro, los grupos que se ubican en los extremos del espectro ideológico, tanto a la izquierda como a la derecha, han ido en aumento.



Esta tendencia hacia los extremos se debe, en parte, a la profunda crisis política de los últimos años en este país. Desde 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski (derecha tecnocrática) venció en las urnas a la candidata Keiko Fujimori (derecha populista), Perú vive sumido en una serie interminable de conflictos por el poder y grandes escándalos de corrupción (como los casos relacionados a Odebrecht) que ha incluido, entre otros sucesos, la renuncia del propio presidente Kuczynski, el suicidio del expresidente Alan García, la prisión de Keiko Fujimori, la disolución del Congreso y la vacancia de Martín Vizcarra en noviembre de 2020.

El nuevo Parlamento, dirigido por partidos de derecha conservadora, impuso un régimen *de facto* que generó tal indignación colectiva que sacó a tres millones de peruanos a tomar las calles, pese a una brutal represión policial que dejó dos jóvenes muertos y más de 200 heridos. Todo ello en medio de una pandemia que, en pocos meses, llevó al Perú a sufrir la caída del PIB más calamitosa en América Latina y la mayor tasa de mortalidad por COVID-19 en el mundo.

Perú es un país tan inestable que en 2020 tuvo tres presidentes en una semana¹⁵. Un país donde el 88% de los ciudadanos cree que más de la mitad o todos sus políticos son corruptos. Un país donde más de la mitad de su gente toleraría un golpe militar con tal de erradicar la delincuencia. Un país donde el nivel de confianza en las instituciones está entre los más bajos de Sudamérica. Un país fracturado, sin partidos políticos fuertes, con electores que sienten una profunda decepción por sus élites políticas. En este país, desangrado por la crisis sanitaria y económica más feroz de sus 200 años de historia, los discursos extremistas encuentran la pólvora necesaria para provocar una gran explosión.

«Como la sociedad peruana se ha ido polarizando, eso ha incentivado a salir del clóset a sectores sociales que se ubican en los extremos ideológicos, y tener un discurso público más radical», explica el politólogo Meléndez. Y han sido, precisamente, las élites de la derecha más conservadora, la DBA, «Derecha Bruta y Achorada», como la llamó alguna vez Juan Carlos Tafur, director de Diario 16, las que, con todos sus recursos económicos y poderes mediáticos, han sabido dirigir sus narrativas del odio, apelando a la rabia y al miedo ante una improbable dictadura comunista, sobre todo desde que el Perú Libre, partido de izquierda radical, ganó la última elección presidencial.

Recordemos: en julio de 2021, impulsado por el voto de las regiones andinas, un político *outsider* como Pedro Castillo, profesor rural y sindicalista, venció a la candidata derechista Keiko Fujimori por un estrecho margen de votos. Era la tercera vez que la hija del dictador perdía una elección y no aceptó su derrota. Con el respaldo abierto o discreto de las élites políticas peruanas (los partidos tradicionales como el PPC, Acción Popular y el APRA), las élites económicas (los

¹⁵ Noviembre 10 del 2020, destitución del presidente elegido Martín Vizcarra por "permanente incapacidad moral", Manuel Merino fue presidente interino del 10 al 15 de noviembre, y luego se nombró Francisco Sagasti.

propietarios y grandes accionistas de bancos, universidades privadas y del gremios empresarial CONFIEP), las elites mediáticas (como el canal ultraconservador Willax), y las élites intelectuales (incluso exenemigos como el nobel Mario Vargas Llosa), Fujimori alegó fraude sin presentar evidencias de lo que decía, casi calcando la estrategia de Donald Trump tras perder la presidencia de Estados Unidos contra Joe Biden.

Pese a todo ello, los sectores de derechas que la apoyaron hoy vienen impulsando la vacancia de Castillo por «incapacidad moral permanente», una figura prevista en la Constitución, pero que no precisa cómo determinar dicha condición en el Jefe de Estado. Los congresistas aprovechan esa zona gris de la ley para presionar al Ejecutivo: con solo 87 votos echan al presidente. Eso hicieron con Martin Vizcarra en noviembre de 2021. Ahora el Congreso de Perú, controlado por una mayoría opositora al gobierno, ha canalizado el apoyo en un sector de la ciudadanía, sobre todo en las élites, las clases altas y medias altas, con un discurso centrado en la idea de «derrotar al comunismo internacional», en «defender la libertad y la familia» para impedir ser «gobernados por terroristas» y, sobre todo, para que, en un ya clásico discurso cliché de las élites conservadoras extremas de América Latina, Perú no se convierta en Venezuela o Cuba.

De este modo y en este contexto, los colectivos extremistas terminan siendo útiles para los partidos de derecha (Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular), sobre todo en plena crisis política actual, que llega a su clímax por los indicios de corrupción detectados en el círculo presidencial y el comportamiento cada vez más errático del presidente Castillo. El objetivo parece claro: generar la sensación de que en las calles también se pide la salida del mandatario y, de esta manera, favorecer el discurso que promueven desde el Congreso controlado por la oposición al actual gobierno.

«Lastimosamente tenemos unas élites que son profundamente ignorantes, cobardes, que viven aisladas del resto de la sociedad, no tienen mayor interés en que sus burbujas sean permeadas por la realidad que viven el resto de sus compatriotas», me había dicho Diego

Salazar, columnista del *Washington Post* y que ha seguido de cerca el comportamiento político de los sectores más privilegiados de Perú. «Por supuesto, hay excepciones. Pero aún así, estas élites, que están de alguna manera facilitando este tipo de comportamientos, piensan que pueden enfrentarse al resto del país, básicamente porque están en una cruzada basada en miedos y mentiras.»

Más allá de la cruzada que comenta Salazar, esta manera de hacer política refleja una brutal contradicción de estas élites: juran invocar la defensa de la patria y la democracia, pero a la vez sus discursos coinciden con la de estos grupos extremistas, con los virulentos discursos de odio, llamados a dar un golpe de estado, e incluso el uso habitual de expresiones inspiradas en el fascismo para atacar a sus opositores políticos e ideológicos.

NEOFASCISMOS O «EL SENTIDO TRÁGICO DE LA VIDA»

Que los reflectores estén sobre estos grupos en Perú responde también a una tendencia sociopolítica global que ha encendido las alarmas de muy diversas sociedades y gobiernos. Ahí están los Proud Boys y QAnon en Estados Unidos, donde el Departamento de Justicia consideró a estos grupos como la «mayor amenaza para la seguridad del país». Ahí está, por ejemplo, Génération Indetitaire en Francia, Amanecer Dorado en Grecia, o AfD en Alemania, países en donde se han iniciado investigaciones o se han disuelto o prohibido a este tipo de organizaciones neofascistas por sus acciones de «extremismo interno» o «terrorismo doméstico».

Jason Stanley, filósofo de la Universidad de Yale y cuyo padre escapó de la Alemania nazi, ha explicado que estos grupos de ultraderecha extrema coinciden en emplear tácticas políticas de inspiración

fascista que comparten con los movimientos totalitarios del siglo XX, aunque no necesariamente se vinculen a ellos: la exaltación de un pasado mítico desde el que releer el presente, el desprecio por la evidencia científica, la difusión de teorías conspirativas, el ultranacionalismo, el antifeminismo, la xenofobia y el odio al extranjero son algunas de sus banderas. Todas esas ideas y discursos, escribe Stanley en su libro *How Fascism Works*, «prosperan en condiciones de incertidumbre económica, cuando el miedo y el rencor pueden instrumentalizarse para enfrentar a unos ciudadanos con otros».

Si volvemos a las acciones de los grupos de ultraderecha peruanos, podemos notar sus vínculos con esas formas internacionales de pensamiento. En 2020, por ejemplo, integrantes de La Resistencia asistieron a un evento en Lima que tuvo como invitados al politólogo argentino Agustín Laje y la activista brasileña Sara Giromini. Laje es un conferencista que lidera una agenda contraria a los derechos de la mujer y de la comunidad LGTBQ+. Giromini es una política de extrema derecha investigada por liderar Los 300, una milicia armada a favor del presidente Jair Bolsonaro y cuyo seudónimo, Sara Winter, es un homenaje a una antigua espía nazi.

«Son corrientes que podemos tipificar como neofascistas», ha explicado el historiador Tirso Molinari, estudioso del fascismo en el Perú, en una conferencia sobre el comportamiento de algunos de estos grupos. Veamos, por ejemplo, a estos miembros de La Insurgencia haciendo el saludo nazi con el brazo derecho levantado. O a este integrante de Los Combatientes del Pueblo, admirador de Luis Alberto Flores, líder de la extinta Unión Revolucionaria y su milicia de «camisas negras», quien en los años 30 adoptó el modelo del fascismo italiano para el Perú. O la Sociedad Patriotas del Perú, cuyos miembros han desfilado con lanzas, escudos y banderas exhibiendo la Cruz de Borgoña, símbolo de un hispanismo que exalta la Conquista española, en las manifestaciones en el centro de Lima cuando Pedro Castillo ganó las elecciones. «Vamos a recuperar este país por las buenas o las malas», dijo el líder de este grupo en una entrevista. «Dios quiera que

sea a las malas, solo falta la unión de militares y civiles que no queremos una guerra civil, sino recuperar lo que es nuestro».

Molinari sostiene que tales conductas e ideas no se plantean en términos de un debate político, sino en términos de una cruzada cuasi religiosa en contra de un enemigo que quiere destruir la familia, la fe y la vida de las personas. Dividen la sociedad en nosotros contra ellos: Nosotros encarnamos las virtudes; ellos, lo corrupto. Nosotros defendemos la libertad, *ellos* quieren quitárnosla. *Nosotros* protegemos la familia, *ellos* quieren destruirla.

«Son grupos que comparten un sentido trágico de la vida», me dirá luego el politólogo Alberto Vergara, autor de varios libros y artículos sobre política latinoamericana e investigador posdoctoral en la Universidad de Harvard. «¿Y en qué consiste esa tragedia para ellos? En que la civilización, entendida como un status quo, donde había jerarquías claras, se está yendo al carajo.»

Para Vergara, esta concepción hace que estos movimientos busquen restaurar el orden a través de una vía radical. «Si estás convencido», dice el politólogo, «de que existe un «orden natural», en el que los hombres están arriba y las mujeres abajo; un «orden natural» en el que los blancos son superiores y los marrones y negros son inferiores; y ese «orden natural» se altera, y de pronto un negro, una mujer o un indígena es presidente, entonces vives con una angustia terrible. Y piensas: los ateos, los comunistas, las *feministas*, los homosexuales nos están ganando terreno. El mundo se está pudriendo. Hay que reaccionar, restaurar el orden».

¿Pero cuál es ese mundo que estos grupos de derecha radical quieren restaurar? «Para la derecha ese momento estelar, dorado, son los noventas», asegura Vergara: el régimen de Alberto Fujimori, una dictadura cívico-militar donde, «si bien hubo un tipo de restauración social y económica, es la época en la que las élites de derecha reaparecen y se

fortalecen mientras que el mundo campesino, de los sindicatos, de las movilizaciones sociales es aplastado».

No sorprende por ello que los miembros de La Resistencia y sus derivados extremos ultraradicales se sientan plenamente identificados con el culto a Alberto Fujimori, condenado por actos de corrupción y homicidio durante su gobierno, y a quien llaman «el gran pacificador», el «máximo héroe» y el «mejor presidente que tuvo el Perú».

El hito más claro de ese propósito restaurador es el golpe de Estado que dio Manuel Merino de Lama en noviembre de 2020, al vacar a Martín Vizcarra. Apenas Merino tomó el poder, su gobierno, apoyado por la élite de derecha conservadora como la Coordinadora Republicana, y el Congreso trataron, entre otras cuestiones, de asaltar el Tribunal Constitucional, censurar el canal estatal y sabotear la ley de reforma universitaria, que tanto fastidia a los empresarios que ven la educación como una simple mercancía. Su gobierno solo duró seis días, pues fue obligado a renunciar por la presión de las protestas ciudadanas. «Merino intentó recomponer el orden y fracasó. Y creo que eso a la derecha peruana le dio una sensación de angustia enorme», dice Vergara. «Una angustia que se agudizó con la entrada de Castillo al poder. Eso, para ellos, es intolerable. Es el acabose.»

Las razones de ese rechazo, sin embargo, tiene que ver sobre todo con una narrativa que el fujimorismo ha sabido capitalizar y los grupos de ultraderecha han exacerbado en su discurso: la guerra contra el terrorismo.

Esa retórica puede verse claramente en los grupos de ultraderecha integrados por militares en retiro como la Legión Arica No Se Rinde, la Brigada Angamos y Los Hijos de Grau, que han tomado gran protagonismo durante las marchas organizadas en Lima contra el Gobierno desde la elección de Castillo. No solo se han sumado a las marchas por la nulidad de las elecciones y en apoyo a la vacancia: un análisis en de lo que podría ser un VOX peruano.»

Público advierte que sus acciones apuntan a exigir un golpe militar por parte de las Fuerzas Armadas y a desconocer la presidencia de Castillo a través del «derecho a la insurgencia», amenazando con usar «tácticas de ataque y defensa en un combate».

«Venimos de una guerra civil contra Sendero Luminoso que ha hecho que tengamos el anticomunismo a flor de piel y que el terruqueo, en ciertos sectores, esté en la punta de la lengua», explica el politólogo Carlos Meléndez. «Y para cierto sector de la derecha, para un limeño de clase media alta, el comunismo no viene de la China, ni de Cuba o Venezuela, si no que lo asocia a la sierra, al interior del país, en las zonas más alejadas de Lima. En la época en que los senderistas se camuflaban entre la población, entre los campesinos. Entonces para ellos relacionar la figura del «terruco» con la de un campesino tiene una justificación dentro de su lectura del mundo.»

Ese factor tal vez hace que ese desprecio por el sector rural, representado en Pedro Castillo, se exacerbe. El racismo/clasismo propio de una sociedad colonial como la peruana hace que ese discurso de extrema derecha desde una mirada militar se potencie. Y en esa idea tanto la clase alta como la baja se encuentran.

Por eso no sorprende cuando Patricia Chirinos, congresista de derecha, en un mitin, manda al carajo al Presidente. No sorprende cuando un chico dice en un grupo de WhatsApp a sus amigos: «Mano, ese es un cholo, sus votantes son alpacas que ni saben por qué votan». No sorprende cuando una ama de casa de San Isidro llama a Castillo «serrano ignorante» porque «no sabe leer ni hablar bien». No sorprende que muchos usuarios en redes sociales se diviertan al ver cómo una familia de la élite limeña manda a hacer una piñata con la cara de un burro y un sombrero (en imitación al que usa el presidente) para su pequeño, mientras que la torta, para sus invitados, es la de chalanes blancos subidos a elegantes caballos de paso.

Alberto Vergara lo resume así: «Los señorones de la derecha no pueden tolerar que alguien como Castillo sea presidente y, aún más, que sea presidente y no se arrodille ante ellos. Porque en última instancia lo que mueve acá es que muchísima gente está educada para que mande un hombre blanco».

EN BUSCA DE UNA DERECHA MÁS RADICAL

Más de tres años después, el proyecto de La Resistencia va hacia la creación de un partido político. Para lograrlo, por ahora, están en proceso de registrar el nombre en registros públicos y de convertirse en una asociación civil. Tras su desencanto con Fuerza popular y Keiko Fujimori, el camino es convertirse en una opción atractiva para los votantes peruanos. Incluso, me dice Muñico Gonzales, ya tiene en mente una plancha presidencial ideal con quienes considera «halcones de la derecha»: la ex legisladora fujimorista Rosa Bartra (con quien Muñico postuló sin éxito al Congreso en 2020 por Solidaridad Nacional), al abogado Humberto Abanto (acusado de recibir sobornos para Odebrecht) y al ex juez supremo Javier Villa Stein, impulsor de la vacancia de Castillo y miembro de la Coordinadora Republicana, que hace un tiempo declaró: «Lo que está pasando en el Perú es terrible, pero felizmente existe este grupo, La Resistencia, del que yo me vuelvo un militante activo».

—Debe haber una derecha más fuerte, una derecha más pragmática, no titubeante ante lo que es la izquierda y el comunismo —dice Muñico Gonzales—. Lo que ahorita está pasando es porque nosotros lo hemos permitido, porque nuestros representantes de la derecha son unos tibios, que se han dejado pisar el poncho.

El politólogo Carlos Meléndez explica que imaginar a La Resistencia como partido político sería viable debido a que los partidos en Perú son débiles estructuralmente, y no tiene una raíz, una conexión fuerte con la población. «Por eso la política peruana se ha articulado hoy en base a tribus. Hay tribus conservadoras de la DBA (Derecha Bruta y Achorada) así como hay tribus de izquierda, los llamados «caviaristas». Frente a la crisis de los partidos políticos, colectivos como La Resistencia intentarían capitalizar el vacío que deja Fuerza Popular, un partido que antes aglutinaba a todos los sectores populares, incluidos los más extremos. «Entonces podríamos estar ante un germen de lo que podría ser un VOX peruano.»

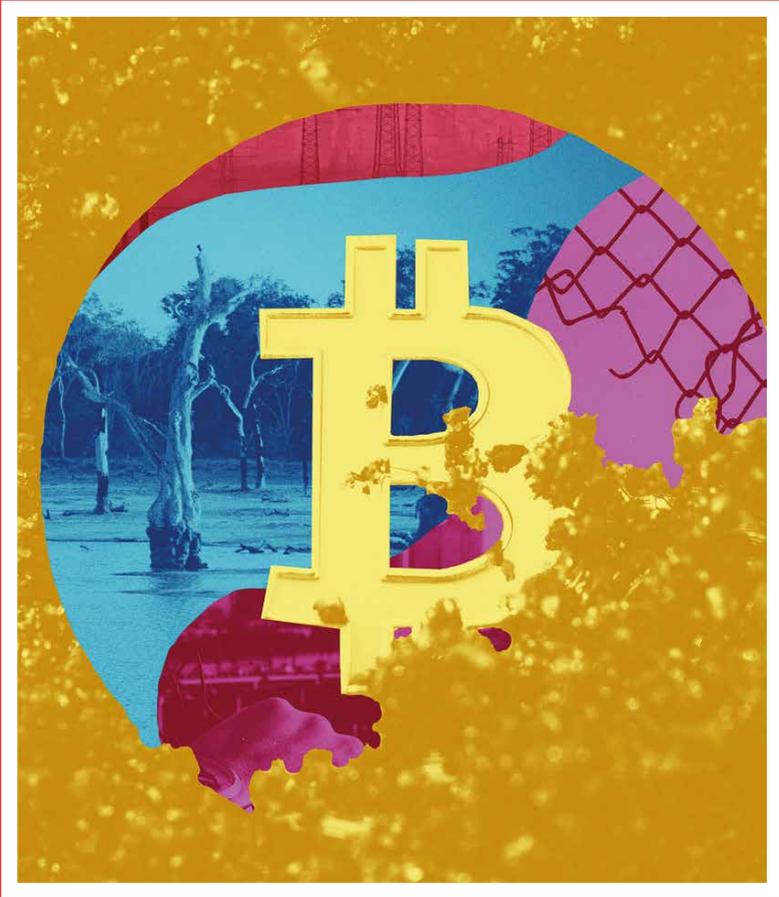
VOX, el partido de extrema derecha español, se ha convertido en un modelo que ha generado un efecto dominó en el mundo latinoamericano al momento de incentivar ideológicamente a estos grupos extremos de derecha. Pero, mientras ese proyecto cristaliza, el líder de La Resistencia está fijándose en las opciones electorales que coincidan con su pensamiento.

—Apoyaremos todas las manifestaciones que tienen que ver con la defensa de la vida y con la defensa de la familia, en contra de la ley del aborto. El gobierno quiere imponer la ideología de género, el lenguaje inclusivo a mí me parece idiota. Hay un sector ideológico que quieren destruir a nuestra familia, destruir al hombre. Las *feministas* van contra el hombre porque saben que es el jefe de la familia, es el jefe del hogar. Por eso vamos a apoyar al candidato que vaya con nuestros ideales, al nivel de un Bolsonaro, por ejemplo. En ese sentido me siento más cerca de López Aliaga.

Conocido como *Porky*, Rafael López Aliaga es uno de los promotores de discursos de odio contra las mujeres, contra la comunidad LGTB y contra los periodistas en la última campaña. Este empresario millonario, miembro del Opus Dei, que asegura sin rubor ser «adicto a la eucaristía» y autoflagelarse todos los días con cilicio para mantenerse célibe, será candidato para la alcaldía de Lima este 2022 y, por los votos que sacó en las últimas elecciones en la capital, parece posible que gane.

«En sociedades polarizadas hay espacio para estos candidatos radicales que, en situaciones normales, serían de un nicho muy pequeño. El problema es que no debería haber oferta para posiciones extremas, porque los extremos están muy cerca de ser *antiestablishment*», me había advertido el politólogo Meléndez. «En realidad una sociedad es gobernable si los extremos no tienen élites que los representen. Pero si eso pasa, como estamos viendo ahora, estamos jodidos.»

ÉLITES SIN DESTINO LATAM



EL SALVADOR

Los apóstoles del bitc oin

NELSON RAUDA ZABLAH

(Santa Tecla, 1991) Es periodista desde 2013 y trabaja desde 2015 en El Faro, el primer medio nativo digital de Centroam erica. Empez  su carrera en la cobertura judicial, pero ha escrito sobre pol tica y migraci n y se ha especializado en temas de memoria hist rica y violaci n de derechos humanos. Desde 2021, cubre la llegada de bitcoin a El Salvador. En 2018 fue finalista del European Press Prize y en 2020 fue nominado al premio Innovaci n de la Fundaci n Gabo. Su trabajo se ha publicado en BBC, Washington Post, El Pa s, Los Angeles Times, The Economist, entre otros.

Más que una moneda, bitcóin es una religión. ¿Cómo las ideas de unos apóstoles de libertad, activistas perseguidos por el gobierno, evolucionan a millonarios usando helicópteros militares para promover un proyecto gubernamental? Esta es la paradoja de El Salvador.

Tres meses después de conocer la palabra bitcóin, de escuchar lo afortunados que éramos los salvadoreños por haberlo adoptado tan pronto, de ver lo inútil que era hacer cálculos de equivalencia en dólares porque el precio cambia diariamente y de tratar de explicarle a medios internacionales cómo era vivir en un país que usa los frijoles mágicos más populares del Internet como moneda, me enviaron a Miami a conocer el paraíso.

Bitcóin es, por supuesto, una moneda digital pero esta no es una historia financiera. Si lo fuera, quizá debería haber ido a Nueva York, con el toro de Wall Street y los corredores de bolsa. Bitcóin no es solo una moneda. Ocho meses después de empezar a conocer miembros de la comunidad bitcóin de Estados Unidos, de Venezuela, de Senegal y Egipto, de Holanda y de Inglaterra, de Guatemala y de El Salvador, algo en su lenguaje y en su actitud me hace pensar en ellos como miembros de un culto religioso.

«Hay que entender la teología de liberación espiritual de bitcóin, el resto es fácil», dice el gurú Max Keiser, un ferviente porrista del caso salvadoreño de adopción de bitcóin y de uno de los profetas más populares, el presidente Nayib Bukele. «Es más fácil que se apague el sol a que el precio de bitcóin se reduzca a cero», me dijo un empresario de bitcóin guatemalteco. Alex Gladstein, un activista de bitcóin y de derechos humanos, enlista la moneda a la par de lo que considera logros equiparables de la humanidad: las pirámides de Egipto, la capacidad de volar, la llegada a la luna, la energía nuclear.

Todos suenan a personajes de Ayn Rand, la filósofa libertaria: son titanes, hombres insumisos y pioneros, su moneda es el fuego de

Prometeo, el fruto prohibido de Adán. «Crear un sistema monetario que nadie puede corromper puede ser nuestro logro más improbable e impresionante», dice Gladstein. «Sí, parece religioso», admite. «Quizá deberíamos comparar bitc in y la cristiandad por un segundo...»

Como el cristianismo, el bitc in tiene un fundador misterioso, un texto sagrado, y ap stoles. «Creo que dentro de 10 o 20 a os habr  una religi n organizada alrededor del bitc in», dice Alex Gladstein. Pero dice que el bitc in es m s real que el cristianismo. «Una cosa es creer en Jesucristo y tomar la Eucarist a. Pero eso requiere estirar la imaginaci n porque no hay nada f sico. Bitc in es real: es matem tica respaldada por energ a, no se puede crear de la nada», dice.

Aunque suena como John Lennon cuando dijo que los Beatles eran m s grandes que Jes s, Gladstein no es un fan tico, ni un extremista ni una excepci n en el mundo bitc in. Es uno de los organizadores del evento por el que lleg  a Miami. Su cargo es muy serio: directos de estrategia de la Fundaci n de Derechos Humanos (HRF por sus siglas en ingl s). La fundaci n organiza el Oslo Freedom Forum, una conferencia que re ne a activistas con artistas, empresarios y periodistas, una especie de festival Coachella de derechos humanos. En Miami fui a buscar a algunos de esos ap stoles y evangelistas que han convencido al presidente de un pa s pobre como El Salvador de gastar unos 200 millones de d lares para creer en el sue o que nos sacar  a todos de la pobreza.

Eso es exactamente lo que la publicidad dice. « Ten as 10 d lares en bitc in en 2010? En agosto de 2021 son 500,000 d lares. No pierdas los pr ximos 10 a os», dice el *copy* de Binance, una casa de intercambio de criptomonedas. Celebridades como Kim Kardashian, el basquetbolista Steph Curry o el jugador de f tbol americano Tom Brady han publicitado inversiones en criptomonedas. Hubo seis anuncios de empresas crypto en el S per Taz n de 2022. El actor Matt Damon estelariza un anuncio de crypto.com, la misma plataforma que patrocina al PSG y que compr  los derechos para renombrar el

Staples Center, el estadio donde juegan los Lakers de Los Ángeles. Peter McCormack, un empresario de bitc oin ingl es, compr  al Real Bedford, un equipo de f utbol que compite en la d cima divisi n y se traz  el objetivo de llevarlo hasta la liga Premier, y usar bitc oin como estrategia comercial para hacerlo. El Salvador se convirti  en un hito para la comunidad de creyentes desde que, en junio de 2021, el presidente Bukele anunci  la adopci n de bitc oin como moneda legal. En la avenida Jerusal n, de San Salvador, hay una gigantograf a que muestra a un hombre sonriente —la escena est  llena de hombres— y dice: «Santiago Acevedo, 28 a os. Due o de su negocio global en Paxful. S  el pr ximo. Invert  en bitc oin».

Tres d as despu s de o r el evangelio del bitc oin en los lujosos hoteles de Miami, sentado en una playa de arena blanca y aguas cristalinas, empec  a pensar en lo que dec an. Aqu  me podr a convertir en un hombre nuevo, manejar por la costa en un Lamborghini naranja para ir a ver los murales del barrio de Wynwood. Aqu  con las muchachas en los bikinis diminutos y los muchachos de cuerpos bronceados en busca de la ola perfecta. Aqu  en Miami Beach, donde el invierno no llega y nadie fracasa, y la edad promedio es 23. Mi trabajo ser  acostarme bajo el mismo sol que Camila Cabello y Pitbull y mantener la esperanza. Podr a pedir un coco o un trago tropical que se viera bien en Instagram, usar lentes oscuros, posar sin camisa para lucir mi bronceado y, dentro de 10 a os, contarle a todos como es mi vida porque compr  una escalera al cielo llamada bitc oin.

El mito creacionista de bitc oin es una historia sobre liberaci n, sobre levantar a los desprotegidos y confrontar a los poderosos. En Miami, el portador de este mensaje es Nic Carter, un veintea ero, inversionista de bitc oin, con nombre de estrella pop, mocasines sin calcetas, traje sin corbata y lentes de sol en el saco.

La génesis de bitc oin, dice Carter, se remonta hasta los setentas. En 1976, Whitfield Diffie implement o por primera vez la criptograf a, el cifrado de mensajes usado en el  mbito militar y gubernamental, para fines civiles y acad micos. Diffie cre a que la criptograf a era «una herramienta poderosa para proteger a los individuos de un adversario poderoso». Casi una d cada despu s, otro cript grafo, David Chaum, public o una profec a de usar su computador para hacer pagos y transacciones seguras. En 1985, Chaum escribi o que «se est n plantando los cimientos para un *estado dossier* en el que las computadoras ser n utilizadas para inferir los estilos de vida, h bitos, ubicaciones y asociaciones de los individuos». Como lo que Facebook o Amazon hacen ahora.

En 1988, otro ap stol del cripto, Tim May, escribi o el *Manifiesto cripto anarquista*, en donde predijo el comercio electr nico y la pirater a. En 1992, en San Francisco, California, May se empez o a reunir con un grupo de personas alrededor de estas ideas de libertad y privacidad. Se apodaron los *cipherpunks*, un juego de palabras en ingl s entre el g nero de ciencia ficci n *ciberpunk* (Blade Runner o la trilog a de la Matrix) y la palabra cipher, cifrado. Los cipherpunks creen, esencialmente, que la privacidad es importante, que pedirle al Estado que la proteja a trav s de mecanismos electorales o pol ticos es in til, y que la mejor forma de hacerlo es escribiendo c digo y desarrollando programas que permitan hacerlo. Adem s de sus reuniones, los *cipherpunks* crearon una lista de correo electr nico que es algo as  como un lugar sagrado.

Tal como Mois s recib o los 10 Mandamientos en el Monte Sina , el fundador del bitc oin, Satoshi Nakamoto, us o esa lista de correo para publicar el texto sagrado de bitc oin, el *Libro Blanco*, 16 a os m s tarde.

Nakamoto es el seud nimo bajo el que se public o el texto fundacional de bitc oin, el 31 de octubre de 2008. Nadie sabe su g nero o incluso si se trataba de un grupo de personas. En 2011, la revista *The New Yorker* public o una historia que buscaba identificar a Nakamoto pero solo lleg o a deducir que su estilo de escritura era ingl s brit nico.

En el mito creacionista, Nakamoto es el gran liberador, el mesías. Su Libro Blanco o White Paper describe los fundamentos técnicos del bitcóin.

El documento describe así qué es bitcóin: «Una forma de dinero en efectivo electrónico puramente entre pares que permite enviar pagos en línea directamente entre las partes y sin pasar a través de una institución financiera». En su invención, el rol de un banco para garantizar la moneda y las transacciones lo cumple una red de computadoras.

En vez de confiar en un banco, los creyentes confían en una red de computadoras que realizan las operaciones necesarias para verificar las operaciones. Ahí empieza la jerga bitcóiner: el libro de registro de todas las transacciones se llama *blockchain*. Al trabajo de las computadoras se le llama minería y los operarios, mineros. Como pago, los mineros reciben fracciones de bitcóin llamadas satoshis, por su creador, y se abrevian sats.

En el mito de creación del bitcóin, como en el cristianismo, también hay un elemento de persecución: Phil Zimmerman, un desarrollador que creó en 1991 PGP, la primera aplicación de mensajería de correo electrónico encriptada. Zimmerman fue procesado por el gobierno estadounidense porque catalogaron su invento como munición y alegaron que necesitaba una licencia de exportación. Cada vez que se publica una noticia de que un país prohíbe las transacciones en criptomonedas o la minería bitcóin, en la mentalidad de los creyentes, contribuye a este mito de que bitcóin es un descubrimiento tan revelador como el evangelio y, por tanto, es perseguido.

Por supuesto, como en toda religión, hay creyentes en una vida después de la muerte. Hal Finney, un *cipherpunk* que ayudó a corregir el código de bitcóin, murió en 2014 pero fue congelado a la espera de que se halle una forma de regresarlo a la vida. El tratamiento de criogenización fue financiado, en parte, con donaciones de bitcóin.

El cuento sobre el invento de unos nerds que abogan por mayor privacidad y libertad incrementa el contraste con la escena actual de ricos y famosos. No hay un ejemplo más actual de esa paradoja que El Salvador.

Fui a escuchar la predica de Nic Carter porque Carter es un personaje clave en la génesis de bitc oin en El Salvador. Todo empez o aqu ı en Miami. El 5 de junio, el presidente Nayib Bukele apareci o en un video en una conferencia llamada Bitc oin 2021. Habl o en ingl es y anunci o que El Salvador adoptar ıa bitc oin como moneda de curso legal. Tras  el, Jack Mallers, un gringo emocionado dijo que casi se orin o en los pantalones por la noticia, mientras la audiencia gritaba y aplaud ıa euf orica.

Bukele hace ese tipo de cosas de vez en cuando: se toma una *selfie* en la Asamblea General de la ONU, se cambia la bio de Twitter a dictador, publica una foto comiendo caviar. Pens e que la movida del bitc oin se trataba de otra ocurrencia y que ten ıamos problemas m as grandes. Me equivoqu e. Tres d ıas despu es del video en ingl es y el gringo incontinente, yo estaba en la Asamblea Legislativa mientras se aprobaba la ley que oficializaba el uso de bitc oin como nueva moneda en El Salvador.

Ese 8 de junio, Nic Carter cre o un Space en Twitter, una especie de chat en vivo, para traducir la ley bitc oin a los estadounidenses interesados en lo que estaba pasando en El Salvador. A ese chat se conect o, primero, Karim Bukele, hermano del presidente y uno de sus principales asesores. «Yo no estaba en contacto con ellos y no he estado en contacto con ellos desde entonces», niega Carter. «Fue una completa coincidencia, quiz a un golpe de suerte», dice. «Karim nos dio una descripci on de la ley y todo corri o como bola de nieve a partir de ah ı», dice Carter.

En la Asamblea, los diputados estudiaron la ley menos de 90 minutos y la aprobaron en cinco horas. Me conect e al chat de Carter

porque estaba claro que había información más valiosa ahí que en donde de hecho estaban aprobando la ley. Por ejemplo, un diputado dijo en español, antes de la aprobación, que la ley no obligaría a nadie a usar bitc oin. En la otra dimensi on, se daba en ingl es la explicaci on real de lo que estaba ocurriendo. «Si vas a un McDonalds, no podr an decir: «No aceptamos bitc oin»», explic o el presidente Bukele, que se uni o al chat invitado por su hermano.

La explicaci on de una ley que afectar a a millones de salvadore os se dio a estadounidenses, en ingl es, en un chat de Twitter. Quienes tomaban turnos haciendo preguntas no  eramos periodistas salvadore os, sino inversionistas de bitc oin, aquellos a quienes Carter decidiera dar el micr fono.

«Ellos encontraron la plataforma  util para alcanzar a la comunidad occidental de bitc oin en ese momento. Yo estaba asombrado de que en un momento hist rico de aprobaci on de la ley, (el presidente) eligiera estar en Twitter con una audiencia, honestamente eran m s que todo estadounidenses», dice Carter.

«No era mi objetivo involucrarme en la pol tica salvadore a», dice Carter.

Con o sin querer, los *bitcoiners* juegan un papel importante en la pol tica del gobierno de Bukele y est n metidos hasta la cocina. En El Salvador, los *bitcoiners* no parecen activistas de la libertad y defensa de los ciudadanos. Son amigos del gobierno. Son asistentes VIP a fiestas exclusivas. Suben a helic pteros, surfean y hacen viajes de pesca, tienen accesos privilegiados a pol ticos, los llevan a tours privados en instalaciones del gobierno, los escolta la polic a e, incluso, toman decisiones de pol ticas p blicas. Y a algunos les encanta.

Un montón de gringos bailan canciones de Pitbull sobre la arena en el club de playa La Bonita, iluminados por unas luces italianas colgadas de palmeras y la pantalla de la plataforma del DJ. En medio baila una muchacha de ojos claros, con tacones, un short corto de lona y una blusa negra que deja ver su abdomen. Un rato después, algunos conocidos, organizadores de la fiesta, me la presentaron. Me dijo que trabajaba como «creadora de contenido», lógico, porque esta era una fiesta de lanzamiento para Starbackr, una plataforma para monetizar contenido. Como un OnlyFans pero con bitcón.

Fiestas como la de La Bonita son cada vez más frecuentes. Desde junio de 2021, muchos de los predicadores e inversionistas de la escena cripto que desfilaron en Miami han llegado a El Salvador. En la segunda mitad de noviembre hubo dos conferencias de bitcón. Ambas se llevaron a cabo en la Zona Rosa, un barrio donde hay bares, hoteles y discotecas exclusivas en San Salvador, aunque, por supuesto, los asistentes hicieron varias excursiones a las playas, a solo media hora de distancia.

La playa es un punto obligatorio de peregrinaje. En 2019, Michael Peterson, un empresario estadounidense, recibió una donación anónima de bitcón para hacer proyectos en la comunidad de El Zonte: nacía Bitcoin Beach, donde varios negocios aceptaban la moneda antes de la ley de 2021.

Esta iniciativa local ha sido punto de encuentro pero también punto de división entre los creyentes. Así como entre los cristianos hay un sinfín de variedades —católicos, bautistas, luteranos, pentecostales...— los *bitcoiners* son muchos.

Hay creyentes politeístas, que impulsan otras iniciativas cripto. Para el lanzamiento de la ley, Brock Pierce, un billonario estadounidense se presentó como embajador del bitcón. Pierce dio una extravagante fiesta en un hotel de playa con un show de drones, fuegos artificiales, música electrónica y celebridades en la que terminamos

bailando conga alrededor de la piscina. Pero Pierce, creador de otra criptomoneda llamada Tether, no es considerado embajador por muchos miembros de la comunidad. «Personas como Pierce imprimieron su propio dinero y tratan de convencer a otros de que lo usen. Es muy avaro», me dijo el activista Alex Gladstein.

Gladstein, a su vez, representa a otro grupo de *bitcoiners* más conscientes de asuntos de derechos humanos, democracia e inclusión. Es más idealista y es común escucharlo referirse a la manera en que bitc in sirve a personas en Nigeria o L bano para justificar las ventajas de la moneda. Las opiniones de Gladstein sobre el desmantelamiento democr tico en El Salvador le han valido ep tetos como «ser agente de la CIA» y lo confrontan con otro grupo, uno de los m s radicales: los «maximalistas».

Los «maxis» son una facci n que cree en la supremac a del bitc in sobre cualquier otra moneda y que han devenido en grandes porristas del presidente salvadore o. Claro, ese entusiasmo tiene sus beneficios. El 8 de enero de 2022, el gur  Max Keiser, su pareja Stacy Hebert y el empresario Samson Mow publicaron fotos suyas de un taxi particular: despegaron en helic ptero desde la Escuela Militar de San Salvador. En una de las fotos aparece un operario con uniforme de aerot cnico de la Escuela Militar. Los americanos volaron al oriente salvadore o para conocer el lugar donde el gobierno ha prometido construir Bitcoin City, una ciudad futur stica en la que los inversionistas no tendr n que pagar impuestos de ning n tipo.

Keiser estuvo en otra fiesta playera exclusiva para *bitcoiners*, que capt  atenci n de medios alrededor del mundo por lo estrafalario. Bukele hizo su aparici n con un avatar animado, un show de luces —se ve que a los *bitcoiners* no les molesta el humo— y una canci n de AC/DC. En la fiesta, uno de los pasajeros del helic ptero, Mow, subi  al escenario con Bukele para explicar la emisi n de un bono en bitc in, una idea de Keiser. En la fiesta tambi n se anunci  la construcci n de una utop a bitc in, esencialmente la idea es privatizar un terreno

dentro del país y construir una zona económica especial, un concepto muy parecido al de empresarios europeos que han tenido reuniones con funcionarios, alabando la adopción de bitcóin, y confirmando su interés en adquirir un pedazo de El Salvador.

Saquemos algo del camino. Desde el año pasado, todos los académicos y periodistas extranjeros con los que he hablado de bitcóin me preguntan: ¿Por qué Bukele lo adoptó? He redondeado mi respuesta a dos razones.

La primera: relaciones públicas. La apuesta por el bitcóin le ha conseguido al gobierno de Bukele muchos embajadores. Cada celebridad del mundo bitcóin que habla sobre El Salvador, sobre las playas de El Salvador, sobre lo seguro que es El Salvador, sobre lo moderno y lo progresista y lo bonito que sirve para limpiar la cara del régimen. «Creo que parte del motivo es promover a Bukele y funcionó. Se propulsó a esta posición de superestrellato político y ahora es el Jefe de Estado mejor conocido de Centroamérica y quizá de América, con la excepción de (Jair) Bolsonaro», tal como me dijo Nic Carter. Los embajadores omiten que ese presidente tiene un pacto con las pandillas, persigue fiscales que investigan corrupción gubernamental, es sospechoso en un escándalo de espionaje telefónico a periodistas o ha cooptado a un órgano judicial que, entre otras cosas, ya aprobó su reelección, contra lo que dice la Constitución salvadoreña.

La segunda razón es financiera. El Salvador es un país profundamente endeudado y los desvaríos autoritarios de Bukele no han hecho sino aumentar el riesgo país. A mayor riesgo, más intereses cobran los prestamistas. En bitcóin, tiene acceso a una red alternativa que no es gobernada por Estados Unidos, con cuyo gobierno Bukele está enfrentado y de cuya moneda El Salvador depende desde 2001. No es en vano que Estados marginados como Venezuela o Corea del Norte también

hayan hecho sus propios experimentos con criptomonedas. Este año, El Salvador planea emitir deuda por 1.000 millones de dólares en forma de un criptobono emitido por una empresa domiciliada en Kazajistán.

La fe en el bitc in es recompensada en El Salvador. Les voy a contar tres an cdotas.

Uno. El 29 de noviembre de 2021, Jairo V lez P rez, un empresario colombiano, contaba, emocionado, su testimonio durante una junta de *bitcoiners*. V lez es maximalista y dijo que decidi  venir a El Salvador sin efectivo ni tarjetas de cr dito y tratar de pagar exclusivamente en bitc in. Pero el primer obst culo lo enfrent  en el aeropuerto. El Salvador exige a algunos pa ses, entre ellos Colombia, el certificado de vacunaci n contra la fiebre amarilla. V lez no lo ten a. En la reuni n, V lez dijo que estuvo argumentando con la empleada del control migratorio hasta que vio a una muchacha con un cartelito que dec a «bitcoiner». Entonces le explic  que  l ven a al pa s a la conferencia y santo remedio: fue eximido de un requisito legal. Bienvenido a El Salvador.

La de V lez no es una historia aislada. El 17 de noviembre, en medio de la semana de conferencias bitc in, El Salvador elimin  los requisitos de prueba de vacunaci n o prueba negativa de COVID que estaban vigentes desde septiembre de 2020. No es un secreto. La comunidad de bitc ioers tiene alta repelencia a los mandatos legales de vacunarse o usar mascarillas, basada en el argumento de que coarta la libertad. En el hotel de la conferencia, escuch  cuando una empleada le dijo a otra: «Ya me aburr  de decirles de la mascarilla». Dos meses despu s, a mediados de enero, El Salvador enfrent  un alza de casos de COVID y la poblaci n hace largas filas desde la madrigada en busca de una las prueba gratuitas del Ministerio de Salud. Pero el pa s sigue abierto, sin restricciones a los turistas y, especialmente, para los *bitcoiners*.

Dos. La noche de la aprobación de la ley bitcóin, mientras los americanos se atropellaban en el chat virtual para hacerle preguntas al presidente, alguien le dijo que si había pensado en minar bitcóin en el país. «Jamás se me ocurrió, pero cada día habrá una nueva idea. Así que no habíamos contemplado la minería, pero podemos hacer algo para promoverlo, por supuesto», dijo Bukele la noche del 8 de junio. Al día siguientes, anunció en Twitter que había ordenado a la empresa estatal de electricidad geotérmica que ofreciera un plan con el principal insumo que necesitan los mineros: energía barata. Ahora, El Salvador tiene una instalación de minería bitcóin en Usulután.

Tres. El 17 de noviembre, cuando comenzó una de las conferencias, la Policía cerró la calle de acceso al Teatro Presidente, donde se llevó a cabo Labitconf. Entonces caminé unos 500 metros pero me fijé que había algunos carros que sí dejaban pasar del punto donde me habían detenido a mí. Al siguiente día cambié de estrategia. Cuando llegué al redondel, me puse lentes oscuros y le dije a la agente policial, con un acento fingidísimo, como si no hablara español, que venía a la conferencia de bitcóin. Funcionó: la agente quitó los conos y me dejaron pasar.

Tras estar en la conferencia de Miami, rodeado de gente que prometía que el precio de bitcóin llegaría a las nubes, a la Luna, a Marte, tras escuchar personas que habían sido indigentes y ahora son millonarios, tras desear ese estilo de vida de Miami, en donde todos parecen extras de un video de Will Smith, sentí miedo. Hay una expresión común en los *bitcoiners* para eso: FOMO, «*Fear of Missing Out*» el miedo a perderse algo.

Le pregunté a Alex Gladstein, el activista de la Fundación de Derechos Humanos, qué es lo que los *bitcoiners* saben que todos los demás no sabemos. Él puso un ejemplo colonialista: dice que los *bitcoiners* han descubierto un dinero mejor que el que usa el resto del

mundo. «Los nativos americanos usaban wampum, cinturones, como moneda y luego llegaron los ingleses que tenían oro. Ninguna persona con conocimiento diría «prefiero usar el wampum»», dice. “Creo que los *bitcoiners* se han dado cuenta que el bitc in es dinero m s duro que cualquier otro dinero producido por los gobiernos”.

Yo dije: «tengo que probar esto». Mi primer problema fue decidir qu  billetera usar, de las decenas que hay en el mercado. El gobierno salvadore o cre  su propia billetera, Chivo Wallet, a trav s de una empresa privada financiada con fondos p blicos. La billetera solo es para salvadore os, requiere registrarse con el documento de identidad. Yo no puedo usar la Chivo Wallet porque, como otros cientos de salvadore os, alguien us  mi n mero de identidad para registrarse.  Por qu ? Bueno, el gobierno ofreci  un subsidio de 30 d lares a todo el que la bajara. Si alguien m s registr  mi usuario, alguien m s se qued  con esos 30 d lares. Le sucedi  a muchos: una organizaci n present  una demanda colectiva representando a 131 personas. Nunca me pude registrar. Trat  en vano de solventar mi caso en un centro de llamadas de la Chivo Wallet y en un punto de atenci n.

Hay cientos de denuncias de personas que han perdido dinero en la Chivo Wallet: gente que env a remesas que nunca se acreditan, transacciones no autorizadas, usurpaciones de identidad, robos. Chivo ha sido tan cuestionado que muchos de la propia comunidad, tan entusiastas del presidente, han promovido el lema: «Chivo no es bitc in».

Entonces us  otras billeteras. Compr  bitc in la primera vez en un cajero instalado en un centro comercial. Met  un billete de 20 d lares a la maquina y mi cuenta fue acreditada con 19 d lares y tres centavos. Me cobraron una comisi n de casi el 5 %, no tan distinto de los cajeros autom ticos normales. Fue una desilusi n, porque se supone que bitc in es distinto de todas esas empresas como los bancos y las compa as de remesas que cobran grandes sumas de dinero. Pero me dijeron que lo que ten a que hacer era comprar bitc in directamente en l nea, sin intermediarios.

Lo hice. Compré 100 dólares en bitcóin con mi tarjeta de crédito en la aplicación Binance. Pero me dijeron que no era conveniente guardar dinero en Binance, que es un intermediario, sino que hay que tener el control, ya saben, por la privacidad y la libertad. Entonces transferí mi dinero mágico a otra billetera, Muun, aunque para entonces solo eran 66 dólares y 14 centavos. ¿Qué pasó con los otros 33 dólares? Bueno, Binance me cobró una comisión por la compra y otra comisión por sacar el dinero de su plataforma.

Imagino que otros creyentes más experimentados en esto de las criptomonedas se reirán de todas mis novatadas. «Estúpido, ¿no sabes que hay un truco para sacar de Binance sin pagar comisión?» No sabía, y me costó 30 dólares descubrirlo. Ahora, yo puedo ser un fracaso como inversionista pero piensen una cosa: si los datos del gobierno son ciertos, hay millones de salvadoreños haciendo sus propios experimentos con estas tecnologías. Y hay miles de personas pagando el precio de experimentar. La Fiscalía recibió en 2021 más de 6.000 denuncias por delitos informáticos, la mayoría por hurto por medios informáticos y hurto de identidad.

Este experimento no sería posible en un país con reglas democráticas normales. En noviembre, un documentalista inglés me entrevistó en San Salvador. Le dije que lo ideal para experimentar con bitcóin sería un lugar como Suecia o Finlandia, un lugar que de hecho pueda costearse algo como esto. Me respondió que esto nunca habría sido posible en un país como esos, que se necesitaba un strongman, un hombre fuerte, para hacer que un país cambiara su sistema monetario tan drásticamente. Yo pensé: *touché*.

Debe ser muy interesante ver los eventos desde afuera, venir de visita, hacer cálculos cuando alguien más paga la cuenta y tu país no es la pelotita que da vuelta en la ruleta. Por ahora es una cuestión de fe. Quizá mi país sí llegue a ser la Florencia del Renacimiento 2.0 o Singapur o Suiza. Y quizá mi inversión, valorada en 46 dólares mientras termino de escribir esto, me haga millonario algún día. Tal vez en 10 años, como dice la publicidad. .

ALGO DE LO QUE (CASI) NUNCA HABLAMOS

PERE ORTÍN

Editor de 'Élites sin destino' Creador y practicante del #Periodismo Dadá. Pinta, recorta y colorea historias. Ha dirigido revistas. Ha escrito en periódicos. Ha hecho televisión, algunas pelis y un libro. pere@pereortin.com @Gorikortin

**17 HISTORIAS.
17 PAÍSES.
17 CREADORAS,
17 ÉLITES SIN DESTINO...**

Les mentiría si les dijera que, como editor de este complejo trabajo periodístico, todo ha sido fácil y que no ha habido dificultades. Les mentiría también si les dijera que, al principio de todo, cuando hablaba por teléfono, por *WhatsApp*, por email con Yasna, Paula, Oswaldo, Joseph, Flora, Daniela, Octavio...lo tenía todo súper claro y sabía hacia donde se dirigía el proyecto, las autoras y sus propuestas.

Se trataba de hablar de algo de lo que (casi) nunca hablamos.

Se trataba de pensar sobre algo en lo que (casi) nunca pensamos.

Se trataba de reportear con libertad sobre eso que (casi) nunca reporteamos...

Se trataba de explorar de forma crítica un territorio (casi) nada explorado: las élites de América Latina.

Les confieso que el reto ha sido mayúsculo y que la alegría de ver el trabajo acabado está a la altura del desafío planteado. Siento satisfacción al verlo publicado - aquí y en la atractiva web (www.elitesindestino.com) que ha creado Mario Trigo con su elegancia habitual - y en eso no les puedo mentir.

Ahora que ya está hecho, este trabajo es suyo, para ser leído, pensado, disfrutado, debatido, utilizado, criticado, odiado o aplaudido por

ustedes. A mí, como su editor, este proyecto me deja algunas ideas que me gustaría compartir.

**'ELITES SIN DESTINO' ME HA
CONVENCIDO (AUN MÁS)
DE QUE...**

...No somos meros agrimensores de eso que, a falta de mejor expresión, llamamos 'realidad'. Como periodistas, también somos inventores de futuros posibles.

...Es urgente tomar cada vez mas en cuenta la búsqueda periodística de la belleza, esa mezcla cuidada y cuidadosa de valentía y generosidad, para hacer atractivo e interesante aquello que sabemos que es importante.

...Nuestro trabajar es, también, ayudar a que el colesterol intelectual no colapse las arterias del cerebro y del corazón de nuestros lectores, usuarios, oyentes y co-productores de sentidos.

...El periodismo que más me interesa huye de la Historia (en singular y mayúsculas) para contar historias (en plural y en minúsculas).

...El periodismo que más me interesa cambia la P de 'Épica' por la T de 'Etica'.

'Élites sin destino' me ha convencido de que el el periodismo que más me interesa va de conceptos e ideas construidos con palabras e imágenes que son, primero y antes que nada, creaciones estéticas en el marco de un lenguaje expresivo.

'Élites sin destino' me ha convencido también de que este trabajo va sobre todo va de dudar (todo el rato, todo el tiempo) y expresarlo a través de historias basadas en hechos reales y bastardas que nos incomoden, primero, a nosotras y que nos dejen a la intemperie, desnudas y contemplando ese hermoso paisaje que se esconde detrás de todo signo de interrogación: ?

'Élites sin destino' me ha convencido de que nuestro trabajo es crear problemas; hacer preguntas difíciles, pero no para dar respuestas, ni tampoco ofrecer esas supuestas 'soluciones' que se venden a precio de saldo, como aire frito.

Este trabajo también me ha dejado otras reflexiones porque...

...El relato de las élites LatAm es el de una violencia que aún está, en gran medida, por contar.

...El relato de las élites LatAm es una historia de clasismo, racismo, machismo, neocolonialismo y aporofobia que aún está, en gran medida, por explorar.

...El relato de las élites LatAm nos demuestra, como dice el Talmud (el libro sagrado de las leyes y tradiciones judías), que no vemos las cosas como son, sino como somos nosotros.

...El relato de las élites LatAm nos muestra que los 'hechos' son autónomos, pero no son autosuficientes para explicar y tratar de entender la extraordinaria complejidad de la vida humana.

...El relato de las élites LatAm nos plantea que es muy difícil pensar, ejercer y practicar el uso de la palabra 'libertad' periodística cuando estamos encarcelados en esas prisiones de lo posible llamadas 'formatos' y que no tienen celdas ni barrotes porque no existen.

...El relato de las élites LatAm nos enseña que en el periodismo no parece haber avance posible en la ortodoxia y que, por el contrario, la búsqueda se centraría en construir una nueva heterodoxia práctica que nos permita crecer en los márgenes sin ser marginales.

Ser el editor de este trabajo me ha convencido de que el periodismo que más me interesa va de encontrar historias, como decía Albert Camus, con algo de lucidez, un poco desobediencia, bastante obstinación y abundante, mucha, ironía incluso en situaciones donde no parece necesaria o pertinente.

Debemos ser más pecadoras, más heterodoxas, a la hora de abordar y desarrollar nuestras historias para explorar territorios narrativos 'diferentes'. Otras formas híbridas, genuinas, en las que se mezclen ideas e ideologías, con abundantes dosis de subjetividad y observación parcial (al menos seleccionada).

Narrativas que vayan más allá de esa supuesta razón de los hechos y se desarrollen en territorios periodísticos que discutan las lógicas y los dogmas de ese periodismo anglosajón, hijo y esclavo de la moral calvinista, racionalista y *naive*, que se ha instaurado de forma autoritaria entre nosotras como forma casi única posible de contar desde la realidad y que presenta evidentes signos de agotamiento porque no es capaz de dialogar con las nuevas éticas que definen los comportamientos sociológicos, ideológicos, económicos y políticos no reglados que están en desarrollo en nuestras sociedades hoy, en el aquí y en el ahora.

Más allá de todas estas reflexiones, como editor de «Élites sin destino», a mí solo me queda dar las gracias...

A todas las 17 autoras de 17 países que me han enseñado a leer América Latina y sus élites con otros ojos, desde otros puntos de vista, con otros planteamientos e ideas...

EPÍLOGO

A Mario Trigo por visualizar, ilustrar y hacerla mucho mejor aquella idea inicial que le planteé de hacer un colorido «catálogo de joyas»...

A todo el equipo de la FES en todos los países y, sobre, al jefe Omar Rincón y a la gran Daniela Bohórquez, por su inmenso y denodado trabajo para hacer de esto algo mucho más grande y hermoso que la suma de todos nuestros defectos...

Gracias.

PERE ORTÍN ANDRÉS

Editor de 'Élites sin destino'

“Élites sin destino” cuentan desde los que tenían y los que aspiran a adueñarse de nuestras vidas. En modo periodístico ensayístico acronicado trata de acercarse a **esas ideas y prácticas que desarrollan las élites en cada uno de los países que conforman eso que se enuncia como América Latina**. Un intento por comprender sus culturas, modos de pensar y hacer sus países y la región. Se intenta responder a una pregunta simple, esa de ¿cómo sigue siendo posible que en el siglo XXI las élites sigan empecinadas en no darse cuenta de que la desigualdad —un problema social, económico y cultural que mata— también les afecta gravemente a ellas y a sus posibilidades de seguir acumulando más riqueza? Creemos que a partir de saber cómo son las élites, se podrían ensayar nuevos significados y valores con los cuales podamos crear otros mapas que definan distintos espacios de lo imaginable. Bajo la dirección y edición del periodista dadá Pere Ortín, llegan 17 historias, 17 países, 17 élites sin destino... 17 periodistas nos invitan a leer y comprender América Latina y sus élites con otros ojos, desde otros puntos de vista, con otros planteamientos e ideas... **Siga y lea; goce y critique; indígnese y relájese**. Y leálo en el orden que le guste. Y obvio recuerde que también está en digital bajo ***elitesindestino.com*** para que lo baje y distribuya.

ISBN: 978-958-8677-56-9



9 789588 677569

FRIEDRICH
EBERT
STIFTUNG

FES COMUNICACIÓN